



contexto  
LATINOAMERICANO

REVISTA DE ANÁLISIS POLÍTICO  
no.2/enero - marzo de 2007

FUERA

EN EL NOMBRE  
DE DIOS P  
LLEVENSE  
A ULTIMOS

CAXAC

DE LA IMPUNID

contexto  
LATINOAMERICANO



REVISTA DE ANÁLISIS POLÍTICO  
no.2/enero - marzo de 2007



Argentina • Brasil • Chile • Colombia • Cuba  
El Salvador • México • Puerto Rico • Venezuela

*Contexto Latinoamericano* es una revista de análisis político publicada por la editorial Ocean Sur. Su propósito es fomentar y divulgar el intercambio de ideas entre los líderes y activistas de los partidos, organizaciones y movimientos políticos y sociales de la izquierda, con la participación de especialistas de las ciencias sociales, comunicadores y artistas comprometidos con la emancipación de los pueblos de América Latina y el Caribe.

contexto  
LATINOAMERICANO

Director: **David Deutschmann**  
Editor: **Roberto Regalado**  
Editora Adjunta: **Ivón Muñiz**  
Edición/Corrección: **Esther Acosta**  
Diseño Gráfico: **Víctor MCM**  
Composición: **Miriam Hernández**  
Producción: **Lourdes García Larqué**

Consejo Editorial: **Jesús Arboleya** (Ocean Sur),  
**Jaime Caycedo** (Colombia), **Héctor de la Cueva** (México),  
**Patricio Echegaray** (Argentina), **Fermín González** (Colombia),  
**Medardo González** (El Salvador), **Sergio Guerra Vilaboy** (Cuba),  
**Gilberto López y Rivas** (México), **Fernando Martín** (Puerto Rico),  
**Vivian Martínez Tabares** (Cuba), **Hugo Moldiz** (Bolivia),  
**Julio A. Muriente Pérez** (Puerto Rico), **Valter Pomar** (Brasil),  
**Mayra Reyes** (Nicaragua), **Javier Salado** (Ocean Sur),  
**Beatriz Stolowicz** (Uruguay / México), **Guillermo Teillier** (Chile)

Cada trabajo expresa la opinión de su autor. La opinión de *Contexto Latinoamericano* se expresa en *Palabras del editor* y en aquellas notas que así lo indiquen.

Derechos © 2007 Ocean Sur  
Derechos © 2007 Contexto Latinoamericano  
contextolatino@enet.cu • info@oceansur.com • www.oceansur.com

ISSN: 1834-0679 • ISBN: 978-1-921235-44-3

Suscripciones: Individuales: \$65. 00 USD (por cuatro números)  
Instituciones: \$250.00 USD (por cuatro números)

Impreso en Colombia por Quebecor World Bogotá S.A.

Cubierta: Marcha de simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, México, 2006.

Foto: Mario Vázquez de la Torre

# sumario

## 5 PALABRAS DEL EDITOR

### CONTEXTO ACTUAL

- 9 Brasil: 2007 y los próximos años  
**Valter Pomar**
- 21 Las elecciones en Nicaragua y el regreso del Frente Sandinista  
**Orlando Núñez Soto**
- 32 Expectativas de la mujer nicaragüense ante el triunfo electoral del Frente Sandinista  
**Mayra Reyes Sandoval**
- 42 El triunfo de Rafael Correa en el Ecuador  
**Germán Rodas**
- 59 Correazo ecuatoriano a la oligarquía y el imperialismo  
**Fernando Buendía**
- 70 ¡Hagámoslo, no hay excusa!  
**Antonio Aponte**
- 78 Los desafíos de la izquierda en México  
**Rosa Albina Garavito Elías**
- 88 México: choque de trenes. Entre el autoritarismo estatal y la resistencia popular  
**Luis Hernández Navarro y Gilberto López y Rivas**

### CONTEXTO HISTÓRICO

- 111 El largo proceso que condujo a la guerra y a la negociación en El Salvador  
**Schafik Hándal**
- 139 Palabras sobre Schafik  
**Tatiana Bichkova de Hándal**

# sumario

---

## CONTEXTO ANALÍTICO

- 143 El Canal de Panamá: esperanzas frustradas  
**Olmedo Beluche**
- 152 Ampliación del Canal de Panamá pasa prueba  
de referéndum a pesar de los riesgos  
**Marco A. Gandásegui, hijo**
- 164 Panamá tomó la decisión  
**Nils Castro**

## CONTEXTO CULTURAL

- 169 Nuevos primeros días  
**Roberto Fernández Retamar**

## ENLACES

- 195 De Porto Alegre a Nairobi: una mirada al Foro Social Mundial  
**José Miguel Hernández**
- 200 La conspiración de los diferentes.  
(Reseña de *Elogio a la diversidad...* de Héctor Díaz-Polanco)  
**Armando Bartra**
- 208 Sobre *Autonomías indígenas en América Latina.*  
*Nuevas formas de convivencia política*  
**Alicia Castellanos Guerrero**
- 215 Reseñas de libros de Ocean Sur

# palabrasdeeditor

Después de una década (1988-1998) durante la cual los triunfos electorales de la izquierda latinoamericana se circunscribieron a las legislaturas nacionales y a las instancias provinciales, municipales y locales de gobierno, entre diciembre de 1998 y diciembre 2006, cinco de sus más conocidos líderes fueron electos –y dos de ellos reelectos– a la presidencia de sus respectivos países. Esos líderes son, según el orden cronológico de su primera elección, Hugo Chávez en Venezuela (1998, 2000 y 2006), Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil (2002 y 2006), Tabaré Vázquez en Uruguay (2004), Evo Morales en Bolivia (2005) y Daniel Ortega en Nicaragua (2006). A estos triunfos se suma la elección de Rafael Correa a la presidencia de Ecuador (2006), figura política recién surgida, cuya batalla por convocar a una Asamblea Constituyente con fines democratizadores, restablecer el control estatal sobre los recursos naturales y enfrentar los urgentes problemas económicos y sociales de su país, lo ubican entre los mandatarios de izquierda y progresistas de la región.

En el año 2006 también es preciso destacar el resultado electoral de los candidatos presidenciales Carlos Gaviria en Colombia, Ollanta Humala en Perú y Andrés Manuel López Obrador en México. A pesar de que los dos primeros no fueron electos, y pese a que el tercero fue despojado de la victoria, los tres obtuvieron resultados extraordinarios en sus respectivos contextos nacionales. Una característica común de estas candidaturas es que lograron movilizar hacia las urnas a los crecientes sectores sociales cansados de esperar el «derrame» de la riqueza anunciado hace tres décadas por los heraldos neoliberales.

En Chile, donde la Concertación de Partidos por la Democracia se erigió desde 1990 en el paradigma de la *governabilidad neoliberal*, y donde las corrientes más combativas del Partido Socialista libran una dura batalla por preservar su identidad y objetivos históricos, cabe justipreciar, primero,

que su candidata presidencial fue Michelle Bachelet –y no Soledad Alvear, representante de la derecha más recalcitrante dentro de esa alianza–, y segundo, que Bachelet derrotó al candidato de la ultraderecha en la segunda vuelta de la elección presidencial, en febrero de 2006, gracias al apoyo de sectores de izquierda ajenos a la Concertación.

En la actualidad, siete naciones latinoamericanas, Cuba, Venezuela, Brasil, Uruguay, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, tienen *gobiernos de izquierda o alianzas de gobierno formadas en torno a una fuerza política o a una figura de izquierda o progresista*. Lo mismo ocurre en varios países del Caribe. Sólo durante dos breves períodos anteriores de la historia latinoamericana se presentaron situaciones cercanas a ésta. Uno de ellos fue a principios de los años setenta, cuando coincidieron en tiempo la Revolución Cubana, los gobiernos militares progresistas de Omar Torrijos en Panamá, Juan Velasco Alvarado en Perú y Juan José Torres en Bolivia, el gobierno de la Unidad Popular en Chile presidido por Salvador Allende y el de Michael Manley en Jamaica. El otro fue a finales de esa década e inicios de la siguiente, cuando coincidieron la Revolución Cubana, la Revolución Popular Sandinista y la Revolución Granadina.

Los gobiernos de izquierda y progresistas de esta «nueva hornada», que se inicia en 1998 con la primera elección de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, nacen y actúan en condiciones diferentes a las que lo hicieron los gobiernos surgidos de las dos vertientes históricas del movimiento obrero y socialista mundial: la que optó por la *revolución socialista* y la que optó por la *reforma socialdemócrata del capitalismo*. La izquierda que llega hoy al gobierno en América Latina no destruye al Estado burgués, ni elimina la propiedad privada sobre los medios de producción, ni funda un nuevo poder, ejercido exclusivamente por las clases desposeídas. Tampoco puede remedar el llamado Estado de Bienestar de posguerra, que el propio capitalismo impulsó en función de la reconstrucción europea y la guerra fría, del cual hace años que abjuró la socialdemocracia del Viejo Continente.

Hoy la izquierda accede al gobierno de acuerdo con las reglas de la democracia burguesa, incluido el respeto de la alternabilidad, en este caso con la derecha neoliberal que, desde la oposición obstaculiza, y si regresa al gobierno revertirá, las políticas que ella ejecuta. Pero, en ciertas circunstancias, el asunto no es solo la alternabilidad con la derecha neoliberal, sino que para llegar al gobierno –y para gobernar– la izquierda se siente obligada a establecer alianzas con fuerzas ubicadas a su derecha. Y, finalmente, en ocasiones la cuestión tampoco radica solo en la alternabilidad y las alianzas externas, sino en que dentro de los propios partidos, movimientos políticos y coaliciones de izquierda coexisten corrientes socialistas, socialdemócratas y de otras identidades, que tienen discrepancias entre sí sobre cuánto respetar y cuánto forzar los límites del sistema de dominación imperante.

El problema planteado es complejo, entre otras razones, porque no encaja en los patrones conocidos de *revolución* y *reforma*. Pero, de esta historia viva que, con sus virtudes y sus defectos, con sus aciertos y sus errores, escribe día a día la izquierda latinoamericana de carne y hueso, es que nacerá ese *otro mundo posible* que demandan nuestros pueblos. La interrogante es cómo avanzar, en las actuales condiciones, de las entrañas del capitalismo neoliberal hacia la imprescindible transformación social revolucionaria. Este es el debate al que invita *Contexto Latinoamericano*.

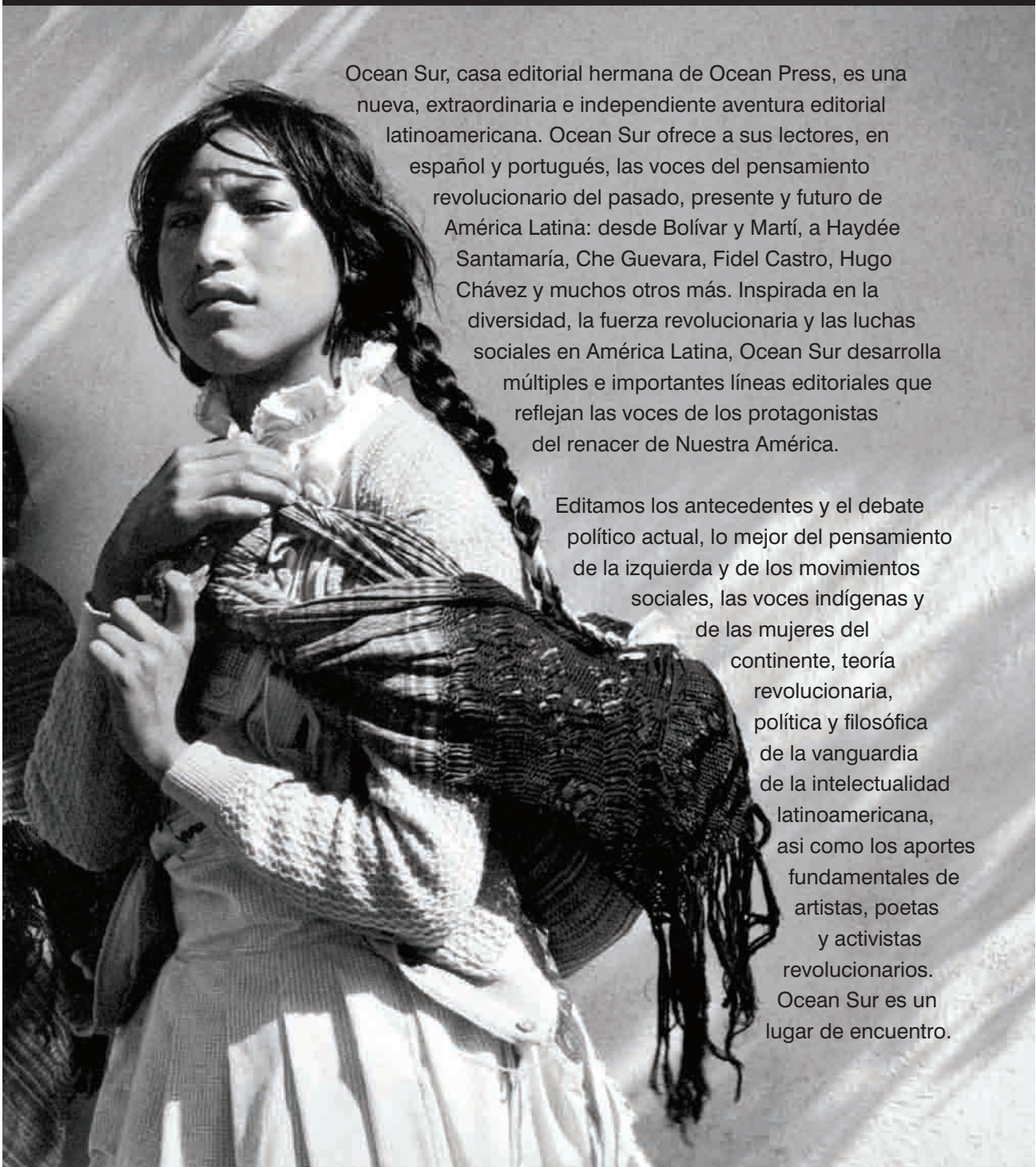
En el debate que proponemos, hay figuras que participarán con la memoria de su ejemplo y el legado de sus ideas. Una de esas figuras es Schafik Hándal, sin dudas, el más destacado de los líderes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). La trayectoria revolucionaria de Schafik abarca tres períodos de la historia contemporánea de América Latina: comienza en su temprana adolescencia, en la década de 1940; recorre la agitada sucesión de acontecimientos ocurrida durante los años sesenta y setenta que desembocan en la fundación del FMLN, en octubre de 1980; y desempeña un papel protagónico en la firma de los Acuerdos de Chapultepec, que simbolizan –junto a otros procesos de solución política negociada, anteriores y posteriores–, el tránsito de la lucha armada a la lucha social y política característica del presente.

Con motivo del primer aniversario de la desaparición física de Schafik y del XV Aniversario de los Acuerdos de Chapultepec, en ocasión del XIII Encuentro del Foro de São Paulo, celebrado en San Salvador, en enero de 2007, Ocean Sur inauguró su oficina en la capital salvadoreña, y presentó el primer número de *Contexto Latinoamericano*, y el libro de Schafik, *Una guerra para construir la paz*, publicado en colaboración con la Editorial Morazán. De ese libro, en la sección *Contexto Histórico* presentamos «El largo proceso que condujo a la guerra y a la negociación en El Salvador», escrito por Schafik en diciembre de 1996. Este texto no solo constituye una lección magistral de historia, sino también un profundo análisis sobre las condiciones en las que lucha el FMLN, desde su metamorfosis de movimiento insurgente en partido político. Además, reproducimos las palabras de su compañera, Tatiana Bichkova de Hándal, pronunciadas en la entrega póstuma de la Orden al Mérito Luis Donaldo Colosio, otorgada a Schafik en 2006 por la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL). Este es nuestro modesto, pero sentido homenaje al inolvidable comandante Simón.



# ocean sur

una nueva editorial latinoamericana



Ocean Sur, casa editorial hermana de Ocean Press, es una nueva, extraordinaria e independiente aventura editorial latinoamericana. Ocean Sur ofrece a sus lectores, en español y portugués, las voces del pensamiento revolucionario del pasado, presente y futuro de América Latina: desde Bolívar y Martí, a Haydée Santamaría, Che Guevara, Fidel Castro, Hugo Chávez y muchos otros más. Inspirada en la diversidad, la fuerza revolucionaria y las luchas sociales en América Latina, Ocean Sur desarrolla múltiples e importantes líneas editoriales que reflejan las voces de los protagonistas del renacer de Nuestra América.

Editamos los antecedentes y el debate político actual, lo mejor del pensamiento de la izquierda y de los movimientos sociales, las voces indígenas y de las mujeres del continente, teoría revolucionaria, política y filosófica de la vanguardia de la intelectualidad latinoamericana, así como los aportes fundamentales de artistas, poetas y activistas revolucionarios. Ocean Sur es un lugar de encuentro.

[www.oceansur.com](http://www.oceansur.com) ■ [info@oceansur.com](mailto:info@oceansur.com)

## Brasil: 2007 y los próximos años

VALTER POMAR

La izquierda mundial siguió con bastante interés y atención el proceso electoral brasileño que finalizó en octubre de 2006 con la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva para otros cuatro años más de mandato presidencial (2007-2010).

El interés se justifica por diversos motivos, entre ellos el peso económico y político de Brasil y su capacidad de influenciar en importantes cuestiones internacionales, el hecho de que Lula sea un líder mundialmente conocido y las repercusiones que el resultado electoral tendría sobre el futuro de la izquierda brasileña y latinoamericana.

La elección de Lula fue, salvo raras excepciones, celebrada por los sectores populares de todo el mundo. Sin embargo, una vez ganada la batalla es importante hacer una evaluación bastante detallada sobre el resultado y las perspectivas que abre.

### **Cuatro victorias combinadas**

Lula fue reelegido presidente de la República en la segunda vuelta, con 58,3 millones de votos (lo que equivale al 60,8% de los votos válidos). En la primera vuelta, Lula obtuvo 46,6 millones de votos (lo que equivale al 48,6% de los votos válidos).

De las cinco grandes regiones en que se divide el territorio brasileño, Lula obtuvo mayoría absoluta en cuatro de ellas: Norte (65,6%), Nordeste (77,1%), Centro-oeste (52,4%), Sudeste (56,9%). En la región Sur del país, que comprende

tres estados (Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul), alcanzó el 46,2% de los votos válidos.

Por otra parte, Lula obtuvo mayoría de votos en 19 estados brasileños y en el Distrito Federal (o sea, venció en 20 de las 27 unidades de la Federación). En algunos casos, logró más del 80% de los votos (en los estados de Amazonas, Maranhão e Ceará).

En los municipios brasileños (cerca de 5 500), la votación a favor de Lula fue la siguiente: 61,7% (municipios con menos de 10 000 electores); 64,2% (municipios con 10 000 a 20 000 electores); 62,1% (municipios con 20 000 a 50 000 electores); 60% (municipios con 50 000 a 150 000 electores) y 59,4% (municipios con más de 150 000 electores).

Además de la victoria electoral, expresada en las cifras anteriores, la elección de Lula constituyó también una victoria política de las fuerzas democráticas, populares, nacionalistas, progresistas o simplemente conservadoras, pero antineoliberales contra los partidos que implementaron el Consenso de Washington en Brasil.

Esta victoria política e ideológica quedó clara en la segunda vuelta, cuando la campaña de Lula adoptó un discurso de polarización. Entre el día 1ro. de octubre (primera vuelta) y el 29 de octubre (segunda vuelta), nuestra campaña dijo claramente a todo el país que Lula y Alckmin (candidato de la derecha) representaban dos proyectos distintos, dos programas distintos, dos bloques sociales distintos.

La campaña de Lula hizo cuatro acusaciones principales contra la candidatura de la derecha: sumisión a los intereses de los Estados Unidos; recortes en el presupuesto social; privatización de empresas públicas; y autoritarismo con respecto a los movimientos sociales. En todas estas áreas, la campaña de la derecha no logró sustentar el debate y no tuvo coraje para defender, de manera clara, su programa, lo que constituye una clara señal de las dificultades enfrentadas por las ideas neoliberales.

La elección de Lula también constituyó una victoria contra el monopolio de los medios masivos de comunicación. De enero de 2004 hasta finales de septiembre de 2006, las principales televisoras, radios, periódicos, revistas y páginas de Internet del país hicieron campaña abierta contra el gobierno de Lula y contra el Partido de los Trabajadores (PT). Lo que se comprobó fue que los denominados «formadores de opinión» fueron derrotados por la opinión pública expresada en las urnas. La mayor parte del pueblo brasileño expresó, al votar por Lula, un nivel de conciencia de clase y una independencia en la formación de su opinión política que sorprendieron a la propia derecha. La sorpresa fue tan grande que, por lo menos, un gran intelectual socialdemócrata llegó a declarar explícitamente, que la mayor parte del pueblo brasileño está compuesta por ¡¡¡«primitivos»!!! El resultado electoral constituyó, en resumen, una victoria del Partido de los Trabajadores.

Durante dos años, el PT fue dado por muerto y enterrado varias veces. Según analistas de enorme prestigio, el partido simplemente estaba «acabado»: a lo sumo, elegiría a 60 diputados federales y, como máximo, a 3 gobernadores de estados secundarios. Además, estos analistas decían que el PT saldría desmoralizado del proceso electoral. Lo que se vio fue al PT elegir 83 diputados (contra 81 que tenía al inicio de la campaña electoral y 91 elegidos en 2002), con lo cual resultó ser el partido más votado para la Cámara de Diputados: 13,9 millones de votos o 14,9% del total, 400 000 votos más que el ocupante del segundo puesto, el Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

Además, el Partido de los Trabajadores eligió a cinco gobernadores estatales en: Bahía, donde destronamos en la primera vuelta a una de las oligarquías políticas más conservadoras del país; Pará, donde derrotamos a un partido que gobernaba desde hacía doce años; Piauí, para nuestro segundo mandato consecutivo; Acre, para nuestro tercer mandato consecutivo; y Sergipe, que desde 1964 era gobernado por políticos de derecha. Es importante destacar que el PT ocupó el segundo lugar en número de votos para gobernador en todo el país: 20,4 millones de votos o 26,7% de los votos válidos.

Resulta evidente que no todo es color de rosa. Por ejemplo, si comparamos los resultados de 2006 con los de 2002, el PT perdió más de dos millones de votos. Pero si tenemos en cuenta el violento ataque sufrido en este período y las previsiones que se hacían, el resultado electoral fue una gran victoria para el mayor partido de la izquierda brasileña.

## Una celebración sobria

Vencimos por diversos motivos, entre ellos, el rechazo a lo que significaron los ocho años de gobierno neoliberal que antecedió a la primera toma de posesión de Lula, en comparación con las realizaciones positivas de nuestro gobierno, especialmente en la esfera de la política exterior, en la recomposición del Estado y en la ampliación de las políticas sociales. Vencimos, también, gracias a los errores políticos de la oposición conservadora y a los aciertos de nuestra campaña, especialmente en la segunda vuelta.

No obstante, nuestra victoria debe celebrarse con mucha sobriedad, pues si bien es cierto que el pueblo brasileño nos dio una segunda oportunidad, no necesariamente nos dará una tercera. Al votar por Lula y por el resto de los candidatos petistas, el pueblo no amnistió ni olvidó los errores que fueron cometidos, especialmente desde 2003. Tampoco nos dio la clave para solucionar los enormes retos del segundo mandato.

Vencimos en las elecciones presidenciales de 2006 gracias a la conciencia de clase demostrada por amplias capas del pueblo brasileño, que comprendieron lo que estaba en juego en las elecciones y no se dejaron confundir por la

gritería de los medios de comunicación y de la oposición tucano-pefelista, pero solo una pequeña parte de las capas populares que forman nuestro electorado está organizada, ya sea en partidos o en movimientos sociales.

Uno de nuestros mayores retos reside, exactamente, en ampliar y dar un salto cualitativo en la influencia de los sindicatos, de las organizaciones estudiantiles, de los movimientos urbanos y de trabajadores rurales, de las organizaciones femeninas y de negros, así como del resto de las formas de organización popular.

Por igual motivo, los partidos de izquierda tienen que estar más presentes en la vida cotidiana del país. Una izquierda de masas no es solo, ni mucho menos, aquella que disputa una elección; es también (y principalmente) una institución nacional, una fuerza cultural, una organización presente en todas las esferas de la vida de la sociedad. Esto es especialmente válido para el PT, como principal partido de la izquierda brasileña e integrante fundamental de la coalición La Fuerza del Pueblo.

Tenemos que ser capaces de construir una izquierda militante y de masas, una fuerza política y cultural enraizada orgánicamente (y no solo electoralmente) en el pueblo brasileño, en especial, en las clases trabajadoras. Uno de los instrumentos para lograr esto es la existencia de medios de educación, cultura y medios masivos de comunicación, pues la batalla de ideas constituye un aspecto esencial de la construcción partidista.

Se trata de apoyar de forma efectiva a la prensa democrática. Ampliar y evaluar el trabajo de comunicación de los partidos de izquierda. Crear un órgano de prensa semanal y nacional dirigido a la militancia política y social de izquierda. Y consolidar, en decenas de millones de brasileños y brasileñas, una visión de mundo democrático-popular y socialista, articulada a un internacionalismo activo al apoyar las luchas de los trabajadores y pueblos oprimidos de todo el mundo, en especial de la América Latina.

## **Un PT socialista**

Una vez concluida la elección, los medios de comunicación se lanzaron a la «tercera vuelta» queriendo, a cualquier precio, relativizar la victoria del PT y su papel en la elección de Lula, pretendiendo con ello reducir al máximo la influencia y la presencia petista en el segundo mandato.

Es cierto que el PT es solo uno de los integrantes del campo democrático y popular. También es verdad que las fuerzas democráticas y populares son apenas una parte de la amplia «coalición progresista» que se articuló en torno a la candidatura de Lula, en especial para la segunda vuelta. Esta pluralidad indica, sencillamente, que habrá una intensa disputa sobre los rumbos del segundo mandato de Lula, disputa para la cual el PT y las demás fuerzas de izquierda se deben preparar y comprometer de manera plena.

En la medida en que el presidente Lula se decidió por un «gobierno de coalición» con fuerzas de centro y hasta de derecha, para la izquierda brasileña crece la importancia de combinar el apoyo al gobierno con el mantenimiento de su autonomía y de su capacidad de crítica con respecto a él, en los inevitables contenciosos políticos.

Al PT, específicamente, le interesa tener un gobierno progresista, capaz de recuperar la soberanía nacional, ampliar la democracia y fortalecer el Estado, pero, además, queremos tener un gobierno democrático-popular, capaz de combatir la dictadura del capital financiero y realizar reformas estructurales con el objetivo de abrir el camino hacia el socialismo.

Le corresponde articular al PT, en una estrategia coherente, la defensa de lo que hoy tenemos con la lucha por lo que pretendemos construir. Este es el principal desafío del III Congreso del PT, que se celebrará los días 6, 7 y 8 de julio de 2007: aprobar una estrategia de actuación del PT a lo largo de la próxima década, al menos. Estrategia que supone reafirmar al PT como partido militante y de masas, capaz de gobernar a Brasil y de luchar por el socialismo.

El PT de los años ochenta ya advertía el carácter plenamente capitalista de la sociedad brasileña; el carácter dependiente, monopolista y antidemocrático de este capitalismo; el alto nivel de integración entre el latifundio, el imperialismo y el desarrollo capitalista nacional; el carácter central de las contradicciones entre el capital y el trabajo y, por tanto, la vigencia del socialismo.

En la década del ochenta, la visión petista de socialismo estaba estructurada por el anticapitalismo, por la lucha de las clases trabajadoras, por la búsqueda de la igualdad y de la democracia política y social. Ya en los años noventa, el tipo de socialismo dominante en las filas petistas fue asumiendo poco a poco formas parecidas a las de la socialdemocracia.

A pesar de que el 12mo. Encuentro del Partido (2001) reafirmó los valores del socialismo democrático, para las posiciones que eran mayoritarias en el PT de entonces, el socialismo dejaba de ser poco a poco una forma de organizar la sociedad, diferente al capitalismo, y pasaba a constituir un conjunto de «valores» que supuestamente iluminarían y disciplinarían el deseado crecimiento capitalista. Los cambios ocurridos en el «socialismo petista» estuvieron acompañados por modificaciones en la estrategia del Partido de los Trabajadores.

En 1987, el 5to. Encuentro Nacional del PT afirmaba lo siguiente: «para acabar con el capitalismo e iniciar la construcción de la sociedad socialista es necesario, en primer lugar, realizar un cambio político radical: es necesario que los trabajadores se transformen en la clase hegemónica y dominante en el poder del Estado, acabando con el dominio político ejercido por la burguesía».<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Todas las citas han sido tomadas de «Resoluciones Políticas», *Resoluções de Encontros e Congressos: 1979-1998*. Editora Fundação Perseu Abramo, São Paulo, 1999.

Al presentar a la burguesía como el principal enemigo, el 5to. Encuentro defendía la alianza de los trabajadores asalariados y de los trabajadores pequeños propietarios en la lucha por el socialismo.

Teniendo en cuenta que no estaban «planteadas en el orden del día para las más amplias masas trabajadoras, ni la lucha por la toma del poder, ni la lucha directa por el socialismo», el 5to. Encuentro defendía la adopción de una política de acumulación de fuerzas, en la cual se combinara la construcción del propio PT, la construcción del movimiento social y la ocupación de espacios institucionales.

Incluso, sin aparecer en el orden del día la lucha por la toma del poder, ni la lucha directa por el socialismo, la resolución defendía que el PT se presentara ante toda la sociedad como un partido socialista: «la alternativa que presentamos a la Nueva República y a la dominación burguesa en el país es la democrática y popular y está articulada con nuestra lucha por el socialismo».

Afirmaba, además, que «en la situación política caracterizada por la existencia de un gobierno que ejecute un programa democrático, popular y antimperalista, le corresponderá al PT y a sus aliados crear las condiciones para las transformaciones socialistas. En las condiciones de Brasil, un gobierno capaz de realizar las tareas democráticas y populares, de carácter antimperalista, antilatifundista y antimonopolista –tareas estas no materializadas por la burguesía– tiene un doble significado: en primer lugar, es un gobierno de fuerzas sociales en choque con el capitalismo y el orden burgués, por tanto, un gobierno cuya hegemonía es ejercida por el proletariado y que solo podrá ser factible con una ruptura revolucionaria; en segundo lugar, la realización de las tareas propuestas exige la adopción simultánea de medidas de carácter socialista en sectores vitales de la economía y el enfrentamiento a la resistencia capitalista».

El 5to. Encuentro continúa siendo, hasta hoy, la formulación estratégica más explícita del Partido de los Trabajadores. En resumen (y tomando en consideración lo que afirma el 6to. Encuentro Nacional sobre lo que sería el gobierno de Lula en caso de que el Partido venciese en las elecciones de 1989), podemos decir que amplios sectores del PT pensaban de la forma siguiente:

- a) el socialismo es nuestro objetivo estratégico, y se alcanzará mediante una alianza entre los trabajadores asalariados y los pequeños propietarios en torno a tareas antimonopolistas, antilatifundistas y antimperalistas;
- b) la contienda por el poder exigiría una política de acumulación de fuerzas –centrada en la construcción del Partido, en la de los movimientos sociales y en la ocupación de espacios institucionales– en torno a un programa democrático-popular, articulado con la lucha por el socialismo;
- c) la disputa y el ejercicio del gobierno formarían parte de la lucha por el poder; la conquista del gobierno federal constituiría un punto de partida

para las reformas estructurales, que profundizarían la lucha de clases y la llevarían al punto de ruptura, lo cual permitiría la transformación de un gobierno electo en un gobierno revolucionario;

- d) la conquista del poder del Estado daría como resultado la constitución de un gobierno democrático-popular, de carácter pluriclasista, cuya hegemonía sería ejercida por el proletariado, como el punto de partida para la construcción del socialismo.

Es evidente que cada sector del PT interpretó a su manera la estrategia aprobada por el 5to. Encuentro. Las diferentes interpretaciones se originaban, en parte, por las dificultades políticas y conceptuales inherentes al propio concepto de transición socialista.

En la fórmula de Marx (y de Lenin) la transición socialista tiene un punto de partida político (la conquista del poder por el proletariado), un punto de llegada político-social (la abolición de las clases y del Estado) y un parámetro (sin el cual no tiene sentido hablar de transición): la progresiva socialización de la propiedad, de la producción y del poder político.

En países donde los socialistas intentaban tener a los trabajadores pequeños-propietarios como aliados, eso exigía establecer un compromiso con estos aliados: la pequeña propiedad no tendría el mismo tratamiento que se daría a la gran propiedad capitalista.

Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, la expresión gobierno democrático-popular fue una de las fórmulas inventadas con el objetivo de solucionar este problema. Como sabemos, la experiencia práctica de la mayoría de los países del Este Europeo siguió otro curso.

La dificultad conceptual inherente a la elaboración de una estrategia socialista era todavía mayor en aquellos países que no experimentaron previamente revoluciones democrático-burguesas. En estos casos, el futuro Estado socialista tendría que terminar las tareas «inconclusas», «no realizadas» o entonces «típicas» de revoluciones democrático-burguesas como la independencia nacional, la reforma agraria y la democratización política.

Para solucionar este tipo de situación se crearon fórmulas tales como «gobierno democrático-popular», que en este sentido sería una especie de «primera fase» de la transición socialista.

Otra fuente de interpretaciones variadas existentes en el PT sobre las resoluciones del 5to. Encuentro Nacional es la confusión que ellas mismas establecen entre el *gobierno democrático y popular que daría inicio a la transición socialista* y el *gobierno democrático popular que pondría término a la Nueva República* (nombre dado al gobierno civil, pero elegido por el voto indirecto, que existió en Brasil entre 1985 y 1989). La diferencia es muy clara: en un caso, el gobierno democrático y popular sería el resultado de una ruptura revolucionaria; en el otro caso, el gobierno democrático popular surgiría a partir de un proceso electoral.



En las resoluciones del 5to. (1987) y del 6to. (1989) Encuentros Nacionales del PT, hay un deseo explícito de que ambos gobiernos fuesen eslabones de un mismo proceso, motivo por el cual le dan, incluso, el mismo nombre a ambas cosas cuando en verdad su contenido y sus tareas serían diferentes.

La resolución del 6to. Encuentro (1989) demuestra que había conciencia sobre esa diferencia, ya que se afirma claramente que «aunque no exista una crisis de tipo revolucionario, ni incluso una situación revolucionaria, podemos y debemos conquistar el Ejecutivo, la Presidencia de la República, e inaugurar un nuevo período en el cual, con la toma de posesión del gobierno –y por tanto, de una parte importante del poder del Estado– la disputa por la hegemonía se dará en otro nivel. Estará planteada para el PT y para las fuerzas democráticas y populares la posibilidad de iniciar un acelerado y radical proceso de reformas económicas, políticas y sociales. Todo eso creará las condiciones para conquistar la hegemonía política y realizar las transformaciones socialistas».

A continuación, la resolución del 6to. Encuentro afirma lo siguiente: «un gobierno del PT y del Frente Brasil Popular deberá realizar las tareas democráticas y populares en el país, de corte antimperialista, antilatifundista y antimonopolista. La materialización de medidas de este tipo, inclusive de cuño no explícitamente socialista, choca en forma directa, con la estructura del capitalismo que aquí existe [...] el PT no cree en la posibilidad de una etapa de capitalismo popular en el país. Por el contrario, mediante un proceso simultáneo de acumulación de fuerzas, enfrentamientos y conquistas de los trabajadores crearemos las condiciones para iniciar las transformaciones socialistas en Brasil [...] el gobierno democrático y popular y el inicio de la transición socialista son eslabones del mismo proceso. Sin embargo, el paso de uno al otro no es automático [...] La implementación en su totalidad de un programa democrático-popular solo puede tener lugar con la revolución socialista».

Leídas ahora, prácticamente diecisiete años más tarde, resultan evidentes cuántas modificaciones sufrió la estrategia del PT después de las elecciones de 1989, debido, en parte, a cambios acaecidos en la correlación de fuerzas a nivel nacional y mundial. También se originaron por las transformaciones ocurridas en las concepciones políticas e ideológicas de amplios sectores del Partido.

En vez de dar seguimiento a la elaboración estratégica construida en la década del ochenta, adecuándola a un nuevo período histórico marcado por la crisis del socialismo y por la ofensiva neoliberal, durante los años noventa, los sectores mayoritarios del PT optaron por elaborar otra estrategia.

Ya a inicios de los años 1990 comenzó un movimiento en el sentido de abandonar el concepto de revolución y de conquista del poder, sustituyéndolos por una versión extremadamente suavizada de disputa de la hegemonía, donde al PT le correspondería el papel de «partido de interlocución».

Es cierto que se trata de un movimiento contradictorio que combina elementos de una nueva estrategia con otros de la antigua. Pero, visto de conjunto, en la década del noventa ocurre un cambio en la estrategia y en la propia forma de abordar el debate estratégico. Sin jerarquizar importancias ni establecer una cronología, podemos citar las modificaciones siguientes:

- a) el progresivo alejamiento del socialismo como objetivo estratégico a favor de la lucha contra el neoliberalismo (no más contra el capitalismo); el propio PT fue dejando de presentarse en público como un partido socialista;
- b) el acelerado abandono del concepto de «revolución»;
- c) el uso generalizado del concepto de gobierno democrático-popular; alcaldías y gobiernos estaduais pasaron a recibir esa denominación, lo que se hacía en detrimento del sentido estratégico con que el término era utilizado en las resoluciones del 5to. Encuentro;
- d) el predominio de una postura reduccionista, incluso entre los que evitaron vulgarizar el concepto; el término gobierno democrático-popular pasó a ser visto cada vez más como sinónimo de «gobierno Lula».

En las condiciones de las elecciones presidenciales de 1989 eso parecía que no provocaría ningún tipo de problema insoluble. Sin embargo, de 1994 en adelante este reduccionismo contaminó el concepto con las limitaciones presentes en la coyuntura de esta década, con lo cual creó, además, una creciente confusión entre la táctica y la estrategia.

La opción hecha por el Partido, y más exactamente por los sectores mayoritarios en el PT a partir de 1995, fue sustituir la estrategia democrático-popular original por una estrategia de tipo electoral basada en un conjunto de alianzas de centro-izquierda en torno a un programa antineoliberal, suavemente inspirado en los valores del socialismo.

Esta nueva estrategia tenía como objetivo vencer en las elecciones presidenciales, no para iniciar una «transición democrática y popular rumbo al socialismo» sino para realizar un gobierno antineoliberal.

La estrategia incluía, además, la búsqueda de una alianza con un sector del gran capital, supuestamente contra el neoliberalismo; y la defensa de sucesivos gobiernos de centro-izquierda con la esperanza de que tendríamos gobiernos cada vez más progresistas hasta que lográramos un gobierno democrático y popular y una correlación de fuerzas que hiciera posible replantearse el socialismo en la agenda política del país.

La «estrategia de centro-izquierda» orientó la acción del PT desde 1995 hasta la elección de Lula en 2002. Como esta estrategia se basaba en la subordinación de nuestros objetivos estratégicos a los objetivos tácticos, se comprende mejor el hecho de que la victoria de 2002 estuviera acompañada de un compromiso con el capital financiero.

En nombre de este compromiso, el PT fue llamado a defender una política de altos intereses y pagos al día de las deudas financieras. Esto imposibilitó que el gobierno hiciera cambios profundos, previstos tanto en el programa del Partido como en el de la coalición de gobierno, incluso el crecimiento acelerado de la economía.

Como resultado de esto, pero también de otras variantes, el gobierno perdió lentamente la iniciativa política hasta que llegó el momento en que las fuerzas de derecha pasaron a la ofensiva general contra nosotros.

La única forma de preservar el gobierno fue, como hicimos en la segunda vuelta de las elecciones de 2006, empleando una política de polarización entre programas y bloques sociales. Esta polarización es profundamente contradictoria con la «estrategia de centro-izquierda».

En otras palabras, la «estrategia de centro-izquierda» no impidió la conquista del gobierno federal en 2002, pero imposibilitó que se superara la hegemonía del capital financiero, casi nos hizo perder el gobierno en 2005 y podría haber producido nuestra derrota en las elecciones de 2006.

Los acontecimientos del primer mandato de Lula, sumados a los efectos de la crisis del socialismo y de la ofensiva neoliberal desorganizaron a la izquierda brasileña. En los últimos años, comenzamos a ganar fuerza en las posiciones siguientes:

- a) el «posibilismo» o «mejorismo», en cuyo nombre se defiende el apoyo de la izquierda al conjunto de acciones del gobierno, sin mediaciones, sin crítica y sin autonomía por parte de los partidos y movimientos sociales;
- b) el «movimientismo», para quien los procesos electorales estarían superados, motivo por el cual proponen una estrategia de acumulación de fuerzas que subestima el papel de las elecciones y de los gobiernos;
- c) el izquierdismo que considera como traición cualquier mediación o concesión que se haga debido a la correlación de fuerzas. En las elecciones de 2006, gran parte de las corrientes izquierdistas apoyó la candidatura de Heloisa Helena, quien a su vez optó por convertir a Lula y al PT en sus principales enemigos.

Junto a estas tres grandes variantes hay otro importante fenómeno que se debe seguir con atención: el denominado «lulismo». En la historia de Brasil, no es la primera vez que un líder político adquiere un carácter extremadamente masivo. Este fue el caso del prestismo, del varguismo y del brizolismo, en la izquierda, pero también del janismo, del ademarismo y del malufismo, en la derecha.

La solidez de este fenómeno, en el caso de Lula, tiene dos grandes explicaciones: la existencia del Partido de los Trabajadores, que sustentó políticamente sus cinco candidaturas para presidente de la República; y las realizaciones y significados materiales y simbólicos de su gobierno.

En la historia de la izquierda brasileña, así como en la de la izquierda latinoamericana, líderes de masas como Lula siempre mantuvieron una relación contradictoria con los partidos políticos.

Admitir que existen puntos de tensión entre el «lulismo» y el «petismo» es necesario, ya sea para evitar el antagonismo entre ambos o para evitar la sumisión del segundo al primero.

Millones de brasileños y brasileñas tienen, en la adhesión a Lula, su primera y principal manifestación de conciencia de clase. Debemos crear mecanismos que logren la incorporación de estas multitudes a organizaciones colectivas como sindicatos y movimientos sociales.

De igual forma, hay miles de militantes que ponen su relación con Lula por encima de su compromiso con el Partido y otras formas de organización colectiva. Se debe convencer a estos militantes de que un proyecto colectivo no se puede organizar alrededor de una persona, y que el Partido es un proyecto colectivo, que se debe preservar por encima de todo y de cualquiera.

De manera similar a como nuestro primer mandato presidencial contribuyó a desorganizar a la izquierda, la campaña de la segunda vuelta mostró que hay potencial y medios para «reorganizar» a la izquierda brasileña. Pero eso exigirá, entre otras cosas, que nuestro segundo mandato sea superior y esté a la izquierda del primero.

También exigirá que todo el PT comprenda que, al tener posesión del gobierno –por tanto, de parte importante del poder del Estado–, la disputa por la hegemonía se desarrollará en otro nivel, pues existe, para el PT y para las fuerzas democráticas y populares, la posibilidad de iniciar un acelerado y radical proceso de reformas económicas, políticas y sociales, con lo cual crearía las condiciones para conquistar la hegemonía política y realizar las transformaciones socialistas; palabras estas del 6to. Encuentro Nacional del PT celebrado en 1989, pero que tienen plena vigencia.

## **Abrir un nuevo ciclo en la historia de Brasil**

El segundo mandato de Lula se asume en mejores condiciones políticas, económicas y administrativas, pero la lucha continúa, incluso los ataques de los medios de comunicación. La mayoría de los medios de comunicación, que pasó los últimos veinte meses en campaña abierta contra el PT y el gobierno de Lula, ahora está en campaña abierta por la «concordia», por el «entendimiento», por las «relaciones institucionales y civilizadas» entre gobierno y oposición.

Movida por la misma preocupación, la oposición se vió obligada a aclarar públicamente que no es «golpista» y que defiende el respeto al resultado de las urnas. Pero si hubiésemos vencido en la primera vuelta con el 1% de los votos de ventaja, la oposición de derecha y los grandes medios de comunicación

estarían en campaña por el *impeachment* de Lula. El hecho de que hayamos vencido en la segunda vuelta y con una amplia ventaja es lo que obligó a la derecha a cambiar su discurso.

Cambió de discurso, pero no de conducta. Si dependiera de la oposición y de los grandes diarios, el segundo mandato debería implementar la agenda defendida por la derecha: cortes presupuestarios, reforma de la asistencia social y laboral y cambio en la política exterior. Frente a estos intentos de ganar, en el grito mediático, aquello que no lograron obtener en las urnas, le corresponderá al PT y a otras fuerzas de izquierda, movilizar a la sociedad para garantizar que se implemente el proyecto vencedor en las elecciones.

Además de nuestra disputa con la oposición, también habrá una disputa interna, entre aquellos que pretenden mantener el segundo mandato dentro de los límites de un gobierno progresista y aquellos que pretenden hacer de él un gobierno democrático y popular.

Brasil necesita abrir un nuevo ciclo histórico que deje atrás las décadas perdidas, el neoliberalismo y el desarrollismo conservador. La victoria obtenida en las elecciones de 2002 y de 2006 abre la posibilidad no sólo para que este nuevo ciclo histórico sea «desarrollista» sino también para que haya un desarrollismo democrático-popular. En dependencia de la fuerza y de la capacidad política de la clase trabajadora y de la izquierda brasileña, este «desarrollismo democrático-popular» puede acumular fuerzas rumbo al socialismo.

Así como también podemos hacer un segundo mandato convencional y ver a la derecha recuperar el mando del gobierno federal, en las elecciones de 2010, con lo que la política brasileña retornaría a una situación de «normalidad». O incluso que sigamos en el gobierno, pero respetando los límites de la hegemonía del capital financiero, sin reformas estructurales ni acumulación de fuerzas rumbo al socialismo.

Los destinos del segundo mandato dependerán de la lucha de clases, pero está claro que vivimos un período de transición en la historia brasileña, no solo en el campo de la política propiamente dicha, sino también en el campo más amplio del desarrollo nacional y de sus relaciones con el mundo.

Comprender esto, estudiar los procesos político-sociales que se desarrollan y elaborar una política adecuada para el período, constituyen algunos de los grandes retos del PT y de la izquierda brasileña. El actual escenario latinoamericano y caribeño ofrece un marco extremadamente favorable para ello.

*Texto traducido del portugués por Caridad García.*

VALTER POMAR es secretario de Relaciones Internacionales del Partido de los Trabajadores de Brasil y doctor en Historia Económica por la Universidad de São Paulo.

# Las elecciones en Nicaragua y el regreso del Frente Sandinista

ORLANDO NÚÑEZ SOTO

## Antecedentes

Nicaragua vivió una revolución a finales del siglo pasado, desde el 19 de julio del año 1979, cuando el Frente Sandinista derrotó a una dictadura que llevaba cuarenta y cinco años en el poder, hasta el 25 de febrero de 1990 en que el Frente Sandinista perdió las elecciones.

La Revolución Sandinista fue posible gracias a una amplia política de alianzas del Frente Sandinista con todos los sectores antisomocistas, incluyendo la oligarquía conservadora nicaragüense y el apoyo de los principales gobiernos de la región. Se llevó a cabo mediante la combinación de un movimiento de masas en las ciudades, columnas guerrilleras en la montaña y una insurrección popular que cercó los cuarteles del ejército de Somoza y derrotó militarmente a su ejército.

La presión de la oligarquía conservadora y de los gobiernos de la región, principalmente del gobierno norteamericano, intentaron, en los últimos momentos de la insurrección, expulsar a Somoza para evitar el triunfo final del Frente Sandinista. Sin embargo, la tardanza del dictador en abandonar el poder y su salida precipitada contribuyeron más bien a desmoralizar al ejército de la dictadura y a facilitar el triunfo de la insurrección popular.

Meses después del triunfo insurreccional, la oligarquía rompe su alianza con el Frente Sandinista y se apresta a aglutinar a los ex guardias somocistas, con el apoyo del gobierno norteamericano. Desde sus primeros años, la joven Revolución Sandinista tiene que enfrentar una guerra de baja intensidad en la cual 25 000 hombres armados y sostenidos financiera y militarmente por el gobierno de Ronald Reagan la hostigan y desgastan su gobierno.

A pesar de las transformaciones sociales emprendidas por la Revolución Sandinista a favor de las clases populares y del apoyo internacional, el desgaste

militar de su gobierno fue tan grande que terminó desangrando y desgastando a la Revolución en su conjunto, lo cual se puso en evidencia en 1990, cuando el gobierno somete a prueba electoral el poder político y es derrotado por una coalición donde participan todas las fuerzas antisandinistas, incluso los liberales somocistas que años antes habían sido desplazados del poder.

Durante dieciséis años, desde 1990 hasta 2006, el Frente Sandinista intenta recuperar el poder por la vía electoral. En 1996 y en 2001, el Frente Sandinista, a la cabeza del cual estaba Daniel Ortega como candidato, perdió las elecciones. En todo este tiempo, se instauró un régimen contrarrevolucionario de corte neoliberal que ha postrado al pueblo nicaragüense en la miseria y ha convertido a Nicaragua en el segundo país más pobre de América Latina, detrás de Haití.

Después de tres derrotas consecutivas, todo parecía imposible. Las campañas de descalificación y de miedo por el regreso del sandinismo al poder tenían prácticamente aterrorizada a la población votante nicaragüense. Particular importancia cobraba la amenaza del gobierno norteamericano de agredir de nuevo a Nicaragua si los sandinistas ganaban las elecciones.

En los primeros años del presente siglo, sin embargo, aflora un fenómeno que se venía gestando: la división de intereses entre la oligarquía financiera, vinculada al partido conservador y al gobierno norteamericano, por un lado, y la burguesía local, fuertemente afectada por las políticas económicas del FMI y por la competencia desleal de las corporaciones extranjeras, por el otro lado. Es así que el mayoritario Partido Liberal Constitucionalista (PLC) se escinde en dos partes, una que encabezan los libero-conservadores, vinculada al gobierno y a la embajada norteamericana, y otra que encabezan los viejos liberales, vinculada a los productores en general.

Esta división se presenta por primera vez en las elecciones municipales de 2004 que fueron ganadas por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. A partir de entonces, la suerte estaba echada: o los liberales y conservadores se unían o no podrían polarizar a toda la sociedad contra el Frente Sandinista en las próximas elecciones presidenciales.

### **El avance de la izquierda latinoamericana**

En todo este tiempo, el Frente Sandinista vivía prácticamente bajo veto y amenaza cotidiana en los medios de comunicación. Cada campaña electoral era una pesadilla, pues Daniel Ortega, líder del Frente Sandinista, era golpeado mediáticamente con la imagen de terrorista, amigo de Kadafi y Bin Laden. Todo ello con fotos de la guerra de liberación y de defensa de la soberanía donde los sandinistas aparecían como guerrilleros y enemigos de la paz y el orden; en cada elección los *spot* de televisión con las imágenes de la guerra, el desabastecimiento, los muertos y heridos; la violencia de los

enfrentamientos arreciaba como el primer día y martillaba a la población con el fantasma del pasado.

Por otro lado, algunos disidentes sandinistas comenzaron a enrumbarse en la senda de la postmodernidad, culpaban al Frente Sandinista de querer regresar al pasado, y hacían de los problemas personales la agenda con la cual desprestigiaban al partido. Si arreciábamos la lucha, nos culpaban de violentos y ortodoxos; si amainábamos la beligerancia y ocupábamos los espacios institucionales que nos permite el nuevo orden, nos acusaban de electoreros. Las alianzas que emprendíamos con fuerzas anteriormente adversas, servía de pretexto para recriminarnos nuestro abandono de los principios revolucionarios. La posición de estos disidentes copiaba exactamente las tesis del salvadoreño Joaquín Villalobos, antiguo dirigente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

En este proceso y a la altura de 1994 se desprende un grupo de sandinistas, encabezado por quien fue el vicepresidente de Daniel Ortega durante el gobierno revolucionario, Sergio Ramírez, quien se presenta a las elecciones presidenciales en 1996, y alcanza apenas el 1% de los votos. Todo parecía indicar que el Frente Sandinista se encaminaría a una división similar a la que padecía la derecha, pero esto no sucedió, aunque el desgaste político y de imagen de los líderes del Frente Sandinista continuaba.

Así pasaba el tiempo hasta que llegaron las victorias de organizaciones de izquierda en el resto de América Latina: Hugo Chávez en Venezuela, Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Tabaré Vázquez en Uruguay, Evo Morales en Bolivia y Michelle Bachelet en Chile, amén de muchas alcaldías ganadas por la izquierda y de avances significativos de los partidos izquierdistas en los comicios electorales de todo el continente, incluso la victoria municipal del Frente Sandinista en el año 2001 en que gana la mayoría de las alcaldías.

Durante la campaña electoral de 2006 la lucha ideológica seguía incandescente, pero el miedo empezó a disminuir. Los medios de comunicación de la derecha no perdían una sola oportunidad para deslegitimar al Frente Sandinista como opción de gobierno, esta vez achacándole no solamente sus viejas amistades izquierdistas con el mundo entero, sino su reciente amistad con el presidente Hugo Chávez. Fuimos incluidos en la confrontación entre los Estados Unidos y Venezuela, cuando se quiso reeditar la de la guerra fría entre la URSS y USA que les había dado tan buenos resultados.

El arribo de la izquierda latinoamericana al poder y su acercamiento a Fidel Castro y a la Cuba revolucionaria, comenzó a legitimar la lucha electoral en Nicaragua por parte de un partido de izquierda y a oxigenar la esperanza del Frente Sandinista de regresar al poder por medio de las elecciones.

Un par de años antes de las elecciones de 2006, el Frente Sandinista y particularmente el comandante Ortega, son sometidos a una ofensiva de desprestigio personal sin precedentes. Por un lado, la derecha lo acusa



de terrorista, mientras que un grupo de disidentes sandinistas, organizados en el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), lo acusa de oportunista de izquierda. Llegó un momento en que ambos discursos no se diferenciaban en nada, pues hasta coincidieron en acusar a Chávez de entrometerse en los asuntos de Nicaragua.

Posteriormente, se empezó a hablar de una izquierda ortodoxa, violenta y confrontativa y una izquierda *light*. En la primera aparecía Fidel, Chávez y Ortega, después agregaron a Evo Morales, en la segunda clasificaban a Lula, Tabaré y Bachelet.

### **El FSLN y los demás partidos en la campaña de 2006**

El panorama electoral en Nicaragua estuvo conformado por cinco partidos, alianzas o movimientos, dos de origen liberal y tres de origen sandinista, a saber, la Alianza Liberal Nicaragüense-Partido Conservador (ALN-PC) liderada por Eduardo Montealegre; el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) dirigido por José Rizo; Alternativa por el Cambio (PC) que llevó como presidente a Edén Pastora, ex dirigente sandinista y héroe de la toma del Palacio Nacional durante el somocismo; el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS) al frente del cual figura Edmundo Jarquín, antiguo dirigente socialdemócrata vinculado con Pedro Joaquín Chamorro; la alianza Unida Nicaragua Triunfa encabezada por el FSLN y la Convergencia Nacional, liderada por Daniel Ortega.

¿Cómo reconocer los intereses que representan estos candidatos y partidos políticos? La tarea se complica por el hecho de que la cultura política nicaragüense nos tiene acostumbrados a las calificaciones o descalificaciones personales en las cuales reina un maniqueísmo bastante primitivo. Hoy por hoy, casi nadie quiere discutir contenidos programáticos o intereses de clase. En el discurso público, todos dicen representar al pueblo nicaragüense y, tomando en cuenta que en todos ellos existen empresarios, productores, profesionales, trabajadores, campesinos, pobladores, se hace difícil clasificarlos por estas razones. Como sabemos, el hecho de que los campesinos o los obreros voten o no por un candidato, no significa que el programa de dicho partido sea a favor de los campesinos o de los obreros, si así fuera todos los gobiernos de derecha o de la oligarquía serían obreristas o campesinistas.

No nos queda, entonces, otra forma, para poder inferir los intereses, que recurrir a las posiciones políticas que se desprenden de sus declaraciones públicas referidas a problemas de la agenda nacional, los programas escritos, incluso las posiciones políticas de las organizaciones que los apoyan o con quienes tienen relaciones. En algunos casos es útil conocer su trayectoria o práctica política actual, a favor o en contra de determinadas políticas, lo que podría ilustrar el grado de consecuencia en la práctica. En estas circuns-

tancias, las relaciones o alineamientos internacionales desempeñan un papel importante a la hora de clasificarlos como más cercanos a la derecha o a la izquierda.

El candidato de la oligarquía –Eduardo Montealegre– encabezó la Alianza Liberal Nicaragüense-Partido Conservador (ALN-PC), representando las políticas macroeconómicas que desde el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro (1990-1995), Arnoldo Alemán (1996-2000) y Enrique Bolaños (2001-2006), se han venido aplicando en Nicaragua. Nos referimos a las políticas neoliberales que solo han beneficiado a los banqueros y a las empresas transnacionales. Entre las organizaciones más cercanas a sus planteamientos se destacan, en primer lugar, el llamado grupo del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), compuesto por capitales identificados claramente con la oligarquía, en segundo lugar se encuentra una parte del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), en tercer lugar el Movimiento Cívico Por Nicaragua de tendencia derechista y pro-imperialista, y en cuarto lugar el Departamento de Estado del gobierno norteamericano.

Representa, pues, claramente, los intereses del gran capital en sus expresiones nacional-regional y transnacional y su programa es nítidamente neoliberal. Sus principales dirigentes han pertenecido a las filas del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y han trabajado en los gobiernos de los últimos dieciséis años, identificados con la corrupción y el empobrecimiento del país; se cuentan además, entre ellos, a los viejos líderes del Partido Conservador.

El candidato a vicepresidente de Eduardo Montealegre, el señor Fabricio Mejía, es un empresario agropecuario, escogido, precisamente, para disputarle al Partido Liberal Constitucionalista (PLC) su clientela entre la burguesía local de reciente acumulación.

El candidato de la burguesía –José Rizo– y del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) representa, tanto los intereses de los grandes productores (José Rizo en particular), como los intereses de nuevos empresarios en proceso de acumulación reciente, una acumulación ligada a las prebendas del Estado (el grupo del ex presidente Arnoldo Alemán). Además del propio partido, lo acompaña una parte del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP). Su discurso es típicamente liberal, y, a pesar de sus recientes contradicciones con el gobierno norteamericano y de sus posiciones antiinjerencistas y antioligárquicas, mantiene una posición ideológica subordinada al mercado y al capitalismo internacional.

El candidato a vicepresidente de José Rizo, el señor José Antonio Alvarado, es, al igual que aquel, un liberal creyente en la economía capitalista de mercado, en la necesidad de la hegemonía norteamericana en la región, así como en la necesidad que tienen los empresarios y los profesionales de vincularse al Estado para poder acumular.

Un candidato marginal –Edén Pastora, el conocido Comandante Cero que encabezó la toma del Palacio Nacional en 1978–, es el del partido Alternativa por el Cambio (AC) y representa los intereses de una clase media en proceso de empobrecimiento e ilusionada por razones institucionales o de la moral política cotidiana, casi siempre connotada por el perfil personal de los candidatos. Enarbolan elementos programáticos conceptualmente relacionados con la democracia liberal, pero con una connotación más independiente del injerencismo norteamericano. Su candidata a vicepresidente, la señora Mercedes Tenorio, pertenece a la clase media (es enfermera).

El candidato de la clase media desempoderada –Edmundo Jarquín, perteneciente al Movimiento de Renovación Sandinista (MRS)–, representa los intereses de esta clase que, independientemente de su situación económica, muestra un desempoderamiento político que debilita sus expectativas económicas. Pesa en este candidato, así como en los principales cuadros que lo acompañan, una gran animadversión ideológica contra sus antiguos compañeros del FSLN, particularmente frente a Daniel Ortega, lo que los ha llevado a acercarse a las posiciones de Eduardo Montealegre (candidato de la oligarquía), de Enrique Bolaños (presidente saliente y representante del neoliberalismo) y del propio gobierno norteamericano, a la vez que algunos de ellos toman distancia de los gobiernos del cubano Fidel Castro y del venezolano Hugo Chávez. La mayor evidencia de esta posición son las declaraciones de sus principales líderes en la convención que los candidatos de la derecha nicaragüense tuvieron durante la campaña en Miami, en las cuales culpan al Frente Sandinista de la pobreza que reina en Nicaragua. Hasta ahora, el principal eje del discurso público ha sido el desconocimiento de lo que llaman el Pacto Institucional, entre las fuerzas políticas mayoritarias del país, el FSLN y el Partido Liberal Constitucionalista (partido mayoritario en la Asamblea Nacional), así como del acomodado nivel de vida de algunos dirigentes del FSLN, lo que es cierto, aunque no menos cierto que en el caso de algunos líderes del MRS. Al igual que las declaraciones de Edén Pastora, ponen sus esperanzas en personas o reformas institucionales, más que en el cambio del sistema. Las organizaciones más cercanas a este movimiento son grupos connotados de la sociedad civil, tales como el Movimiento de Mujeres Autónomas, y algunos notables de la Coordinadora Civil Nicaragüense.

El candidato a presidente, el señor Edmundo Jarquín, ha sido, hasta antes de jubilarse, un funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y es yerno de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro; él mismo proviene de una clase de funcionarios habituados a influir en las instituciones mediante la presencia en los medios de comunicación o gracias a la capacidad intelectual y profesional.

La posición política del Movimiento de Renovación Sandinista, bien podría corresponder a las mismas posiciones de lo que se conoce como la

socialdemocracia latinoamericana, es decir, no una socialdemocracia laboral como la europea que se propone reformar el capitalismo por la vía pacífica y democrática, sino una socialdemocracia que cree que reformando las instituciones del sistema democrático-burgués puede resolver las contradicciones de dicho sistema.

Unos días antes de las elecciones, el líder más progresista de todos ellos, el conocido poeta, Ernesto Cardenal, declaró que era preferible optar por un capitalismo auténtico que por una falsa revolución. El diario de la derecha, *La Prensa*, lo utilizó para que la gente votara por el candidato de la oligarquía financiera, el señor Eduardo Montealegre. De hecho, muchos electores de este movimiento votaron por la derecha para presidente, no así para diputados. Durante la campaña, este movimiento fue financiado y capacitado por el Instituto Republicano Internacional (IRI). En las filas de este movimiento existen compañeros de izquierda reconocida, posición que durante la campaña se vio opacada por el apasionado discurso antidanielista.

El candidato del Frente Sandinista –Daniel Ortega– y de la alianza Unida Nicaragua Triunfa, representa, por un lado, los intereses de lo que podríamos calificar el capital nacional, compuesto por pequeños, medianos y grandes productores, por otro lado los intereses de los trabajadores y pobladores en general. El texto del programa económico es típicamente nacionalista. Sus posiciones políticas de reconciliación denotan una práctica de alianzas conducentes a evitar la polarización de la vida política nacional, única posibilidad de apostar a un proyecto de unidad nacional.

En esta práctica despolarizadora se registran las relaciones con la contrarrevolución, líderes y partidos de la extinta Unión Nacional Opositora (UNO), con la iglesia católica y algunas iglesias evangélicas, con líderes y funcionarios liberales en el seno de los poderes del Estado, y con el movimiento indigenista de la costa Caribe.

Su candidato a vicepresidente, el señor Jaime Morales Carazo, se inserta en esta misma práctica de despolarización y de acercamiento a una burguesía nacionalista y antiinjerencista. El señor Morales, precisamente, proviene no solo de la clase empresarial, sino de las filas liberales de la contrarrevolución antisandinista.

Por otro lado, el FSLN, es el partido que más enlaces tiene con las organizaciones sociales, gremios de pequeños y medianos productores, asociaciones cooperativas, de trabajadores del campo, asociaciones sindicales de trabajadores industriales, de trabajadores por cuenta propia, de pequeños comerciantes, particularmente de los mercados, asociaciones de médicos y enfermeras, asociaciones estudiantiles, de maestros, asociaciones comunales, de mujeres, la Coordinadora Social Nicaragüense, y otros.

A nivel internacional el FSLN mantiene relaciones solidarias con los gobiernos de izquierda de todo el mundo, particularmente de América Latina,

así como con asociaciones internacionales, como la Internacional Socialista, la Internacional Demócrata Cristiana, el Foro de São Paulo, entre otras. Podemos concluir que la posición del FSLN y de la alianza Unida Nicaragua Triunfa, corresponde a una posición nacionalista de izquierda.

A continuación presentamos un esquema donde se sintetizan los candidatos, las alianzas, los intereses y los programas.

Candidatos	Alianzas	Intereses	Programa
Montealegre	ALN-PC	Gran capital	Neoliberal
José Rizo	PLC	Burguesía prebendaria	Liberal-tradicional
Edén Pastora	AC	Clase media empobrecida	Liberal-nacionalista
Edmundo Jarquín	MRS	Clase media excluida políticamente	Socialdemócrata
Daniel Ortega	FLSN	Capital nacional-trabajadores	Izquierda-nacionalista

### La campaña electoral del año 2006

A continuación mencionaremos los ejes y rasgos principales de la campaña electoral, donde resultó vencedor el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Previamente, en estas elecciones y debido a los acuerdos entre las fuerzas liberales y sandinistas, se necesitaba el 40% para alzarse con la victoria, o, en su defecto, el 35%, siempre y cuando el segundo lugar estuviera cinco puntos por debajo del primero. Si ningún candidato lograba estos porcentajes, se debería ir a una segunda vuelta.

*Confrontación versus reconciliación.* Si tuviéramos que caracterizar el contenido simbólico de la campaña, diríamos que esta se dividió en dos tipos de discursos: el de la descalificación y la difamación, por parte de los candidatos de la derecha, contra Daniel Ortega; y el de la bandera de la reconciliación por parte del candidato de la alianza Unida Nicaragua Triunfa, comandante Daniel Ortega. La derecha nos acusaba de mentir al hablar de reconciliación, mientras los disidentes sandinistas nos acusaban de abandonar el principio de las contradicciones y del conflicto, a pesar de los permanentes señalamientos que nosotros hacíamos de que había que reconciliarse en asuntos comunes de la nación, pero mantener los intereses de cada uno y la consecuente posición en medio de cada contradicción.

*Disminución de la polarización.* Esta vez se enfrentaron varias fuerzas políticas, lo que distribuyó las ofensas y descalificaciones. Anteriormente, todos los partidos se unían contra el Frente Sandinista. En 2006, la derecha cometió el error de dividirse, pues pensaba que de todas maneras había que ir a una segunda vuelta. En esta campaña, debido a esa división y a las alianzas del Frente Sandinista, la polarización contra él no tuvo el mismo fruto

para los partidos de la derecha, más bien en ella aparecieron las nuevas contradicciones entre el candidato del neoliberalismo y el candidato liberal.

*Impopularidad del presidente Bolaños y del neoliberalismo.* La impopularidad del presidente Bolaños, ha sido más fuerte que la alcanzada en las campañas anteriores por los respectivos presidentes de aquellos tiempos, en parte por el deterioro del nivel de vida causado por las medidas neoliberales y en parte por la continuidad de la corrupción en los distintos ministerios y entes autónomos. Esto restó posibilidades al candidato del gobierno, el licenciado Eduardo Montealegre, pero no puede decirse que le sirvió a los otros candidatos, pues todos coincidían en la crítica al presidente.

*Debilitamiento del antiinjerencismo norteamericano.* Las campañas anteriores estuvieron marcadas por un fuerte injerencismo del gobierno de los Estados Unidos en contra del sandinismo. En la de 2006 se mantuvo el injerencismo, pero neutralizado por organismos internacionales (OEA, Unión Europea, Bloque Latinoamericano, Internacional Socialista) y por la población nicaragüense. Este hecho ha favorecido al FSLN y desfavorecido a los partidos de la derecha, en particular al candidato del gobierno norteamericano, el señor Eduardo Montealegre. En estas elecciones, el gobierno republicano del señor Bush optó por apoyar al candidato de la oligarquía neoliberal, y presionó, infructuosamente, al candidato liberal para que se le uniera.

*Adiós a las armas.* En las campañas anteriores prevaleció una agenda donde se acusaba al FSLN de la guerra de intervención norteamericana y del Servicio Militar durante los años ochenta. En esta campaña se intentó mantenerla por parte de la derecha, pero no se logró disminuir el voto tradicional sandinista. Las alianzas del Frente Sandinista con las principales fuerzas adversarias de la década del ochenta, hicieron fracasar la campaña alrededor del fantasma de la guerra. Se logró, así, la distensión con la Iglesia Católica, y la alianza con la Asociación de la Resistencia (ARNIG), con líderes y partidos de la Unión Nacional Opositora (UNO) –coalición que aglutinó en su tiempo doña Violeta Chamorro contra el sandinismo–, con la asociación de los indígenas alzados en armas contra la revolución (Yátama) en la costa Caribe, con el Partido de la Resistencia Nicaragüense (PRN) y con el Partido Liberal Nacionalista (PLN) –donde militaron campesinos contrarrevolucionarios y ex guardias nacionales–, y con líderes del Partido Conservador y del Partido Liberal Independiente.

*Ventaja para el FSLN en las encuestas.* Todas las encuestas, sin excepción, concedían una ventaja aproximada de 10 puntos en promedio para el Frente Sandinista. Sin embargo, nadie se atenía a las encuestas, ni siquiera el propio Frente Sandinista. Las ventajas del Frente Sandinista se aducían a los siguientes factores: a) había ganado el segundo lugar en las últimas elecciones presidenciales y el primer lugar en las últimas elecciones municipales, incluso la alcaldía municipal de la capital (Managua); b) ha tenido presencia institucional en todos

los poderes del Estado, con excepción del ejecutivo, así como en las organizaciones sociales y en las universidades; c) la derecha nicaragüense o mejor dicho el discurso contra el Frente Sandinista se mostró dividido en tres partidos políticos, mientras él mantuvo intacta su correlación de fuerzas; d) el Frente Sandinista es el partido que más alianzas estableció durante la campaña con todas las fuerzas nacionales al interior del país; e) la izquierda está ganando las elecciones en muchos países de América Latina; f) la gente está decepcionada de los gobiernos neoliberales que han gobernado Nicaragua en los últimos dieciséis años; g) el principal eje de campaña del Frente Sandinista ha sido la bandera de la reconciliación, en un ambiente donde la gente está cansada de tanta polarización; h) todos los organismos internacionales y embajadas, incluso la de los Estados Unidos, finalmente declararon que si el Frente Sandinista ganaba limpia y transparentemente las elecciones, trabajarían con este gobierno.

*Disputa por la legitimidad del Consejo Supremo Electoral.* En las campañas y elecciones anteriores en las cuales perdió el Frente Sandinista, el mismo Consejo Supremo Electoral que estuvo en esta campaña gozó de suficiente legitimación. Sin embargo, en esta campaña y sobre todo a partir de que todas las encuestas asumían como ganador al Frente Sandinista, la derecha nicaragüense, con el apoyo norteamericano inició una campaña de deslegitimación del Consejo Supremo Electoral, y señaló que si triunfaba el Frente Sandinista o ganaba con poco margen, habría habido fraude. No obstante y debido al apoyo de los observadores nacionales e internacionales (Centro Carter, OEA, Unión Europea, Ética y Transparencia, y el Instituto para el Desarrollo y la Democracia, IPADE), el Consejo Supremo Electoral terminó con una legitimidad fortalecida y generalizada.

*El contexto electoral.* Finalmente, todos los observadores coincidieron en señalar esta elección como una de las más pacíficas y tranquilas de todas las que se han sucedido en Nicaragua, a pesar del lenguaje de descalificación y la agresividad verbal de los partidos de la derecha y de algunos líderes del MRS. En estas elecciones, el universo electoral sumó alrededor de 3,6 millones de electores, al cual hay que restarle un porcentaje significativo (muertos, ausentes del país, voto nulo, no votantes, otros), lo que arroja un universo real votante de 2,3 millones, aproximadamente. La participación real de los electores rondó el 90%, por lo que fue una de las elecciones más participativas de América Latina.

## **El triunfo electoral del FSLN**

Las elecciones fueron ganadas limpiamente por el Frente Sandinista y el triunfo fue reconocido por todos los actores nacionales e internacionales, en un ambiente de fiesta interna por parte de los participantes sandinistas en todo el país. La izquierda latinoamérica también celebra un triunfo más de un partido de izquierda, en este caso en la Nicaragua revolucionaria, encabezado por el mismo líder y por la misma organización.

Con el triunfo del Frente Sandinista se termina el fantasma del pasado, esgrimido por la derecha y el gobierno norteamericano: guerra civil e intervención militar norteamericana, Servicio Militar para los jóvenes, muertos y heridos por doquier, racionamiento, confiscaciones masivas, fuga de capitales, intervención de los medios de comunicación, desabastecimiento de las cosas básicas, autoritarismo gubernamental y social, conculcación de las libertades públicas, genocidio y acusaciones de lesa humanidad, etcétera.

Antes del triunfo electoral, la influencia del Frente Sandinista en la vida nacional y en sus instituciones está presente y con mayor legitimidad que nunca. Muchas de las personas que ocupan espacios institucionales provienen de las filas de la revolución, entre ellos: el ejército y la policía (incluso sus jefes máximos); los diputados al parlamento (también su presidente); el poder judicial, electoral, la fiscalía y la procuraduría; las autoridades universitarias (entre ellas, sus rectores); la mayoría de las organizaciones sociales, gremiales y sindicales (además, sus coordinadores); y la mitad de las radioemisoras del país, al igual que el 40% de los electores en promedio que desde 1984 han votado por el Frente Sandinista, en las elecciones presidenciales y municipales.

En 1990, Daniel Ortega y el FSLN fueron derrotados electoralmente y entregaron el poder ejecutivo a doña Violeta Barrios de Chamorro, a pesar de que controlaban el resto del poder: fuerzas armadas, medios de comunicación, empresas del estado, aparato administrativo, universidades y demás centros públicos de educación, organizaciones sociales, etcétera. Hoy, dieciséis años después, el Frente Sandinista y Daniel Ortega regresan al poder por medio del ejercicio libre del voto en las urnas electorales.

El Frente Sandinista gana con un discurso de reconciliación y de unidad nacional contra la pobreza, contra el neoliberalismo y contra el injerencismo del gobierno norteamericano, contra la corrupción gubernamental, contra el capitalismo salvaje y la especulación de la oligarquía financiera, a favor de la integración latinoamericana, a favor de la producción y de los productores, del bienestar de los trabajadores y de la disminución de los costos de las remesas familiares, a favor de recuperar los servicios públicos del Estado, a favor de la soberanía nacional y de la soberanía alimentaria, a favor de la democracia participativa en todos los niveles, por la distribución del 50% a las mujeres en los altos cargos del Estado, por la transferencia del 10% a los municipios y del 6% a la enseñanza universitaria, y con la promesa de erradicar el hambre y la desnutrición de la mayoría de la población.

ORLANDO NÚÑEZ SOTO, sociólogo nicaragüense, es director del Centro para la Promoción, la Investigación y el Desarrollo Rural y Social (CIPRES).



# Expectativas de la mujer nicaragüense ante el triunfo electoral del Frente Sandinista

MAYRA REYES SANDOVAL

El triunfo electoral del Frente Sandinista el pasado 5 de noviembre en Nicaragua, ha puesto en perspectiva la posibilidad de reconstruir los beneficios sociales despojados a muchos sectores durante dieciséis años de ejercicio de gobiernos neoliberales.

Uno de esos sectores sociales a quienes les ha devuelto un poco la confianza y la esperanza es a las mujeres de este país, ávidas de cambios estructurales y de soluciones a las múltiples demandas que reiteradamente han planteado, conscientes de que construir una sociedad democrática con desarrollo económico, humano y ambiental sostenible, solo es posible lograrlo potenciando su capacidad y haciendo efectiva una igualdad real.

Para las mujeres nicaragüenses, las instituciones del Estado y el gobierno tienen una enorme deuda pendiente en todos los ámbitos de la vida, pues la ausencia de alternativas económicas, sociales y políticas para ellas, desde 1990 hasta la fecha, se ha convertido en un verdadero freno del desarrollo de toda la sociedad.

A pesar de que las mujeres representan más del 50% de la población, el 52% del electorado nacional y aportan el 42% a la economía nicaragüense, devengan salarios cuatro veces menores que los hombres, y tienen enormes obstáculos en el acceso al crédito y a la propiedad.

Se puede afirmar que la confianza y la esperanza les volvió a las mujeres por los antecedentes que tienen archivados en sus memorias de los avances históricos obtenidos en la década de 1980, cuando el Frente Sandinista gobernaba el país.

## **El avance durante la década sandinista**

De acuerdo con un informe de la Asociación de Mujeres Nicaragüenses Luisa Amanda Espinoza (AMNLAE), durante esos años de gobierno sandinista las mujeres participaron en procesos históricos para promover sus derechos. De ahí que en el campo legislativo impulsaron iniciativas jurídicas como la Ley Reguladora de Relaciones Madre, Padre, Hijos, Ley de Alimentos y Unión de Hecho Estable, el Divorcio Unilateral, entre otras.

También hicieron propuestas para la eliminación de la violencia en contra de las mujeres, incluso con medidas y penas en contra de la violación, el estupro, raptó, incesto y lesiones corporales y psicológicas; para la eliminación de los atrasados conceptos de amancebamiento y adulterio que primaban en las leyes; y por primera vez se pudo privilegiar la promoción y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

Propusieron reglamentar la unión de hecho en cuanto a los derechos preferenciales de las mujeres sobre el patrimonio familiar, la eliminación de prácticas de discriminación contra ellas en lo ocupacional, salarial, capacitación y tecnificación, también medidas contra el chantaje sexual de los empleadores y condiciones adecuadas para la salud de las mujeres, entre otros aspectos.

No obstante, aunque en el proceso de transformación jurídica se dieron avances significativos, quedaron todavía vigentes muchas leyes discriminatorias, y aquellas que fueron transformadas tuvieron una aplicación débil porque se interpusieron obstáculos culturales, normas, valores y dificultades económicas, propias de las sociedades tercermundistas.

Sin embargo, millares de mujeres se beneficiaron con la creación de hospitales especializados para su atención, de centros de cuidado infantil rural y urbano para las trabajadoras y se garantizaron los derechos de subsidio prenatal y postnatal.

Según el informe de la organización femenina, a nivel de participación política, las mujeres tenían representación de 31,25% de los cargos de dirección en el Estado, del 30,4% en el Ministerio de Gobernación, incluida una jefa Nacional de la Policía, y el 32% en organizaciones de masas.

Alcanzar estos niveles de participación y mantenerlos, para las mujeres significó muchos esfuerzos porque, a diferencia de los hombres, la mayoría de ellas siguieron asumiendo casi en su totalidad la educación de los hijos y la administración del hogar.

## **Retroceso hasta la actual situación**

Ahora bien, ¿qué ha pasado a partir de 1990? Las medidas neoliberales de ajuste estructural aplicadas por los últimos tres gobiernos han significado la

drástica reducción de la inversión social, y han generado mayor concentración de la riqueza, poder, tecnología y conocimientos de una minoría. Las privatizaciones de los servicios públicos como la energía y las comunicaciones han sido procesos corruptos, en detrimento del país y de la población que se ha visto obligada a pagar tarifas insostenibles por estos servicios, que de por sí son de mala calidad.

La reducción de la inversión económica y social, especialmente en salud y educación, ha contribuido al aumento de las tasas de morbilidad materna, embarazos en adolescentes, hambre y desnutrición, analfabetismo, aumento en la prostitución, drogadicción, tráfico sexual y migración. Por cada 100 000 partos, aproximadamente mueren 200 mujeres. El 80% de la población en situación de pobreza sobrevive con menos de dos dólares al día y 43,5% con menos de un dólar; existe 60% de desempleo y subempleo. El 40% de los hogares más pobres están encabezados por mujeres como resultado de la irresponsabilidad paterna y de la crisis económica y social.

La subvaloración del trabajo femenino se expresa en su contratación como mano de obra barata y en actividades repetitivas (maquilas, servicios), desigualdad salarial y falta de acceso a cargos de dirección, aún cuando las mujeres tengan igual capacitación y rendimiento laboral con respecto a los hombres. A esto se agrega, el no reconocimiento de su trabajo en la esfera doméstica, el cual, en tanto trabajo reproductivo, es fundamental para la reproducción de la fuerza de trabajo.

La violencia contra las mujeres y niñas en Nicaragua es de aproximadamente el 30% a nivel nacional, una de las más altas en América Latina. Durante todo el año 2006 se han reportado más de 40 000 casos, de los cuales el 30% es por violencia sexual, de acuerdo con datos de la Comisaría de la Mujer.

Por otro lado, el sistema educativo nicaragüense no promueve valores de igualdad; por el contrario, la promoción de esos valores son orientados a crear una conciencia colectiva en las niñas y niños de que mujeres y hombres no tienen iguales derechos. Es decir, ha habido un enorme rezago en educación y capacitación.

El muro estructural que han venido construyendo los últimos gobiernos se evidencia en la falta de voluntad política para invertir en las transformaciones políticas, económicas y sociales con igualdad de género; se ha menoscabado el hecho de que más de la mitad de la población la constituyen mujeres. En pocas palabras, las mujeres están excluidas de los principales procesos de tomas de decisiones y participación en todos los órdenes de la vida.

Actualmente, de ciento cincuenta y tres alcaldes solo catorce son mujeres, de doce ministros, únicamente hay dos mujeres, para mencionar algunos ámbitos y cifras.

## Recuperar espacios y avanzar

Entonces, el contraste entre las conquistas de la Revolución Popular Sandinista y el retroceso que han sufrido a partir de 1990 hace que las mujeres confíen en que con el próximo gobierno que presidirá Daniel Ortega podrán canalizar sus propuestas para recuperar lo perdido y avanzar en la toma de espacios de poder en los ámbitos económicos, políticos, laborales, sociales y culturales.

Es decir, las mujeres confían que a partir del 10 de enero próximo, cuando asuma Ortega, se empezará a trabajar activamente en la creación de las bases estructurales para la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, como lo establecen los artículos 27 y 48 de la Constitución Política de Nicaragua.

El artículo 27 de la Carta Magna asegura que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección: «No habrá discriminación por motivos de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social». Y el 48 «establece la igualdad incondicional de todos los nicaragüenses en el goce de sus derechos políticos; en el ejercicio de los mismos y en el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades, existe igualdad absoluta entre el hombre y la mujer».

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), por otra parte, establece en sus estatutos, como uno de sus principios rectores, la equidad entre mujeres y hombres y, para tal efecto, instauró la obligación de elegir en cargos de dirección, en toda su estructura, un porcentaje mínimo del 30% de mujeres, normativa que se aplica desde el año 2002, cuando se realizaron las sesiones Luisa Amanda Espinoza (16 y 17 de marzo de 2002) y Rigoberto López Pérez (4 de mayo de 2002), de su Tercer Congreso Augusto C. Sandino.

Esa misma normativa la ha aplicado el FSLN para los listados de sus candidatos a cargos de elección popular en todos los comicios (nacionales, municipales o regionales), habidos en Nicaragua desde esa fecha.

Pero las mujeres, en este caso las organizadas, están conscientes que la solución a sus problemas y las respuestas a sus demandas no les bajarán del cielo. Por eso, desde mucho antes de las elecciones nicaragüenses y aspirando por un triunfo político opuesto al neoliberalismo, después de innumerables encuentros y asambleas consultivas a lo largo y ancho del país, elaboraron una agenda nacional quinquenal. También otra agenda para la prevención, atención y sanción de la violencia basada en género y una propuesta de reforma a la Ley Electoral para la inclusión del 50% de mujeres en las listas de candidatos a cargos de elección popular.

Por lo pronto, ya las mujeres tienen la promesa del futuro gobernante de que el gabinete de gobierno estará conformado con sentido de equidad. O sea, en los espacios de poder habrá 50% de mujeres. Para ellas, fue significativo que la campaña electoral del Frente Sandinista la dirigiera una mujer: la poetisa Rosario Murillo, futura primera dama del país. Para que esta decisión no quede a discreción de la voluntad del mandatario de turno, un sector organizado de las mujeres ya presentó una propuesta de ley cuyo contenido garantice el 50% de las mujeres en las instituciones.

Lógicamente, avanzar en la igualdad de género es una cuestión de procesos, no ocurre de un día para otro; se requiere de la voluntad política del gobernante y demás dirigentes, así como de la unidad y de las fuerzas organizadas de las mujeres y de todos los actores de la sociedad civil para cumplir las demandas históricas de este sector.

En principio, es de vital importancia la educación y capacitación, no solo para las mujeres, sino también para los hombres, pues en la medida en que ellas se apropien realmente de sus derechos y en que ellos asuman la necesidad de que tengan esos derechos y se incluyan en los procesos de decisión sobre el empoderamiento de las mujeres, ambos se fortalecerán porque habrá mayor igualdad y más aporte a la sociedad.

Nicaragua no podrá avanzar si continúan las condiciones existentes de desigualdad, con la situación de violencia ascendente, con la pobreza que afecta en mayor medida a las mujeres por su posición de desventaja, por la crisis económica y por la irresponsabilidad paterna. Es de sentido común que una sociedad no puede caminar solo con la mitad de la población, de ahí que para desarrollarse con recursos humanos es necesario el establecimiento real de la igualdad.

Construir realmente las bases para promover la igualdad de género en Nicaragua, pasa por rescatar las buenas experiencias y avanzar en la implementación de legislación y políticas públicas como mecanismos de Acción Afirmativa con el propósito de sacar a las mujeres del rezago en que se encuentran.

Una legislación que promueva los derechos de las mujeres en todos los órdenes de la vida; políticas públicas de género que incluyan la ejecución de planes y programas orientados a la promoción del empleo de las mujeres, del acceso al crédito en el campo y la ciudad para que puedan tener sus propios medios de producción.

La falta de voluntad política que ha imperado ha retrasado la aprobación de un proyecto de Ley de Igualdad que se dictaminó por consenso en 2001 en la Asamblea Nacional. En el marco de la nueva coyuntura que se avecina, las mujeres organizadas están dispuestas a levantar sus banderas para lograr sus reivindicaciones contenidas en ese proyecto.

A nivel de los gobiernos locales o municipales tendrá que haber esfuerzos para que las mujeres participen en todos los procesos de elaboración de los presupuestos con perspectiva de género, para que se dispongan de recursos, ya sean colectivos o especiales, dirigidos a mejorar su calidad de vida, tanto de ellas como de sus familias.

También los partidos políticos, particularmente los más comprometidos como el Frente Sandinista, tienen que profundizar mecanismos internos de educación para la transformación de valores, la adquisición de compromisos internos por parte de los hombres y las mujeres, y la formación de estructuras que les permitan a ambos discutir a fondo el tema de género.

Dicho de otra forma, es de vital importancia que no se continúe viendo a las mujeres como un tema marginal, que solamente se les toma en cuenta a la hora de los procesos electorales como votantes, sino que realmente se les tome en cuenta de manera integral.

De acuerdo con el informe final de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, presentado días después de las elecciones, «las mujeres siguen participando de forma limitada en algunas áreas del proceso electoral, pese a estar bien representadas en los niveles inferiores de la administración electoral».

Igualmente, el informe refleja que en relación con la participación femenina «el porcentaje de candidatas en estas elecciones es significativamente menos que el porcentaje de votantes inscritas (50,4%). Entre los diez candidatos presidenciales y sus fórmulas tan solo hay una mujer como candidata a la vicepresidencia. El porcentaje de candidatas a la Asamblea Nacional es del 23%, idéntico porcentaje al de mujeres en la Asamblea Nacional saliente. No obstante, la posición desventajosa de las mujeres en las listas de candidatos de los partidos, en comparación con elecciones anteriores, llevará a un número menor de candidatas electas».

Ampliando más la situación política de las mujeres, la Unión Europea plantea que «en cuanto al Consejo Supremo Electoral, tan solo hay una mujer con el cargo de magistrada suplente. La representación femenina se incrementa en los niveles inferiores de la administración electoral, con el 20% a nivel departamental, el 40% a nivel municipal y algo más del 67% en las Juntas Receptoras de Votos».

El informe de la Unión Europea no estaba alejado de la realidad, pues los resultados electorales reflejan que en el nuevo plenario de la Asamblea Nacional, según el informe de resultados finales del Consejo Supremo Electoral, habrá dieciocho legisladoras propietarias; es la Alianza FSLN la fuerza política con mayor número, al contar con trece diputadas propietarias. De los treinta y ocho diputados propietarios del Frente Sandinista, las trece diputadas electas representan casi el 32% de la bancada sandinista y más

del 13% del próximo plenario. Mientras las dos electas por el Partido Liberal Constitucionalista significan el 2,22%, otro tanto igual para las dos electas por la Alianza Liberal Nicaragüense, y el 1,11% para la legisladora en la casilla del Movimiento de Renovación Sandinista.

La sociedad nicaragüense no puede darse el lujo de continuar con situaciones de desigualdad, porque afectan su desarrollo integral que tiene que ver con valores de solidaridad, de igualdad, de respeto mutuo.

La vida de las mujeres ha sido luchar siempre para lograr cada uno de sus derechos. Ahora la esperanza es ver materializado un plan de gobierno que plantea inversión en la producción, la igualdad entre hombres y mujeres, transformaciones en la economía, inversión en la salud y en la educación, entre otros aspectos. Las propuestas del nuevo gobierno son esperanzadoras para que Nicaragua despegue en el orden político, económico, social y cultural con igualdad y equidad.

### **Demandas de las mujeres nicaragüenses**

En principio, las mujeres demandan al Estado que asuma con responsabilidad los compromisos tendentes a cambiar la situación de pobreza de la población y la injusta desigualdad de las mujeres, por lo que proponen que se cumpla con las agendas y propuestas presentadas por las mujeres organizadas en conjunto con diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil, especialmente en lo referido a:

- el diseño de políticas económicas y sociales que tengan como uno de sus ejes fundamentales, el desarrollo social y que al mismo tiempo tomen en cuenta las diferencias de género y generacionales, por lo que la condicionalidad de los programas de ajuste estructural que interfieren con la adopción de este tipo de políticas tienen que ser revisados;
- la reorientación de los recursos públicos provenientes de la Iniciativa de Países Altamente Endeudados (HIPC), deuda interna y externa, para elaborar presupuestos públicos con perspectiva de género dirigidos a reducir la pobreza y mejorar la situación de las mujeres, jóvenes y adolescentes;
- leyes y políticas vigentes favorables al adelanto de las mujeres y la aprobación de una nueva legislación como una Ley de Igualdad Real, el Código de Familia, entre otros;
- la participación y representación de las mujeres de acuerdo con su peso poblacional en los procesos de toma de decisiones a nivel local y nacional, y la efectiva propuesta de Reforma a la Ley Electoral para incluir el 50% de mujeres como mínimo en las listas electorales;
- el cumplimiento con los convenios y acuerdos internacionales suscritos por el Estado de Nicaragua para el adelanto de las mujeres;

- la creación y funcionamiento de los Consejos de Género en las instituciones del Estado, incluso en los gobiernos municipales y regionales.

Otras demandas puntuales:

- construcción, equipamiento y funcionamiento de tres hospitales de la mujer;
- creación de unidades de cuidado, educación y recreación de los hijos de las trabajadoras de zonas francas;
- reacondicionamiento y modernización del Hospital Berta Calderón;
- equipamiento, abastecimiento y dotación de personal especializado en los centros de salud para la atención primaria, con especial énfasis en niñez y mujeres;
- apoyo a la pequeña producción autoalimentaria y autosostenible;
- banco de tierras que priorice la titulación a favor de las mujeres; con pagos a largo plazo y bajos intereses;
- acceso al crédito para capital de trabajo, para actividades agropecuarias, comerciales, industriales, etcétera, para inversión fija, infraestructura y equipos;
- creación de pequeñas empresas urbanas y rurales, con períodos de gracia en el crédito y la habilitación;
- asistencia técnica especializada y personalizada, que apoye a las mujeres en la elaboración de planes de negocio, y en los seguimientos de los planes de inversión para elevar a la productividad, valor agregado para brindar a la inversión, de cara al mercado, bajo los criterios de protección del medio ambiente y los recursos naturales;
- establecimiento de mecanismos que aseguren el salario mínimo en el campo, en igualdad para mujeres y hombres trabajadores agrícolas;
- realización efectiva de la cobertura del seguro social para las trabajadoras del campo y la ciudad;
- concesión de bonos productivos, con el enfoque de manejo integral de parcelas y las pequeñas fincas, para solucionar la seguridad alimentaria;
- instalación de letrinas y agua potable en las 10 721 escuelas rurales;
- organización de un programa especial para incorporar al sistema educativo el 40% de niños y niñas rurales menores de diez años que no saben leer ni escribir;
- recuperación e integración al sistema educativo de los 8 000 niños y jóvenes que actualmente quedan cada año fuera de la educación formal;
- elevación general de la calidad de la educación;



40 • Contexto Latinoamericano

- cobertura para el 70% de niños y niñas en edad preescolar que hoy no están incorporados;
- oficinas de atención a los problemas de los emigrantes nicaragüenses, tanto en Nicaragua como en el exterior.

MAYRA REYES SANDOVAL es periodista y directora fundadora del semanario *Visión Sandinista*.

b i b l i o t e c a  
**marxista**



Si Carlos Marx no fue “marxista” y fue un “intelectual comprometido”, entonces la divisa que seguía debería ser tomada como doctrina: “temo al hombre de un solo libro”.

Esta colección, más que un repertorio de textos, consiste en una pretensión: la de contribuir a restaurar la diversidad y complejidad propia de la reflexión marxista.

Sin embargo, más que una aspiración, formula una política: la exigencia de realizar tanto la crítica del orden capitalista como la del campo de tensiones existente entre la enunciación del *proyecto revolucionario* y la consecución de cualquier *poder revolucionario*.

En este horizonte, el marxismo es un pensamiento sobre la libertad. Por ello, es una política de la libertad.

Sin sectarismos, “contra los dogmas propios y ajenos”, estos libros recorren el camino de la insurrección contra todas las dominaciones. Es una forma de pensar hoy la Revolución. Otra forma de contribuir a hacerla posible.

Coordinador de la colección: Julio César Guanche

# El triunfo de Rafael Correa en el Ecuador

GERMÁN RODAS

## Introducción

Una vez más los ecuatorianos, en su amplia mayoría, hemos votado por la renovación en el manejo del gobierno. Y digo una vez más, porque los resultados electorales de los últimos diez años han sido la expresión de una voluntad de cambio en el país, a partir de haber posibilitado el triunfo de propuestas electorales progresistas que, a contrapelo, devinieron en regímenes que traicionaron –por causas diversas y perspectivas estratégicas distintas–, los intereses de importantes sectores sociales de la colectividad ecuatoriana y las iniciativas políticas de sectores democráticos.

La situación referida ha provocado, en el conjunto de la población, la búsqueda de alternativas a la creciente situación de pobreza, marginalidad, injusticia e inequidad. El discurso para superar los conflictos sociales se ha constituido, de esta manera, en un denominador común que, asimismo, ha sido aprovechado aun por los grupos causantes de tal crisis en el Ecuador.

Empero, los ecuatorianos –en más de una oportunidad calibrando la ubicación electoral de los partidos de centro e izquierda y atendiendo la convocatoria de los más importantes sectores sociales– han acudido a respaldar proyectos político-electorales de sustitución al modelo prevaleciente.

No obstante la referencia precedente, la realidad de los acontecimientos ha sido otra pues los últimos gobiernos –nacidos al calor de supuestos cambios–, al poco tiempo de su mandato, han actuado en la línea de secundar el modelo económico prevaleciente, esto es, formando parte del engranaje que apuntala la globalización del neoliberalismo, que favorece la presencia de grupos criollos ensartados con la transnacionalización de la economía, y que para el control de nuestras sociedades no han escatimado esfuerzos,

incluso atentar contra la diversidad social y étnica del país, todo lo cual ha dejado inamovible las causas estructurales que configuran la crisis ecuatoriana.

El triunfo de Rafael Correa se inserta, pues, una vez más, en la voluntad nacional de sustituir el modelo económico y social vigentes, pero, además, expresa, en esta oportunidad, la búsqueda de alternativas en la configuración del esquema político de los últimos veinticinco años a propósito del cuestionamiento al sistema que se constituyera en los momentos del llamado retorno al orden constitucional, esto es luego de la etapa de dictaduras que viviera el Ecuador en la década de 1970.

Ciertamente, aspiramos a que el cambio sea posible y que el régimen responda al reto histórico que se ha trazado, a las expectativas que ha generado en el marco del cumplimiento de su oferta electoral y debido a las coaliciones sociales y políticas que por la sustitución del modelo se agruparon durante el último proceso electoral ecuatoriano.

En todo caso, para poseer una aproximación más rigurosa sobre el carácter del régimen de Correa, es menester que revisemos, brevemente, los antecedentes fundamentales para la aparición de este proyecto que pretende sumarse a aquello que se ha denominado «vientos de cambio en América Latina».

### **Antecedentes históricos a las elecciones que dieron el triunfo a Correa**

El advenimiento del régimen de Abdalá Bucaram –que se extendió desde el 10 de agosto de 1996 hasta el 6 de febrero de 1997–, luego de varios regímenes institucionales que no fueron capaces de propiciar cambios fundamentales en el Ecuador, expresó la búsqueda de mayor equidad entre los ecuatorianos en medio de un discurso populista que respondió, hábilmente, a la demanda social para que se atendiera la creciente depauperación de los ecuatorianos.

Bucaram, además, rompió con algunos esquemas institucionales del ejercicio del gobierno e intentó desarrollar una política económica diferente a la que había puesto hasta entonces en marcha la derecha económica del Ecuador. Fue, en ese entorno, que, también, la ruptura con la «estética del poder»<sup>1</sup> propició uno de los pretextos para defenestrarlo y hacerse del go-

<sup>1</sup> El comportamiento presidencial fuera de las reglas protocolarias, al margen de la llamada exquisitez de normas y a propósito de su acercamiento a las formas y costumbres de los sectores populares del país, provocó una orquestada reacción contraria desde los tradicionales grupos dominantes, asunto que fue utilizado, adicionalmente entre otros pretextos, para defenestrar a Bucaram quien, en lo de fondo, no fue lo suficientemente dócil a las perspectivas políticas, económicas y sociales de la derecha ecuatoriana, sin que su conducta en el manejo del gobierno, por otra parte, tampoco estuviera en el límite de la ruptura con el sistema predominante.

bierno, nuevamente, la oligarquía tradicional, usando para el efecto la figura del entonces presidente del Congreso Nacional, Fabián Alarcón, quien gobernó al país hasta agosto de 1998 al servicio de los intereses de la derecha ecuatoriana y de manera particular del grupo de León Febres Cordero.<sup>2</sup>

Luego del régimen de Alarcón, llegaría al poder Yamil Mahuad quien promovió una serie de ofertas electorales alrededor de su aparente conocimiento del país y de los conflictos del mismo. Los ecuatorianos volvieron a votar por el cambio, pero nunca sospecharon que Mahuad se había hipotecado desde el comienzo a los grupos económicos más corruptos, especialmente de los banqueros, los mismos que para entonces ya se hallaban al borde de la crisis debido a la utilización de los recursos económicos de los clientes en inversiones diversas, como las productivas, que se desplomaron, por ejemplo, a causa de la presencia de fenómenos naturales que destruyeron por completo tal actividad y liquidaron las inversiones económicas arriesgadas en ella.

Para favorecer a los sectores de la banca, Mahuad provocó la dolarización de la economía nacional, con lo cual causó un estado de crisis nunca antes registrado en la economía popular. A ello súmese su comportamiento de sometimiento total a los intereses de la geopolítica norteamericana –expresado ello en la concesión de la base de Manta a los EE. UU.–, al extremo de que su conducta de arreglo limítrofe con el Perú, llevó implícita la movilización de tropas militares a la frontera norte en el entorno de la estrategia del Plan Colombia diseñado por el propio gobierno norteamericano.

Por las razones expuestas, entre otras, el descontento social fue enorme –tanto que podía arribarse a una situación de crisis del poder real y de los intereses económicos y políticos del orden establecido–, y por ello cuando el coronel Lucio Gutiérrez aparentó, en enero de 2000, un alzamiento en nombre del pueblo para defenestrar a Mahuad, contó con el apoyo de amplios sectores sociales, especialmente indígenas, para tal cometido.

La insubordinación de varios mandos militares y la movilización popular dieron al traste con el gobierno de Mahuad y originaron su reemplazo por el entonces vicepresidente Gustavo Noboa, quien gobernó hasta la culminación del período para el que fue electo Mahuad, esto es hasta 2002.

Lucio Gutiérrez tuvo la posibilidad de hacerse del poder en el año 2000, pero inexplicablemente dejó pasar aquella oportunidad y, por el contrario, entregó el gobierno a los mismos círculos políticos de siempre, por ello queda la duda si en efecto la revuelta del 20 de enero de 2000 fue un evento prepa-

<sup>2</sup> Febres Cordero fue presidente del Ecuador, bajo la bandera del Partido Social Cristiano, entre 1984 y 1988. Su gobierno de derecha fue uno de los más represivos en la historia del país y su proyecto económico respondió a los intereses de las transnacionales y a las expectativas de su entorno político y social. Luego de haber concluido su mandato, Febres Cordero ha manejado tras bastidores importantes negocios del Estado y su fortaleza electoral ha sido un instrumento para chantajear a los regímenes de turno.

rado desde la contrainsurgencia, con absoluta sincronización, aprovechando las buenas intenciones del movimiento indígena y la movilización que este había fraguado con la anuencia de importantes sectores de militares, o si las «novatadas» del coronel Gutiérrez en efecto se perpetraron en el marco de la carencia de un proyecto político que tan solo comenzó a gestarse posteriormente y una vez que Gutiérrez asumió una imagen trascendente a consecuencia de la inicial prisión de la que fue objeto y, luego, debido a la amnistía que recibió por parte del Congreso Nacional.

A partir de los acontecimientos señalados, Gutiérrez proyectó una imagen política importante que le permitió fundar el Partido Sociedad Patriótica y participar en las elecciones de 2002, como candidato de una alianza con un sector importante del movimiento indígena, expresado en el frente político Pachakutik (PK), y con el apoyo del Movimiento Popular Democrático (MPD), fuerza política que a su vez es la expresión al interior de la institucionalidad del Partido Comunista Marxista Leninista, además del apoyo del otro sector comunista denominado Partido Comunista del Ecuador.

Esta fue la alianza política que habría de triunfar y que en el Congreso Nacional tendría una importante representación. Valga decir, en todo caso, que Gutiérrez no ganó en la primera vuelta electoral, debido a lo cual para la segunda vuelta recogió otros apoyos de partidos de centro y de izquierda que con su adhesión al coronel buscaron impedir el triunfo del otro finalista, Álvaro Noboa, representante de la más rancia derecha política y económica ecuatoriana.

De esta forma, Gutiérrez se posesionó en enero de 2003 como nuevo presidente del Ecuador.

De inmediato, Gutiérrez se descubrió como un presidente enmascarado en la izquierda –¿tal enmascaramiento tuvo la finalidad de adscribir a la izquierda política y social en el entorno de sus propósitos políticos para desgastarla hacia el futuro?–, y quien, para ejercer el gobierno, no tuvo reparos en favorecer a diversos grupos de presión del país que, además, se disputaban su control.

Debido a todas estas incoherencias, se produjo la ruptura del MPD con el régimen, no así PK que hasta el final hizo esfuerzos para mantenerse en las esferas del poder y, al mismo tiempo, esgrimir un discurso de confrontación con el régimen sobre asuntos que, en el fondo de las cosas, no han constituido los problemas fundamentales del país. Tal confrontación devino, al final, en una separación abierta entre el gobierno y sus partidos aliados –y con los sectores sociales–. Frente a esta realidad, Gutiérrez intentó buscar nuevas alianzas, lo cual lo condujo a una conducta pendular entre las fuerzas de la derecha tradicional y las del populismo, asunto que más bien expresó los intentos de control de las diversas instancias del Estado y de las variadas fracciones de la burguesía para, fundamentalmente, por un lado,

asegurarse la cobertura de los negocios petroleros, y por otro, propiciar el reordenamiento de las fuerzas políticas en la perspectiva del venidero proceso electoral.

Esta conducta desgastó los diversos sectores políticos representados en el Congreso Nacional, lo cual, sumado a la «traición de Gutiérrez», indujo a que sectores sociales importantes, en especial de Quito, propiciaran la salida del mandatario –en marzo de 2005–, juego en el cual se agazapó la extrema derecha que, una vez más, gobernaría mediante la sustitución presidencial. Empero, detrás de todas estas escaramuzas, el orden político quedó gravemente afectado, la representatividad partidaria cuestionada en extremo, y el descontento social represado en medio de la imposibilidad del nuevo mandatario, Alfredo Palacio, para responder a las expectativas ciudadanas con las cuales se había comprometido.

Palacio, en todo caso, como una forma de aquietar los ánimos, designó en su gabinete a varias figuras vinculadas al movimiento quiteño que propició la salida de Gutiérrez. Entre ellas estuvo Rafael Correa, quien ejerció el Ministerio de Economía y desde el cual levantó un discurso contrario a los intereses de la banca acreedora, de los organismos multinacionales y de los beneficiarios, estructuralmente hablando, de la crisis económica del país. Su postura política fue, al mismo tiempo, la causa de su separación del Ministerio que había estado a su cargo; paralelo a esta circunstancia, inició la campaña electoral que habría de llevarle al gobierno en noviembre de 2006.

### **Rafael Correa, sus aliados, la propuesta de campaña y el triunfo presidencial**

Después de la separación de Correa del Ministerio de Economía, convergieron diversos sectores –muchos de ellos con antecedentes en las filas políticas de la izquierda nacional–, para impulsar su figura como una alternativa electoral. Dichas agrupaciones provinieron, además, de los grupos que fueron bautizados como «forajidos»<sup>3</sup> en las jornadas que se pusieron en marcha, particularmente en la ciudad de Quito, para destituir al coronel Gutiérrez y que, según su visión, tampoco fueron escuchados en sus aspiraciones políticas fundamentales por el presidente que reemplazara a Gutiérrez, quien no llevó a consulta popular varias de las propuestas para sustituir el modelo político vigente, conforme se había comprometido.

Los «forajidos», afincados en Quito, constituyeron la expresión de núcleos juveniles, profesionales, ex dirigentes políticos de izquierda, que demandaron en las jornadas de marzo de 2005 no solo la salida del coronel

<sup>3</sup> Lucio Gutiérrez calificó de forajidos a los grupos ciudadanos que en las noches previas a su destitución se reunían en Quito para expresar su rechazo al régimen.

Gutiérrez, sino también la disolución del Congreso Nacional, a más de la Corte Suprema y de otros organismos de control del Estado que habían sido configurados bajo el dominio de ciertos partidos políticos<sup>4</sup> que, en efecto, han hecho de estos espacios la forma más idónea para proteger sus intereses, especialmente económicos.

Empero, «los forajidos» no hicieron distinción alguna en referencia a los partidos políticos y favorecieron una campaña en contra de todas las agrupaciones políticas, incluidas las de izquierda, llevándolas a un desprestigio colectivo en medio de argumentaciones que establecieron que la crisis del país estaba vinculada a la presencia de la «partidocracia» en los últimos veinticinco años, esto es desde el retorno a la democracia, luego de las dictaduras de la década de 1970.

La argumentación anterior fue complementada con la insistencia en la necesidad de convocar una Asamblea Constituyente que redactara una nueva Constitución y que respondiera a los requerimientos de los diversos sectores de la sociedad ecuatoriana. Para que esa Asamblea pudiese cumplir con sus aspiraciones, estaría constituida por miembros provenientes de la ciudadanía y no de los partidos políticos.

Con la opinión referida se identificó Correa quien señaló, desde un inicio, la necesidad de plantearse un reordenamiento político, asunto que le permitió ampliar el espectro de alianzas, en particular con grupos sociales organizados provenientes del campo y la ciudad –aunque muchos de ellos notoriamente pequeños– y constituir lo que se denominaría Alianza País.

En este entorno fue creciendo la figura electoral de Rafael Correa, mientras en otros sectores políticos que podrían haber sido afines a su discurso también se debatía sobre la oportunidad de su apoyo o no a tal precandidatura presidencial. Así, los sectores del Movimiento Popular Democrático, expresaron desde un primer momento sus discrepancias con Alianza País, en especial debido a los señalamientos que efectuara el MPD en relación con que el candidato Correa no respondía a una orientación de izquierda, toda vez, afirmaban, que su trayectoria política había estado vinculada al mundo de la «tecnocracia» antes que al de la lucha social. Estos razonamientos y la siempre hegemónica postura del MPD para favorecer sus participaciones electorales determinaron, al final, que presentara candidaturas propias.

Bajo esta misma visión y debido a los conflictos internos de Pachakutik, esta importante expresión del movimiento indígena nacional optó por arriesgarse a favor de una candidatura propia, no obstante el interés que la candidatura de Correa había despertado en algunas de sus filas. Esta determinación electoral de PK estuvo atravesada, además, por disputas internas

<sup>4</sup> Partidos políticos identificados esencialmente con la derecha económica y política del país.



entre fracciones que pretendieron que PK fuese un movimiento plurinacional y aquellos sectores que enraizaron en sus percepciones la necesidad de una lucha que expresara, particularmente, los intereses indígenas, lo cual devino en momentos específicos en el surgimiento de conductas etnocéntricas.

Pero además de los factores señalados, valga hacer una digresión para decir que la existencia de un cuerpo legal y reglamentario vinculado a la vida de los partidos se ha constituido históricamente en un impedimento para favorecer la unidad de los sectores democráticos y de izquierda de la vida política ecuatoriana. El Estado, luego de las dictaduras, configuró, en efecto, un sistema que ha exigido que para que los partidos tengan registro electoral –y por ende puedan tener vigencia legal y apoyo económico estatal–, deben cumplir con el requisito de una votación no menor al 5% respecto del padrón votante.

El factor referido, entre los partidos de izquierda, hipotecó, en más de una oportunidad, los afanes unitarios, pues exigió que estos partidos políticos optaran electoralmente por caminos propios para alcanzar el porcentaje de supervivencia, y dejaran de lado las expectativas históricas de la unidad o de la flexibilidad para los acuerdos políticos electorales. En estas elecciones, también afloró esa dramática situación, sin que esta circunstancia –en todo caso–, haya sido un factor decisivo en las definiciones electorales de la tendencia.

Mientras maduraba la posibilidad de la candidatura de Correa, otra alternativa, que al inicio transitó por los caminos del Partido Socialista Ecuatoriano,<sup>5</sup> la de León Roldós, fue diluyéndose paulatinamente debido a las distancias que este puso con el Partido Socialista, asunto que se volvió insalvable cuando Roldós precipitó la circunstancia de que su candidatura presidencial recibiera el apoyo de la Izquierda Democrática,<sup>6</sup> lo cual le dejó sin piso para cualquier alianza con sectores sociales y políticos vinculados con la izquierda ecuatoriana.

<sup>5</sup> León Roldós estuvo afiliado al Partido Socialista Ecuatoriano desde finales de la década del ochenta y fue candidato presidencial por tal agrupación en 1992. En el proceso electoral del año 2002, participó como candidato presidencial de una alianza ciudadana amplia con el apoyo del PSE. Luego de su derrota constituyó un frente político propio –Red Ética y Ciudadana–, que le postularía, una vez más, en 2006. Todos estos comportamientos fueron definiendo una separación política paulatina entre el Partido Socialista y León Roldós.

<sup>6</sup> La Izquierda Democrática (ID), en el último período, había optado por una política de coincidencias con el Partido Social Cristiano, asunto que definió en el argot político como la existencia del Febres-Borjismo (en alusión a sus líderes), realidad esta que desprestigió a la ID que hasta entonces había proclamado su definición ideológica alrededor de la social democracia, lo cual quedó claramente demostrado que no era cierto y que sus aproximaciones con el PSC estaban favorecidas por la existencia de coincidencias políticas y la articulación de negocios, especialmente petroleros, conjuntos.

La relación de estos sucesos, precipitó la resolución orgánica del Partido Socialista-Frente Amplio, para que esta agrupación diera su apoyo electoral a Rafael Correa e iniciase con él un diálogo, a fin de establecer los niveles del acuerdo que fue definido en el mes de junio de 2006, luego de una serie de conversaciones referentes a las propuestas programática y política, así como a las características en la configuración de las listas para diputados, concejales y consejeros que debían elegirse en octubre del mismo año.

Paralelamente a estas conversaciones, Alianza País había avanzado, por su parte, en un proceso interno de organización que, asimismo, le había permitido configurar una estructura inicial en muchas de las provincias del Ecuador.

El acuerdo electoral entre Alianza País y el Partido Socialista fue un factor de resorte importante en el lanzamiento de la candidatura de Rafael Correa que si bien no logró el apoyo de otros partidos de izquierda, obtuvo un perfil político claramente identificado con tal tendencia, tanto más que la formulación del discurso de campaña por parte del candidato se constituyó en una crítica a las condiciones de vida de la población mayoritaria del país, esto es a los índices alarmantes de desempleo, desnutrición, pobreza y pobreza extrema y, en este contexto, a la identificación –al menos en términos generales–, de los causantes de tal situación, más allá de que los organismos internacionales fueron señalados como corresponsables, también, de la circunstancia aludida.

Más aún, Correa contrarió las determinaciones económicas y políticas norteamericanas referentes a sus intereses en el país cuando, por ejemplo, el precandidato impulsó el pronunciamiento nacional de la salida del Ecuador de la empresa petrolera norteamericana Oxy que había incumplido varias obligaciones contractuales, así como cuando fustigó la inconveniencia de la presencia de la base militar norteamericana en Manta.

Frente a la realidad descrita, Correa abogó por el cambio de la situación prevaleciente, agudizada, como tantas veces lo había afirmado –y conforme la visión del «forajidismo» que alimentó parte de la estructura de Alianza País–, debido a la corrupción de la «partidocracia» que, entonces, apareció como la causante fundamental de la crisis y como la responsable de haber permitido y promovido todo tipo de corruptelas.

Tal argumentación incidió, notablemente, para que Rafael Correa, a pocas horas de inscribir las candidaturas, se opusiera a la presentación de listas conjuntas con el Partido Socialista, pues Correa sostuvo que no era posible participar con listas para la conformación del Congreso Nacional debido a que tal institución debía ser reemplazada, en la brevedad, por la Constituyente. Esta actitud, además, obtuvo un golpe de efecto electoral que a estas alturas no puede discutirse, más allá de la pertinencia o no de la decisión adoptada.

Así las cosas, la Alianza tan solo participó, como tal, en las listas de concejales y consejeros<sup>7</sup> –es decir, de las autoridades seccionales o de poder local–, mientras el Partido Socialista se avocó a presentar, independientemente, las candidaturas para diputados ante el Congreso Nacional, no solo por la necesidad de llegar al porcentaje indispensable de supervivencia, sino bajo la motivación que desde el propio Congreso había que impulsar los objetivos estratégicos de la Alianza, tanto más que la Constitución vigente advierte de un procedimiento específico para facilitar las reformas constitucionales y para llevar a consulta popular las iniciativas del presidente de la República.

La determinación asumida por Correa, de no participar en las elecciones de diputados, no fue compartida por muchos de sus aliados en Alianza País y, obviamente, fue asumida de manera unilateral frente a las argumentaciones en contrario dadas por el Partido Socialista Ecuatoriano. Vistas las cosas luego del proceso electoral, la no participación en la lista de diputados por parte de Alianza País deja un tufo de inconformidad, pues si bien tal decisión tuvo, como queda dicho, un efecto electoral importante, constituyó en sí un error porque ahora en el Congreso no posee el nuevo gobierno una fuerza que pueda impulsar, conforme la Constitución vigente, las estrategias presidenciales y socavar las argumentaciones de una mayoría de ochenta diputados –de los cien–, que intentan frenar los objetivos del actual régimen, en medio de una confrontación sin precedentes que, a estas alturas, no puede ser eludida.

El proceso electoral, en la primera vuelta, definió de manera rápida el carácter del mensaje que asumiría el candidato presidencial Correa, discurso que evidenció su percepción sobre la realidad política del país y, también, su estrategia en el mediano plazo.

En efecto, Correa –quien en la difusión de su propuesta y en el desarrollo de la campaña utilizó tan solo el número 35 para proyectar su mensaje–, impulsó con fuerza el cuestionamiento al sistema político y a sus instituciones. Fustigó al Congreso Nacional y a sus actividades y, por lo tanto, criticó el comportamiento de los partidos políticos a quienes se les endosó la causa de toda la crisis del Ecuador.

<sup>7</sup> El número asignado a Alianza País por parte del organismo electoral correspondió al 35 y le fue entregado una vez que se lo registrara como movimiento político y luego que fueran aprobados sus documentos correspondientes a la definición de principios, línea política y programa de gobierno, además de constatar el apoyo firmado de ciudadanos a la nueva agrupación política en un porcentaje que exigía el respaldo de no menos de cien mil firmas. El Partido Socialista, por su parte, tenía registrado ante el Tribunal Supremo Electoral el número 17, de tal suerte que la alianza se presentaría, conforme el acuerdo político previo, como 17-35, asunto que se invirtió en el último momento –en las circunstancias mismas de la inscripción electoral–, debido a lo cual las listas conjuntas se inscribieron como 35-17.

Hallándose fresca en la memoria de los electores los desaciertos del Congreso Nacional, a propósito del régimen de Lucio Gutiérrez, el mensaje caló fácilmente en la ciudadanía y, al menos en la primera vuelta electoral, fue un elemento de convocatoria importante para votar por el binomio Correa-Moreno,<sup>8</sup> tanto más que Correa determinó la necesidad de sustituir al Congreso Nacional por una Asamblea Constituyente que se reuniría, al triunfo de Alianza País, para redactar una nueva Constitución que diera cuenta de las aspiraciones del pueblo. Tal Asamblea Constituyente estaría conformada por los más importantes sectores de la comunidad y por figuras trascendentes de la vida nacional, poniendo al margen, casi en su totalidad, a los representantes de los partidos políticos.

Con las propuestas políticas referidas, Correa llegó a la segunda vuelta electoral, aunque lo hizo en segundo lugar, respecto de la otra candidatura, la de Álvaro Noboa Pontón, quien también clasificó con una importante votación para la definición que habría de ocurrir el 26 de noviembre de 2006.

Rafael Correa logró que su mensaje de cambio calara en el electorado, que sus cuestionamientos al sistema de injusticia fuesen interpretados con la aprehensión de una postura de izquierda y que su entusiasmo respecto de otras realidades políticas latinoamericanas –como las de Venezuela, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil–, fuesen entendidas como una identificación con los procesos de cambio que viven dichos países.

Además, las otras candidaturas del centro izquierda –como las del MPD, PK e incluso la Izquierda Democrática–, fueron arrastradas al debate que en lo político planteó Correa cuando destacó la necesidad de avanzar en reformas políticas sustantivas y toda vez que sus críticas también salpicaron a las candidaturas presidenciales señaladas habida cuenta que el MPD y PK habían formado parte del régimen de Gutiérrez, en tanto la ID, que ya ejerció la presidencia entre 1988 y 1992, debido a sus alianzas con el Partido Social Cristiano, quedó sumergida en el mismo entorno de los partidos tradicionales que habían gobernado y fracasado, más allá de que tal agrupación política presentara el nombre de León Roldós para impulsar su proyecto.

En este contexto, la candidatura de Noboa –independientemente de que hubo otras candidaturas de derecha y del populismo–, debido a los cuantiosos recursos usados en la campaña, obtuvo una alta votación proveniente, además, del mensaje práctico electoral que formulara el candidato y que se refirió, en lo fundamental, a proponer soluciones a la situación de

<sup>8</sup> El candidato a la vicepresidencia de la República fue escogido por el propio Correa en la figura de un profesional y pequeño empresario que, además, es parapléjico. Su nombre es Lenin Moreno, sin antecedentes políticos y con una concepción de la vida favorable a la superación y al mundo de la subjetividad humana, a propósito de su condición física, superada con estoicismo y voluntad férreas.

crisis económica y social de la población mediante ofertas –muchas de ellas demagógicas–, cuya característica, en todo caso, fue atender el conflicto y el drama que a diario vive la población ecuatoriana. La votación alta de Noboa se tradujo, además, en el importante número de diputados que logró para el Congreso Nacional; se constituyó en la primera fuerza electoral del país y desplazó a Febres Cordero y sus muchachos de las ubicaciones primigenias que habían logrado a lo largo de los últimos veinticinco años.

Otra candidatura que logró una trascendente votación fue la de Lucio Gutiérrez y su partido –aunque el candidato de Sociedad Patriótica fuera Gilmar Gutiérrez, debido a una serie de impedimentos legales para que su hermano asumiera la candidatura presidencial–, organización que obtuvo el tercer lugar, una representación parlamentaria enorme y la constatación de que una inmensa población –especialmente del litoral–, no había estado sumergida en las jornadas que en Quito precipitaron, meses atrás, la salida del gobierno de Gutiérrez.

Alrededor de estos antecedentes advino la segunda vuelta electoral en la cual Correa recibió el apoyo del MPD, PK, la ID y de importantes sectores sociales como la FENOCIN –Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras–, así como de diversos gremios profesionales y de trabajadores del Ecuador. La campaña de Correa estableció varios cambios en su actuación y, conjuntamente con las reformas políticas planteadas –que bajaron de nivel en cuanto al calor de su formulación–, aparecieron las referentes a la oferta electoral concreta: vivienda, servicios básicos, trabajo, capacitación, atención a los grupos marginales en salud y educación, y lucha contra la corrupción.

Fueron estas iniciativas, más el desgaste de la candidatura de Noboa, que ofrecía todo en medio de la demagogia absoluta, las que posesionaron al candidato Correa como alternativa. Aquello, además, fue parte de la polarización de los grupos empresariales –entre ellos de los medios de comunicación–, que en su mayoría vieron en Correa un actor político con quien se podía dialogar y discutir su propuesta, en tanto que Noboa, al rechazarse su mensaje, puso en aprietos aquello que llaman la gobernabilidad, pues sus objetivos –a favor del TLC y del Plan Colombia, así como en contra de las relaciones con Cuba y Venezuela–, dieron la impresión de que generarían un conflicto de contradicciones sociales en el mediano plazo, asunto que los empresarios, los banqueros, los inversionistas no estaban dispuestos a arriesgar, así coincidirían con las ideas fundamentales de Noboa.

Como resultado de todo lo expuesto, el triunfo de Correa fue indiscutible en la segunda vuelta electoral, a contrapelo de una situación precaria de la misma tendencia en referencia al Congreso Nacional, cuya composición estableció que Correa no tuviese un solo diputado, que su aliado el PSE apenas lograra una silla curul y que la tendencia de izquierda y progresista

llegara a una veintena de diputados, con lo cual se avizora una confrontación que puede tener matices diversos en el mediano plazo.

### **Las reformas políticas: un engranaje que pospone otros requerimientos del país**

Ecuador en la campaña electoral –y como corolario a la crisis política vivida en el último período–, asumió detrás de la convocatoria de Correa, la necesidad de profundizar reformas políticas que dieran al traste con la práctica de la vieja «partidocracia» y que modificaran las reglas del juego para el desenvolvimiento de sus instituciones.

Tal propuesta devino en el instrumento fundamental del cambio anunciado por Rafael Correa. Su mensaje, entonces, logró asimilar el descontento de todos los sectores respecto del comportamiento de los partidos tradicionales. Empero, más allá de tal decisión, es imperativo establecer una reflexión sobre otras causas para que se produjera la victoria de Correa.

En los últimos años, el ejercicio del gobierno por parte de aquellos sectores que lograron su control –con independencia de sus voces de cambio–, demostró su adhesión a las tesis de la globalización del neoliberalismo y, en este contexto, su voluntad de favorecer las políticas de Estado que beneficiarían a grupos económicos y sociales poderosos, cuya interrelación con los intereses transnacionales era evidente y cuyo comportamiento al lado de los fines estratégicos imperiales ha sido, permanentemente, incuestionable.

En este orden de cosas, la crisis bancaria –que salvó los beneficios de los banqueros en detrimento del conjunto de la población–, la imposición de la base de Manta en el marco de los objetivos geopolíticos y geoeconómicos de los Estados Unidos, la ejecución de políticas económicas y jurídicas para favorecer los negocios, especialmente petroleros, de grupos transnacionales, así como los intentos por conducirnos –con pleno sometimiento–, a la firma del TLC, solo condujeron a un nivel de mayor desigualdad entre los ecuatorianos y de afectación a grupos importantes de los sectores productivos del país que derivó, al final, en una confrontación ideológica y política sin precedentes.

Amplios e importantes sectores del pueblo ecuatoriano cuestionaron a los causantes de la mentada crisis y, como queda dicho, buscaron transformar tales circunstancias en medio del derrocamiento de varios regímenes, sin percatarse que las defenestraciones solo propiciaron nuevos arreglos entre los grupos hegemónicos del poder que, astutamente, se involucraron en los cambios de gobierno y obtuvieron beneficios de tales cambios a propósito de sus permanentes chantajes para mantener en el gobierno a las figuras que reemplazaban los presidentes. Para el efecto, entre otras cosas, utilizaron a los diputados del Congreso Nacional afines a dichas estrategias, los cuales con su conducta arrastraron al descrédito al conjunto de la institución, debido a que

tampoco los representantes de los partidos de izquierda y del progresismo tuvieron la capacidad suficiente para enfrentar estos sucesos.

De esta manera, los políticos fueron señalados como los causantes de la crisis. La referencia de que la crisis la habían provocado, exclusivamente, los políticos fue, entonces, promovida desde los medios de comunicación, desde los grupos empresariales –favorecidos muchos de ellos con la dolarización–, desde las instituciones como la Iglesia que habían sido parte de operaciones económicas de dudosa procedencia.

El imaginario colectivo –sumergido en una crisis económica sustantiva–, encontró, con facilidad, culpables en la institucionalidad de los políticos y fue inducido, de esta manera, a que olvidara que los causantes de la situación de angustia, precisamente, fueron los banqueros, los beneficiarios de la deuda externa y los responsables de negociados aupados desde los gobiernos de turno, todo ello, además, gracias al comportamiento inescrupuloso de las mayorías del Congreso que favorecieron espectáculos bochornosos de toda índole.

En este contexto, el discurso de Correa tuvo el eco que debía tener cuando su principal adversario ha sido encasillado en lo que se ha denominado la «partidocracia». Más aún, creo que los grupos económicos y sociales hegemónicos –propietarios de varios instrumentos políticos y electorales propios– han optado por sacrificar sus partidos a cambio de que el discurso –y la práctica– del presidente Correa no afecte los intereses y privilegios económicos que les pertenece. De allí que han tomado, también, como suyo el reto de la conformación de la Asamblea Constituyente.

Dicho en otras palabras, los sectores privilegiados de la economía, pueden engranarse en el discurso contra los políticos –y por ende aceptar las reformas políticas–, en tanto esta circunstancia tan solo sea una cortina de humo que olvide las reformas estructurales económicas y sociales que demanda el Ecuador, reformas que en este campo no han sido ventiladas con claridad por el presidente Rafael Correa y que en la campaña electoral nunca fueron anunciadas o precisadas como parte de su gestión de gobierno.

En el marco de lo referido, la función de la Asamblea Constituyente parece tener una exclusividad: llevar a cabo reformas políticas. Si el escenario fuese el que estoy sugiriendo, entonces, la Asamblea Constituyente tiene sus riesgos, pues nadie puede tener la certeza que los cuadros más lúcidos y con vocación por la transformación social lleguen a formar parte de la referida Constituyente, tanto más que la derecha –que inicialmente pretenderá efectuar cambios constitucionales desde el Congreso donde copa en el 80%–, se preparará para articularse como parte de la Asamblea Constituyente.

Las dificultades enunciadas –más allá de que estemos o no con la necesidad de convocar a la Constituyente para reorganizar políticamente la estructura interna del país– me obligan a precisar, desde lo ideológico y desde la memoria histórica, cuándo sería prudente la convocatoria de tal institución.

En efecto, toda Asamblea Constituyente ha sido la expresión final para reordenar un proceso de cambios y transformaciones sociales, económicas y políticas impulsadas por el pueblo, y no a la inversa. La historia ecuatoriana ha demostrado exactamente lo que afirmo en estas líneas. Por ejemplo, luego de la revolución liberal producida en el Ecuador a finales del siglo XIX –cuyas transformaciones estructurales en el país fueron evidentes–, fue indispensable reunir a la Constituyente con la finalidad de que diera cuerpo jurídico a los cambios sociales, políticos y económicos que tal revolución impuso en el país. Con idéntico criterio se actuó luego de la llamada «revolución de mayo» de 1944, cuando se derrocó al presidente Arroyo del Río y la izquierda ecuatoriana asumió un papel protagónico en el proceso de cambio social, político y económico, lo cual fue sistematizado con la Asamblea Constituyente de 1945.

Empero, las aspiraciones del cambio –que ni se han formulado de manera adecuada y clara– hoy intentan ser promovidas desde la anunciada Constituyente, cuyo espacio parecería estar limitado exclusivamente a reformas políticas, con el agravante de que los miembros que constituyan tal Asamblea Constituyente pueden tener su origen electoral en los círculos del poder económico y social, y pueden superar, a nivel cuantitativo, a quienes están comprometidos con la idea de cambio y transformación, realidad que debe ser valorada desde el gobierno para impedir retrocesos en la formulación de la nueva Constitución, tanto más que conspicuos miembros de los grupos económicos hegemónicos se preparan para participar en ella, y pueden desde tal poder constituido reorganizar todas las funciones del Estado, sin excepción.

Por ello, la convocatoria de la Constituyente no puede responder a un estado de ánimo, a la voluntad de un sector politizado, al compromiso de grupos particulares, sino a la voluntad social para efectuar un cúmulo de cambios estructurales –en todos los órdenes–, previamente concertados e impulsados por el pueblo con la más amplia movilización social y mediante las consultas necesarias para que la Constituyente cumpla con el mandato popular, el mismo que debe expresar la voluntad de cambio en lo social, en lo económico y, por supuesto, en lo político.

Por lo tanto, no se requiere tan solo un estatuto electoral que defina la existencia de la Constituyente, sino una agenda de cambios sustanciales que den cuenta de la voluntad por construir un nuevo país.

### **Perspectivas del nuevo gobierno**

A no dudarlo –luego de las giras internacionales del electo presidente Correa–, así como por la composición del nuevo Gabinete Ministerial, será evidente que el nuevo gobierno ecuatoriano tendrá un giro en el manejo de



su política internacional favorable a la presencia de los regímenes de cambio existentes en América Latina. Este comportamiento será el más importante en lo referente a la gestión gubernamental.

Los temas referentes al Plan Colombia –cuya finalidad última ha sido hacer del Ecuador un vaso comunicante con la política colombiana–, difícilmente tendrán espacio en el gobierno de Correa, pues ha demostrado una real voluntad de no inmiscuirse en el conflicto colombiano y de exigir por parte del gobierno de Uribe el mínimo respeto al Ecuador en esta materia, más allá de las declaraciones de Correa señalando que las fuerzas beligerantes en Colombia son tales, y no grupos terroristas en acción.

Por otra parte, la casi probable designación de la máxima dirigente del Partido Socialista Ecuatoriano en la cartera de Defensa hace intuir que se intentará democratizar el papel de las Fuerzas Armadas y que se procurará poner sus recursos humanos al servicio de la colectividad, alejarlos de cualquier práctica guerrillera en la frontera norte y prepararlos para respetar, ciertamente, los derechos de los ciudadanos.

Los contactos iniciales con los regímenes de Brasil, Uruguay, Argentina, Bolivia, Venezuela y Chile no solo abriga la expectativa de que el régimen de Correa acelere un comportamiento favorable a la integración sudamericana, sino que posibilite acuerdos comerciales de interés entre estos países para favorecer la balanza de pagos y, sobre todo, para impulsar procesos económicos complementarios a partir de reajustar la actividad comercial proveniente de sus recursos naturales, cuya revalorización estratégica puede ser la tónica del mediano plazo.

Así, los proyectos ALCA y TLCs –constreñidos en el propio suelo norteamericano, entre otras cosas, debido al reciente triunfo de los demócratas–, no tienen mayor expectativa en la agenda gubernamental de Correa que optará, al unísono con los países progresistas antes señalados, por instrumentar acciones comerciales corporativas, mirando hacia el futuro de la cuenca del Pacífico.

En este contexto, se desarrollarán acciones internas para cuidar, básicamente en las áreas estratégicas –controladas, además, por el Estado–, la ejecución mas o menos transparente de los negocios, en especial los petroleros, que han significado hasta hoy la realización de negociados en medio de toda corruptela y que adquirieron la condición de tal debido a la práctica desplegada en este sentido por sectores vinculados a la derecha política y económica interna que, en interrelación con intereses foráneos, favorecieron con aquel amoral comportamiento a las transnacionales y corporaciones, por lo general norteamericanas.

Empero, las contradicciones interinstitucionales constituirán, al menos en el plazo inmediato, el sendero de la política interna debido a que los

sectores tradicionales de la derecha política y económica se atrincherarán en el Congreso Nacional como un instrumento de negociación respecto, por ejemplo, de la convocatoria a la Asamblea Constituyente, a la cual podrán acceder siempre y cuando la estructura económica del país no se halle en riesgo.

Tal escenario será, a no dudarlo, el inmediato, y solo la movilización social y popular (si el gobierno está dispuesto a generar dicho proceder social a partir de sus determinaciones) podrá modificar la situación interna, asunto que definirá los alcances reales del régimen en su proyecto de sustitución del modelo prevaleciente, realidad toda esta que pondrá a prueba su proyecto político, más allá de cualquier declaración.

### **A manera de conclusión**

Al final de este trabajo me parece imprescindible concluir señalando de manera expresa que la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano busca una alternativa a la situación de crisis que vive el país, que tal crisis proviene del modelo neoliberal impulsado en el Ecuador por los regímenes de turno, y que el resultado electoral constituye la búsqueda de nuevos días a propósito de una candidatura, la de Rafael Correa, que emergió cuestionando el modelo político vigente y a los sustentadores del mismo.

Más allá de la clara apreciación de que Correa no proviene de las filas de la izquierda y que su discurso más bien se sustenta en una postura nacionalista,<sup>9</sup> susceptible, además, de impulsar puntuales reformas, es importante señalar que su vinculación con el Partido Socialista puede constituir, en el mediano plazo, un sustento político trascendente, tanto más si entre Alianza País y el PSE se establecen canales de comunicación adecuados y espacios de reflexión oportunos para enfrentar no solamente la política de coyuntura, sino el ejercicio del poder en base a conductas transparentes, a la profundización democrática del debate y a la articulación adecuada con los intereses populares. En este orden de cosas, mucho de lo que se haga y se deje de hacer no solo planteará las bondades y deficiencias del régimen sino la probidad o incapacidad de sus aliados. Este es un hecho que no puede ser disimulado frente a la realidad histórica.

Es cierto que los efectos positivos en la conducción del régimen provendrán especialmente de su política internacional, como las dificultades devendrán de las limitaciones y titubeos en la política interna, pero también es verdad que mientras más rápido el régimen esté dispuesto a dar un salto

<sup>9</sup> El nacionalismo ha sido la tónica más importante de los proyectos emergentes en América Latina, lo cual a su vez denota que los procesos estructurales de cambio constituyen una expectativa a la que no puede renunciar la izquierda política y social, a riesgo de claudicar en sus determinaciones ideológicas, más allá de la necesaria vinculación con las reformas que los nacionalismos, también, pueden poner en marcha.

cuantitativo enfrentando al poder real, con mayor prontitud, acumulará nuevos y mayores apoyos que le permitirán construir un proyecto alternativo, con efectividad. El reto, pues, está también en manos del nuevo presidente ecuatoriano.

Empero, lo que sí se vuelve evidente, luego de tanta frustración, es que la ciudadanía que optó por Correa se constituirá en una veeduría permanente que no permitirá nuevas claudicaciones, como será palpable que la derecha tradicional y el populismo articularán diversas acciones (que incluso pueden ser extremas) para confrontar con el régimen. En tal disputa, el pueblo no puede mantenerse impasible y esta circunstancia, a no dudarlo, será la prueba de fuego para saber si en el Ecuador se puede edificar un proceso de renovación que construya las bases de un cambio sustantivo, tema que, a contrapelo de lo que se diga, tiene bases sentadas por la izquierda social y política en su ya larga tradición de lucha y entrega por un nuevo amanecer.

GERMÁN RODAS, magíster en Estudios Interdisciplinarios sobre América Latina, doctor en Historia y docente de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, es secretario general de la Coordinación Socialista Latinoamericana y autor de varios libros sobre la realidad ecuatoriana y latinoamericana.



# Correazo ecuatoriano a la oligarquía y al imperialismo

FERNANDO BUENDÍA

## **El ascenso político de la izquierda latinoamericana tras el naufragio neoliberal**

La elección de la socialista Michelle Bachelet a la presidencia de Chile, a comienzos de 2006, inauguró un año positivo para la izquierda en América Latina. Junto a la histórica victoria obtenida por Evo Morales en la elección presidencial celebrada en Bolivia en diciembre de 2005, este año resaltan: los resultados electorales en Perú, donde Ollanta Humala obtuvo cerca del 47,4% de la votación presidencial y sus seguidores lograron conformar la bancada parlamentaria más numerosa; las elecciones en Colombia, donde el candidato del Polo Democrático Alternativo (PDA), Carlos Gaviria, alcanzó 22% de los votos, con los cuales se ubicó en segundo lugar, detrás de Uribe; la fraudulenta elección presidencial mexicana que colocó al candidato Andrés Manuel López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), a 0,25% de la victoria; y los éxitos de los últimos meses, que incluyen la elección del candidato del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Daniel Ortega a la presidencia de Nicaragua; la reelección del líder histórico del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia de Brasil; la elección del candidato de Alianza País, Rafael Correa, a la presidencia de Ecuador; y la reelección para tercer período de Hugo Chávez,<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Hugo Chávez fue electo por primera vez a la presidencia de Venezuela en diciembre de 1998, revalidó su mandato en julio de 2000 –tras la aprobación de la Constitución de 1989– y fue reelecto por segunda vez, es decir, para un tercer período presidencial, en diciembre de 2006.



fundador del Movimiento Quinta República (MVR) a la presidencia de Venezuela. Estos acontecimientos *confirman la tendencia del electorado latinoamericano a respaldar candidaturas y movimientos políticos identificados con propuestas de cambio.*

El giro hacia la izquierda de los resultados electorales latinoamericanos ya se venía manifestando desde hace años, no solo con los triunfos de Chávez en Venezuela (1998 y 2000) y de Lula en Brasil (2002), sino también por la victoria –traicionada– del Movimiento Pachakutik, cuando en la elección presidencial celebrada en Ecuador en 2002 le dio su apoyo a la candidatura de Lucio Gutiérrez, candidato del partido Sociedad Patriótica (SP), y por la elección de Tabaré Vázquez, candidato del Frente Amplio, a la presidencia de Uruguay en 2004. Una lectura crítica, no triunfalista, evidencia que esta tendencia obedece al fracaso de las políticas neoliberales, que desde la década de 1970, fueron aplicadas, tanto por las dictaduras militares, como por los gobiernos democráticos que las sustituyeron, los cuales asumieron la lógica de desmantelamiento estatal y de apertura económica indiscriminada, basados en un control supranacional cada vez más acentuado, refrendado en las Cartas de Intención suscritas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las resoluciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), las condiciones impuestas por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la exigencia de los clubes de acreedores y los términos en que se negoció el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y los Tratados de Libre Comercio (TLC's) que ocuparon su lugar cuando se vio que era imposible aprobarlo como había sido originalmente concebido.

El ciclo electoral favorable que se abre a la izquierda en la región no significa la maduración final de una correlación de fuerzas favorable a ella, pero sí constituye una oportunidad histórica para su aceleración. El acceso de la izquierda a estructuras gubernamentales (órganos ejecutivos y legislativos nacionales, y gobiernos locales) representa el ascenso a un peldaño superior que la acerca a la posibilidad de hacer cambios políticos, económicos y sociales que le recorten las uñas a las oligarquías y a los sectores pro imperialistas criollos, cuyos mecanismos de dominación en el aparato estatal y en la sociedad civil están lejos de haberse debilitado.

La fortaleza ideológica, orgánica y política, y el prestigio y liderazgo, tanto institucional como personal, que los partidos y movimientos de izquierda sean capaces de desarrollar, será determinante para poder materializar los cambios hacia la construcción de una alternativa popular. Sin embargo, la tentación a «dejarse llevar» por el *voluntarismo*, a forzar las condiciones y desatar procesos incontrolados, resulta tan contraproducente como dejarse seducir y cooptar por el *posibilismo*, que puede llevar a la desmovilización y frustración de las expectativas populares. Para la izquierda resultó tan desconcertante lo ocurrido en Ecuador, donde las fuerzas

populares apostaron su acumulado de muchos años a una candidatura «inorgánica», la de Lucio Gutiérrez, que traicionó sus expectativas, como el excesivo conservadurismo del gobierno del PT en Brasil.

En América Latina hoy es posible identificar dos ejes programáticos comunes a los procesos de reformas en curso, con independencia de que sean moderadas o radicales. Esos ejes son la *democratización del Estado y la sociedad*, y el *rescate de la soberanía* para poder construir un proyecto nacional. La desprivatización del Estado y la sociedad, para arrancarlos de las manos a los grupos oligárquicos que utilizan el poder público como patrimonio particular y medio de acumulación, constituye un cambio de gran alcance en la situación de cada país, porque crea una «socialización» efectiva de más de un tercio de la propiedad, de esa propiedad que, aunque es pública, siempre se ha manejado de forma privada. El alcance de ese cambio radica en que garantiza el respeto a los derechos constitucionales de las personas, mejora el desempeño de las instituciones estatales y aumenta la calidad de los servicios básicos. Se trata de un esfuerzo democratizador que, por ejemplo, en Venezuela, supuso enfrentar a una mafia enquistada en la empresa Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), lo que en Ecuador implicaría suprimir el control oligárquico del sistema judicial, y que en toda la región presupone enfrentar la corrupción. Este proceso demanda ejecutar una gama de reformas en el ordenamiento político-institucional, que solo han podido concretarse mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente, como ocurrió en 1989 en Venezuela.

En América Latina, la soberanía como elemento real y no como mera retórica, entendida como el conjunto de los medios de los que dispone un Estado para ejercer su autodeterminación, ha sido recortada por siglos de colonialismo y dependencia. Los Estados nacionales latinoamericanos se encuentran mediatizados por la fragilidad de sus economías, el enorme endeudamiento, sus pequeños y desfinanciados presupuestos, la falta de recursos para invertir en infraestructura y proyectos de desarrollo, su atraso tecnológico y sus economías volcadas hacia fuera e internamente desestructuradas. En estas condiciones los gobiernos son presa fácil del chantaje de los organismos multilaterales, de las empresas transnacionales, de los países imperiales, en cuya esfera de influencia y subordinación caen.

Se requiere una modificación sustancial del Estado para poder recuperar soberanía, empezando por el control de los recursos naturales renovables y no renovables, y de otros como los culturales, científicos y sociales que son parte del patrimonio nacional, con cuyo aprovechamiento pueden superarse dificultades de financiación y abrirse escenarios de negociación favorables. Solo así el Estado podrá recobrar las funciones de director, planificador, interventor y regulador de la economía, y rescatar las competencias institucionales recortadas a favor del mercado.

A partir de la estrategia estadounidense de la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que pretende dar el puntillazo final al descentramiento de los Estados y los países latinoamericanos, la izquierda latinoamericana ha identificado a la integración regional como otro espacio de privilegio en el cual van cobrando fuerza proyectos como la Alternativa Bolivariana para la América (ALBA), sustentada inicialmente en la voluntad de Venezuela y Cuba, y ahora también de Bolivia. El potencial petrolero venezolano colocado en función de este proyecto, contribuye a dinamizarlo y a hacerlo posible.

La dimensión de los desafíos que la izquierda latinoamericana puede plantearse en cada país y en toda la región, depende de la fortaleza de las organizaciones sociales que actúan como el soporte de la palanca. Fue la movilización social la que derrocó a los presidentes Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia (2003) y Lucio Gutiérrez en Ecuador (2005) y también fue la movilización social la que defendió al gobierno de Hugo Chávez en Venezuela —cuando se encontraba preso a raíz del golpe de Estado de abril de 2002—. Pero, pese a que en estos años se ha producido un ascenso de la lucha social, inclusive hasta el nivel del estallido, todavía está lejos de formarse una configuración que sostenga procesos de cambio estructural sin retorno, más allá de lo espontáneo.

### **Correazo ecuatoriano a la oligarquía y al imperialismo**

Afectados por un cansancio crónico, originado en la constante defraudación de los políticos tradicionales y llenos de escepticismo con respecto a un sistema electoral que produce una pobrísima calidad de la representación política, pero como parte de un ritual en el cual están coaccionados para que participen, los electores ecuatorianos sufragaron el 15 de octubre de 2006 —en primera vuelta— y el 26 de noviembre —en segunda vuelta—, y con sus votos provocaron un giro histórico de la orientación económica, política y social del Estado.

Los resultados de la elección presidencial ecuatoriana reflejan, de manera fehaciente, en primer lugar, el rechazo a los partidos políticos tradicionales, a quienes los votantes atribuyen la responsabilidad directa por la crisis económica, política y ética en la que se mantiene el país desde el restablecimiento de la democracia (1979). Detrás de ese «castigo» a los políticos, de manera inconsciente, los electores condenaron el fracasado programa neoliberal (y oligárquico) implementado desde comienzos de la década de 1980. Además de provocar la debacle de las candidaturas presidenciales del Partido Social Cristiano (PSC) y del Partido Roldocista Ecuatoriano (PRE), esta tendencia de los votantes castigó la candidatura de León Roldós, quien aparecía como el preferido en las primeras encuestas, por su alianza con la Izquierda Democrática (ID).

El segundo signo positivo es el crecimiento del voto nulo que se registra principalmente en la elección de diputados, el cual, aunque no tiene valor en los resultados electorales, sí cuestiona la legitimidad de los congresistas electos y debería obligar a una reforma de la ley electoral. El desgaste del Congreso se evidencia en la pobreza cualitativa y cuantitativa de su producción legislativa, y en la certeza de que se convirtió en instrumento de los partidos oligárquicos, para mantener secuestrado y sometido el poder ejecutivo mediante su función de fiscalización. El principio del equilibrio de poderes sobre el cual está estructurada la división entre el ejecutivo y el legislativo se convirtió en una trampa que favorece la compra-venta de diputados, la componenda y la constante crisis política del país. Esta tendencia de «castigo a los diputados» debería obligar a una urgente reforma del régimen político presidencialista, para sustituirlo por otro basado en la colaboración entre esos poderes.

El tercero y más importante de los signos electorales orientados al cambio es el enorme caudal de votación obtenido por la candidatura de Rafael Correa, quien partiendo desde abajo y con muchas desventajas –como no contar con una estructura política constituida, no tener una imagen y símbolos electorales posicionados, ni tener respaldo partidario en gobiernos seccionales–, logró llegar a la segunda vuelta de la elección presidencial y obtener en ella una contundente victoria frente a Álvaro Noboa, el hombre más rico del país, a pesar de enfrentar una campaña agresiva y sucia de sectores oligárquicos, que provocó el descenso de su creciente apoyo electoral en primera vuelta y que produjeron una competencia desigual en la segunda vuelta.

La campaña de Rafael Correa enarboló las propuestas democratizadoras de los sectores progresistas, como la convocatoria inmediata a la Asamblea Constituyente para desprivatizar el Estado; el rechazo a la firma de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y a la apertura económica indiscriminada; la negativa a mantener la presencia militar estadounidense en la base de Manta y a involucrarse en el Plan Colombia; la fiscalización y renegociación de la deuda externa; la reactivación del aparato productivo mediante el apoyo a los pequeños y medianos productores; la recuperación de los recursos naturales; y la integración de los países sudamericanos, entre otras. Esas posiciones atrajeron un histórico respaldo de los votantes, lo que refleja el gran anhelo de cambio hacia un programa democrático y nacional existente en una porción muy significativa de los electores. Este es un capital político fundamental, que debe ser canalizado de la forma más adecuada, como factor determinante para la transformación política y social que Correa pretende llevar a cabo desde la Presidencia de la República.

El alineamiento de fuerzas sociales y políticas a favor de uno u otro de los candidatos presidenciales finalistas polarizó la segunda vuelta: por un lado, a favor del candidato del Partido Renovación Institucional Acción Na-



cional (PRIAN) se concentró el respaldo del PSC –que ya había apoyado a Noboa en la primera vuelta– del PRE y de varios grupos empresariales vinculados con el comercio internacional, el sector financiero y la explotación de los recursos naturales; por el otro, a favor de Correa se unieron los partidos y movimientos políticos progresistas y de izquierda, y los movimientos y organizaciones sociales. La amenaza de retroceso democrático que podía significar el triunfo de Noboa en la segunda vuelta, constituyó, de por sí, una razón suficiente para despertar y movilizar la conciencia de ese histórico porcentaje de votantes que apoyaron a Correa en la primera vuelta. La activación de este movimiento ciudadano hizo posible concretar la esperanza de recuperar el futuro para todos.

### **Oportunidades y amenazas para el gobierno de Rafael Correa**

La victoria electoral de Rafael Correa constituye un punto de inflexión en la historia política ecuatoriana, pues, a pesar de las enormes desventajas de su candidatura, la movilización y el respaldo ciudadano fue capaz de superar a la millonaria campaña de compra de conciencias que llevó a cabo la candidatura de Álvaro Noboa. Este es un elemento concluyente por la importancia determinante que tiene para la gestión del nuevo gobierno, pues la victoria electoral, más que del candidato Correa o de Alianza País, se debió a la activación del movimiento social y ciudadano. Fueron las redes sociales, las ONG's, los medios alternativos de comunicación, los movimientos ciudadanos locales, los líderes democráticos y otros, los que, por fuera de las estructuras de Alianza País, convergieron para enfrentar la candidatura de Noboa y forjaron el triunfo de Correa. Esta fuerza social democratizadora es un producto histórico conformado, principalmente, en los agitados períodos que Ecuador ha experimentado en la última década. Se trata de un caudal sólido, que podría respaldar los procesos de cambio que propone la agenda de Alianza País.

Para avanzar en la reforma política, en la desprivatización del Estado, la recuperación de los recursos naturales, la socialización de los recursos públicos, en el control de la corrupción, la construcción de un proyecto nacional y de integración regional y otros temas de la agenda popular, se necesita un poder muy superior al nivel históricamente acumulado por los grupos oligárquicos y por aquellos vinculados a los intereses imperiales, como los sectores financiero, petrolero, comercial y otros. Es por ello que la conformación del gobierno de Alianza País debe trascender los marcos limitados de la coalición que respaldó a Correa en la campaña electoral, y procurar una convergencia que incorpore a todos los sectores susceptibles de asumir un compromiso de corresponsabilidad con las oportunidades de cambio que se presentan.

Formar un gobierno desde esa perspectiva es obrar con sabiduría para que los instrumentos del poder ejecutivo, hoy al alcance de las fuerzas populares, se conviertan en vehículos de la más amplia articulación programática social y política, y no caer en la tentación meritocrática. Nada más lejos de este planteamiento que el carpeteo propio del «reparto del botín» ocurrido con Lucio Gutiérrez, que condujo a la autodestrucción del régimen fruto, entre otras causas, por sus contradicciones e incoherencias internas.

Entre las fortalezas del gobierno de Correa, en primer lugar se encuentran los instrumentos del Poder Ejecutivo. El poder discrecional del presidente de la República es considerable, porque administra casi todos los recursos presupuestarios y extrapresupuestarios y dirige las políticas públicas –de seguridad, defensa, educación, salud, relaciones exteriores, economía y otras– que se ejecutan con esos recursos. Además, en virtud de los precios del petróleo –debido a la guerra de Irak y la demanda de la República Popular China–, el futuro presidente tendrá una situación presupuestaria privilegiada. Varios analistas señalan que los excedentes a disposición del gobierno sumará más de 3 000 millones de dólares anuales, suficiente para cumplir la mayoría de las promesas electorales. Ese monto podría incluso aumentar en dependencia de la renegociación de la contratación petrolera con la empresa privada.

Una utilización eficiente de estos recursos le permitirá al nuevo gobierno desplegar una política social sin parangón en la historia gubernamental ecuatoriana, como es la intención que públicamente ha manifestado el nuevo presidente, de impulsar una medida de beneficio social por cada uno de los cien primeros días de su gobierno. La duplicación del bono de desarrollo humano, la campaña masiva de alfabetización, la creación del Ministerio de Desarrollo Rural, la duplicación del bono de la vivienda, la reducción de la tarifa eléctrica para los sectores de menos ingresos, el congelamiento de los precios del gas y los combustibles, son, entre otras, algunas de las acciones que se ha propuesto concretar el nuevo gobierno.

Esta oleada de recursos que se volcarán hacia los sectores sociales podría operar, sin embargo, como un elemento de clientelismo y de fidelización de los cientos de miles de beneficiarios hacia el gobierno y no necesariamente como un factor de organización. Se requiere, por un lado, que exista una clara voluntad gubernamental de apuntar al fortalecimiento de las redes sociales y organizativas, y de convertirlas en vehículos de los programas sociales y también, por otro lado, un salto por parte de las organizaciones sociales para tomar iniciativa y constituirse en «socios estratégicos» de la transformación, convertidos en promotores y agentes de las políticas públicas del nuevo gobierno.

Si la opción estratégica del nuevo gobierno apunta en la mencionada dirección, aprovechando que el movimiento social ecuatoriano cuenta con

un acumulado significativo de «capacidades colectivas», ello podría representar un factor de potenciación para la fuerza transformadora que pretende imprimirle al proceso. La alianza que surja de esta voluntad de articulación podría llegar a constituirse en el soporte de una «nueva hegemonía política nacional» y de un Estado alternativo no burocrático.

La caída electoral que también experimentaron los movimientos políticos de la izquierda, el Movimiento Popular Democrático (MPD), el Movimiento Pachakutik y el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), puede convertirse en una oportunidad para abrir espacios de diálogo y establecer acuerdos de colaboración y apoyo a la agenda del nuevo gobierno, en dependencia de la receptividad de Correa. Particularmente, es importante el respaldo del movimiento indígena, que aun posee una posición protagónica dentro del movimiento social y una capacidad importante de movilización social.

Esta convergencia con las organizaciones y movimientos políticos progresistas se torna aún más decisiva porque la dimensión del cambio que pretendería imprimirle al proceso ecuatoriano el nuevo gobierno apunta en una dirección radical. Su hoja de ruta tiene tres hitos decisivos: la recolección de un millón de firmas y la convocatoria a la Consulta Popular por la Asamblea Constituyente; la campaña de elección de los asambleístas y la disputa interna una vez instalada la Asamblea Constituyente, por lograr una Constitución «radicalmente democrática, esencialmente popular y profundamente nacional»; y la elección del nuevo gobierno que se corresponda con la nueva Constitución, ya que Correa presentaría su renuncia a la Constituyente, la que podría, además, cesar el Congreso vigente.

Estas fortalezas y oportunidades internas deberán ser gestionadas por el gobierno de Movimiento País y Alianza País, instrumentos organizativos que fueron estructurados para la campaña electoral, pero que tienen un fuerte déficit de capacidades políticas y organizativas para asumir la gestión de un gobierno que pretende impulsar una «revolución democrática y nacional». Tal debilidad podría aliviarse en algo con el sobreesfuerzo del liderazgo político, que podría imprimir una dinámica intensa a la acción política gubernamental, pero eso únicamente dará tiempo para afrontar la ineludible tarea de consolidar la estructura política y social gobernante.

A pesar de que los sectores dominantes criollos experimentan una severa crisis de hegemonía, evidenciada en el actual resultado electoral y reflejada anteriormente en los traspiés sufridos en varios temas importantes, tales como la política petrolera, el TLC con los Estados Unidos y la política internacional, aún conservan intactas sus estructuras de dominación, tanto en el acumulado de medios económicos y políticos a su disposición, como en la solidez de las estructuras de imposición clientelar que sustentan su «representación política». Tratándose de una lucha decisiva, los sectores

dominantes tratarán de bloquear la agenda de transformaciones de Correa, aún al costo de producir una nueva crisis institucional.

Un escenario complejo y que podría tornarse desfavorable en el curso del conflicto, es la tendencia «autonomista» que desde el municipio de Guayaquil se viene impulsando desde hace años, y que ha sido recogida por otros actores como el municipio de Quito, el de Cuenca, también la Prefectura de Manabí y otros gobiernos seccionales. Esta presión por la redistribución del poder central, que en el caso de Guayaquil o de Manabí apuntaría a favorecer el dominio de grupos oligárquicos locales, en meses pasados tomó la forma de una ley que, estando pendiente de ser tratada, podría convertirse en una suerte de espada de Damocles sobre el nuevo gobierno. De allí que tendrá una crucial importancia para el régimen de Correa, articular una política activa de entendimiento y concertación con las entidades seccionales.

Como ya señalamos anteriormente, una ventaja que tendrá el gobierno del Movimiento País es la sustancial modificación que ha experimentado el escenario político continental en el presente año: hay ahora ocho gobiernos de izquierda (moderada o radical), además de una significativa presencia de esta tendencia en la mayor parte de parlamentos y gobiernos seccionales, sudamericanos.

Contribuye a favorecer el escenario internacional el declive del gobierno de George W. Bush, a raíz de la pérdida de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, y de una empantanada situación en su política internacional, tanto en la guerra de Irak y en los conflictos de Medio Oriente (Palestina, Siria, Irán), como en Corea, y por los débiles resultados obtenidos en cerca de cuatro años de Plan Colombia. Resalta, además, el creciente sentimiento de rechazo a la política exterior estadounidense, lo que disminuye los medios y las posibilidades de intervención del gobierno de los Estados Unidos. Por otro lado, se ha reconfigurado el tablero político europeo a favor de la socialdemocracia que, aunque pragmática, se muestra más dispuesta a respaldar a los gobiernos de corte democrático en América Latina, siempre que no afecten sus intereses en la región. Esas nuevas condiciones del escenario internacional, sin embargo, deben contrastarse con la influencia de los organismos multilaterales y las corporaciones multinacionales en el país, que obrarán con los medios a su alcance para torcer las expectativas de cambio que impulsará el nuevo gobierno.

### **A modo de conclusión**

Nunca antes en América Latina en general, ni en Ecuador en particular, se han abierto posibilidades como las actuales de producir una transformación sustancial dentro de un contexto «democrático y nacional». Esta decisiva coyuntura se abre con muchas debilidades y está plagada de amenazas, pero

también está acompañada de fortalezas y preñada de oportunidades. Será la acción política concreta la que determine el desenlace final.

El escenario que se avecina –y que promete ser muy intenso– convoca a todos los actores y sujetos sociales y políticos, que han dedicado vidas y esfuerzos a promover la transformación y la equidad, a inscribirse en este desafío, pues el resultado final depende de que pueda convertirse en una acción colectiva. Como se demostró en el proceso electoral, es posible autoconvocarse a una minga para derrotar a la prepotencia de la oligarquía y a las imposiciones del imperialismo.

FERNANDO BUENDÍA es dirigente del Movimiento Pachakutik.

# Clásicos de Ernesto Che Guevara



Centro de Estudios  
CHE GUEVARA

Publicados en conjunto con el  
Centro de Estudios Che Guevara

## PASAJES DE LA GUERRA REVOLUCIONARIA

Edición autorizada

Por Ernesto Che Guevara

Prefacio por Aleida Guevara

Un escrito clásico que recuenta la guerra popular que transformó a un pueblo entero, y transformó al mismo Che —desde médico de las tropas a revolucionario reconocido a través del mundo—. Con un prefacio por Aleida Guevara, hija de Che Guevara, y una nueva edición que incluye las correcciones propias del autor.

320 páginas, ISBN 978-1-920888-36-7



## LA GUERRA DE GUERRILLAS

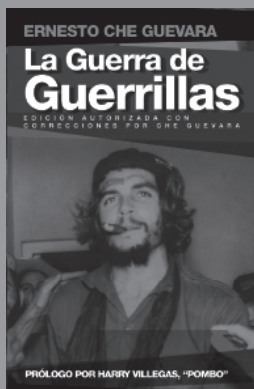
Edición autorizada

Por Ernesto Che Guevara

Prólogo por Harry Villegas, "Pombo"

Uno de los libros clásicos escritos por el Che Guevara, que con el decursar del tiempo se ha convertido en objeto de estudio por admiradores y adversarios. El manuscrito estaba destinado a ser ampliado y corregido por un "maestro de la guerra de guerrillas", el Comandante Camilo Cienfuegos, quien murió antes de poder hacerlo. Años después, el propio Che sometía a revisión el texto, y tampoco pudo concluir dicha tarea, al ir a combatir por sus ideales libertarios en Bolivia.

165 páginas, ISBN 978-1-920888-29-9



## EL DIARIO DEL CHE EN BOLIVIA

Edición autorizada

Por Ernesto Che Guevara

Prólogo por Camilo Guevara, Introducción por Fidel Castro

El último de los diarios del Che, encontrado en su mochila en octubre de 1967, se convirtió de forma instantánea en uno de sus libros más célebres. La edición que se le entrega al lector ha sido revisada e incluye un prefacio de su hijo, Camilo Guevara, así como algunas fotos inéditas de la contienda.

291 páginas, ISBN 978-1-920888-30-5



# ¡Hagámoslo, no hay excusa!

ANTONIO APONTE

En Venezuela, las elecciones del 3 de diciembre cambiaron el paisaje político. Ahora el proceso revolucionario bolivariano navega en aguas que presagian tempestad. Veamos.

Dos hechos son fundamentales en el análisis postelectoral: el triunfo rotundo del comandante Chávez; y el cambio de táctica del imperio gringo en el enfrentamiento con el gobierno bolivariano. Washington parece abandonar el choque frontal, cruento, y elige la sutileza, el diálogo, la búsqueda de interlocutores en nuestro campo.

## ¿Cómo es el nuevo cuadro político?

La desautorización por parte de Washington de la salida violenta obligó al candidato Rosales a reconocer el triunfo limpio de Chávez. ¿Por qué ese giro brusco en la política del imperio, qué lo motiva? La respuesta tiene un ingrediente internacional, podríamos especular que la situación en Irak, la pérdida del poder republicano en el Congreso gringo, lo sensible del mercado petrolero, no hay dudas, lo internacional debe ser parte del análisis. Sin embargo, es en lo nacional donde se afina lo determinante de la política del imperio.

En las elecciones del 3 de diciembre, fue definitivamente derrotada la vieja expresión política del capitalismo rentista venezolano, es decir, el pacto de punto fijo, los viejos partidos socialdemócratas quedaron enterrados, y surgieron nuevas opciones opositoras, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, que suman una considerable fuerza electoral, aunque aún está por verse su capacidad de movilización postelectoral, ya que esa fuerza fue en gran medida movilizada con el señuelo de una acción violenta el día de las elecciones que sintetizaban en la consigna, «gano y cobro», es decir, se daba por descontado un triunfo opositor que sería escamoteado por un fraude del gobierno. De esta situación se derivaría una reacción violenta y un estado de ingobernabilidad que abriría camino a la intervención del ejército y pondría en el gobierno al candidato Rosales. Esta promesa de «triunfo y cobro» fue

una manipulación grosera de la base opositora, que los voceros principales de la oposición reconocen como una mentira blanca necesaria. Así, las opciones violentas fascistas quedaron temporalmente desinfladas.

Suavizada la contradicción entre bolivarianos y oposición, el centro de la lucha se trasladó al campo revolucionario donde pugnan dos posibilidades: avanzar hacia el socialismo, propuesta liderizada por el comandante Chávez; o la conformación de una nueva expresión política del capitalismo rentista. En otras palabras, se enfrentan dos proyectos principales. Uno, el proyecto socialista, y el otro, el proyecto de la pequeña burguesía que propone una suerte de *capitalismo vergonzante*, bajo formas falsosocialistas tales como: la cogestión, las empresas de producción social, cooperativas, empresas recuperadas, etcétera, proyecto que solo enmascara al capitalismo rentista. El imperio, sin dudas, intenta construir puentes con este sector, puentes que se traducirían en un neopacto, en una remozada expresión política del capitalismo, que sustituiría al superado pacto de punto fijo que funcionó durante casi medio siglo.

En resumen, enfrentamos hoy en Venezuela un dilema vital: o nuestra Revolución es atrapada en formas capitalistas, o nuestro país da el salto social que la humanidad reclama.

### **¿Cómo tomar el camino correcto?**

Si estudiamos la historia de los antiguos sistemas de organización social que dieron origen, en su desarrollo, al capitalismo, nos encontraremos con una característica económica común y una característica ética común. Todos tenían como basamento económico, la *propiedad no-social sobre los medios de producción*, y todos tenían como fundamento ético y moral, el *egoísmo*. Concluimos que todos orbitaban alrededor de estos dos rasgos esenciales, y que ellos se presentan trenzados.

Podemos decir, entonces, que la historia de la humanidad ha sido la historia del desarrollo de la propiedad no-social de los medios de producción y del egoísmo que le es consustancial, y que ha sido ese desarrollo el que nos ha llevado al borde del abismo.

Debemos, entonces, deducir que, en la ruta que seguiremos, está la superación de la propiedad no-social de los medios de producción, y del egoísmo. En otras palabras, en el centro del compromiso revolucionario está el socialismo, como superación del capitalismo.

Siempre hubo sectores de la humanidad que se rebelaron contra los sistemas de propiedad no-social, y del egoísmo que estos fomentaban. La primera forma de enfrentamiento fue espiritual. Cristo detectó el centro del problema, y planteó la lucha contra el egoísmo y nos dejó el «amaos los unos a los otros».



Después surgió la forma económica que postulaba que cambiando la propiedad no-social, por la propiedad social de los medios de producción, se crearía una zona de solidaridad que se reflejaría en la ética y la moral, y produciría el gran salto histórico de la liberación del hombre. En ese paso se cometieron errores y aciertos, la humanidad conoció los primordios del hombre nuevo, surgió la posibilidad de la formación del hombre nuevo. Los hombres de esa nueva realidad enfrentaron con heroísmo infrecuente al monstruo del nazismo y liberaron al planeta de la mayor aberración que ha creado la crueldad humana.

Finalmente, el hombre encontró la brújula que lo guiaría en el camino hacia el socialismo: la sociedad cubana, la Revolución Cubana resumió todo el pensamiento revolucionario y dio con la clave para emprender el camino hacia el socialismo, hacia la liberación del humano. *No son los cambios espirituales, tampoco los cambios en las relaciones de propiedad, se trata de una combinación de los dos, un complejo materialidad-espiritualidad, o si queremos: economía-conciencia, donde la espiritualidad, la conciencia, es el centro, lo principal, lo que determina al conjunto.*

### **¿En qué situación estamos en Venezuela?**

En Venezuela estamos en condiciones óptimas para emprender el camino del socialismo, de la redención del hombre, de la salvación de la humanidad.

### **¿Con cuáles enemigos nos enfrentamos?**

Somos un país inédito y nuestra Revolución será también inédita, aunque, por supuesto, afincada en la teoría y experiencia revolucionaria mundial.

Tenemos grandes ventajas que auguran éxito: la conexión amorosa del Comandante con su pueblo es la mayor de ellas, una conexión así, que es indispensable para hacer la Revolución, ocurre una vez cada cien años.

Existen condiciones materiales que nos permiten construir la base física del socialismo sin exigir inmensos sacrificios a los humildes. Somos un pueblo con tradición de grandes hazañas, con historia de entrega solidaria, con ancestros libertadores generosos. Hemos dado muestras recientes de altruismo, de garra libertaria en la defensa del camino revolucionario.

A la par tenemos desventajas y enemigos.

Aquí en nuestro país, las clases más privilegiadas en el reparto de la renta petrolera padecen una fuerte transculturización. Se mantiene un grupo sólido de oligarquía tradicional que viene vampirizando desde la época de la colonia, y junto a esta una oligarquía más reciente cultivada por el petróleo.

Encontramos, también, como beneficiaria de la renta petrolera, a un sector que merece mención aparte por su influencia en la acción política, es la llamada clase media.

Sectores de esta clase y su ideología estuvieron en los años sesenta a la cabeza de la acción revolucionaria, pero después de la derrota, o se plegaron al sistema llevados por el escepticismo, o persistieron en acciones *guerrilleroideas*, o cayeron en el anarquismo retórico inconsecuente. Es importante destacar que estos sectores, y su ideología, mezcla de anarquismo, reformismo, y a veces tremendismo, ha mantenido influencia en el proceso de la Revolución Bolivariana.

### ¿Cuál es la situación hoy?

Como consecuencia del triunfo de la Revolución Bolivariana, en las elecciones de 1998, la expresión política de la oligarquía, agotada en el pacto de punto fijo, fue desplazada de manera abrupta, y entramos en una turbulencia social que hoy, después de las elecciones del 3 de diciembre, se caracteriza por la pugna de las diversas ideologías para establecer una nueva estabilización.

*La oligarquía tradicional*, ahora sin expresión política en el poder, pero sin mayores contratiempos en lo económico, pugna por un nuevo pacto político que garantice la congelación de la marcha hacia el socialismo. Se vale para eso de nuevos factores políticos de derecha que se han consolidado en la última elección.

*La pequeña burguesía opositora* se debate entre una realidad que no le afecta, una economía que le es favorable y la manipulación psíquica a que fue y es sometida, aunque los grados de disociación han disminuido. Una fracción coquetea con posiciones fascistas, otra apoya a los factores políticos de derecha emergentes y parece enrumbarse hacia salidas constitucionales, por lo menos por ahora.

*La pequeña burguesía bolivariana* estuvo oscilando entre dos polos: los más virulentos llegaron a la cogestión, empresas recuperadas, y otras evasivas para no romper con el meollo del capitalismo; los más conservadores plantearon abiertamente formas atenuadas de capitalismo, estimulando su desarrollo.

*Las grandes masas humildes*: somos un pueblo que ha perdido, a la sombra del petróleo, la disciplina, la constancia. Las clases sociales no se establecen aquí por su relación con el trabajo, sino por su relación con la renta petrolera. Esta característica nos hace inéditos.

La conciencia de las clases humildes, base humana de la Revolución, no es la conciencia del explotado (le roban en la acción del trabajo), sino la conciencia del despojado (le privan de la riqueza a la que tiene derecho).

La conciencia y la reacción frente al despojo es individual, personal, egoísta. Por el contrario, la conciencia frente a la explotación es organizada, disciplinada, la acción es colectiva, la visión es social.

Esta situación plantea un reto colosal a los revolucionarios, conducir a esta base social a niveles de disciplina, de trabajo colectivo, organización, conciencia del deber social, compatibles, imprescindibles para la construcción del socialismo. Requiere la construcción de una organización vanguardia de la Revolución que sea robusta, disciplinada, abnegada, ejemplarizante, consciente, informada, y que guíe con el ejemplo a las grandes masas hacia niveles de conciencia y participación, y al mismo tiempo recoja de ellas sus inquietudes, sus enseñanzas para enriquecer la teoría de la Revolución Venezolana. Y hace necesario, quizá, más que en ninguna otra parte del mundo, que las acciones políticas se dirijan a la formación de la conciencia revolucionaria, la conciencia del deber social.

Las clases humildes se han beneficiado de los programas sociales. Se aferran al amor y a la esperanza del Comandante. Intuyen que el socialismo es el camino. Esperan las directrices para avanzar, para dar pasos que perciben certeros.

### **¿Cuál es la tesis socialista?**

El socialismo de este tiempo debe, tiene que nutrirse de la experiencia revolucionaria de toda la humanidad, de la historia nuestra, pero sobre todo afincarse en los avances que la teoría revolucionaria ha conseguido en muchos años de intentos por tomar el «cielo por asalto»: *la conciencia del deber social es lo fundamental, debe ser el objetivo de todo desvelo revolucionario, sin ella nada se ha hecho, con ella se puede construir mundos.*

Definimos el socialismo como un sistema social, en el cual lo determinante de su economía es *la propiedad social de los medios de producción* y la distribución de la riqueza social así producida con criterios de equidad y justicia, *donde se espera de cada uno según su capacidad y se retribuye a cada uno según su necesidad.* A la vez, el socialismo es un sistema donde lo determinante en la conciencia es el deber social. La propiedad social, al restituir la sociabilidad en la base económica, inicia la recomposición, la integración, la sanación del hombre escindido.

Algunos economistas reconocen la necesidad de sustituir la propiedad no-social de los medios de producción y proponen la propiedad colectiva como su reemplazo, pero confunden el camino y, al querer innovar, regresan al punto de partida, dejan intacto al capitalismo y pierden una valiosa oportunidad para sustituirlo.

Veamos. La propiedad colectiva es una variante de la propiedad no-social de los medios de producción, con ella todo sigue igual: la riqueza así

creada no se revierte en toda la sociedad. Este es un punto clave en la superación del capitalismo: la riqueza socialmente producida debe ser distribuida socialmente con criterios de equidad y de justicia, y en la propiedad colectiva son apropiados por un grupo de accionistas más o menos numeroso. De esta manera, la sociedad continúa escindida, solo cambia el número de apropiadores que, dicho sea, siempre será inmensamente menor al número de expropiados.

Son muchas las variantes de propiedad que se inventan para evitar ir al fondo de los cambios económicos revolucionarios: *es necesario colocar la propiedad de los medios de producción en manos de toda la sociedad*, solo así se producirá el cambio profundo que rescatará a la civilización de milenios de enajenación, de fractura. Una sociedad propietaria de sus medios de producción, es una sociedad integrada; mientras los propietarios de los medios de producción sean una fracción de la sociedad, habrá división social. Siempre habrá explotación. Solo la propiedad social de los medios de producción supera la explotación de hombre por el hombre, porque la sociedad no puede explotarse a sí misma. Podrá haber socialismo con más o menos niveles de libertad, más o menos grados de participación, con un partido único o varios, todo eso es posible, lo que no es posible es pensar en un socialismo donde lo determinante en la economía no sea la propiedad social de los medios de producción. Aquí cabe citar al Che:

Resta un gran tramo a recorrer en la construcción de la base económica y la tentación de seguir los caminos trillados del interés material, como palanca impulsora de un desarrollo acelerado, es muy grande.

Se corre el peligro de que los árboles impidan ver el bosque. Perseguiendo la quimera de realizar el socialismo con la ayuda de las armas melladas que nos legara el capitalismo (la mercancía como célula económica, la rentabilidad, el interés material individual como palanca, etcétera), se puede llegar a un callejón sin salida. Y se arriba allí tras de recorrer una larga distancia en la que los caminos se entrecruzan muchas veces y es difícil percibir el momento en que se equivocó la ruta. Entre tanto, la base económica adaptada ha hecho su trabajo de zapa sobre el desarrollo de la conciencia.<sup>1</sup>

Pero los cambios en la economía no son suficientes, deben ir acompañados de transformaciones en la conciencia, que debe transitar desde una conciencia egoísta propia del capitalismo, hacia una conciencia del deber social, propia de la nueva situación revolucionaria. Tan malo y equivocado es

<sup>1</sup> Ernesto Che Guevara: *El socialismo y el hombre en Cuba*, Centro de Estudios Che Guevara y Ocean Press, La Habana, 2005, pp. 10-11.

pensar solo en cambios económicos, como pretender únicamente cambios en la conciencia. No olvidemos que conciencia y materialidad son componentes de un complejo armónico, que esos componentes se condicionan de manera mutua, que interactúan. De allí que los cambios revolucionarios deben ser en los dos componentes del complejo armónico so riesgo de fracasar. Y debemos recordar nuevamente al Che:

De allí que sea tan importante elegir correctamente el instrumento de movilización de las masas. Ese instrumento debe ser de índole moral, fundamentalmente, sin olvidar una correcta utilización del estímulo material, sobre todo de naturaleza social.<sup>2</sup>

Ahora bien, la sustitución de un sistema social no es una tarea sencilla y esquemática, es un proceso difícil y a la vez apasionante, lleno de imprevistos, de innovaciones, de retos. Lo viejo se las arregla de mil maneras para permanecer, y es así que reaparece en donde menos se espera. Recordemos que en la América nuestra, después de superada la dominación española, se nos reapareció en el instante en la forma remozada de dominación imperialista capitalista que aún padecemos. Otro ejemplo, después de setenta años de socialismo en la URSS, no pudieron sepultar definitivamente a la vieja monarquía y reaparecieron los adoradores del Zar desempolvando sus retratos. Y, más allá, quizá el fenómeno Stalin tuvo una alta influencia de lo viejo, era una forma de manifestarse (el zarismo conductual) con ropaje de algo nuevo. Por su parte, la Revolución Francesa modificó hasta los nombres de los meses del calendario y, no obstante, devino en una restauración de la monarquía que pensó había guillotinado. Pero, a pesar de las dificultades, la historia incansable sigue su escabroso camino, y los cambios suceden.

En Venezuela hoy tenemos condiciones inmejorables para dar el gran salto que la humanidad reclama en la construcción del socialismo. Tenemos un líder con una fuerte conexión amorosa con el pueblo, conexión que sucede cada cien años, y que es imprescindible para la concreción del sueño revolucionario. Tenemos un pueblo con tradición de lucha y de sacrificio por la libertad, heredero de próceres que iluminan las mejores luchas del continente. Contamos con la fuerza natural necesaria para construir la base material de la espiritualidad socialista.

Hay momentos luminosos, son frecuentes, son muchos, están allí convocándonos a convertirnos en bosque, en mar, huracán, volcán en erupción en montaña nevada. El hombre mediocre no los siente, nada más ve las apariencias, para él un ave que cruza, es solo un ave que cruza, y no el presagio de frescos vientos de lluvia; un licor es promesa de embriaguez, y no rara oportunidad de contacto con los dioses. Es en la política donde

<sup>2</sup> *Ibíd.*, p. 11.

destellan las oportunidades de elevarse el hombre por encima de su condición animal y hacerse verdaderamente humano, conquistando la inmensidad de su existencia.

La Venezuela de hoy relumbra, estamos atravesando uno de esos momentos donde la vida deja de ser la búsqueda de lo mezquino, de lo efímero, de lo transitorio, y el horizonte abarca la inmensidad de la trascendencia histórica, vivimos época fundacional. Al venezolano le nacieron alas para volar sobre los abismos de la esclavitud. Es hora de cruzar los Andes para ir en busca de Bolívar. Es tiempo de volver a la quebrada del Yuro para decirle al Comandante Che que remontamos vuelo junto a su ejemplo. Martí nos espera en Dos Ríos. La historia abrió su libro y pide nuestro alegato.

Podemos escribir páginas nobles, o podemos borrar cuartillas con argumentos pueriles para justificar la angustia de sorprendernos una mañana con nuestra vida agotada en millones de hechos frívolos, y el fracaso de dejar intactas las cadenas de la medianía.

No es momento de astucias milenarias, de mezquinas metas que nos transforman en tiovivos históricos, no es la hora de pasos cortos, llegó, qué bueno que llegó, el supremo instante de lo grande, el delirio de lo grande, de entrar en éxtasis libertario, de fundar mundos, de derrumbar muros...

No pertenecen a este momento los kilómetros de asfaltos, o las estulticias de un gobernador cualquiera, no corresponden los parloteos de la oposición, ni siquiera los del gobierno, lo único que importa es aprovechar la rara oportunidad de construir el socialismo, de devolver al hombre la posibilidad de hacerse humano, de entrar en erupción creadora, construir un nuevo universo, de pasar a la historia junto a Bolívar, Martí, Fabricio, el Che.

Todo lo tenemos para avanzar hacia el socialismo. ¡Hagámoslo, no hay excusa!

ANTONIO APONTE, periodista, escritor y político venezolano, autor de varios libros y numerosos ensayos sobre el proceso político venezolano, es columnista del diario *VEA* de Caracas, donde tiene la sección permanente «Un grano de maíz».



# Los desafíos de la izquierda en México

ROSA ALBINA GARAVITO ELÍAS

La culminación del proceso de renovación de los poderes federales en México tuvo lugar el pasado 1ro. de diciembre con la toma de protesta del nuevo presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Así se inicia el segundo gobierno del partido de la derecha mexicana, el PAN (Partido Acción Nacional), después de que en 2000 Vicente Fox derrotara al Partido Revolucionario Institucional (PRI) con setenta y un años continuos en el poder. Para la izquierda mexicana organizada en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y para Andrés Manuel López Obrador quien fuera el candidato de la Coalición por el Bien de Todos (CPBT) en los pasados comicios, el inicio del gobierno calderonista marca una nueva etapa en su lucha y grandes desafíos. De esos desafíos trata el presente artículo.

Mientras en América Latina los triunfos electorales de la izquierda en sus diversas expresiones le están abriendo paso para alcanzar el gobierno en una gran cantidad de países, en México se ha quedado en la antesala por apenas el 0,58% de diferencia, que en términos cuantitativos significó 244 000 votos. Ciertamente una elección sumamente reñida, que ameritaba, como demandó la CPBT en su momento, realizar el recuento voto por voto a fin de dar la certidumbre necesaria a los resultados. Esa demanda no fue aceptada por Calderón Hinojosa y tampoco por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuyas decisiones son inatacables, dado su carácter de máxima instancia jurisdiccional en la materia.

De esa manera, el nuevo presidente de la República arriba al poder con un gran déficit de legitimidad, a pesar de haber llenado los requisitos legales para ser investido como el jefe del Ejecutivo Federal. Al respecto es bueno recordar que la fuente de la legitimidad no es solamente la ley, sino también y muy importante, la aceptación social de los gobernados. Con un México dividido en dos, no es el caso del nuevo presidente de la República.



## Una larga crisis de fin de régimen

Esta coyuntura política no podría explicarse sin recordar que en México nos encontramos inmersos en una larga crisis de fin de régimen abierta hace casi dos décadas, para ser precisa, en 1988. Fue entonces y a consecuencia de los estragos sociales provocados por la política neoliberal iniciada en 1982, que se registró una rebelión ciudadana en las urnas que tomó por sorpresa al régimen priísta. Hasta ese momento todos los indicadores daban cuenta del escaso interés de la ciudadanía en los procesos electorales. Si a la población le era esencialmente indiferente votar o no votar, era debido a la certidumbre de que el PRI siempre ganaba las elecciones. Y ello se explicaba no solo por el sistema de partido casi único, sino porque en los hechos ese partido funcionaba también como un partido de Estado, de manera que no existía una competencia electoral real, de ahí que un fenómeno recurrente fuese que de las urnas salieran votos por el partido oficial incluso en mayor cantidad que los votantes registrados. El milagro se explicaba fácilmente: el gobierno controlaba los procesos electorales de principio a fin.

Fue así como la masiva afluencia de votantes a favor de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, significó un parte-aguas en la historia política mexicana, a partir de la cual el viejo régimen quedó herido de muerte, pues se hizo evidente que la funcionalidad electoral de sus controles corporativos y clientelares se había colapsado. En aquel momento fue evidente también el surgimiento de un nuevo sujeto social, el ciudadano, que de manera masiva dio vida a un movimiento democrático cuyo eje fue el respeto a la voluntad popular para elegir a sus gobernantes. Ese movimiento no cejó en su empeño hasta arrancar la organización de las elecciones de manos del gobierno, proceso que culminó con la reforma electoral aprobada en 1996. Pero en 1988 y no obstante todas las evidencias del triunfo de la oposición de izquierda, con la argucia de una supuesta «caída del sistema» en el conteo de los votos, pudo perpetrarse un magno fraude en contra del Frente Democrático Nacional y de su candidato Cárdenas Solórzano. De ahí que Carlos Salinas de Gortari arribara al poder con un caudal de ilegitimidad muy semejante a la que hoy pesa sobre Calderón Hinojosa.

Que casi dos décadas después se genere una situación política semejante en torno a una elección presidencial en México, nos habla de que a pesar del avance plasmado en la conquista de la democracia electoral, este país continúa padeciendo la ausencia de un pacto social democrático, que logre la plena democratización de sus instituciones y un cambio de política económica que garantice la inclusión de las grandes mayorías a los beneficios del crecimiento, así como la recuperación de su soberanía. Me refiero, por supuesto, a la necesidad de pactar la transición democrática, un desafío no resuelto desde 1988.



### **Alternancia política sin cambio de régimen**

Sin duda fue la conquista democrática de la reforma de 1996 que se plasmó en la ciudadanización de los órganos electorales, lo que permitió la alternancia política de 2000; una alternancia que significó solo cambio de partido en el poder, pues dejó intactos los principales pilares del viejo régimen como es el caso del control corporativo de los sindicatos. Y si bien estos sindicatos corporativos ya no cumplen con la funcionalidad electoral de antaño, sin duda continúan siendo pieza clave para el abatimiento salarial y de las condiciones laborales que han padecido los trabajadores en los últimos veinticinco años. La alternancia tampoco significó fin a los privilegios y a la corrupción, materiales preciados con los que se tejen las complicidades entre poder económico y poder político.

Para el mantenimiento de esas complicidades y privilegios, era necesario romper con el único acuerdo de la clase política plasmado en la reforma electoral de 1996: el respeto al voto ciudadano. Ese rompimiento se fraguó en el gobierno de Vicente Fox; primero con el desafuero de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno del Distrito Federal para intentar sacarlo de la contienda presidencial de 2006 –intento fracasado gracias a la magna movilización popular–, y después por su injerencia en la campaña electoral.

Así, es evidente que la democracia formal se convirtió en un avance político precario frente a la necesidad de dar vida a un régimen auténticamente democrático que permita resolver los graves problemas sociales del país, y es evidente también que la derecha está haciendo todo por desacreditar esos avances y con ello abrir el camino a la política de mano de dura. En su último año de gobierno, Vicente Fox aplicó esa política de manera sistemática como respuesta a movimientos laborales y populares. Me refiero a las graves represiones sufridas por los trabajadores mineros de Sicartsa en Michoacán, por los pobladores de Atenco, y por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Ahora, a pocos días de iniciado el gobierno calderonista, esa política de mano dura se hizo patente con la detención y envió a una prisión de alta seguridad del principal dirigente de la APPO, minutos antes de trasladarse a la Secretaría de Gobernación en búsqueda de iniciar el diálogo con el nuevo gobierno.

Además, dentro de las primeras acciones de Felipe Calderón, también se encuentra el operativo de desplegar el ejército en Michoacán para combatir la inseguridad pública desatada por el narcotráfico (más de quinientas ejecuciones en 2006). Cuánto de esas medidas que pretenden extenderse a otras regiones, pueden ser efectivas sin una labor de inteligencia eficaz y de limpieza de los cuerpos policíacos, es una interrogante que queda en el aire. Lo cierto es que a la política de violación de derechos humanos que se extiende en el país, estos despliegues de fuerza son muy funcionales al propósito de legitimar la presencia de las fuerzas armadas en las calles y el virtual estado de excepción que se crea en su entorno. De ahí la petición del Ejecutivo

Federal a la Cámara de Diputados de aprobar un significativo aumento de recursos presupuestales para 2007 en los ramos de Defensa Nacional y Seguridad Pública, en detrimento de prioridades sociales como la educación.

Sin duda, apenas inaugurado el respeto a la voluntad popular que dio vida en 2000 a la primera alternancia política en el país, esa conquista se convirtió inmediatamente en un obstáculo para continuar con una política de privilegios al capital financiero internacional, a la inversión extranjera directa y a los capitales nacionales asociados, que mantiene a la economía mexicana en el cuasi-estancamiento. Al insuficiente crecimiento económico, se suma el fuerte deterioro en las condiciones de vida de la población en tanto persisten los salarios de miseria; y los empleos que se generan, además de su baja calidad, son insuficientes para absorber a 1,25 millones de jóvenes que cada año tratan de incorporarse al mercado de trabajo. Esta política económica excluyente requiere de personeros de la derecha para garantizar su continuidad, la que se vio claramente amenazada por el crecimiento en las preferencias electorales por Andrés Manuel López Obrador.

Y fue ese temor a perder sus privilegios, lo que provocó el desarrollo de la campaña del miedo contra la candidatura de López Obrador, campaña desarrollada no solamente por el ex presidente Vicente Fox y el PAN, sino también por los grandes grupos empresariales. A ello es necesario agregar el despliegue de un ejército de *mapaches* electorales el día de la votación, comandados por la líder real del poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes manipularon las boletas electorales para alterar los resultados a favor de Calderón Hinojosa. Ello fue posible por la ausencia de representantes de la CPBT en las casillas, sobre todo en la región norte del país. Una falla organizativa lamentable.

Así, es claro que en el contexto de la larga crisis abierta a partir de 1988, la derecha se ha reorganizado para impedir el arribo de la izquierda al poder y con ello el cambio de política económica y la plena democratización del país. En 1994 fue el caso de una contienda electoral inequitativa, como lo reconoció el propio candidato priísta triunfador, Ernesto Zedillo. En 2000, fue la combinación de un candidato carismático con recursos de dudoso origen para su campaña captados por una organización paralela denominada Amigos de Fox, cuyas ilegalidades fueron encubiertas por la complicidad del PRI. Y ahora, para que en 2006 la derecha retuviera el poder, además de la injerencia del ex presidente Vicente Fox a favor del candidato de su partido en la contienda electoral, fueron muchos los factores que hicieron de esa campaña todo menos una contienda democrática y legal. Muy lejos quedaron los principios constitucionales de «certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, y objetividad» como rectores de las elecciones. Si antes del 2 de julio la transición democrática en México se encontraba estancada, con el fallo del TEPJF dicha transición quedó secuestrada.

## La ruptura del pacto social

En la raíz de esta larga crisis de fin de régimen, se encuentra la ruptura del pacto social que emergió de la Revolución Mexicana, que se plasmó en la Constitución de 1917 y que estuvo vigente hasta 1982; un pacto corporativo cuya novedad con relación al siglo XIX fue el reconocimiento de los derechos sociales de los trabajadores y una política de distribución de beneficios –en un mar de profundas desigualdades sociales–, pero también la negación de los derechos políticos, lo que dio vida a un régimen autoritario que todavía se niega a morir. No en balde, pues, gracias a ese autoritarismo fincado en la ausencia de libertad y democracia sindicales, los poderosos grupos económicos han obtenido pingües ganancias, y la clase política ha podido reproducirse en un mundo de prebendas, corrupción y privilegios.

Muy lejos ha quedado la experiencia del milagro económico mexicano, aquel que se expresó a partir de 1950 a lo largo de tres décadas con niveles de crecimiento del 6% promedio, y sin inflación durante los primeros veinte años. No es casual que en el contexto de los países latinoamericanos, solo en México se haya registrado un fenómeno semejante. Su explicación se encuentra en ese pacto social corporativo que emergió de la primera revolución social del siglo XX, la Revolución Mexicana. Pero ese pacto se rompió en 1982 con el inicio de las políticas neoliberales. Veinticuatro años después, el reto de la izquierda es el de lograr articular el pacto democrático del siglo XXI, en otras palabras, el de culminar la transición democrática amenazada cada vez más por el avance de la derecha.

## La resistencia pacífica

Frente a los resultados electorales del pasado 2 de julio, la estrategia delineada por los partidos políticos que apoyaron la candidatura de López Obrador –Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Convergencia Democrática–, hoy agrupados en el Frente Amplio Popular (FAP), se centra en la negativa a reconocer el gobierno de Felipe Calderón y en desarrollar un movimiento de resistencia pacífica, encabezado por aquél. Para tal efecto, el pasado 20 de noviembre, día en que se celebra el inicio de la Revolución Mexicana, López Obrador tomó protesta como presidente legítimo, junto con su gabinete; decisión que surgió de la Convención Nacional Democrática realizada el 15 de septiembre.

Son muchos los retos que este movimiento de resistencia pacífica empieza a enfrentar. El primero de ellos surge de los ámbitos en los que se despliega. Uno de ellos es la organización del movimiento social en las calles encabezado por López Obrador a partir de una gira constante por todo el territorio nacional que intenta ser la expresión de una presidencia itinerante, y que se articula en torno al rechazo a las instituciones caducas y antidemocráticas.

El otro ámbito se encuentra en la relación con el gobierno espurio al que están obligados los gobernantes perredistas en sus entidades federativas y los legisladores del FAP en el Congreso de la Unión. El desafío es saber articular la lucha que se expresa en la calle, con la que se hace patente en los ámbitos de gobierno, pero sin duda ello presenta sus dificultades. En la gran mayoría de los medios de comunicación, por supuesto, se está apostando por la fractura entre los dos frentes de lucha; sin duda se trata de una opinión interesada en el fracaso del movimiento de resistencia pacífica.

### **El primer revés**

En las semanas previas al 1ro. de diciembre, y a partir de las decisiones tomadas en la Convención Nacional Democrática, se hizo pública la decisión de impedir la toma de protesta de Felipe Calderón, un requisito marcado por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que de no haberse cumplido, habría abierto una seria crisis constitucional que en términos legales, seguramente, habría resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que en términos políticos habría significado un duro golpe para el flamante presidente. Nada de ello ocurrió, porque después de tres días en los que la tribuna de la Cámara de Diputados fue tomada por panistas y perredistas, salpicada con golpes y trifulcas, finalmente la ceremonia se realizó en el recinto legislativo y en los términos constitucionales, incluso con la presencia del presidente saliente Vicente Fox.

Desde mi punto de vista ese desenlace significó un serio revés para la estrategia de la resistencia pacífica. O no se tuvo la decisión suficiente para impedir, en efecto, esa toma de protesta, o esa decisión fue ineficazmente implementada. Cualquiera que haya sido el caso, lo cierto es que se desperdició una coyuntura privilegiada para hacer valer la fuerza de casi quince millones de votos y demandar un acuerdo transparente de cara a la nación con vistas a lograr avances democráticos significativos, o al menos para emplazar en público a la derecha a su cumplimiento. No fue el caso. Y aunque posiblemente el mío sea un planteamiento ingenuo, me parece que un movimiento democrático requiere del análisis colectivo y ágil de la cambiante realidad, que le permita tomar decisiones que muchas veces pueden ser distintas a las consignas adoptadas semanas o meses atrás. Uno de los retos del movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador es precisamente el de desarrollar esa capacidad.

### **Una derecha de dos cabezas**

Por otra parte y sobre las condiciones en que se desarrolla este movimiento, es necesario tener presente la función del PRI en el ámbito político-legislativo. Lo ejemplifico con su actuación en la coyuntura de esos tres días. La

toma de protesta de Felipe Calderón no habría sido posible sin la anuencia del PRI para lograr el quórum necesario a fin de realizar la sesión de Congreso General. Con apenas el 22% de la votación, pero con un PAN que no controla el poder legislativo, el PRI ha sabido vender caro su reconocimiento a Felipe Calderón. En esta coyuntura, una de las monedas de cambio entre ambos partidos ha sido el sostenimiento del gobernador priísta de Oaxaca, Ulises Ruiz, expresión de los poderes caciquiles de esa entidad y quien ha enfrentado prolongadas movilizaciones populares que exigen su destitución. Ello explica que no se haya cumplido con la demanda de la destitución de Ulises Ruiz, o con la declaratoria de la desaparición de poderes en esa entidad federativa por parte del Senado de la República (para lo cual se requiere la anuencia del PAN), medidas que habrían abierto el camino a la distensión política, y que, como ya señalé, apenas tres días después de la toma de protesta de Calderón, Flavio Sosa, el principal líder de la APPO fuera detenido de manera alevosa por el gobierno federal.

Pero más allá de la coyuntura, el apoyo del PRI al gobierno de Calderón, no tendría que sorprender a nadie, pues es una expresión más de la alianza histórica entre ambos partidos, la cual se inició en el sexenio de Salinas de Gortari, cuando el PAN, a pesar de la combativa oposición al fraude priísta de su entonces candidato presidencial Manuel Clouthier, legitimó al gobierno salinista a cambio de que se le reconocieran sus triunfos electorales. Fue el período de las tristemente célebres *concertaciones* entre ambos partidos, en cuyos objetivos estaba, además de otros, la desaparición del PRD del panorama político, para dar vida a un cómodo bipartidismo de acuerdo con el modelo estadounidense.

Esa alianza PRI-PAN que perdura hasta nuestros días, es la que en buena parte explica la capacidad de los gobiernos mexicanos para –sin dictaduras de por medio–, haber aplicado de manera acelerada las reformas estructurales delineadas en el Consenso de Washington por el Banco Mundial y el FMI, incluida la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN). Por eso es bueno recordar que, aunque de distinto origen histórico, en México los intereses de la derecha están representados en dos partidos: PRI y PAN.

### **El resurgimiento de la guerrilla**

Por otra parte, uno de los riesgos para el futuro del movimiento de resistencia pacífica y del desarrollo democrático del país, es el resurgimiento de grupos guerrilleros que se ha manifestado en las últimas semanas. El descrédito de la vía electoral que emerge de un proceso electoral amañado en todas sus fases, genera, por supuesto, condiciones propicias para ese resurgimiento. El escritor Carlos Montemayor habla del fenómeno en términos de una

«guerrilla recurrente», porque, en efecto, en México existe una tradición histórica de este tipo de enfrentamiento que viene desde la revolución de independencia, pasa por la lucha contra la intervención francesa y después durante la revolución mexicana, para resurgir como guerrilla socialista a partir de 1965. El hecho es que los movimientos guerrilleros se repliegan, pero no desaparecen.

En el pasado mes de noviembre, una coalición de cinco organizaciones armadas hicieron acto de presencia en el Distrito Federal con el estallido de poderosas bombas en la sede nacional del PRI, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en dos bancos. Sin duda esos grupos tienen un origen real, pero también es alta la probabilidad de que sean manipulados e infiltrados desde el gobierno o desde grupos de poder fácticos, con el fin de, mediante provocaciones, intentar justificar políticas represivas o situaciones de ingobernabilidad para beneficio de intereses particulares.

En cualquiera de los casos, su proliferación dificultaría la organización del movimiento democrático por la vía pacífica y legal, aunque también es cierto que un movimiento de resistencia pacífica como el encabezado por López Obrador podría neutralizar la generalización de las organizaciones armadas. Sin duda, en la coyuntura de 1988 el crecimiento de la guerrilla en México pudo contenerse por el esfuerzo de organizar y hacer del PRD una opción para el desarrollo democrático del país y el cumplimiento de las demandas populares. Se trata de un desafío que se renueva en 2006 y que no puede ser soslayado por el movimiento de resistencia pacífica.

### **El desafío de democratizar al PRD**

Pero regresemos a la resistencia pacífica encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Sin duda, mantener la movilización ciudadana en torno a símbolos que hacen evidente la fractura social y política generada por la elección presidencial, y sobre todo la ilegitimidad del presidente electo, puede ser una estrategia adecuada para resistir al continuismo de la derecha impuesto en alianza con el PRI. Sin embargo, esa estrategia tendría que incluir la decisión del PRD, el principal componente del FAP y el más importante partido de la izquierda mexicana, de superar sus divisiones internas y resolver el reto de su democratización, lo cual ha eludido desde su nacimiento en 1989. A esa situación ha contribuido la presencia de liderazgos carismáticos y caudillistas, como el de Cuauhtémoc Cárdenas, primero, y ahora el de López Obrador, pero, sin duda, también está presente la incapacidad de la izquierda mexicana de trascender sus intereses de grupo, los cuales se reproducen en una convivencia al interior del PRD que muy lejos está de ser democrática.

Estos faccionalismos de la izquierda perredista, por supuesto, han tenido el costo político de alejarse de las causas sociales y ciudadanas. La paradoja de que ese distanciamiento de la sociedad se combine con crecimiento electoral, se explica precisamente por liderazgos como el de López Obrador que trascienden al partido. Lograr la convivencia de una institucionalidad democrática con la presencia de esos valiosos dirigentes, seguramente contribuiría al fortalecimiento del movimiento social que en diversos momentos y a lo largo de los últimos veinticinco años se ha hecho presente con gran energía en la defensa de un proyecto alternativo de nación. Por desgracia, hasta ahora la izquierda perredista ha preferido subsistir al abrigo de estos liderazgos antes que resolver el reto de construir un partido de izquierda, democrático y moderno.

Y sin embargo, la complejidad de la situación nacional exige plasmar la vitalidad de los movimientos sociales en un partido democrático. Dejar todo a la relación directa entre las masas y el líder puede mantener un movimiento opositor, pero no necesariamente significa sentar las bases para la democratización del régimen político en el país. La refuncionalización del régimen priísta del que ha hecho gala el PAN en el poder, es también un fantasma que ronda a la izquierda mexicana.

### **A manera de conclusión**

El futuro del movimiento de resistencia pacífica en contra de la imposición de la derecha le exige tener claro que la diferencia entre un proyecto de izquierda y otro de derecha, no es el cambio de siglas en el poder, tampoco el mayor o menor tamaño de las migajas que se reparten desde arriba para atemperar la miseria, sino el de la distribución del poder hacia la sociedad. Desde la izquierda ello tendría que hacernos consecuentes con el hecho de que la democracia electoral no es suficiente para cambiar de régimen político y hacer realidad un proyecto económico incluyente y soberano, y que en cambio esos objetivos requieren de una apertura a la democracia participativa. Esto se lograría no solamente con la aprobación de figuras de democracia directa como el plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato, sino, sobre todo, otorgando la libertad y la democracia sindicales y también el derecho a la autonomía de los pueblos indios como sujetos de pleno derecho. Estos serían los principales ejes del pacto democrático del siglo XXI en torno a los cuales habría que acrecentar la fuerza política de los quince millones de votos depositados en las urnas del pasado 2 de julio a favor del cambio en el país.

Si el movimiento de resistencia pacífica no se hace cargo de estos desafíos, y de manera particular el PRD, entonces difícilmente se tendrá la

capacidad para detener el avance de la derecha en México, que como a la Hidra, cada vez le surgen más cabezas. Que en esa perspectiva la izquierda recupere la experiencia de lucha histórica desarrollada en el siglo xx, es lo menos que podemos exigir.

ROSA ALBINA GARAVITO ELÍAS es profesora investigadora del Departamento de Economía de la UAM-A y Consejera Nacional Emérita del Partido de la Revolución Democrática. Directora fundadora de las revistas *Coyuntura* y *El Cotidiano*, del Instituto de Estudios de la Revolución Democrática y de la UAM-Azcapotzalco, respectivamente. Recibió el Premio Nacional de Periodismo en 2002, otorgado por el Club de Periodistas de México, A. C., por sus artículos publicados en *El Universal* durante el año 2001.



# México: choque de trenes. Entre el autoritarismo estatal y la resistencia popular

LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO y GILBERTO LÓPEZ Y RIVAS

## **Primero de diciembre: la *blitzkrieg***

Lo que debió ser una fastuosa boda terminó convertido en un simple y apresurado matrimonio en Las Vegas. Este 1ro. de diciembre, el acto más importante en la liturgia laica de la República Mexicana, el cambio de titular del Poder Ejecutivo, terminó transformado en una ceremonia acelerada, torpe y desordenada.

En pocos minutos Felipe Calderón llegó a un Congreso de la Unión sitiado por el Estado Mayor Presidencial, rindió protesta como presidente de la República, estuvo a punto de que su antecesor le impusiera la banda, tuvo que ser auxiliado por un militar para que esta se quedara en su lugar, desairó a los cadetes emplazados para rendirle honores, no pudo dar un mensaje a la nación y puso pies en polvorosa. Todo un tiempo récord para el registro del libro *Guinness*.

Tanta prisa en la toma de posesión del jefe del Ejecutivo no es un asunto secundario. Los rituales importantes de la vida pública como los de la religiosa requieren de tiempo para su desarrollo. Como momentos trascendentes que son, aspiran a ser instantes fundacionales de un poder soberano, lugares de comunión entre el mandatario y los ciudadanos. La investidura de una persona común y corriente en presidente de la República es un rito laico por el cual queda constituido en la jerarquía de orden, con la potestad para ejercer funciones que solo él puede desempeñar. Nada más anticlimático que el apresuramiento en una circunstancia así. ¿Qué pensar de una misa, un matrimonio o un desfile militar que duraran tan escasos minutos?

Tanta prisa no provino de que Felipe Calderón no quisiera hacer las cosas de otra forma sino que no pudo hacerlas. La única manera en la que le fue posible rendir protesta como presidente de la República fue por medio de una *blitzkrieg*, la táctica militar para aniquilar rápidamente al enemigo, empleando todos los medios conducentes a ese fin.

La *blitzkrieg* contó con el apoyo de un impresionante despliegue policial y militar. Rejas, vallas, hombres armados tuvieron que formar una burbuja de contención para aislar y resguardar a Felipe Calderón de la ira de quienes lo consideran un usurpador. Las acciones ejecutadas por el Estado Mayor Presidencial rebasaron, con mucho, las medidas elementales de seguridad con las que hay que proteger a un mandatario.

El *operativo* contó, también, con un enorme aparato de propaganda como respaldo para maquillar la realidad, al punto de tenerse que hacer una verdadera cirugía plástica para «embellecerla». Los camarógrafos de Ceprope –la institución gubernamental responsable de la emisión televisada de la ceremonia– tuvieron que hacer milagros para que las imágenes y el audio no reprodujeran el clima de encono y animadversión que se vivía dentro del palacio de San Lázaro en contra de Felipe Calderón. A los locutores gubernamentales del acto les creció la nariz más que a Pinocho. Minutos después de que los legisladores se hubieran trenzado a puñetazos y más de un centenar de gargantas gritaran «¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Felipe ya cayó!», la conductora oficial del ritual para la televisión, Diane Pérez, comentó que la toma de posesión se había realizado en completa calma y que el nuevo mandatario había empezado su gestión «con el pie derecho».

El que Felipe Calderón, con todo el apoyo de las instituciones tras él, haya tenido que recurrir a una *blitzkrieg* para tomar posesión es un indicador de la debilidad con la que asume la presidencia. Un mandatario fuerte no tiene que recurrir a acciones fugaces de fuerza para presentarse ante la nación. No requiere de «innovar la tradición» como lo hizo la noche del 1.º de diciembre en Los Pinos, en una ceremonia hechiza, patética y aciaga.

La debilidad de Felipe Calderón tiene que ver con su ilegitimidad de origen. Llegó allí por medio de un escandaloso fraude electoral. Y conforme pase el tiempo esta será la versión que recoja la historia. Porque como sucedió con el movimiento estudiantil-popular de 1968, con el fraude electoral de 1988, con la masacre de Acteal en 1996 y con tantos otros hechos ignominiosos del poder que se difundieron entre la opinión pública en los meses iniciales a que sucedieron mediante una intensa campaña de desinformación para desvirtuar lo realmente acontecido, conforme pasen los meses, más y más ciudadanos se convencerán de que Calderón llegó allí violentando la voluntad popular. Esa será la verdad histórica.

La flaqueza del nuevo mandatario salta a la vista con solo ver su gabinete. Están allí los tecnócratas de siempre y los hombres y mujeres que operan como alfiles de los poderes fácticos. Es un gabinete de compromisos de campaña, que le deja al presidente muy poca capacidad real de hacer, más allá de administrar los nuevos negocios. Un gabinete para llevar adelante una propuesta de gobierno que es, tan solo, más de lo mismo: más seguro popular, más oportunidades, la obligada reforma electoral de todo sexenio...

Pero la debilidad del michoacano se hace aún más evidente al hacer el recuento de los millones de hombres y mujeres que durante seis meses se han movilizadado en todo el país para denunciar la usurpación y para luchar por una verdadera democracia. Es una marea que no cesa, que anuncia una tormenta mucho mayor. Esa protesta, es cierto, no pudo evitar que el nuevo mandatario tomara las riendas del gobierno. Logró, en cambio, despojarlo de sus ropas y mostrarle al mundo que el emperador está desnudo. La *blitzkrieg* no hace sino confirmar la enorme debilidad del nuevo inquilino de Los Pinos.

### **Felipe Calderón: presidente espurio**

Con justificaciones legalistas y una interpretación anodina y contradictoria del derecho, la Constitución y las leyes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) actuó conforme al libreto preparado por quienes desde la cúspide del poder económico, político y militar decidieron imponer a Felipe Calderón como presidente de la República. Se consumó el «golpe de Estado técnico» o «ruptura del orden constitucional» que trastoca toda legalidad, legitimidad y credibilidad de las instituciones «democráticas» y que seguramente llevará a millones de mexicanos a continuar una resistencia cívica en proceso de construcción y de incierto futuro, pero de obligada opción por congruencia ética y política.

Se expresa así la crisis institucional que conlleva la mundialización capitalista neoliberal, con estados autoritarios y corruptos, coludidos con las redes corporativas y, en muchos casos, el crimen organizado, y con tendencias estructurales a violentar sistemáticamente sus fundamentos de legalidad y estado de derecho y, por ende, a vaciar de contenido los procesos democráticos enaltecidos por los ideólogos del capitalismo neoliberal.

Ana María Rivadeo, en su libro *Les patria: nación y globalización*, describe lo que considera Estado nacional de competencia como una nueva forma del Estado autoritario. «Esta se articula en torno a una desdemocratización de las instituciones liberal-democráticas, impuesta por medio del recurso de “los hechos” que exige la competencia capitalista transnacional. O sea, que esa desdemocratización se apoya, en lo esencial, en el vaciado, la ineficacia y la insignificancia inducidas de las instituciones liberal-democrá-

ticas. Estas torsiones no involucran, sin embargo, ningún retroceso o debilidad del Estado. El Estado nacional de competencia es un vigoroso interventor, tanto en el plano económico como en las dimensiones política, social, ideológica, cultural y militar; el neoliberalismo es una doctrina exacerbadamente estatista; y el “libre mercado” es una construcción político-estatal instituida y sostenida, asimismo, por la coerción y la represión.»<sup>1</sup>

Este autoritarismo se ha dejado sentir en todo el país con el creciente clima de militarización abierta y encubierta, la sistemática criminalización de la disidencia y los rumores e informaciones sobre preparación de grupos paramilitares y parapolicíacos al servicio de la represión gubernamental y la ultraderecha. Los ataques de sicarios y fuerzas de seguridad contra integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), con su secuela de muertos, heridos y detenidos; así como las amenazas y agresiones contra adherentes de *la otra campaña*; los actos de formal prisión contra los dirigentes de Atenco; y las denuncias de provocaciones de las juntas de buen gobierno en Chiapas son hechos recientes de una política represiva generalizada que Felipe Calderón considera de «mano firme».

El poder que impuso a Calderón está subestimando la reacción de importantes sectores del pueblo mexicano y pretende que el desgaste y las campañas mediáticas se harán cargo de la oposición contra la presidencia impuesta. Sin embargo, existen al menos cuatro formas político-organizativas que plantean una lucha frontal contra el nuevo gobierno: 1) un movimiento ciudadano de corte democrático popular bajo la conducción de Andrés Manuel López Obrador y apoyado por la estructura burocrática, de gobierno y representación parlamentaria de los partidos de la coalición Por el Bien de Todos; 2) la «comuna de Oaxaca» que se origina en una movilización gremial y ante la represión del gobernador, se transforma en una experiencia de gobierno popular con representación de diversos sectores sociales y de los pueblos indígenas, con un alcance histórico todavía no valorado en todas sus dimensiones por la simultaneidad con el movimiento cívico; 3) el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y *la otra campaña*, que pasan por momentos de debate y definición, pero que representan una fuerza política cuyos fundamentos descansan en las experiencias de los procesos autonómicos del «mandar obedeciendo» y que intenta desde una perspectiva anticapitalista establecer un polo popular nacional que logre la hegemonía de un poder constituyente; y 4) los grupos armados con un proyecto socialista y una estrategia de guerra popular prolongada que implica acumulación de fuerzas, autodefensa y sobrevivencia hasta alcanzar el poderío suficiente para una fase nacional ofensiva.

<sup>1</sup> Ana María Rivadeo: *Lesá patria: nación y globalización*, México, UNAM, 2003, pp. 310-311.

## La segunda muerte de la Revolución Mexicana

Fallecida de muerte natural hace ya muchos años, el ex presidente Vicente Fox decidió, en su último año de gobierno, volver a matar la memoria de la Revolución Mexicana. Para cometer el homicidio no cambió el nombre al monumento levantado en su memoria, ni mandó demoler las estatuas de sus caudillos, ni optó por hacerla desaparecer de los libros oficiales de historia patria. Su técnica fue más sencilla y aparentemente menos escandalosa: decidió suspender el desfile deportivo con el que cada año el jefe del Ejecutivo le rendía honores.

Otros le siguieron en su vocación homicida. El panista Jorge Zermeño, presidente de la Cámara de Diputados, para borrar los restos de tan incómodo pasado, mandó quitar del Palacio de San Lázaro una exposición fotográfica de Francisco Villa. Las imágenes del Centauro del Norte cabalgando en el recinto legislativo resultaron intolerables para el diputado conservador. Según él, la Revolución Mexicana debe desaparecer del memorial cívico. El 20 de noviembre debe conmemorarse a San Roque y San Octavio, y a nadie más.

Sin embargo, de la misma manera que sucede en la fiesta brava con algunos toros que aparentemente heridos de muerte reviven cuando el puntillero quiere rematarlos, así, la pretensión del presidente de la República y del legislador panista de acabar con la fecha histórica, parece haberla traído de ultratumba. Este 20 de noviembre el aniversario luctuoso estuvo más vivo que nunca.

Ciertamente, en esta resucitación tuvo también mucho que ver Andrés Manuel López Obrador. No es poca cosa que ese mismo día, en el Zócalo de la ciudad de México, el *Peje* tomó posesión como presidente legítimo. En la hora de la disputa por la historia, López Obrador decidió reivindicar la transformación social de 1910-1917 construyendo una especie de maderismo social que luche contra la usurpación de la Presidencia de la República por parte de Felipe Calderón.

Pero, ¿acaso eso es razón suficiente para querer matar nuevamente la Revolución Mexicana? No, no lo es. Las causas son otras y no solo de coyuntura. Por principio de cuentas la decisión provino de que Vicente Fox es un hombre de derecha que decidió salir del clóset. Y la única revolución con la que el mandatario se sintió a gusto es la «espiritual universal para tener la oportunidad de ser felices, de vivir mejor, de tener menos dolores y penas» a la que convocó inmediatamente después de su triunfo electoral del año 2000.

Al pensamiento conservador que representa el antiguo mandatario le incomoda la Revolución Mexicana. Le disgustan sus conquistas, aunque hayan sido disminuidas. La reforma agraria, la educación pública gratuita, laica y obligatoria, los derechos laborales, la propiedad estatal del petróleo y su rectoría de la industria eléctrica le resultan inadmisibles.

En el nombre de este proceso histórico perviven las conquistas sociales y actividades económicas que se quiere acabar y desamortizar. A pesar de su primera defunción, la Revolución Mexicana sigue siendo un formidable dique ideológico contra las pretensiones privatizadoras del capital trasnacional, los organismos financieros multilaterales y la tecnoburocracia. Acabar con ella, con sus restos mortales, sigue siendo una operación fundamental para preparar el asalto a los últimos vestigios del Estado de bienestar, las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, el petróleo y la electricidad.

La vertiente popular de la Revolución Mexicana, el zapatismo, el villismo y el magonismo, sigue siendo una fuente de identidad, articulación y legitimidad para las expresiones de resistencia de los trabajadores del campo y la ciudad en todo el país. El enorme malestar social que sacude el territorio nacional mira atrás para actuar hacia delante. En estas corrientes revolucionarias de comienzos del siglo xx, ha encontrado un vehículo sustantivo para insertar su resistencia en la volátil arena política de principios del siglo xxi, apoyándose simultáneamente en sus fuertes lazos con el pasado y en su capacidad de innovación. Para muchas de ellas, la Revolución no es solo pasado sino futuro.

La segunda muerte de la Revolución Mexicana caminó de la mano de la militarización del Palacio de San Lázaro para «facilitar» la toma de protesta de Felipe Calderón como presidente de la República. No fueron hechos aislados. En ambos se resume el triunfo de la razón de la fuerza sobre la fuerza de la razón, tan caro a la derecha mexicana.

### **Paradojas de la resistencia**

A pesar de no haber podido lograr su principal objetivo, es decir impedir la toma de posesión de Felipe Calderón, el movimiento contra el fraude electoral mantuvo durante más de cuatro meses una vitalidad y una capacidad de convocatoria notables. Los fuertes golpes que sufrió, lejos de mermarlo parecieron robustecerlo. Y, pese a que perdió la batalla legal, ganó dos grandes escaramuzas simbólicas en la disputa por el calendario patrio, nada despreciables en el pleito por la legitimidad: 1ro. y 15 de septiembre. El 1ro. de septiembre impidió que Vicente Fox rindiera su discurso a la nación. El 15 obligó al mandatario a dar el Grito de la Independencia fuera de la ciudad de México.

A pesar de que los medios de comunicación electrónicos le cerraron espacios, ha encontrado la forma de transmitir su mensaje. No obstante la defección de algunos intelectuales que originalmente apoyaron a Andrés Manuel López Obrador, ha mantenido viva la adhesión de una significativa parte de la comunidad intelectual y académica. La impopularidad que el plantón en Reforma le provocó entre sectores medios no mermó las simpatías entre su base de apoyo principal.

El movimiento cuenta con una sorprendente legitimidad. Por lo pronto, más allá de su desenlace final, ha ganado ya la batalla por la historia. En unos cuantos años su versión de las elecciones de 2006 será «lo realmente sucedido». De hecho, en muchos lugares, dentro y fuera del país, se da por sentado que Felipe Calderón triunfó merced a un gran fraude electoral.

El movimiento rebasó su carácter de protesta contra el fraude y parece encaminarse a la conformación en una coalición antioligárquica y en lucha por la transformación de las instituciones, pero no contra el neoliberalismo. La Convención Nacional Democrática (CND) proporcionó al movimiento la visión y el mandato para emprender la lucha por el cambio institucional. Su realización, con más de un millón de delegados de todos los estados de la República, constituye un acontecimiento que no es posible ignorar o minimizar. El rechazo a una presidencia espuria y el reconocimiento de una legítima tienen significados de corto y largo alcance que indudablemente inciden en la lucha del pueblo mexicano por la reconstitución de la nación a partir de un proyecto democrático-popular. Permitió también un momento de encuentro entre la movilización social y la representación política institucional en el congreso de los partidos que hoy integran el Frente Amplio Progresista.

Es necesario caracterizar la composición de la CND ya que no obstante ser una iniciativa de Andrés Manuel López Obrador –aceptada renuementemente por los partidos de la coalición Por el Bien de Todos (ahora Frente Amplio Progresista)–, sería un error identificarla o reducirla a estos referentes. Como en la lucha contra el desafuero, en la CND, además de los militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) confluyen ciudadanos sin partido, demócratas, nacionalistas, organizaciones gremiales, diversos colectivos de excluidos por el neoliberalismo, así como grupos de izquierda no institucionalizada que han resuelto integrarse a este proyecto. Indudablemente el componente ciudadano y de la sociedad civil sería el más significativo de todos, dada la naturaleza de la lucha electoral que origina la CND, aunque la resistencia cívica esté derivando hacia reivindicaciones de mayor rango en los campos económicos, sociales y políticos que proponen incluso el establecimiento de un nuevo poder constituyente y la fundación de una nueva República.

Es imprescindible que la Convención busque la convergencia con las izquierdas y los movimientos sociales, a partir del respeto a los caminos específicos que cada quien decida recorrer y de la coincidencia en un programa mínimo que pudiera incluir: luchar firmemente contra la presidencia ilegítima de Felipe Calderón y contra la continuidad del modelo de mundialización capitalista neoliberal que ha ocasionado el actual desastre nacional; actuar en defensa de la soberanía popular y nacional sobre el patrimonio estratégico, territorial, cultural y de la planta productiva de la nación; lograr la libertad de todos los presos políticos y el fin de la impunidad para

los genocidas y torturadores; cesar la criminalización y persecución de los luchadores sociales; poner en práctica los acuerdos de San Andrés y, en consecuencia, establecer un estado de autonomías que garantice el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas; mantener las conquistas sociales, laborales y democráticas que han sido logradas por la lucha de generaciones enteras de mexicanos.

No está claro aún si esta relación entre acción en las calles y representación parlamentaria y gobiernos locales podrá mantenerse o, por el contrario, como ha sucedido una y otra vez en el pasado, los legisladores y mandatarios actuarán de acuerdo con sus propios intereses.

Pero esta contradicción no es única. El movimiento plantea alcanzar su objetivo estratégico, el cambio de régimen y la creación de una cuarta República, sin convocar un nuevo constituyente y sin una nueva constitución. Es decir, quiere un cambio sin ruptura. Sin embargo, la dinámica del movimiento desde abajo es muy otra. Su vocación contra el neoliberalismo y su radicalidad en la acción son evidentes. El viejo pacto social ha sido roto por el fraude y su reconstitución requiere mucho más que un mero cambio de régimen.

De la misma manera, no es poca cosa que un movimiento reformador que proclama la necesidad de una nueva política esté conducido por la vieja clase política de izquierda, acostumbrada a los acuerdos cupulares y al gradualismo inmovilizador. Tampoco que en una coalición que busca refundar la República la presencia juvenil sea testimonial y escasa. Los centros de educación superior, en lo general, y la UNAM, en lo particular, han sido un factor clave en la lucha por la democracia en México, pero en esta ocasión su presencia en las jornadas de lucha (y durante la campaña electoral) ha sido limitada.

Asimismo resulta paradójico que un movimiento que reivindica una democracia radical tenga un liderazgo vertical y unipersonal. No es un hecho insignificante que en una movilización de esta naturaleza, el peso político en la toma de decisiones de las organizaciones sociales sea tan pequeño; conforme pase el tiempo la continuidad de la coalición dependerá en parte de sus estructuras y recursos.

Hasta hoy la autoridad de López Obrador y la gravedad de la situación política han creado una situación en que estas contradicciones han pasado a segundo plano, ante la necesidad de responder con rapidez al fraude y la imposición. La emergencia ha hecho de estos asuntos una cuestión aplazable. Coaliciones populares de orientación progresista en América Latina tienen en su interior contradicciones parecidas a las que vive la resistencia civil en México.

Pero no hay plazo que no se cumpla. Tarde o temprano, si el movimiento quiere convertirse en una fuerza transformadora de largo aliento, necesitará resolver las paradojas de su origen. De no hacerlo, el formidable impulso que tomó en su despegue podría agotarse, asfixiado por las prácti-



cas y los vicios políticos que hicieron del PRD la caricatura de lo que quiso ser en su fundación.

## El nuevo éxodo zapatista

*La otra campaña* zapatista mostró esta nueva conflictividad social. Como iniciativa se desarrolló por afuera de los canales de la política institucional, al margen y en contra de las reglas del juego que regulan la competencia de las élites por acceder al gobierno. Se diferenció claramente de la clase política establecida. Se movió de acuerdo con sus propios tiempos y su agenda.

Si el gobierno federal no trató de impedir la salida de los zapatistas de Chiapas no es porque la gira le sirviera para contrarrestar el número de votantes a favor de Andrés Manuel López Obrador, sino porque no puede evitarla. El EZLN ha conquistado el derecho a hacer otra política dentro del territorio nacional sin renunciar a nada a cambio. Afirmar que la administración de Vicente Fox «veía con buenos ojos» el periplo rebelde es un absurdo sin fundamento.

*La otra campaña* fue una iniciativa antisistémica. La radicalidad de una lucha no tiene que ver con su ilegalidad, sino con su capacidad de impugnar el sistema y construir los sujetos del cambio. El proyecto cuestionó profundamente tanto las mediaciones como los mecanismos de representación política existentes, al tiempo que estimuló la formación de una red nacional de resistencias y solidaridades. Busca modificar las condiciones dentro de las que se mueve el conflicto social, cambiando la correlación de fuerzas a favor del campo popular.

*La otra campaña* prefiguró la formación de una nueva fuerza política que se asume explícitamente como de izquierda, antineoliberal y anticapitalista, claramente diferenciada de los partidos políticos legales existentes. Impulsó un proyecto que apuesta a refundar el país y a elaborar una nueva Constitución, es decir, un pacto político nacional distinto al vigente. Se trata de una estrategia política que teje los reductos de esperanza existentes, pero dispersos. Una acción pública sometida a la sanción, a la crítica, al rumor, al juicio de la multitud.

Como iniciativa política renunció a la ilusión de que en la lucha por la transformación del país hay atajos o soluciones milagrosas, de que la historia la hacen los Mesías o los personajes carismáticos. Imprevisible, capaz para iniciar algo nuevo, hábil en la construcción de alternativas, la propuesta zapatista buscó construir un nuevo movimiento político y social. Rompió así el hechizo de la inacción y remonta el bloqueo mediático al que se le ha querido someter.

*La otra campaña* dio continuidad a las propuestas de acción zapatistas elaboradas desde hace más de tres años y contenidas en el Plan La Realidad-Tijuana. No se trató de una respuesta ante un problema de coyuntura, y

mucho menos, como afirmó Emir Sader, de una acción «ante una ofensiva militar de las fuerzas armadas, que alegaban pretextos de plantaciones de coca en Chiapas [en la que] el EZLN decidió no prestar resistencia militar, y desmovilizó sus juntas de buen gobierno».<sup>2</sup> Los *caracoles* no fueron desmovilizados. Siguen funcionando.

*La otra campaña* apostó a crear una esfera pública no estatal, a trasladar la política fuera del marco estricto del quehacer gubernamental y parlamentario. Profundizó de esta manera el deterioro del monopolio estatal de las decisiones políticas, tendencia descrita ya, hace años, por el teórico Carl Schmitt. Según el politólogo alemán: «El tiempo del Estatismo toca a su fin [...] El Estado como modelo de la unidad política, el Estado como titular del más extraordinario de todos los monopolios, es decir, del monopolio de la decisión política, está a punto de ser destronado.»<sup>3</sup>

A diferencia de la hipocresía de la política institucional, en la que los contendientes se niegan a reconocer que tienen enemigos y los presentan como simples adversarios, mientras por debajo de la mesa se dan patadas y buscan aniquilarse, *la otra campaña* llamó a las cosas por su nombre y se niega a abandonar la noción de enemistad. No hubo en ella falsas civilidades ni cortesías hacia el poder establecido y sus hombres. «Lo justo», ha dicho Marcos, «sería que la gente que asesina, humilla y engañe esté presa, en lugar de quienes luchan por cambiar las cosas para todos.»

Como toda iniciativa política generada desde fuera del *establishment*, *la otra campaña* provocó incertidumbre y malestar. Se le acusó de llamar a la abstención electoral cuando explícitamente dijo que no es abstencionista. Se le pidió que hiciera propuestas programáticas cuando explicó que buscaba que se escucharan las demandas y los reclamos de los sin voz. Se afirmó que el centro de sus críticas es Andrés Manuel López Obrador cuando fueron implacables con la clase política en su conjunto. Se aseguró que al ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar, no se le tocó «ni con el pétalo de una rosa», a pesar de las denuncias contra él.

*La otra campaña* cuestionó explícitamente los poderes fácticos que gobiernan el país. Buscó generar un nuevo sistema de representación desde afuera de los canales institucionales, en un momento en el que en la opinión pública se reconocía la naturaleza excluyente y asfixiante de nuestro sistema político, y se juzga severamente a la partidocracia y su sumisión a los grandes monopolios de comunicación electrónica. Al hacerlo obligó a otros actores políticos a transformar su conducta. Sin ir más lejos, López Obrador debió

<sup>2</sup> Emir Sader: «De la resistencia a la lucha por un mundo posneoliberal o la intrascendencia», <http://www.alainet.org>, 20 de enero de 2006.

<sup>3</sup> Carl Schmitt: «La noción de lo político», *Revista de Estudios Políticos*, no. 132, noviembre-diciembre de 1963, Instituto de Estudios Políticos, Madrid.

modificar su rechazo a presentarse como gente de izquierda a raíz de las críticas rebeldes.

En un momento en el que el reformismo sin reformas provoca nuevas y amargas decepciones, y en el que una nueva izquierda dura, gestada por afuera de las clases políticas tradicionales, ajena a las veleidades del «socialismo liberal», emerge como opción de gobierno en varios países de América Latina, el éxodo zapatista se empeñó en construir una red de relaciones de solidaridad capaz de inventar nuevas oportunidades.

### **Los significados de la APPO**

No es una casualidad que Oaxaca sea el estado de la república mexicana donde tiene lugar una insurrección pacífica cívico-popular de trascendencia histórica en sus formas y contenidos. Iniciada como un conflicto gremial del magisterio enfrentado a un gobierno estatal corrupto y autoritario, el movimiento se transforma, a partir de la brutal represión al plantón de los maestros por parte de los policías y paramilitares del gobernador Ulises Ruiz, en lo que deviene en Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) el 17 de junio de 2006.

Uno de los estados con mayores grados de marginación y pobreza, Oaxaca, es también el territorio que concentra dieciséis pueblos o grupos etnolingüísticos, con sus variantes dialectales, y una extraordinaria riqueza de procesos autonómicos enraizados en la comunidad como núcleo básico de sus formas de organización social, cuya instancia máxima de debate y decisión es precisamente la asamblea comunitaria.

Ya desde el diálogo de San Andrés, una nueva generación de dirigentes e intelectuales indígenas oaxaqueños aportaron su experiencia histórica en la construcción de autonomías, la reconstitución de los pueblos y la elaboración de marcos jurídicos acordes con estas reivindicaciones y realidades. Fueron ellos los que hicieron prevalecer su hegemonía sobre el resto del movimiento indígena nacional, distinguiéndose por la solidez y coherencia de sus argumentos.

La composición de la propia sección 22 del magisterio refiere a miles de maestros indígenas que han desempeñado un papel importante en las luchas democráticas y en contra de la imposición y violencia del caciquismo económico y político impuesto por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Algunos de ellos participaron en programas como la licenciatura abierta en Antropología Social que la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) estableció en los años ochenta, y adquirieron una capacitación especializada sin abandonar sus obligaciones magisteriales y las tareas de conducción política que las propias comunidades demandaban. También ha sido importante la existencia de formas organizativas como la Coalición

de Maestros Bilingües de Oaxaca, en las que se formaron numerosos dirigentes y luchadores sociales con perspectivas de largo aliento y con un compromiso firme con sus pueblos. La experiencia de los contingentes de emigrantes indígenas radicados en los Estados Unidos y en la propia ciudad de México, con estrecha relación con sus comunidades de origen y vivencias políticas significativas, han transformado los nuevos entornos y dejado su impronta en el acontecer político que está viviendo su natal Oaxaca.

A la par de este componente indígena, fructifica en la integración de la APPO el esfuerzo unitario de numerosas organizaciones de la sociedad civil que durante décadas dieron sus luchas en los campos de la ecología, la defensa del patrimonio cultural, los derechos humanos, la educación laica y gratuita, las perspectivas de género, emigrantes y tantos otros que de manera relativamente aislada han planteado sus propuestas democratizadoras y de verdadero cambio social y que encuentran en la Asamblea Popular la posibilidad de caminar juntos en su consecución.

La APPO demuestra que es posible un gobierno popular sin la presencia de la maquinaria burocrática, los partidos políticos institucionalizados y, sobre todo, sin los voraces funcionarios corruptos que por más de ochenta y un años han vivido a costa del erario y que pretenden seguir gobernando aun en contra de una visible y beligerante oposición de la mayoría del pueblo oaxaqueño. La APPO, en los ámbitos estatal y urbano, ratifica la experiencia exitosa de las juntas de buen gobierno zapatistas que en el plano municipal y regional llevan más de tres años gobernando a partir del principio de «mandar obedeciendo» y que representan una verdadera escuela de aprendizaje de democracia directa y participativa, que la APPO ha emulado con sus variantes y especificidades.

### **Oaxaca: el tejido fino de la sublevación**

Durante más de tres meses, la revuelta popular oaxaqueña vivió un proceso organizativo inédito en las luchas sociales.

Al caer la noche, la ciudad de Oaxaca cambia. Con los últimos rayos de luz comienzan a aparecer en barrios y avenidas cientos de barricadas. Los vecinos organizados toman las calles, encienden fogatas, colocan piedras y asumen el control de la circulación de vehículos y personas. A partir de ese momento, moverse por la ciudad resulta muy difícil.

En las barricadas se comentan las últimas noticias, se conversa, se prepara café, se cocina, se realizan asambleas y se escucha la estación de radio de la APPO. Con ellas se garantiza la seguridad pública en la oscuridad nocturna. Se protege a los barrios pobres de la delincuencia y de los ataques de los pistoleros al servicio de Ulises Ruiz. Se hace sentir el control de los ciudadanos sobre su territorio.

La comunicación radial es el hilo que enhebra los centenares de focos de resistencia aparentemente desarticulados en calles y hogares. La radio ocupada informa de los ataques de sicarios y policías vestidos de civil y llama a los ciudadanos a movilizarse y organizar la defensa. Transmite a teléfono abierto llamadas de solidaridad y apoyo. Difunde programas para niños con historias ejemplares. Emite segmentos informativos sobre la biopiratería y la defensa de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. Comunica al movimiento consigo mismo.

Desde radio APPO ([www.asambleapopulardeoaxaca.com](http://www.asambleapopulardeoaxaca.com)) se emiten canciones de la Guerra Civil española. *¡No pasarán!* es una especie de segundo himno del movimiento, después del *¡Venceremos!*, adaptado y adoptado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a la que pertenece el magisterio oaxaqueño, desde 1979.

Con los primeros rayos de luz del día, las pequeñas barricadas de los barrios se levantan. Permanecen las más importantes. El campamento principal del movimiento en el centro de Oaxaca se llena de actividades. Grupos solidarios entregan víveres y comida preparada. Las brigadas móviles de la APPO *toman* camiones y edificios públicos. Conminan a los funcionarios y empleados a abandonar los edificios donde despachan. Los altos mandos de la administración local se mueven a salto de mata. Se reúnen en hoteles y casas particulares, siempre temerosos de que los inconformes lleguen a desalojarlos.

En Oaxaca los ciudadanos han perdido el miedo, ese cemento social básico para que funcione un sistema de dominación. Cuando los pistoleros gubernamentales disparan contra la multitud o contra las estaciones de radio, la gente no huye, sino que se lanza contra los agresores. A convocatoria de la radio centenares o miles de personas se concentran en cuestión de minutos en el lugar del ataque para perseguir a los responsables.

En cambio, las policías locales tienen miedo. Temen a los ciudadanos organizados y su ira. Tienen pavor a la respuesta decidida de la gente desarmada. Perdieron la batalla del 14 de junio contra el magisterio, cuando el gobernador los mandó a desalojar del zócalo de la ciudad. Han perdido todas y cada una de las pruebas de fuerza a las que se han sometido.

En contra de lo que se ha dicho, y a pesar de la indudable importancia que desempeña el sindicato magisterial, no se trata de un mero movimiento gremial. En la lucha encontraron un lugar y una identidad aquellos que no tienen futuro. Los jóvenes *punk* y los desempleados, los excluidos que no han emigrado a los Estados Unidos, al valle de San Quintín o a la periferia de la ciudad de México han encontrado en la protesta un espacio de dignidad y la posibilidad de hacerse de un lugar en el mundo. Su radicalidad es notable, como también su arrojo.

El magisterio tiene una cultura y una práctica sindical que hace muy difícil la cooptación de sus dirigentes. Ulises Ruiz, ignorante como es de los

asuntos de su estado, lo vivió en carne propia el pasado 21 de noviembre, cuando festinó por adelantado el levantamiento del paro de los maestros solo porque parte de la dirección gremial impulsó y anunció el repliegue. El (des)gobernador del estado confió a los suyos que tenía listas cincuenta pipas de agua para entrar a limpiar el centro histórico de Oaxaca. Pero las pipas tuvieron que quedarse estacionadas porque la Asamblea Estatal de los Trabajadores de la Educación decidió hacer una nueva consulta para ver si se regresaba o no a clases.

En la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) las cúpulas no mandan, porque no las dejan mandar. Por el contrario, deben obedecer las decisiones de la asamblea estatal, instancia organizativa en la que participan el comité seccional y los secretarios generales de todas las delegaciones sindicales del estado. El movimiento orienta su acción a partir de veinte principios rectores de claro contenido democrático. Los delegados que asisten a la asamblea van amarrados a lo que sus bases han acordado. Si rompen ese acuerdo pueden ser destituidos.

El tejido fino de la sublevación oaxaqueña está integrado por una convergencia de pobres urbanos, jóvenes sin futuro, comunidades indígenas, organizaciones campesinas, gremios, ONG y maestros democráticos, con su respectivo memorial de agravios. Muchos ya no tienen miedo del gobierno. La horizontalidad de su funcionamiento hace muy difícil que un acuerdo entre autoridades gubernamentales y dirigentes sociales que no resuelva la demanda central –la cabeza del gobernador– sea viable. Oaxaca de abajo sabe que la permanencia de Ulises Ruiz al frente del estado provocará una carnicería. No puede abandonar la lucha por su salida.

## **La naturaleza de la APPO**

La APPO es una de las más importantes experiencias organizativas del movimiento social en México. Se trata de una asamblea de asambleas nacida el 17 de junio de 2006 en el marco de la sublevación popular contra Ulises Ruiz. Participaron en su formación 365 organizaciones sociales, ayuntamientos populares y sindicatos con una demanda única: la salida del gobernador.

Las asambleas populares son el espacio donde tradicionalmente deliberan y toman acuerdos las comunidades oaxaqueñas. En muchos municipios son la institución donde se nombran las autoridades locales. En gran cantidad de organizaciones sociales son el lugar desde el cual se decide el rumbo de la lucha y se escoge a los dirigentes.

La APPO sintetiza la cultura política local nacida de las asambleas populares, el sindicalismo magisterial, el comunismo indígena, el municipalismo, el extensionismo religioso, la izquierda radical, el regionalismo y la diversidad étnica de la entidad. Expresa, además, las nuevas formas asociativas que se

crearon en Oaxaca a raíz del levantamiento popular pacífico: las organizaciones de los barrios pobres de la ciudad de Oaxaca y su zona conurbada, las redes juveniles libertarias y las barricadas.

En el entorno de la APPO, pero más amplio que ella, se ha creado un movimiento sociopolítico conocido como la Comuna de Oaxaca. Ella es la expresión organizativa autónoma de la resistencia popular, el embrión de un poder distinto. Ese «otro poder» en construcción se expresa en la creación y consolidación de la Policía del Magisterio Oaxaqueño y el Honorable Cuerpo de Topiles. Allí está contenida la voluntad de transformación política profunda de una parte muy importante de la sociedad oaxaqueña.

La Asamblea plantea ir democratizando las instituciones mientras trabaja en una constituyente que elabore una nueva Constitución. Busca transformar la revuelta popular en una «revolución pacífica, democrática y humanista». En su último congreso rechazó la posición que afirmaba la importancia de que «la APPO negocie y vaya ocupando espacios de decisión y de poder en las instituciones vigentes».

La APPO no es un partido político ni el movimiento de masas de alguno de ellos. No aspira a convertirse en uno. Tampoco es creación de una guerrilla, o de alguna iglesia u ONG. Aunque en su interior participan muchas corrientes políticas, no está dirigida por ninguna en particular. Unas y otras se hacen contrapeso.

La APPO no es un pacto de líderes políticos, sociales o religiosos. No es una organización de cabecillas. No hay en su conducción una figura que destaque sobre las demás. Es un movimiento de bases. Su dirección está integrada por 260 personas. Pretender explicar su nacimiento como producto del retiro gubernamental de subvenciones a varios dirigentes locales es un buen argumento propagandístico contra el movimiento, pero una torpeza analítica.

La APPO es imposible de comprender al margen de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Y no solo porque surgió como resultado de su convocatoria y el gremio tiene presencia en todos los rincones de Oaxaca. Desde que el sindicato comenzó su proceso de democratización, en 1980, los maestros han buscado vincularse con los padres de familia y sus luchas. El resultado de este proceso ha sido desigual. Muchos se han convertido en forjadores y dirigentes de organizaciones campesinas e indígenas regionales, pero otros han chocado con el mundo indígena.

La forma en la que los activistas magisteriales se han asociado para actuar dentro del sindicato se reproduce en el movimiento social en el que actúan. Dos corrientes magisteriales, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y la Corriente Democrática del Magisterio (CODEMA), con gran influencia en la sección 22, son, al mismo tiempo, muy influyentes en la APPO.

A la rica e inédita experiencia del movimiento no le corresponde un lenguaje novedoso. Su práctica apenas ha comenzado a sistematizarse. En su interior coexisten distintos discursos. Es común en las protestas encontrar simultáneamente contingentes con mantas con la hoz y el martillo, jóvenes antiautoritarios con la simbología ácrata y comunidades eclesiales de base con imágenes de la Virgen de Guadalupe. Esta diversidad lingüística y simbólica refleja tanto proyectos diferentes sobre las vías para la transformación política como enorme dificultad para pensar y nombrar lo nuevo. A pesar de ello, hay una práctica unitaria que, hasta el momento, ha logrado dejar de lado las diferencias ideológicas.

Algunas corrientes políticas han tratado de extender la experiencia de la APPO a otros estados. A diferencia de Oaxaca, donde la Asamblea es resultado de un proceso de radicalización desde abajo que nace de la lucha gremial, las nuevas APPO en otras entidades surgen de una decisión de grupos políticos. El nombre es el mismo, pero los procesos sociales que albergan son muy diferentes. Será muy difícil que esas experiencias se consoliden como convergencias sociales amplias, aunque pueden perdurar como frentes políticos de activistas.

### **Oaxaca: el fin de la tolerancia**

*Oaxaca en 2006* como Sonora en 1902. A comienzos del siglo xx, el gobierno de Porfirio Díaz enfrentó la enésima rebelión de los yaquis deportando a los indígenas prisioneros a Yucatán, Jalisco, Tlaxcala y Veracruz. A comienzos del siglo xxi, la administración de Vicente Fox respondió a la sublevación oaxaqueña enviando a los 141 detenidos insumisos al penal de San José del Rincón en Nayarit. Muy pronto, Felipe Calderón se sumó a la acción represiva.

Vicente Fox terminó su sexenio con las manos llenas de sangre. «Se acabó la tolerancia» en Oaxaca, dice el general Ardelio Vargas, jefe del estado mayor de la Policía Federal Preventiva (PFP), uno de los héroes, junto con el almirante Wilfrido Robledo, de la represión de Atenco. Sus perros están en la calle. Lanzan lacrimógenos, golpean con lujo de violencia, detienen sin órdenes de aprehensión, invaden viviendas sin autorización, destrazan propiedades, ocupan hospitales y clínicas, impiden el libre tránsito de las personas, ofenden sexualmente a las mujeres.

En las calles los jóvenes son detenidos indiscriminadamente por el mero delito de ser jóvenes. Los presos son maltratados, torturados y confinados con reos comunes. No se permite que sus defensores jurídicos y familiares los visiten. Y, como en el porfiriato, son deportados.

Pero los abusos contra la población civil de la PFP no se limitan a los que sus integrantes cometen directamente. Ellos actúan como resguardo de los sicarios al servicio de Ulises Ruiz. Estos pistoleros y policías vestidos de civil



recorren la ciudad de Oaxaca en vehículos desde los que disparan y secuestran integrantes de la APPO. Son los convoyes de la muerte. La mayoría de los veinte homicidios perpetrados contra activistas han sido responsabilidad suya.

¿Por qué esta represión contra el movimiento popular de Oaxaca? ¿Qué sucedió que agotó la «tolerancia» de las autoridades federales? Básicamente por una razón: a menos de una semana de tomar posesión como jefe del Ejecutivo, en medio de una gran crisis de legitimidad, Felipe Calderón exigió a Vicente Fox que, en vista de que no le había solucionado el conflicto, lo dejara en condiciones de debilidad tales que le garantizara una futura negociación en condiciones favorables. Con presos y perseguidos, supuso, el arreglo con los insumisos sería más fácil y barato. Reclamó y obtuvo que sea la administración saliente y no la entrante la que pague el precio y el descrédito de la represión. En suma: que le limpiara el camino. De paso, consiguió con una acción de distracción, desalentar la presencia masiva de un contingente oaxaqueño en las jornadas del 1ro. de diciembre para evitar su toma de posesión.

La presencia masiva de la PFP en Oaxaca desde el pasado 29 de octubre no impidió que las protestas contra Ulises Ruiz se mantuvieran vivas en la entidad. No desarticuló la organización popular ni frenó la revuelta. Al contrario, la APPO realizó exitosamente su congreso y reafirmó su unidad interna.

Sin embargo, a pesar de enfrentamientos como el del 2 de noviembre, el conflicto se encontraba relativamente contenido. No se había restablecido la ingobernabilidad ni la normalidad en la vida cotidiana en la entidad, pero existían puentes de comunicación informales entre el gobierno federal y la dirección de la APPO. Era, pues, un conflicto relativamente administrado. Ese estatus resultaba, sin embargo, inconveniente para el gobierno entrante y decidió romperlo.

¿Realizó el movimiento popular alguna acción que rompiera este equilibrio? No, definitivamente no. La manifestación del sábado 25 de noviembre fue absolutamente pacífica. Fue una demostración de fuerza, pero se trató de una acción no violenta. La decisión de atacar provino, como se ha documentado con amplitud, de la PFP. Fueron elementos de esta corporación los que lanzaron canicas con resorteras a los manifestantes y luego lacrimógenos y proyectiles. Fueron ellos quienes comenzaron la agresión.

¿Perdieron los mandos de la PFP el control sobre su tropa? Muy probablemente así sucedió en un comienzo. Pero, más adelante, la orden fue atacar. Y lo hicieron con saña y con rencor. Fueron a machacar a los manifestantes, a cobrarse una venganza. La represión fue salvaje: tres muertos, más de mil heridos, doscientos veintiún detenidos.

Y con ellos, protegidos por ellos, actuaron los sicarios y los policías vestidos de civil al servicio de Ulises Ruiz. Dispararon y secuestraron a ciudadanos

indefensos. Agredieron a quienes en la estación de autobuses ADO esperaban su transporte. Se dedicaron a lo que han hecho durante los últimos meses: sembrar terror.

Sin embargo, a pesar de ello, la resistencia en Oaxaca se mantiene viva. Miles de personas han salido a la calle en dos ocasiones y la exigencia de renuncia de Ulises Ruiz continúa.

## Las guerrillas mexicanas

El 6 de noviembre unos fuertes bombazos en la ciudad de México, de cuya acción se responsabilizó una coordinación de grupos guerrilleros, reabrieron el debate sobre la existencia de organizaciones armadas en México. La pregunta central que anima esta discusión es: ¿existen realmente esos grupos o son un instrumento del gobierno para descalificar movilizaciones sociales legítimas y justificar una política de mano dura?

El debate deja fuera al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que ha ganado una legitimidad y un estatus legal que no poseen las otras fuerzas. Se discute, fundamentalmente, sobre las organizaciones menos conocidas.

Las guerrillas son una realidad en la vida política nacional. Existen y actúan. Cuentan con armas, campos de entrenamiento, campamentos y casas de seguridad. Realizan trabajo de masas, y activistas cercanos a ellas actúan dentro de movimientos sociales. Algunas, incluso, no se oponen a la participación electoral, sino que, en ciertas circunstancias, la estimulan.

Las organizaciones armadas de izquierda tienen una larga historia, anterior aun al movimiento estudiantil-popular de 1968. De su larga marcha han obtenido una importante experiencia. Sus dirigentes distan de ser bisoños. El levantamiento zapatista de 1994 les dio aire. Han sobrevivido a las embestidas de los aparatos represivos del Estado en su contra y a la acción de los órganos de inteligencia. Saben moverse en la clandestinidad. Algunos de sus integrantes participaron en antiguos movimientos insurreccionales en América Latina.

Varias de ellas, con implantación fundamentalmente rural, han hecho de la autodefensa el centro de su acción. Otras, con mayor implantación nacional, han efectuado acciones de propaganda armada, explotando bombas y petardos o bloqueando carreteras.

Las guerrillas mexicanas no practican el terrorismo. El terrorismo busca inducir el terror en la población civil por medio de una serie de actos violentos para obtener algún fin político o religioso. Las organizaciones político-militares que actúan en el país no atacan a la población civil. Enfrentan objetivos militares y destruyen bienes materiales, no atentan contra la vida de ciudadanos de a pie. Son, sí, grupos subversivos en la medida en que promueven el derrocamiento del gobierno por medio de la fuerza y la violencia.

El archipiélago guerrillero mexicano dista de ser homogéneo. Las distintas islas que lo integran tienen diferencias importantes entre sí, tanto por los objetivos que buscan como por los medios para alcanzarlos. Su relación dista de ser pacífica. En los últimos años se han producido fuertes choques entre algunas de ellas. El asesinato de Miguel Ángel Mesino Mesino, integrante de la Organización Campesina de la Sierra Sur, es apenas un botón de muestra de la forma en que han enfrentado sus desavenencias.

El hecho de que las guerrillas hayan sobrevivido más de cuarenta años en nuestro país es un hecho que no puede soslayarse. Por un lado muestra cierta ineficiencia de los servicios de inteligencia. Por otro, evidencia que en la vida política y en la cultura nacional existen causas objetivas que permiten su reproducción.

¿Cuáles son esas causas? Una enorme franja de la población mexicana ha sido excluida de los beneficios del desarrollo y no cuenta con representación política real. Los agravios del poder hacia la gente sencilla son mucho más profundos e hirientes de lo que los medios electrónicos difunden. Las genuinas aspiraciones de movilidad social y de transformación de las instituciones se encuentran mucho más bloqueadas de lo que las élites reconocen. Los fraudes electorales son más recurrentes de lo que se acepta. La violencia y corrupción con la que se comportan los cuerpos policíacos y el sistema de procuración de justicia crean para quienes las padecen situaciones exasperantes y de enorme escepticismo hacia la ley.

La existencia de guerrillas no supone un desafío constante al Estado mexicano, de manera que no son pocos los gobernadores que encontraron en el pasado la forma de coexistir con ellas sin excesivos sobresaltos. Sin embargo, su capacidad para descarrilar procesos políticos no puede ser puesta en duda.

Esas organizaciones político-militares nada tienen que ver con la revolución bolivariana ni con Hugo Chávez ni con otros gobiernos de América Latina. Responden a la realidad del país, no a los intereses diplomáticos de otras naciones. Son resultado de procesos endógenos.

Desde la izquierda se ha optado por descalificar las acciones guerrilleras presentándolas como actos de provocación efectuados por agentes gubernamentales. En lugar de explicar lo contraproducente que para el movimiento transformador del país resulta el uso de la violencia armada en momentos en que hay un extraordinario proceso de resistencias sociales, se le quiere desautorizar haciéndolos pasar como infiltrados.

Es evidente que los bombazos del 6 de noviembre no sirvieron en nada al movimiento oaxaqueño y, por el contrario, lo perjudicaron. Fueron una acción vanguardista, autoritaria y provocadora. No educaron a nadie en las supuestas virtudes de la violencia revolucionaria. Tampoco abrieron espacios a la lucha democrática. Sin embargo, quienes pusieron los explosivos no son guerrilleros manipulados por el Estado.

Las guerrillas están aquí. No se han ido nunca a lo largo de nuestra historia reciente. Sin embargo, la represión gubernamental en Lázaro Cárdenas-Las Truchas, Atenco y Oaxaca, y el fraude electoral contra Andrés Manuel López Obrador, les han dado un aire y un impulso insospechado.

## De la mano dura al choque de trenes

*Más de lo mismo*, pero peor. Así se resume la posición de Felipe Calderón frente a los graves problemas sociales que sacuden al país. El choque de trenes entre un movimiento social radicalizado, un movimiento ciudadano agraviado y un gobierno federal torpe y endurecido es inminente.

El dramático problema de Oaxaca no mereció una sola palabra del nuevo presidente en su discurso de toma de posesión. Pero, eso sí, para que no haya dudas de quiénes son sus aliados, un día después Ulises Ruiz asistió a la comida de los gobernadores con el nuevo inquilino de Los Pinos. Tampoco dijo nada de Chiapas ni de los derechos de los pueblos indígenas. En cambio, colocó en la Secretaría de Gobernación a un connotado torturador y violador de derechos humanos. Nombró como parte de su gabinete de seguridad a los mismos funcionarios que condujeron el país al desastre en temas de derechos humanos durante la administración de Vicente Fox. Y, por si fuera poco, durante su fugaz toma de posesión, la conductora oficial del acto anunció en cadena nacional una política de mano dura.

Una nueva conflictividad social sacude al país. Los síntomas son claros. Ha aparecido una multiplicidad de nuevos actores. Los métodos de lucha de las organizaciones populares se han radicalizado al tiempo que los problemas se multiplican. Los canales institucionales para atender sus demandas han sido frecuentemente desbordados.

Los funcionarios encargados de la gobernabilidad y los servicios de inteligencia durante el sexenio de Fox no entendieron nunca la naturaleza de la nueva problemática social. Lisa y llanamente, no comprendieron el nuevo fenómeno que tuvieron que enfrentar. Y esos funcionarios y otros peores que ellos, si es que cabe tal cosa, son los que están hoy al frente del equipo de Calderón.

Durante los últimos meses de su administración, Fox quiso suplir su desconcierto ante la creciente rebeldía social con el uso de la fuerza pública. Con acciones relámpago, en nombre del Estado de derecho, la firmeza y el uso legítimo de la violencia, se reprimió a movimientos paradigmáticos de esta nueva conflictividad como el de los mineros de Lázaro Cárdenas-Las Truchas, Atenco y la sublevación oaxaqueña. Sin embargo, lejos de solucionar los conflictos, la «salida» policial los complicó más. La población enfrentó indignada a la fuerza pública y, lejos de atemorizarse, ha mantenido su lucha. El gobierno mexicano acabó pagando un alto costo ante la comunidad

internacional de derechos humanos por las graves violaciones a las garantías individuales que los destacamentos policiales cometieron. La cuenta completa todavía no llega.

Estos desplantes autoritarios respondieron, en parte, al gran temor que estas luchas provocan en los sectores acomodados. Desde que, a raíz de la Marcha del Color de la Tierra en marzo de 2001, el ideólogo empresarial Juan Sánchez Navarro recomendó a los suyos encerrarse ante el empuje del *pobrerío*, en las clases pudientes hay miedo. Para su gusto, hay demasiado desorden y en lugar de aplicar la ley se negocia con los inconformes.

Esta nueva conflictividad social tiene un punto de arranque en 1999, al desarrollarse una intensa lucha social que enfrentó con relativo éxito las políticas gubernamentales de privatización. Como no se había visto en décadas, una parte del movimiento sindical, trabajadores de la cultura, maestros, estudiantes, campesinos y jóvenes ganaron la plaza pública no para pedir salarios, sino para conservar conquistas sociales. Muchas de las características que asumieron los movimientos sociales en los años posteriores se perfilaron ese año.

A partir de 1999, la sociedad civil se hizo pueblo y las demandas ciudadanas se reciclaron en lucha de clases. El protagonismo de las ONG y las organizaciones ciudadanas dio paso a la acción de organismos gremiales y profesionales. El afán de avanzar en las propuestas se transformó en un retorno a la protesta. Surgieron grandes expresiones gremiales de resistencia, movimientos de base «feos» para el mundo de la política formal y una multitud de luchas locales contra la «desposesión». A diferencia de otros tiempos, una parte de esas movilizaciones fueron parcialmente exitosas.

Desde entonces se ha producido una tenaz movilización social. Centenares de protestas de indígenas, campesinos, trabajadores, pobres urbanos, mujeres, defensores de derechos humanos, ecologistas han surgido en todo el país enarbolando diversas demandas. Algunas, incluso, han decidido darse sus propias formas de gobierno. La lucha contra el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, primero, y contra el fraude electoral de 2006 después, hicieron que sectores medios de la población se sumaran al actual ciclo de protestas. El *pobrerío* anda alborotado y las élites cada vez más temerosas con ese alboroto.

Estas luchas expresan el hastío hacia una cierta forma de hacer política. Está presente en su seno una tradición antipartidista y una desconfianza en la política institucional. Sin embargo, la radicalización social proviene también del entorno de la política institucional. El fraude electoral de 2006 provocó que una muy importante parte de la población que confiaba en los partidos y en las elecciones se sumara a una dinámica de movilización antiinstitucional y de resistencia civil pacífica.

Es así como muchas de las expresiones de malestar social reciente han tomado forma de acciones de desobediencia civil. Han emprendido acciones voluntarias y públicas que violan leyes, normas y decretos porque son considerados inmorales, ilegítimos o injustos. Han hecho de la trasgresión que persigue un bien para la colectividad, un acto ejemplar de quebrantamiento público de la norma por razones de conciencia.

El choque de trenes entre un gobierno ilegítimo y crecientemente autoritario y un movimiento social radicalizado y en ascenso parece inevitable.

LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO es columnista y coordinador de opinión del diario mexicano *La Jornada*.

GILBERTO LÓPEZ Y RIVAS es antropólogo e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en México.

# el despertar de nuestra américa

## **AMÉRICA LATINA ENTRE SIGLOS** **Dominación, crisis, lucha social y** **alternativas políticas de la izquierda**

*Por Roberto Regalado*

Sintetiza las vivencias y reflexiones de un activo participante en los debates de la izquierda latinoamericana y caribeña. La sujeción a un esquema de dominación foránea; el agravamiento de la crisis capitalista; el auge de las luchas populares; y las redefiniciones estratégicas y tácticas de los partidos y movimientos políticos de izquierda, concluye el autor, caracterizan nuestro continente en este principio de siglo.

(Edición actualizada)

277 páginas, ISBN 978-1-921235-00-9



## **UNA GUERRA PARA CONSTRUIR LA PAZ**

*Por Schafik Handal*

Una breve reseña de la revolución en El Salvador. Contiene las palabras de Schafik Handal, líder histórico del FMLN, a cerca de la historia política del país a lo largo del siglo XX. Explica las causas de la guerra y su finalización por medio de la negociación de acuerdos políticos. Incluye discursos y entrevistas que Schafik diera en diferentes momentos del proceso de negociación y firma de los Acuerdos de Paz, y el cese del enfrentamiento armado. Así mismo incluye la denuncia años más tarde sobre el incumplimiento durante los últimos años.

160 páginas, ISBN 978-1-921235-13-9

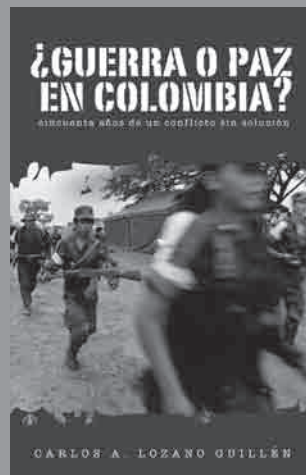


## **¿GUERRA O PAZ EN COLOMBIA?** **Cincuenta años de un conflicto sin solución**

*Por Carlos A. Lozano Guillén*

Constituye un significativo aporte a la discusión sobre el largo conflicto interno, político y armado, que ha azotado Colombia durante los últimos cincuenta años y la constante búsqueda del pueblo colombiano y la insurgencia por conseguir una solución política que lleve a la paz con justicia social. Ofrece una perspectiva histórica y coyuntural, así como un análisis teórico desde una perspectiva de izquierda.

208 páginas, ISBN 978-1-921235-14-6



# El largo proceso que condujo a la guerra y a la negociación en El Salvador\*

SCHAFIK HÁNDAL

## El largo proceso de opresión, frustraciones y luchas que condujo a la guerra

La guerra fue la consecuencia directa de la imposibilidad de hallar una solución legal, democrática y pacífica al injusto, opresivo y represivo sistema económico-social y político imperante en El Salvador. Este sistema se configuró a partir de la reforma agraria liberal del siglo pasado, cuando con la fuerza del Estado se expropió a los pueblos indígenas (Ley de Extinción de Comunidades, 1881) y a los campesinos ejidatarios (Ley de Extinción de los Ejidos, 1882), en beneficio del cultivo del café y de sus cultivadores. Sobre esta base (omitiendo en aras de la brevedad una relación y un análisis detallado de este proceso), surgió y se enriqueció una oligarquía terrateniente, cafetalera principalmente, que consolidó su monopolio del poder estatal en los años noventa del siglo XIX y originó, así, un régimen político autoritario, muy centralizado y especialmente sangriento en algunos períodos. Tal régimen se extendió –con breves interrupciones– durante casi cien años, hasta la firma del Acuerdo de Paz de Chapultepec, el 16 de enero de 1992.

\* Documento elaborado en diciembre de 1996, con motivo del V Aniversario de los Acuerdos de Chapultepec, el 16 de enero de 1997. Publicado en Schafik Hándal: *Una guerra para construir la paz*, Ocean Sur y Editorial Morazán, San Salvador, 2006, pp. 11-52. (N. del E.)



En 1913 fue asesinado el presidente Manuel Enrique Araujo y se instauró la dictadura nepótica de las familias Meléndez-Quiñonez, que duraría hasta 1927. Frente a esta dictadura, buscando con afán la democracia, se desarrollaron intensas luchas políticas y sociales, particularmente en la década de 1920.

Después de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), bajo la influencia tanto de la Revolución Mexicana y de su Constitución Política de 1917, como de la Revolución Socialista Rusa (1917), se desarrolló en los años veinte una vasta movilización ciudadana que comprendía movimientos cívicos, sociales, partidistas y electorales, todos ellos enfilados, por lo general, contra la dictadura, que por fin, cedió la presidencia al Dr. Pío Romero Bosque (1927-1931). Fue, propiamente hablando, un remedo electoral, cuya intención no declarada era la de que, «calmadas las pasiones», Romero Bosque devolviera el poder a los Meléndez-Quiñonez. Esto no fue así. Aunque en ciertos aspectos Pío Romero Bosque hizo un gobierno aperturista hacia la clase política, la intelectualidad y las capas medias acomodadas, al mismo tiempo se caracterizó por el control represivo de las organizaciones campesinas y obreras que surgían y crecían con gran dinamismo en esos años.

Los acontecimientos mundiales y nacionales condujeron a nuestro país por un rumbo no previsto por los sectores dominantes, a saber: impacto demoledor de la gravísima crisis económica mundial (1929-1934) sobre la economía cafetalera salvadoreña; brusco aumento del desempleo en decenas de miles de asalariados de las fincas, de los talleres artesanos, del comercio y los transportes lo que provocó hambruna general. En esta situación, tuvieron lugar en 1930 las elecciones presidenciales que ganara el Ing. Arturo Araujo. Este triunfo produjo grandes expectativas de reforma social que el nuevo presidente no estaba en capacidad de hacer realidad. Incrementó, en cambio, la represión contra el movimiento popular organizado, mientras se multiplicaba el desempleo, se ponía en el orden del día la ejecución de hipotecas, el no pago de salarios a empleados públicos, incluidos los militares, lo cual originó una frustración generalizada. En esta coyuntura, angustiosa para la población e insegura y desesperada para la oligarquía, en rápida sucesión, acaecieron el golpe de estado militar (2 de diciembre de 1931), luego las elecciones de diputados y alcaldes (primera quincena de enero de 1932), fraudulentas con desconocimiento del voto popular, así como masacres y capturas. Así, se produce la insurrección campesina e indígena (22 de enero) y su derrota con la consiguiente matanza.

Tal fue el intrincado y dramático panorama en el que la oligarquía cafetalera prohió a la dictadura militar que fuera inaugurada por el general Maximiliano Hernández Martínez.

La dictadura militar surgió con el golpe cuartelario del 2 de diciembre de 1931 y se consolidó en 1932 sobre la matanza que siguiera a la derrota de la

insurrección campesina e indígena encabezada por el recién fundado Partido Comunista (30 de marzo de 1930).

Durante sesenta años, el poder de la oligarquía agroexportadora, primero, y financiera, después, fue ejercido por medio de la dictadura militar, en beneficio del enriquecimiento de aquella, a costa de la enorme pobreza, el hambre, la ignorancia y la opresión de las grandes mayorías del pueblo.

El enfrentamiento con el nazi-fascismo durante la Segunda Guerra Mundial, movilizó a las fuerzas democráticas en todas partes del mundo e impactó en nuestro país, abriendo espacios para una amplia concertación contra la dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez (1931-1944).

El año 1944 fue el de la confrontación abierta contra la dictadura: intenso y riesgoso trabajo clandestino y conspirativo; insurrección militar-civil fallida el 2 de abril seguida de fusilamientos de civiles y militares; una huelga general de «brazos caídos», convocada por los estudiantes universitarios; y la renuncia y huida del sanguinario tirano en los días 8 y 9 de mayo. Rápidamente anotado, en ese año político de 1944, hubo cinco meses y medio de libertad y de febril actividad organizativa política, sindical, universitaria, campesina; el golpe militar regresivo (21 de octubre), liderado por el coronel Osmin Aguirre y Salinas que deja miles de presos políticos y provoca cientos de exiliados, vuelta a la persecución y la tortura contra los presos demócratas, a la prohibición de las organizaciones populares y del derecho a organizarse; retorno a la censura de los medios de prensa. Hay notables y heroicos gestos de resistencia, como la acción armada en el barrio San Miguelito (San Salvador) encabezada con valentía sin límites por Francisco Chávez Galeano y Rodríguez Salamanca, estudiantes de química y farmacia, que cayeron combatiendo solos cubriendo la retirada de sus compañeros; invasión revolucionaria armada de la juventud salvadoreña al departamento de Ahuachapán (8 de diciembre), procedente de la solidaria Guatemala, recién liberada de la dictadura de los generales Ubico y Ponce Valdés (20 de octubre de 1944); fracaso de la invasión, estado de sitio, «ley marcial», matanza, exilios, etcétera, etcétera. En cinco palabras: reiteración de la misma historia.

Tal fue la secuencia de aquel heroico y persistente combate por la democracia durante todo 1944, año revolucionario borrado por la dictadura militar de la «historia» oficial y cuya conmemoración fue, durante decenios, una actividad rebelde y casi clandestina.

Después de imponer como presidente al general Salvador Castaneda Castro, en unas «elecciones» (febrero de 1945) en las que los dirigentes opositores se hallaban en el exilio o en la cárcel, sus partidos dispersos y solamente este personaje como «candidato», el país fue mantenido bajo continuo estado de sitio hasta el 14 de diciembre de 1948. Este día, fue derrocado aquel gobierno mediante otro golpe cuartelario, ejecutado por un grupo de jóvenes

militares, liderado por oficiales que habían estado involucrados en un intento fallido («*putch*») de 1945. El grupo golpista de «los mayores» –todos tenían este grado militar– conspiró con líderes civiles de la huelga general de «brazos caídos» y varios de estos integraron un Consejo de Gobierno Revolucionario con militares.

La instalación del Consejo de Gobierno Revolucionario produjo, en un relativamente corto período, una extensa aprobación y aplauso. La mayor parte de la gente coincidía en valorar aquel acontecimiento como el resurgimiento de las fuerzas democráticas derrotadas en 1944 y como la realización de los ideales que el pueblo apoyara en la huelga de «brazos caídos». Las figuras civiles incluidas en el Consejo de Gobierno Revolucionario (doctores Reinaldo Galindo Polh y Humberto Costa) y los «14 puntos»<sup>1</sup> proclamados por este, como su plataforma política, reforzaban aquella opinión.

Una fracción de la nueva cúpula militar se comprometió con las fuerzas conservadoras del país y, además, si bien ayudó a sacar del ejército a la vieja generación de jefes reaccionarios, también se deshizo, desde las primeras semanas, de los oficiales más comprometidos con la causa popular, como fue el caso del capitán mayor Humberto P. Villalta, verdadero organizador del derrocamiento de Castaneda Castro e inspirador de la plataforma democrática y progresista del Movimiento de los Mayores. Su destitución del cargo de comandante general de la Fuerza Armada, el 17 de enero de 1949 y su exilio forzado el 9 de febrero, fueron las primeras señales de la temprana traición a los ideales originales de aquel movimiento. Villalta moriría, meses después, en México en un accidente automovilístico.

Así, la oligarquía vio debilitada temporalmente su nunca abolida dominación, pero la recobró completamente montada en la cresta de una ola de vertiginoso crecimiento de los precios mundiales del café, y fomentando los apetitos de poder, riquezas y privilegios de los nuevos caudillos militares.

En una evaluación global, aquel movimiento que llegara cargado de expectativas esperanzadoras para el pueblo, puso en marcha un proceso de modernización y democratización crecientemente restringida (Ley y Tribunal de Probidad, Ley de Sindicalización y otras leyes laborales, Constitución de 1950, fomento de la industrialización, impulso hacia el Mercado Común Centroamericano, etcétera), pero, al mismo tiempo, consolidó en la conducción del Estado a una nueva jefatura militar sirviente de la oligarquía a contrapelo de las promesas contenidas en los «14 puntos».

<sup>1</sup> Véase los «14 puntos» en Schafik Hándal: ob. cit., pp. 48-49.

Así, pues, la dictadura militar, en su papel de instrumento de la oligarquía cafetalera, se restauró, readecuándose: dejó de ser el gobierno de un tirano que permanece indefinidamente en el poder y lo ejerce como un monarca absoluto junto con su camarilla de confianza, para convertirse en una dictadura militar electorera. De esta manera, cada cinco años se realizaba el ritual de elecciones amañadas para ungir al grupo de jefes que ejercerían el gobierno. La dictadura se valió de un partido oficial títere de los cuarteles, el Partido Revolucionario de Unificación Democrática (PRUD) e instrumentalizó a la Fuerza Armada en su conjunto, lo mismo que a su Servicio Territorial (patrullas militares cantonales y de barrio), como factores de intimidación y forzamiento del voto y, de esta manera, produjo «elecciones» predeterminadas, fraudulentas.

A partir de la segunda mitad del año 1950, cuando asumió la Presidencia de la República el teniente coronel Oscar Osorio, terminó de desvanecerse el impulso democratizador y revolucionario del movimiento del 14 de diciembre de 1948; quedó de ello, como un legado testimonial, la Constitución de 1950, en condiciones muy precarias de acatamiento y cumplimiento. Vinieron de nuevo en varias ocasiones, los exilios, los presos políticos, la institucionalización de la tortura y de los desaparecimientos o secuestros políticos contra los opositores, los sindicalistas, los estudiantes, profesores universitarios, etcétera (represiones de enero-febrero de 1951 y septiembre de 1952). La aprobación de la Ley de Defensa del Orden Democrático y Constitucional (que fuera bautizada popularmente como «ley de estado de sitio permanente») por la Asamblea Legislativa servil al dictador (septiembre de 1952), clausuró ominosamente la apertura iniciada el 14 de diciembre de 1948.

En los años 1956, 1957, 1958, 1959 y 1960, al calor e inspiración de los más relevantes sucesos mundiales y latinoamericanos –nacionalización del Canal de Suez por el gobierno nacionalista egipcio de Gamal Abdel Nasser (1956); derrocamiento de las dictaduras del general Gustavo Rojas Pinilla en Colombia (1957), del general Marcos Pérez Jiménez en Venezuela (1958) y del general Fulgencio Batista en Cuba (1959)–, tiene lugar en nuestro país un dinámico proceso de movilización popular.

En 1956 el coronel José María Lemus, llegado a la Presidencia de la República como el candidato oficial «triunfante» en unas elecciones de mucha violencia y fraude contra los opositores, faltó a la promesa que hizo a Osorio de serle obediente y dejarlo continuar gobernando desde atrás de la silla presidencial.

Para contrarrestar las amenazas golpistas de Osorio, Lemus decidió hacer otra apertura: permitió el regreso al país de los exiliados, derogó la Ley de Defensa del Orden Democrático y Constitucional, permitió las libertades de prensa y de organización (creación de la Confederación General de Trabajadores

Salvadoreños, CGTS, reactivación y formación de partidos ideológicos: PAR,<sup>2</sup> PRAM<sup>3</sup> y PRD<sup>4</sup>).

En este contexto, surgieron presiones crecientes en favor de una democratización auténtica. Una de las demandas, en el plano político, fue la de reformar el sistema electoral, principalmente en el sentido de establecer la representación proporcional en la Asamblea Legislativa. Se realizó en julio de 1960, por varios días, un foro de concertación de estas reformas, organizado por la Asociación de Estudiantes de Derecho (AED), del cual salió un anteproyecto de Ley Electoral, con la aprobación de todos los partidos, incluido el PRUD,<sup>5</sup> que seguía siendo el partido oficial de entonces; pero al llegar a la Asamblea Legislativa, fue rechazado por instrucciones del presidente de la República, coronel José María Lemus.

Surgieron las protestas y manifestaciones populares y el gobierno decidió realizar varias decenas de capturas y enviar al exilio a muchos

<sup>2</sup> PAR: Partido Acción Renovadora, cuyo jefe supremo era el coronel retirado José Ascencio Menéndez (nietao del general Francisco Menéndez, presidente de la República entre 1885-1990). Este partido proclamaba entonces ideales democráticos liberales. El PAR se organizó en 1948 para participar en las elecciones presidenciales de 1949 con su jefe como candidato; pero esas elecciones no se realizaron porque Castaneda Castro decidió permanecer en el cargo y fue, precisamente, ese motivo el que invocó la «juventud militar» para derribarlo el 14 de diciembre de 1948. El PAR lanzó la candidatura de Ascencio Menéndez para competir con Oscar Osorio en las elecciones de 1950, realizadas en vísperas de la Semana Santa. La gente quedó con la certeza del triunfo del PAR, y así lo revelaron los primeros datos del escrutinio y por eso se suspendió, alegando el inicio de las vacaciones. Las urnas, con los votos recolectados en todo el país, se concentraron en el Palacio Nacional. Cuando después de la Semana Santa se hizo el conteo, el ganador –desde luego– fue el mayor Oscar Osorio y su partido oficial PRUD (Partido Revolucionario de Unificación Democrática).

<sup>3</sup> PRAM: Partido Revolucionario Abril y Mayo, creado en 1959 por un grupo de profesionales y dirigentes sindicales independientes, en acuerdo con intelectuales, profesionales, estudiantes y dirigentes obreros comunistas. El PRAM nunca fue legalizado.

<sup>4</sup> PRD: Partido Radical Democrático, creado en 1959 por un grupo de profesionales e intelectuales (literatos), que tampoco fue legalizado.

<sup>5</sup> PRUD: Partido Revolucionario de Unificación Democrática, creado en 1949 con los auspicios del Consejo Revolucionario de Gobierno en sus primeros tiempos. El borrador del primer proyecto de Carta de Principios de lo que llegaría a ser el PRUD, fue redactado por Ángel Góchez Marín, Mario Salazar Valiente y Jorge Arias Gómez. Estos, quienes eran estudiantes universitarios, fueron encargados de la redacción por un grupo de políticos cuyas primeras reuniones fueron celebradas en casa de José María Peralta Salazar. Esto sucedía en el primer semestre de 1949, antes que se barajara la candidatura del mayor Oscar Osorio a la Presidencia de la República. El nombre de PRUD fue propuesto en el borrador. Los tres estudiantes mencionados, cuando se percataron de que el nuevo partido era una entidad con visos de oficial y caudillista, se separaron del grupo organizador.

En Santa Ana, los doctores Ángel y Jesús, ambos de apellido Góchez Castro, eran activistas del grupo inicial aunque se retiraron enseguida, debido al carácter que se le imprimía al partido en proceso de formación.

compatriotas (agosto de 1960), lo cual atizó más la indignación y multiplicó las movilizaciones demandando poner fin a la represión y el retorno de los exiliados. El gobierno replicó aumentando las capturas y las expulsiones del país, allanando vandálicamente la Universidad con policías y guardias nacionales. El Dr. Napoleón Rodríguez Ruiz, quien era Rector fue bárbaramente golpeado. Durante los días siguientes las manifestaciones fueron tiroteadas.

El Partido Acción Renovadora (PAR), los nuevos partidos en proceso de organización –Partido Revolucionario Abril y Mayo (PRAM) y Partido Radical Democrático (PRD)–, la AGEUS<sup>6</sup> y la CGTS habían integrado el Frente Nacional de Orientación Cívica (FNOC) para conducir esta lucha por la democracia. A medida que se agudizaba la confrontación con el gobierno, el FNOC comenzó a realizar preparativos y acciones pre-insurreccionales.

El 26 de octubre de 1960, esos preparativos se vieron interrumpidos debido a un golpe militar, con participación civil en la conspiración previa, que derrocó al coronel José María Lemus y estableció una Junta de Gobierno (tres militares y tres civiles). Una vez más, se presentó la apertura política y se emprendió un febril movimiento organizativo popular pero también, una vez más, llegó el cierre y la represión. En efecto, el 25 de enero de 1961, cuatro meses después del derrocamiento de Lemus, un contragolpe militar, auspiciado abiertamente por la Embajada de los Estados Unidos (recién inaugurado el gobierno de J. F. Kennedy) y protagonizado por otro «movimiento de la juventud militar», echó por tierra a la Junta. A primeras horas de la mañana, una gran multitud rodeó el cuartel El Zapote (base del Regimiento de Artillería), demandando a gritos armas a los oficiales que, al parecer, no habían decidido apoyar el madrugón. Las armas, desde luego, les fueron negadas al pueblo; los oficiales de El Zapote, tras breve vacilación, se pusieron a favor del golpe y la multitud, a la que se unieron miembros civiles de la Junta, algunos de sus funcionarios y dirigentes del FNOC, marcharon hacia el cuartel San Carlos (Primer Regimiento de Infantería), en donde estaban los actores principales de la asonada. El objeto de tal marcha multitudinaria, era reclamar el respeto a las libertades y derechos populares. Los golpistas movilizaron contingentes de la Guardia Nacional y de la Policía para masacrar la enorme manifestación con fuego de fusilería, en la Avenida España. De esta manera, la apertura de octubre de 1960 fue cancelada con los consiguientes muertos, heridos, presos políticos y exiliados.

Los golpistas instalaron en el poder un Directorio Cívico Militar, el cual se adhirió a la Alianza para el Progreso, proclamada cinco días antes por el presidente J. F. Kennedy en su discurso de toma de posesión en Washington.

<sup>6</sup> AGEUS: Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños, que agrupaba a todos los estudiantes de la Universidad de El Salvador, la única que existía entonces en el país.

Después vino la creación de un nuevo partido oficial, el Partido de Conciliación Nacional (PCN), la celebración de unas absurdas elecciones de Asamblea Constituyente que aprobara una «nueva» Constitución, la de 1962 que no era sino copia de la de 1950, con leves y convenientes reformas dictadas por las circunstancias y, enseguida, se realizaron «elecciones» presidenciales (1962). La candidatura única fue la del coronel Julio Adalberto Rivera (miembro del Directorio). Los dirigentes del PAR, del PRAM y del PRD se encontraban bajo persecución o en el exilio. El Frente Unido de Acción Revolucionaria (FUAR) y el PRAM llamaron desde la clandestinidad a *no votar*. El Partido Demócrata Cristiano (PDC), que había sido fundado el 25 de noviembre de 1960, se negó a participar a causa de su pésima experiencia en las elecciones para la «constituyente» el año anterior, donde las manipulaciones y fraudes estuvieron en el orden del día.

En febrero de 1961, o sea un mes después de la instalación del Directorio Cívico Militar, fue creado por el Partido Comunista de El Salvador (PCS), el Frente Unido de Acción Revolucionaria (FUAR). Fueron organizadas «columnas» integradas por Grupos de Acción Revolucionaria (GAR), que reunían a personas decididas a desarrollar variadas formas de lucha contra la dictadura militar, incluso la acción armada. El FUAR desarrolló durante tres años una dinámica acción propagandística y movilizadora en la plaza pública y emprendió la formación de cuadros capacitados para la lucha armada. Sin embargo, discrepancias en el interior de la dirección del PCS, acerca de la estrategia revolucionaria, en que interactuaron factores objetivos del proceso nacional, impidieron el inicio de la acción armada en aquellos años.

Se hizo necesario para la dictadura proveer medidas que aliviaran la aguda tensión política y aseguraran su estabilidad. En 1963, el gobierno del coronel Julio Adalberto Rivera accedió a reformar la Ley Electoral y a establecer la representación proporcional en la Asamblea Legislativa, en los mismos términos y forma de cálculo que en 1960 había diseñado el foro convocado por la AED. Así pues, el péndulo se desplazó una vez más hacia la apertura política. Efectivamente, la representación proporcional reactivó a los partidos opositores legales (PAR, PDC y otros), al PRAM nunca se le reconoció legalidad, el PRD y otros, que intentaron organizarse en años anteriores, desaparecieron.

Mientras tanto, en el PCS triunfó la posición de quienes demandaban aplazar la lucha armada, lo que acarrió en 1964 la desaparición del FUAR. Por un tiempo, el PCS junto con diversos agrupamientos independientes, pusieron todo su empuje en la reactivación de la lucha sindical, en la organización de nuevos sindicatos y federaciones sindicales.

Este fue el período en el que surgió muy potente la organización de maestros ANDES 21 de junio, que llevó a cabo dos grandes huelgas con un enorme apoyo popular en todo el país (1966, 1967 y 1968); fue entonces cuando se realizó también la gran huelga general en defensa de los derechos

laborales fundamentales y en solidaridad con los trabajadores de ACERO S.A. de Zacatecoluca (1967), y se organizaron la FUSS<sup>7</sup> y la FESTIAVTSCES,<sup>8</sup> con miras hacia la creación de una gran confederación sindical, que, desgraciadamente, no llegó a constituirse. Tal confederación debía disputar la influencia sobre los trabajadores a la Confederación General de Sindicatos (CGS), controlada por los norteamericanos y cuyos dirigentes eran miembros obedientes del PCN, partido oficial de la dictadura.

Bajo estas nuevas reglas y circunstancias, el PCS decidió en 1966 volver a incursionar en la arena política legal y electoral. El historial de los esfuerzos del proscrito PCS por actuar en la arena política legal es impresionante: se remonta a sus primeros años de existencia, cuando participó en las elecciones de alcaldes y diputados, en enero de 1932. En 1944, después del derrocamiento del general Hernández Martínez, y como una lógica continuidad de su activa participación en la lucha que derrocó al dictador, los comunistas formaron parte del Partido Unión Demócrata (PUD), incluso en el nivel de dirección nacional, conducido por el Dr. Arturo Romero. Al mismo tiempo, los comunistas organizaron y encabezaron la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). En 1951-1952, el PCS y el prestigioso grupo de demócratas santanecos surgido de las luchas de 1944, conducido por el Dr. Ángel Góchez Castro, decidieron conjuntamente incorporarse al PAR para realizar la lucha política legal por la democratización. Sin embargo, un grupo de dirigentes de ese Partido se prestó a la maniobra del gobierno del coronel Osorio, en el sentido de denunciar ese paso como parte de una «conspiración» para derrocar al régimen, lo cual sirvió de pretexto para realizar decenas de capturas y exilios de dirigentes sindicales y universitarios, comunistas y no comunistas, gran parte de los cuales fueron mantenidos en secuestro y bajo torturas durante más de un año. En 1959, junto con un grupo de profesionales e intelectuales progresistas, no comunistas, el PCS participó en la fundación del Partido Revolucionario Abril y Mayo (PRAM), cuyo registro le fue negado arbitrariamente, a pesar de haber cumplido todos los requisitos de la ley.

En 1966 se presenta una nueva ocasión: los comunistas y un numeroso grupo de profesionales e intelectuales de izquierda de San Salvador, Santa Ana y Ahuachapán, no miembros del PCS, se incorporaron al PAR después de alcanzar entendimientos con los dirigentes de entonces. Estos comprendían la necesidad de crear una fuerza democrática capaz de impactar en la lucha electoral, promover la democratización y lograr la realización de cambios estructurales. Este acuerdo fue el que dio origen al «PAR nueva línea»

<sup>7</sup> FUSS: Federación Unitaria Sindical de El Salvador.

<sup>8</sup> FESTIAVTSCES: Federación Sindical de Trabajadores de la Industria del Alimento, Vestido, Textiles, Similares y Conexos de El Salvador.



y a las candidaturas del Dr. Fabio Castillo Figueroa para presidente de la República y del Dr. Jesús Góchez Castro para vicepresidente. La campaña política y el programa, sin precedentes en el país, dieron una inapreciable contribución a la educación política del pueblo salvadoreño y dejaron profunda huella en su conciencia. Pese a la persecución de que fueron objeto sus activistas así como a la censura que le fue impuesta a su propaganda, sin descontar las abiertas amenazas del ejército contra quienes apoyaran al PAR y la «excomuniación» anticipada que decretó el obispo Arnoldo Aparicio de San Vicente, contra quienes votaran por el PAR, agregando a todo ello los manejos fraudulentos el día de la votación, el PAR obtuvo el 15,5% de los votos válidos.

Temerosa de que aquel fuera el punto de partida de una irresistible ofensiva política democrática, la dictadura suprimió el registro legal al PAR, pocas semanas después de las elecciones.

En 1968, el proscrito PAR ayudó con miles de firmas a completar las que le faltaban al Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), para obtener su registro legal y participó *con su bandera* en las elecciones de ese año, para Diputados y Concejos Municipales. La participación de *los paristas* enfrentó enormes restricciones que le fueron impuestas al MNR por la dictadura, a cambio de registrarlo.

En 1970-1971, los comunistas tratamos de registrar el Partido Revolucionario 9 de mayo (PR-9M), pero, una vez más, enfrentamos el rechazo, aunque cumplimos los requisitos. Al mismo tiempo, llegamos a un acuerdo con los dirigentes del recién inscrito partido Unión Democrática Nacionalista (UDN) para participar aliados en las elecciones de diputados y concejos municipales de 1970. La elección por cocientes del Dr. Francisco Lima, como diputado por San Salvador, fue arbitrariamente anulada y los demás resultados obtenidos por la UDN fueron disminuidos fraudulentamente.

A fines de 1971, el PCS y la UDN promovimos ante el PDC y el MNR la idea de formar una coalición permanente para impulsar la democratización de El Salvador, comenzando por la participación con un programa y una candidatura comunes en las elecciones presidenciales a celebrarse en marzo de 1972. Así nació la Unión Nacional Opositora (UNO) y la candidatura del Ing. José Napoleón Duarte, que triunfara evidentemente. Pero la dictadura, personificada entonces por el general Fidel Sánchez Hernández, decidió anular la voluntad popular expresada en las urnas e imponer al coronel Arturo Armando Molina como presidente, asegurando así la continuidad de la hegemonía militar oligárquica. Esta imposición le costó una fractura al ejército evidenciada en el alzamiento militar constitucionalista fallido del 25 de marzo. En esta ocasión, José Napoleón Duarte fue golpeado, arrestado y expulsado al exilio.

## **Surgimiento de las organizaciones político-militares y la lucha armada**

El 19 de julio de 1969, se inició «la guerra de las cien horas» de El Salvador contra Honduras, a consecuencia de las insolubles desventajas que le había producido a ese hermano país el Mercado Común Centroamericano y de la expulsión masiva de campesinos salvadoreños establecidos en su territorio. La conducta ante ese conflicto, provocó fuertes discrepancias en el interior del PCS, hasta entonces la única organización en la izquierda salvadoreña.

Esas discrepancias, más la resurgida polémica sobre la vía de la revolución en todos los sectores de la izquierda, comunistas o no, fueron componentes importantes de la situación en la que nacieron las organizaciones político-militares.

En marzo de 1970, se produjo en el PCS una fractura, con la renuncia y abandono de sus filas de quien era entonces su secretario general, Salvador Cayetano Carpio, junto con un grupo de compañeros y compañeras, quienes poco después fundaron las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí (FPL). Por esos mismos días, otro grupo procedente del movimiento universitario social cristiano, de la Juventud Demócrata Cristiana y de la Juventud Comunista, crearon el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), del cual se desprenderían, en 1975, quienes crearon la Resistencia Nacional (RN) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC).

En opinión de todas estas organizaciones político-militares, en El Salvador no existían posibilidades de avanzar hacia los profundos cambios estructurales que el país requería en lo económico, social y político, por vía pacífica o electoral y debía recurrirse a la lucha armada. Las acciones armadas empezaron a realizarse, muy esporádicamente, en 1971-1972 y de manera más frecuente desde 1973-1974.

El PCS pensaba en aquel tiempo que no era suficiente con que la lucha electoral estuviera agotada en opinión de la dirigencia revolucionaria, sino que era necesario que las mayorías populares lo llegaran a comprender así y ello solamente sería posible por medio de su propia experiencia en la lucha electoral.

Aunque estas dos líneas estratégicas eran discrepantes y dieron origen a una aguda polémica a lo largo de varios años, terminaron siendo complementarias en sus resultados.

Las organizaciones político-militares abrieron el camino de la lucha armada, prepararon cuadros expertos, educaron a grandes contingentes populares que iban alcanzando una disposición combativa superior a partir de su experiencia en la lucha. Desde 1974-1975, formaron, simultáneamente con las estructuras militares secretas, grandes organizaciones campesinas, sindicales, comunales, estudiantiles, etcétera, que irrumpieron en el escenario nacional con multitudinarias movilizaciones y luchas reivindicativas con métodos radicales, causando un gran impacto.

Mientras tanto, el PCS junto a la amplia gama de fuerzas democráticas no armadas: partidos agrupados en la UNO, otras organizaciones sindicales, agrupamientos campesinos, estudiantiles, intelectuales, etcétera, realizaban la lucha cívica, política y reivindicativa, en los marcos de la legalidad. Este era también un enorme movimiento popular, como se pudo ver en las campañas electorales y votaciones de la UNO.

Después de ganar una elección presidencial (1972), y de participar en dos elecciones parlamentarias y de alcaldes (1974 y 1976), así como de ganar una nueva elección presidencial (la del 20 de febrero de 1977) igualmente manoseadas por el fraude, grandes mayorías ciudadanas, abanderadas por la UNO, fueron realizando su creciente viraje hacia movilizaciones combativas y hacia el apoyo a la lucha armada. Una parte considerable se incorporaba de forma directa a las organizaciones político-militares.

La UNO había concurrido a las elecciones del 20 de febrero de 1977 llevando como candidato a la Presidencia de la República a un militar demócrata, jubilado recientemente: el coronel Ernesto Claramount Roseville. La postulación respondía al propósito de los partidos coaligados de tender un puente a los militares y de lograr por medio del voto un gobierno que realizara una transición incruenta de la dictadura a la democracia. Pensábamos que quizá, así, habría elecciones libres y podría realizarse aquel proyecto.

Al mismo tiempo, en la dirigencia de los partidos de la UNO coincidíamos en poner en duda que estos propósitos pudieran cumplirse, teniendo en cuenta la experiencia de las elecciones de 1972, y siguientes, la intransigencia y brutalidad de la dictadura, tanto más cuanto que la oligarquía había logrado poner de rodillas al coronel Arturo Armando Molina, obligándolo a retroceder de su anunciado intento de realizar una «transformación agraria» –ciertamente tímida–. Asimismo, le obligó a deshacerse de sus ministros reformistas, a emprender varias matanzas contra el creciente movimiento campesino –la primera fue en La Cayetana, departamento de La Paz, en 1974– y a autorizar a la Agencia Nacional de Seguridad de El Salvador (ANSESAL)<sup>9</sup> y a sus instrumentos

<sup>9</sup> ANSESAL: Fue fundada en 1961, después del contragolpe militar del 25 de enero, por decisión de la CIA y bajo su directo asesoramiento y supervisión. Su primer jefe hasta 1971, fue el entonces coronel José Alberto Medrano, cuya trayectoria de represor, torturador y asesino era bien conocida desde sus tiempos de tercer jefe de la Policía Nacional en 1952-1955. El mayor Roberto D'Abuisson fue el más destacado lugarteniente de Medrano y continuó en el escalón de mando superior de ANSESAL hasta el 15 de octubre de 1979, cuando la Juventud Militar tomó el poder y lo dejó fuera del ejército. Medrano, al frente de ANSESAL creó la Organización Democrática Nacionalista (ORDEN) en 1965-1966 y en 1967 el primer escuadrón de la muerte, bajo el nombre de MANO BLANCA. El terrorismo de la fatídica ORDEN y los crímenes de la MANO BLANCA intimidaron durante años a la ciudadanía, para que aceptara la continuidad de la dictadura militar oligárquica.

–ORDEN<sup>10</sup> y Escuadrones de la Muerte– para que intensificaran sus persecuciones y crímenes contra las fuerzas populares y políticas opositoras.

Por eso, simultáneamente al enérgico esfuerzo de la campaña electoral, la dirección de la UNO, con su candidato, discutió y aprobó un plan de defensa del voto popular, para el caso de que se consumara un nuevo fraude y se pretendiera imponer en la presidencia al candidato oficial, general Carlos Humberto Romero, verdadero jefe del ejército, de la ORDEN y de ANSESAL. El plan contemplaba medidas reforzadoras de la vigilancia en las mesas receptoras de votos, el 20 de febrero, movilizaciones de calle, acciones insurreccionales y huelga general, durante los días siguientes, si se configuraba la situación prevista.

En la práctica, recayó en el PCS-UDN la realización de las acciones insurreccionales, gran parte de la movilización en las calles y plazas, y la promoción de la huelga general. Los otros dos partidos de la UNO (PDC y MNR) aportaron con su capacidad de convocatoria y sus dirigentes participaron en la tribuna de la Plaza Libertad junto a los candidatos, Ernesto Claramount Roseville y Antonio Morales Erlich, durante todos los días que duró la concentración, hasta su desalojo sangriento por el ejército, en el amanecer del 28 de febrero.

El PCS-UDN promovió las acciones, enfrentadas al ejército y los cuerpos de seguridad, durante los dos días siguientes a la masacre de la Plaza Libertad, y poco tiempo después, adoptó la decisión de realizar su viraje hacia la lucha armada, acompañando a enormes agrupamientos ciudadanos que tomaban ese camino.

Al PCS le resultó dificultoso y lento realizar ese viraje a lo largo de dos años, después de su prolongada participación en la lucha legal, paradójicamente realizada desde la ilegalidad en la que fuera mantenido de modo permanente desde 1932. La preparación y realización de su VII Congreso –en marzo de 1979–, la participación solidaria de un contingente de militantes suyos en la ofensiva que llevó a la victoria a la Revolución Popular Sandinista (19 de julio de 1979), fueron decisivas para la consumación de su incorporación a la lucha armada, con lo cual pudo realizar también su importante contribución al logro de la unidad de las fuerzas revolucionarias en el FMLN, a la concertación con las fuerzas democráticas y a la constitución del Frente Democrático Revolucionario (FDR).

<sup>10</sup> ORDEN: Organización Republicana Democrática Nacionalista, creada por el general José Alberto Medrano en 1966, desde la ANSESAL. Fue una combinación de agrupamientos ideológicos fanatizados de derecha, estructuras de espionaje, bandas represoras y escuadrones de la muerte, enquistadas en el PCN, ejército, los cuerpos policiales y el gobierno. Al mismo tiempo que difundían la delación, el chantaje político y organizaban los desaparecimientos y asesinatos, aumentaron el poderío de ANSESAL y sus jefes. ORDEN fue disuelta por el Movimiento de la Juventud Militar, el 15 de diciembre de 1979.

Así fue que surgieron, crecieron, se ramificaron, desde el corazón de nuestra historia nacional y en las entrañas y alma del pueblo salvadoreño, la voluntad, los afluentes y cauces de esa poderosa correntada que fue la guerra popular revolucionaria. Presentarla como una implantación desde Moscú, La Habana, Managua, es decir como una expresión de la «guerra fría», es un acto de ceguera dogmática y un gran desprecio al pueblo salvadoreño, a sus anhelos, ideales, luchas y sacrificios a lo largo de su historia; es también un acto de encubrimiento a favor de quienes han gobernado El Salvador con métodos atroces.

A manera de resumen, nuestra visión sobre el proceso y las motivaciones que llevaron a la guerra, puede expresarse de la manera siguiente:

«La guerra es la continuación de la política por otros medios» (tesis de Clausewitz) y en El Salvador fue la continuación de la persistente y prolongada lucha de las fuerzas democráticas y populares por superar la pobreza, terminar la dictadura militar y poner en marcha un proceso de democratización política y económico-social, una vez que las posibilidades de avanzar hacia estos objetivos por vía política y gremial fueron cerradas por medio de sangrientas represiones masivas y sucesivos fraudes electorales. Llegó el momento en el que no se podía seguir adelante sin empuñar las armas. Esta fue la convicción a que arribaron, sucesivamente, decenas de miles de personas a lo largo de la década electoral de los años setenta, principalmente después del descarado fraude en las elecciones presidenciales del 20 de febrero de 1977 y de la matanza en la Plaza Libertad, ocho días después.

Vinieron luego acontecimientos y desarrollos que habrían podido frenar la marcha hacia la guerra y abrir caminos democráticos y pacíficos, pero también se frustraron. Veámoslos.

### **El 15 de octubre de 1979: oportunidad fallida de avanzar a la democratización sin guerra**

El 15 de octubre de 1979 la Juventud Militar derrocó al general Carlos Humberto Romero, cuyo gobierno ilegítimo de veintiocho meses se había desempeñado con creciente brutalidad; propició la integración de una Junta de Gobierno y un Gabinete ministerial formados por militares y civiles provenientes de la intelectualidad cristiana, del sector empresarial y de, prácticamente, todos los partidos opositores y organizaciones revolucionarias; además, disolvió la ORDEN y separó de la Fuerza Armada a cuarenta coroneles, entre los más destacados por su recalcitrante práctica represiva durante años.

Lamentablemente, quedaron de alta numerosos jefes de este mismo tipo, al mando de cuerpos de seguridad y de importantes unidades del ejército. Uno de ellos, el coronel Abdul Gutiérrez, fue nombrado miembro de la

Junta de Gobierno; otro más, el coronel Nicolás Alberto Carranza, fue colocado al frente del Estado Mayor; el coronel José Guillermo García, fue nombrado ministro de Defensa; otro, el coronel Eugenio Vides Casanova, que aún no mostraba su verdadera vocación represiva, fue nombrado director de la Guardia Nacional; el coronel Juan Rafael Bustillo, continuó como jefe de la Fuerza Aérea, etcétera.

Desde sus posiciones de mando, estos jefes lanzaron una ola represiva aún mayor: varias manifestaciones populares fueron brutalmente masacradas, cientos de personas se tuvieron por «desaparecidas» y proliferaron los asesinatos políticos.

Cerca de estos jefes reaccionarios se comenzó a mover el mayor Roberto D'Abuisson, hinchado de resentimiento contra los líderes de la Juventud Militar que lo dejaron fuera del ejército. Poco después, este personaje surgiría como la figura aglutinadora de la parte más conservadora y agresiva de la oligarquía presa de la desesperación, de la crema y nata de emponzoñados y fanáticos anti-comunistas procedentes de 1932, de toda la cáfila rabiosamente contrarrevolucionaria y también de toda la escoria de pusilánimes existente entre genuflexos y serviles que se arrodillan ante la iracundia de los amos.

Lo que en aquel momento hacía irresistible el atractivo de R. D'Abuisson para esa gente, eran tres factores: el pánico en que se encontraban ante el vertiginoso curso de los acontecimientos que, en su opinión, no solo les oponían en abierta confrontación a grandes multitudes, a la intelectualidad, a las iglesias y a los políticos más prestigiosos, sino también arrastraban al ejército a un giro radical en su contra; la confianza que les inspiraba y la esperanza que les infundía el cínico y desafortunado talante de este personaje funesto y de su trayectoria sanguinaria de la que estaba haciendo gala con el accionar de sus escuadrones de la muerte; y, finalmente, sus extraordinarias dotes de organizador.

La Juventud Militar fue desorganizada, los miembros civiles de la Junta de Gobierno y sus ministros renunciaron a finales de diciembre y primeros días de enero. Terminó, así, en la frustración, la última oportunidad de evitar la guerra.

Es entonces que la dirigencia del PDC decidió romper su alianza con las fuerzas democráticas y populares y pactar con los jefes militares más reaccionarios que se habían posesionado del mando después de anular la autoridad del COPEFA<sup>11</sup> y romper la Juventud Militar. Continuó en la Junta el coronel Adolfo Arnoldo Majano, el único militar realmente demócrata en

<sup>11</sup> COPEFA: Comité Permanente de la Fuerza Armada, integrado por delegados electos en asamblea de oficiales en cada cuartel después del golpe de estado del 15 de octubre de 1979. El COPEFA, por decisión del Movimiento de la Juventud Militar, asumió el mando militar supremo y lo ejerció brevemente. Los jefes conservadores maniobraron para debilitar su autoridad y, luego, anularla. Esto lo consiguieron plenamente.

los altos niveles de poder, pero su base de apoyo entre el cuerpo de oficiales había sido colocada en desventaja y debilitada. Así surgió la segunda Junta. A finales de febrero, se estructuró la tercera, incluyendo a Napoleón Duarte, cuando Héctor Dada Hirezi renunció convencido de que eran los militares más represivos quienes realmente lo decidían todo, e imponían un curso cada vez más sangriento. Estos militares veían en los demócrata-cristianos solo una tapadera para sus crímenes, que podía darles una imagen presentable y visos de legitimidad ante el mundo.

El 24 de marzo fue asesinado el arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, mientras celebraba una misa y 48 horas después fue masacrada por la Guardia Nacional, con fuego de granadas y fusiles automáticos, la multitud que concurrió a su sepelio. Muchas personas murieron o fueron heridas.

El 27 de noviembre de 1980 fueron asesinados los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario, incluido su presidente, Enrique Álvarez Córdova, y cinco más. El FDR había sido fundado en febrero. Mientras tanto, el promedio de asesinatos políticos realizados por los cuerpos de seguridad y los escuadrones de la muerte sobrepasaba los veinticinco cada día. Los cadáveres en las calles y carreteras eran un cotidiano y macabro espectáculo.

En junio de 1980, después del asesinato del arzobispo Romero, la Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM)<sup>12</sup> y el FDR intentaron detener la brutal matanza mediante una huelga general que, en realidad, paralizó al país, pero la matanza continuó. En agosto, se intentó un segundo paro que solo alcanzó una dimensión parcial. La gente terminaba de perder confianza en estas formas de lucha y de sus filas surgía, hacia la dirigencia revolucionaria, la demanda apremiante de que desplegara la acción militar. Muchos miles de salvadoreños y salvadoreñas se incorporaron, apresuradamente durante aquellas semanas, a las estructuras armadas de las diferentes organizaciones.

En este contexto es que las organizaciones revolucionarias político-militares culminan su proceso de unidad, fundan el FMLN el 10 de octubre, preparan lo que esperaban que sería una «ofensiva final» y se lanzan a realizarla el 10 de enero de 1981. Esa ofensiva fue, propiamente hablando, el despliegue de la guerra que en la historia se venía gestando y que el cierre de las vías políticas parió.

<sup>12</sup> CRM: La Coordinadora Revolucionaria de Masas fue creada por acuerdo de la Coordinadora Político Militar surgida del primer acuerdo de unidad de los revolucionarios entre las FPL, el PCS y la RN. La CRM fue integrada por el Bloque Popular Revolucionario (BPR), la Unión Democrática Nacionalista (UDN), el Frente de Acción Popular Unificada (FAPU), las Ligas Populares 28 de febrero (LP-28) y el Movimiento Liberación Popular (MLP).

## La guerra y la política

«La guerra es la continuación de la política», pero una vez que la guerra queda entablada, es indispensable que cada uno de los bandos definan una política a realizar durante la guerra. El FMLN, conjuntamente con el FDR, desde antes de la ofensiva del 10 de enero, definimos que la nuestra sería la *búsqueda de la solución política negociada al conflicto*. A fines de noviembre de 1980, cuando iniciamos los preparativos de la ofensiva, integramos la Comisión Político Diplomática (CPD), como órgano ejecutor de esa política. La CPD inició sus elaboraciones propositivas y los contactos internacionales desde aquel mismo momento.

El bloque de las fuerzas enemigas del FMLN, conducido por el gobierno de los Estados Unidos, no consideró necesario definir su política durante casi todo el año 1981, porque partía de una tesis presuntuosa: el FMLN sería derrotado militarmente en cuatro o seis meses y, por consiguiente, no hacía falta ninguna política de su parte durante aquel conflicto. Sin embargo, en la última semana de enero y primera de febrero, en el equipo de Reagan predominó fugazmente la opinión de que le era más conveniente a la nueva administración (inaugurada el 20 de enero, diez días después de nuestra ofensiva), negociar una salida política con el FMLN y el FDR, que involucrarse en un conflicto que podía prolongarse, creándole discrepancias inconvenientes en su propio país, y distraer su atención de los objetivos estratégicos frente a la Unión Soviética.

Fue así, que el Departamento de Estado pidió al gobierno de México (que presidía José López Portillo y siendo Jorge Castañeda padre su canciller), que tomara contacto con el FMLN y el FDR para transmitirnos la propuesta de realizar en Washington, «en los próximos días», una reunión que le daría solución política al conflicto. En el encuentro estarían representados, el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno y ejército salvadoreños. México estaría presente como testigo y ofreció la sede de su Embajada en la capital estadounidense, para realizar el encuentro y llevar a nuestra delegación en un avión suyo, además de otras medidas para garantizarnos seguridad.

La comandancia general del FMLN aceptó acudir a esa reunión y lo mismo hizo la dirección del FDR, asistiría también la CPD. Nos dedicamos a preparar nuestras propuestas, pero 48 horas antes de la fecha fijada para el viaje, la Cancillería mexicana nos comunicó que el encuentro había sido cancelado por Reagan. Esa decisión fue la consecuencia de que en su equipo lograron predominar los «halcones», capitaneados por la señora Kirkpatrick y el general Alexander Haig (entonces secretario de Estado). Las «palomas» habían sido vencidas.



El razonamiento de los «halcones» fue, aproximadamente, como sigue:

El conflicto en El Salvador es expresión de la guerra fría; el FMLN es un instrumento de la Unión Soviética, Cuba y Nicaragua. Constituye, por tanto, una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos y debe ser destruido.

Derrotar completamente al FMLN será tan fácil como echar al borracho de la cantina, un asunto de cuatro meses, y lejos de distraer o menoscabar la estrategia global de confrontación con la Unión Soviética, será esa una oportunidad de mostrar nuestra musculatura y determinación...

El presidente Reagan aceptó esta opinión, canceló el encuentro y decidió involucrarse en el conflicto, con una creciente ayuda en armas, asesoría y toda clase de equipamiento a la Fuerza Armada salvadoreña, lo mismo que asesoría, apoyo político y diplomático al gobierno de Duarte. Esta ayuda alcanzó a sumar, en doce años, más de seis mil millones de dólares.

Se consolidaba, así, en la administración Reagan la política de un solo carril –el militar– hacia el conflicto salvadoreño, basada en ese alegato simplista y propagandístico.

Por nuestra parte, habíamos mostrado con hechos la voluntad de buscar una solución política al conflicto por la vía de la negociación, de lo cual se enteraron varios gobiernos, empezando por el de México.

La decisión prepotente de Reagan le acarreó fuertes costos a su administración, puesto que hizo necesaria y posible la Declaración Franco-Mexicana (agosto de 1981), cuyo contenido contradujo, punto por punto, la posición de Washington: el conflicto salvadoreño era *interno*, solo podía tener *una solución política negociada* y en esa negociación debían participar, sin falta, el FMLN y el FDR por ser *fuerzas políticas representativas en su país*.

La adhesión expresa e inmediata que recibió la Declaración de México y Francia por parte de los gobiernos de Europa (con raras excepciones), de África, Asia, lo mismo que de *diversos sectores sociales y políticos estadounidenses*, diferenciaron a la comunidad internacional alrededor de dos políticas hacia El Salvador durante la guerra. Esto permitió al FMLN y al FDR realizar un extenso y profundo trabajo político y diplomático en los mismos Estados Unidos, en Europa, en otros continentes, en el Movimiento de los No Aliados, en la ONU y otros organismos internacionales; al igual que conseguir activo apoyo político y financiero en todas partes.

El distanciamiento entre las posiciones de Reagan hacia El Salvador y Nicaragua de un numeroso grupo de congresistas y senadores demócratas e incluso algunos republicanos, se fue haciendo cada vez más abierto y agudo. Por eso, la administración decidió, en enero de 1984, crear una comisión bipartidista que analizaría la situación centroamericana y le presentaría recomendaciones. Este fue el más serio y consistente esfuerzo por comprometer al Partido Demócrata en la política de Reagan hacia la región. La Comisión

fue puesta bajo la conducción de Henry Kissinger quien, luego de viajar a Centroamérica, presentó su informe.

Para El Salvador, la principal recomendación de la Comisión Kissinger consistía en que los Estados Unidos debía involucrarse no solo con ayuda militar, sino también con masivas inversiones para conseguir la reactivación de la economía sin parar la guerra. Supuestamente se lograría con ello reactivar la economía y al mismo tiempo incrementar la guerra contrainsurgente, lo cual aislaría y debilitaría al FMLN hasta convertirlo en un problema de solución puramente policial. A partir de ese momento, la cooperación norteamericana se elevó a un promedio de setecientos millones de dólares anuales por varios años. Esta suma incluía una incrementada ayuda militar y una voluminosa donación para inversiones masivas en la reactivación económica.

Para enfrentar esta estrategia de la Comisión Kissinger, el FMLN decidió incorporar a su accionar una línea permanente de sabotaje a la economía: paros frecuentes del transporte, destrucción de tendidos eléctricos, destrucción de puentes, etcétera. Estas acciones se habían venido realizando antes, pero desde aquel momento se intensificaron y se volvieron sistemáticas y permanentes.

El mensaje de nuestra campaña de sabotaje era el siguiente: no es posible reactivar la economía dentro de la guerra; para ello, es necesario que haya paz y esta solamente se puede conseguir por medio de la negociación con el FMLN y el FDR.

La reactivación económica, en efecto, no se consiguió, el dinero gratis norteamericano no pudo ser invertido, pero en cambio generó corrupción y descompuso a la cúpula militar, lo mismo que a muchos funcionarios del gobierno de Duarte y a dirigentes del Partido Demócrata Cristiano. De esta manera, la estrategia Kissinger fue derrotada en profundidad y revertida en sus efectos.

La derrota de la estrategia Kissinger hizo un considerable aporte a la causa de la solución política negociada: abrió de nuevo la brecha discrepante entre la administración de Reagan y, luego, la de Bush y el agrupamiento más dinámico del Partido Demócrata, que atrajo a su lado a prestigiosos parlamentarios del Partido Republicano; y por otra parte, inició el desplazamiento de los empresarios salvadoreños hacia el apoyo a la salida negociada.

Todo análisis serio de la guerra salvadoreña y de su solución negociada debe tomar en cuenta estos hechos y realidades, o de lo contrario degeneraría en intencionada propaganda favorable a nuestros enemigos de aquel tiempo.

A comienzos de 1982, el bloque contrarrevolucionario conducido por Washington realizó elecciones de Asamblea Constituyente y se definió, así, la política que aplicaría durante la guerra: elecciones.

El nombramiento forzado de Álvaro Magaña (marzo de 1982-1984) como presidente provisional y los precarios equilibrios logrados con la firma del Pacto de Apaneca (3 de agosto de 1982), ponían de manifiesto, sin embargo, que esa política no trajo la inmediata cohesión en el bloque enemigo, que continuaba presa de contradicciones.

Nuestra política por una solución negociada, en cambio, fue persistente y sistemática. Aunque solo sea para refrescar la memoria, paso a mencionar en una lista incompleta las propuestas que conjuntamente con el FDR presentamos desde octubre de 1981 hasta mayo de 1987, y algunas de las que presentó el FMLN solo, desde enero de 1989. Sucedió así con estas últimas porque los partidos del FDR y el Partido Social Demócrata crearon en 1988 la Convergencia Democrática y, acogiéndose a los acuerdos de Esquipulas II, obtuvieron el reconocimiento de su legalidad por parte del gobierno salvadoreño. Esto les permitió participar en la lucha electoral.

He aquí el listado:

- Propuesta de Paz, FMLN-FDR, 4 de octubre de 1981.
- Propuesta de Diálogo, FMLN-FDR, 5 de octubre de 1982.
- Propuesta de Cinco Puntos para una Solución Política, FMLN-FDR, 5 de junio de 1983.
- Propuesta de Integración y Plataforma del Gobierno de Amplia Participación, FMLN-FDR, 31 de enero de 1984.
- Propuesta Global para la Solución Política Negociada y la Paz, FMLN-FDR, 30 de noviembre de 1984.
- Propuesta Política por el Diálogo Nacional para ponerle fin al Conflicto, FMLN-FDR, 20 de julio de 1986.
- Propuesta de Negociación inmediata encaminada a la solución del conflicto, FMLN-FDR, 28 de mayo de 1987.
- Propuesta para convertir las elecciones en una contribución a la paz, FMLN, 23 de enero de 1989.
- Posición del FMLN frente al futuro gobierno de ARENA y propuesta para alcanzar una democracia real, una nueva sociedad y la paz, 6 de abril de 1989.
- Propuesta del FMLN para lograr la democratización, el cese de hostilidades y la paz justa y duradera en El Salvador, 11 de septiembre de 1989.

El arzobispado de San Salvador seguramente guarda en sus archivos una documentación completa, toda vez que se desempeñó como intermediario del diálogo desde 1981 hasta 1989.

A partir del segundo diálogo con el gobierno de Alfredo Cristiani (octubre de 1989), participó Álvaro de Soto, representante del secretario general de la ONU, en calidad de testigo. La ofensiva del FMLN (noviembre-diciembre

de ese año), *forzó el paso del diálogo a la negociación* y entonces de Soto pasó a actuar como intermediario y buen oficiante. En los archivos de la ONU, por eso, se puede consultar abundante documentación sobre nuestras propuestas, que fueron literalmente la única base primaria de toda la negociación. El gobierno de Cristiani se limitó a reaccionar, en casi todos los casos, tratando de disminuir el alcance y significación de nuestras propuestas.

Con mucha ligereza, y prescindiendo de los hechos, se afirma que la negociación fue posible gracias al derrumbe del socialismo en Europa del Este, por la desaparición de la Unión Soviética, la derrota electoral de los sandinistas en febrero de 1990 y, sobre todo, gracias a la decisión del gobierno de los Estados Unidos (administración Bush). Se dice también, en la propaganda de la derecha salvadoreña y de sus acólitos, que todo el mérito corresponde a Alfredo Cristiani a quien califican de «Presidente de la Paz». ¿Qué hay de cierto en esas tres afirmaciones?

Primero: En realidad, contrariamente a lo que se alega, la crisis y derrumbe del socialismo soviético influyó en la negociación pero *retardándola*, no acelerándola. Veamos los hechos.

En enero de 1989, cuando la crisis del socialismo soviético avanzaba, el FMLN propuso postergar por seis meses las elecciones presidenciales en nuestro país, con el propósito de participar en ellas, comprometiéndonos a aceptar su resultado, a cesar el fuego y a reconocer, en consecuencia, a la Fuerza Armada del Estado como único ejército, a condición de que se *autodepurara*. Aunque en el primer momento nuestra propuesta recibió comentarios aperturistas del Departamento de Estado, finalmente fue rechazada por la administración Bush (instalada el día 20), con el acompañamiento y regocijo de la cúpula militar y del mayor R. D'Aubuisson. El presidente José Napoleón Duarte, como siempre, se mostró vacilante.

En la base del rechazo de nuestra propuesta, estuvo la conclusión de que ella revelaba a una comandancia general del FMLN supuestamente convencida de que una vez que perdiéramos el apoyo soviético caeríamos en una debilidad extrema. En consecuencia, no convenía negociar con nosotros, sino esperar a que ese curso se desarrollara más, para derrotarnos militarmente. Si acaso se negociaba entonces, sería para concertar nuestra rendición.

Por su parte, la comandancia general del FMLN concluyó que esa lógica dogmática solo podía rebatirse demostrando su falsedad en el terreno práctico y ordenó, para ello, la preparación de una gran ofensiva sobre los centros principales de la retaguardia militar y política del bloque enemigo en nuestro país. La orden de realizarla se daría, y se dio, después de comprobar que el gobierno surgido de aquellas elecciones eludía negociar en serio la paz. Eso fue, efectivamente, lo ocurrido en los dos diálogos con el gobierno de Cristiani (septiembre y octubre, 1989).

En el diálogo de octubre, el gobierno nos presentó la demanda de que cesáramos unilateralmente el fuego 48 horas después de concluir la reunión, a cambio de un etéreo planteamiento de lo que podría ser la adecuación de la Fuerza Armada «dentro de una sociedad democrática», por lo demás inexistente. Aquello equivalía a demandarnos la rendición. Nuestras propuestas de reforma constitucional (la misma que acordaríamos en abril de 1991) y otras que presentamos, no merecieron ningún tratamiento serio y pocos días después de la reunión, los militares de «la tandon», cuya expulsión de la Fuerza Armada pedíamos, volaron con explosivos, a plena luz del día, la casa sede de FENASTRAS (Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños), asesinando a la mayor parte de su dirigencia reunida allí en aquel momento y a otros trabajadores.

Esta conducta arrogante y asesina, detonó el lanzamiento de la gran ofensiva general. Cuando combatíamos en San Salvador y en otras ciudades de primera importancia, se derrumbaba el muro de Berlín. Era tal el pánico y la desesperación del alto mando de la Fuerza Armada, que ordenó el asesinato de los padres jesuitas, «jugándose el todo por el todo». Este gravísimo crimen puso al mundo en su contra, incluido el Congreso de los Estados Unidos. Fue así como esta gran ofensiva abrió paso a la negociación.

Pero en febrero, cuando la negociación se había iniciado, con los buenos oficios del representante del secretario general, Javier Pérez de Cuellar, en Nicaragua perdieron las elecciones los sandinistas. El gobierno de Bush, quien después de la ofensiva de noviembre-diciembre de 1989 había adoptado la política de doble carril –militar y negociador–, volvió a priorizar absolutamente el carril militar, porque «sería imposible el abastecimiento de armas para el FMLN sin el gobierno sandinista, y de esa manera, se debilitaría irremediablemente».

Esta fue la causa del estancamiento de la negociación en sus temas centrales durante 1990. A propuesta del FMLN, en julio se pasó a negociar el tema derechos humanos, sabiendo que sería fácil alcanzar acuerdo –como lo fue–, puesto que ni el gobierno de los Estados Unidos, ni los militares, ni el gobierno de ARENA querían desnudar sus culpas en la violación de los mismos. Hubo, pues, rechazo del tema. De esa manera, pensamos nosotros que se llevaría oxígeno a la negociación moribunda. Eso fue lo que ocurrió, pero la negociación del tema Fuerza Armada, uno de los decisivos, permaneció en *impasse*. Fue necesario que lanzáramos otra gran ofensiva militar, en noviembre de ese año, para que las cosas comenzaran a marchar en la mesa.

No es cierto, pues, que la crisis del socialismo fue lo que llevó al FMLN a negociar. Nuestra política de búsqueda de una solución negociada se originó en 1980, mucho antes que el desplome de la Unión Soviética pudiera imaginarse y la negociación avanzó porque el FMLN era fuerte y siguió siendo fuerte a pesar de aquel derrumbe.

Segundo: Tampoco es cierto que la negociación se inició cuando el gobierno de los Estados Unidos lo decidió y que de él es el mérito de haberse realizado con éxito.

La verdad es que a la opinión pública norteamericana, a congresistas y senadores visionarios de ese país, a la opinión pública mundial, a la solidaridad internacional, a gran número de gobiernos, les costó mucho trabajo y esfuerzo persistente, a lo largo de muchos años, cambiar las correlaciones en el Congreso e influir en la conducta de la Administración. Y, sobre todo, costó miles y miles de vidas salvadoreñas, mucho heroísmo y audacia de los combatientes del FMLN, derrotar la terca voluntad de los «halcones» del Departamento de Estado, del Consejo de Seguridad Nacional, del Pentágono y la CIA, cuya obsesión respecto a nosotros era aplastarnos, humillarnos y destruirnos. La vida es elocuente: no lo lograron.

Todo esto es lo que hizo necesario a los gobiernos de Reagan y, luego, de Bush, incluir el diálogo dentro de su política de un solo carril –el militar– después de cuatro años de guerra, desde 1984; lo mismo que pasar, en diciembre de 1989, a la política de doble carril y moverse, cautelosa y gradualmente, en 1991 al carril negociador. Fue durante las rondas negociadoras de septiembre y diciembre que este carril se convirtió en el principal para el gobierno de Bush: se acercó al Grupo de los Cuatro Amigos del Secretario General y cooperó en superar rechazos que la cúpula militar salvadoreña y la parte más recalcitrantes del partido ARENA, hacían o provocaban.

Tercero: En el contexto de estas modificaciones del balance en la opinión pública, en los terrenos diplomático, político y militar es que debe hacerse la evaluación de la conducta y la aportación de Alfredo Cristiani al logro del Acuerdo de Paz, desde la Presidencia de la República.

Hay que distinguir varios momentos de su desempeño en este tema:

En un primer momento –inmediatamente después de asumir el cargo de presidente– intentó restringir el esfuerzo a continuar *el diálogo sin negociación* que heredó de José Napoleón Duarte: declaró que no participaría personalmente y anunció su propósito de nombrar un grupo de «notables» para que se reuniera con el FMLN. Nosotros consideramos inteligente que se abstuviera de participar personalmente, pero rechazamos de modo tajante su pretensión de ponernos a hablar con los «notables», porque era evidente la intención de no asumir ninguna responsabilidad ni compromiso.

En un segundo momento, aceptó conformar una Comisión de Diálogo con funcionarios del gobierno, jefes militares y algunos «notables». Nosotros aceptamos de inmediato reunirnos con esa Comisión, pero él intentó continuar con el método de dialogar sin negociar, en el esquema de ganar tiempo, ganar imagen positiva y cooperar con la administración Bush frente a las presiones emanadas del seno del Congreso (diálogo de septiembre, 1989, en México).

Nosotros demandamos y obtuvimos la participación de testigos calificados internacionales, además de la Iglesia, en los próximos encuentros. Nuestro propósito era acelerar el agotamiento de aquel tipo de diálogo que no conducía a soluciones. Propusimos invitar como testigo a un representante del secretario general de la ONU. Después de forcejear, rechazando todo testigo internacional, Cristiani nos propuso que el testigo fuera un representante del secretario general de la OEA. Nosotros replicamos que debían estar presentes uno y otro, lo cual no pudo rechazar.

En un tercer momento, intentó configurar un diálogo en el cual el FMLN apareciera como «intransigente», rechazando propuestas «razonables» (diálogo de octubre en Costa Rica), que propiamente eran la exigencia irracional e imposible, de nuestra rendición.

Nosotros llevamos a ese encuentro, propuestas claras en las que se traslucía nuestra voluntad de avanzar hacia la salida del conflicto mediante reformas y medidas que pusieran en marcha la desmilitarización del Estado, la democratización y el respeto a los derechos humanos y rechazamos sus absurdas demandas, lo mismo que su insignificante oferta sobre el ejército.

En un cuarto momento, a finales de nuestra gran ofensiva de noviembre y diciembre, en la reunión de presidentes centroamericanos en Costa Rica, Cristiani aceptó los buenos oficios del secretario general de la ONU, quien respaldado por la mayoría del Consejo de Seguridad, envió una carta a la reunión ofreciendo su intervención para abrir y realizar la negociación. Los demás presidentes recompensaron a Cristiani firmando un comunicado en el que condenaban absurdamente al FMLN por su ofensiva.

En el quinto momento, adoptó una posición constructiva en el concierto del acuerdo marco de la negociación, el cual se firmaría en la sede de la ONU en Ginebra, el 4 de abril. A continuación adoptó una táctica inteligente: pedir que fuera el FMLN quien presentara las propuestas sustantivas a discutirse en la mesa. El gobierno reaccionaría.

Táctica inteligente, porque le evitó al gobierno ser quien chocara primero con los grupos más reacios de su partido y de la oligarquía, aunque por ello tuvo que pagar el precio de dejar en manos del FMLN configurar los contenidos fundamentales y la orientación de los acuerdos.

Cristiani fue un interlocutor a veces indeciso e inseguro, no pocas veces contradictorio, como cuando se negaba «categóricamente» a viajar a Nueva York o permanecer allí «más de dos días» y luego viajaba y se quedaba diez o más días. Todo ello estaba determinado por las presiones desde dentro de su partido.

Sin la sistemática acción propositiva del FMLN, sin su firme y poderosa acción combativa, que era el fundamento y factor determinante de lo que ocurría en la mesa, en el país y en la conformación de la opinión mundial sobre El Salvador, Alfredo Cristiani, seguramente, no habría querido o podido avanzar,

en su desempeño, hacia el Acuerdo de Paz. En todo caso, es propaganda y no es un análisis serio decir que fue él quien construyó la paz y, al mismo tiempo, callar el papel del FMLN.

D'Abuissou, que en la última fase de su vida, sabiendo que moriría de cáncer, hizo un giro de conducta queriendo dejar también recuerdos positivos que acaso opacaran las imágenes de sus abominables crímenes, ayudó a Cristiani moderando a los individuos más duros y recalcitrantes de ARENA y de la Fuerza Armada.

Por su parte, Cristiani comprendió, en cierto momento, que la negociación cambiaba su imagen ante el mundo, que le daría prestigio hacia el futuro y se dejó llevar por la corriente negociadora.

### **La Fuerza Armada en los Acuerdos de Paz**

La hegemonía de los jefes militares sobre el país, al servicio del poder oligárquico y del dictado de los Estados Unidos, a lo largo de sesenta años, malformó al Estado y a la propia Fuerza Armada.

La independencia entre los órganos del Estado, se volvió una simple ficción y la misión de la Fuerza Armada se concentró en la «lucha contra el enemigo interno» (doctrina del Pentágono de la «seguridad nacional»). El alto mando fue absorbiendo en sus manos la defensa y la seguridad pública, la paz interna, el poder ejecutivo, las empresas estatales autónomas; la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia elegida formalmente por aquella, eran, en último término, simples apéndices e instrumentos del mando militar superior, y los jueces, gobernadores y alcaldes lo eran del mando departamental y municipal.

Así como los cuerpos y los mismos agentes de seguridad pública eran subordinados de los militares, no había en el país nadie capaz de capturar a ningún oficial del ejército –ni a sus parientes o amigos– que incurriera en faltas o delitos, si no mediaba una orden de la alta jefatura, aunque la autoría fuera evidente. Como los magistrados y jueces eran nombrados bajo la aprobación del poder militar omnímodo, tampoco había juez alguno que se atreviera a juzgarlos. Los que alguna vez lo hicieron fue porque así convenía a la jefatura militar en turno y los que se atrevieron a actuar por cuenta propia fueron destituidos y perseguidos u obligados a un exilio «voluntario». La impunidad se constituyó en un fenómeno cotidiano y «normal» que fue corrompiendo hasta la médula el sistema judicial.

En la Asamblea Legislativa se introdujo la representación proporcional, pero el alto mando decidía a cuáles partidos podía registrar como legales el Consejo Central de Elecciones, a cuáles debía impedirselo, incluso a cuál debía cancelarle su personería jurídica. Más todavía: el alto mando decidió, en numerosos casos, a cuáles candidatos a alcaldes o diputados triunfadores



(ya no se diga candidato a la Presidencia de la República), debía anularse o modificarse sus resultados en las urnas. Nunca debía tener mayoría la oposición democrática en la Asamblea Legislativa ni debía esta aprobar leyes que no contaran con la aceptación del alto mando castrense.

La actividad permanente principal de la Fuerza Armada era el control sobre la población en todo el país, mediante el sistema del llamado Servicio Territorial del Ejército (sistema de patrullas militares), el espionaje sobre todos los dirigentes y cuadros políticos, sindicales, gremiales en general, autoridades y docentes universitarios, autoridades eclesiásticas, sacerdotes, pastores, etcétera, etcétera. Todos eran sospechosos de «comunismo», es decir, formaban parte del «enemigo interno». Así, al lado de la impunidad reinaba la más absoluta arbitrariedad.

El concepto de «enemigo interno» era el eje de la doctrina de «seguridad nacional» impuesta a los ejércitos del hemisferio americano por los Estados Unidos, como una directa derivación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), firmado en Río de Janeiro en 1947. Fue también derivación del TIAR la doctrina de la «seguridad continental», cuya columna vertebral es el concepto de enemigo o amenaza extra-continental. Todo gobierno que surgiera en nuestro continente sin el agrado de los Estados Unidos, pasaba a ser «amenaza extracontinental», enemigo de todos y en su contra se podía realizar cualquier acción. Recordemos los casos del gobierno guatemalteco de Jacobo Arbenz Guzmán, del de Fidel Castro en Cuba, del de Salvador Allende en Chile, de las invasiones a Granada y Panamá, etcétera. En América Latina hubo, desde entonces, unas honrosas excepciones: la de México, Cuba desde 1959 y, alguna vez, la de Ecuador, que mantuvieron políticas independientes.

La Escuela de las Américas fue creada por el Pentágono para formar a los oficiales de los ejércitos latinoamericanos y caribeños y alinear su pensamiento a los postulados y trapacerías de estas doctrinas. En septiembre del presente año (1996), el Pentágono mismo reveló, en el curso de una investigación del Congreso estadounidense, que en la Escuela de las Américas se impartían adiestramientos en métodos de tortura, desaparecimientos, organización y operación de escuadrones de la muerte. Esta confesión vino a confirmar las denuncias que muchos latinoamericanos estuvimos haciendo a lo largo de decenios y, al mismo tiempo, ilustra sin desperdicio la esencia amoral y ajurídica de esa doctrina de «seguridad nacional».

Así, la Fuerza Armada derivó en una especie de partido político, policía, espía, censor de prensa, fuente de impunidad y tráfico de influencias, juez, legislador, etcétera, y, al mismo tiempo, ejército propiamente tal.

El objetivo principal para el FMLN en la negociación fue abrir el camino hacia la democracia, fijando su prioridad en el propósito de abolir la dictadura militar y reformar la Fuerza Armada.

Fue así como se logró:

- Reducir a dos las numerosas misiones ordinarias que la Fuerza Armada tenía en la Constitución: defensa de la soberanía y de la integridad territorial. Antes, esas misiones incluían el orden público, la seguridad pública, la paz interna, el cumplimiento de la Constitución y las leyes, etcétera.
- Abolir el reclutamiento forzoso (con captura violenta de jóvenes) y sustituirlo por convocatorias sorteadas para el servicio militar.
- Cambio de la Doctrina Militar, aboliendo la doctrina de «seguridad nacional».<sup>13</sup>
- Sacar la seguridad pública del control de la Fuerza Armada; disolver los cuatro cuerpos de seguridad existentes (Guardia Nacional, Policía de Hacienda, Policía de Aduana y Policía Nacional).
- Crear la Academia Nacional de Seguridad Pública y la Policía Nacional Civil, bajo dependencia y mando civil.
- Disolver las Defensas Civiles, cuerpo armado que llegó a tener entre 35 000 y 40 000 efectivos.
- Disolver el Servicio Territorial del Ejército, cuyas patrullas cantonales y de barrio, llegaron a tener hasta 170 000 movilizados bajo mando militar.
- Disolver los batallones contra-insurgentes (BIRIS, BIAT y otras unidades).
- Reducir el número de efectivos de la Fuerza Armada a la mitad, con lo cual quedó inicialmente en 30 000 (en 1996 tiene 13 000 efectivos).
- Depurar el cuerpo de oficiales y jefes, por medio de la Comisión *Ad-hoc*, integrada por tres personalidades civiles salvadoreñas.
- Reformar la educación militar, para hacerla congruente con la nueva doctrina, naturaleza y misiones de la institución.

La reforma de la Fuerza Armada es la parte de los Acuerdos de Paz cumplida en la mayor proporción, es el tema mejor logrado. De esa reforma, ha surgido un ejército en condiciones de adquirir verdadero profesionalismo.

En las filas actuales de la Fuerza Armada ha surgido una corriente de opinión, entre sus jefes y oficiales, que apoya el nuevo lugar de su institución en el Estado y la sociedad salvadoreños; sin embargo, aún subsisten elementos de la vieja mentalidad y hay grupos entre los capitalistas civiles y políticos de derechas que insisten en atraerlos a las prácticas golpistas «para imponer el orden»; usan, para ello, el pretexto de que «ese es el único camino para controlar la desbordada delincuencia y establecer seguridad para la gente honrada».

<sup>13</sup> Para una mayor información véase los Acuerdos de Chapultepec en Schafik Hándal: ob. cit., pp. 51-52.

Yo puedo afirmar que siempre ha habido oficiales y jefes en las filas de la Fuerza Armada con un pensamiento democrático, pero no puedo afirmar que esa sea una garantía total de que su posición predominará en todo momento, que el conjunto se mantendrá fiel a la nueva doctrina de su institución y que jamás volverán los «cuartelazos». Creo, sí, que hoy es más difícil que antes correr por esos atajos. En todo caso, estoy convencido de que el pueblo salvadoreño no aceptará, después de la experiencia de la larga guerra civil, la vieja coyunda ni el yugo de la dictadura. Solo manteniendo a la institución dentro del rol pactado, puede ella fortalecer su existencia y asegurar su permanencia.

SCHAFIK HÁNDAL (1930-2006) fue secretario general del Partido Comunista de El Salvador (PCS), comandante de las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL) y uno de los cinco miembros de la comandancia general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Encabezó la comisión del FMLN durante el proceso de negociación que condujo a la firma de los Acuerdos de Chapultepec, que pusieron fin el 16 de enero de 1992 al conflicto armado salvadoreño. Fue coordinador general del FMLN, diputado a la Asamblea Legislativa y candidato a la presidencia de El Salvador en 2004.

## Palabras sobre Schafik\*

TATIANA BICHKOVA DE HÁNDAL

En octubre de 1930 en la ciudad de Usulután, en el seno de una familia acomodada nace un niño. Su cuna era de caoba barnizada y sus pañales de lino fino.

Pero, desde temprana edad conoce la pobreza de su pueblo y los abusos y egoísmo de sus gobernantes, hechos que no le pueden dejar indiferente.

En el país reina la dictadura del general Martínez. Es un monolito que nadie lo mueve, ni siquiera se le ocurre pensarlo, en aquel momento, a ese niño salvadoreño.

Vive solo en San Salvador porque en su ciudad natal solo hay escuela primaria y él ya está en la secundaria. Tiene 13 años, cuando de repente se ve participando en la huelga nacional de brazos caídos, y como resultado, en un abrir y cerrar de ojos cae la dictadura del general Martínez. El niño queda impactado. Algo que parecía tan eterno, tan inquebrantable, cayó como un castillo de naipes gracias a la acción del pueblo unido.

Este acontecimiento marcó la vida del niño que desde esa edad emprendió la lucha y mantuvo en alto la bandera de la lucha por la justicia social durante sesenta y dos años. Era Schafik Hándal.

Fue difícil su camino, lleno de baches, espinas y peligros, pero Schafik se debía a su país. Nunca lo abandonó, nunca dejó a su pueblo. Y si tuvo que pasar algún tiempo fuera de su país, fue porque lo expulsaron y desterraron los gobiernos criminales. Pero siempre regresó. Ya después vivía clandestino, corriendo peligro, pero siempre en El Salvador, siempre con su pueblo.

Schafik luchó incansablemente por la democracia, por la paz. Fue perseguido, amenazado, encarcelado, torturado, pero agarró las armas solo cuando al pueblo salvadoreño no le dejaron otra opción. Y no quería una

\* Palabras pronunciadas en la ceremonia de entrega póstuma a Schafik Hándal de la Orden al Mérito Luis Donaldo Colosio, otorgada por la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), en el hotel Las Mercedes, de Managua, Nicaragua, el 11 de septiembre de 2006. (N. del E.)

victoria militar, que siempre va acompañada por muchas víctimas y pérdida de vidas humanas. Desde el primer momento abogaba por el diálogo. Fue uno de los promotores de la negociación de los Acuerdos de Paz y su principal actor.

Los Acuerdos de Paz pusieron fin al conflicto armado, pero no resolvieron los problemas que enfrentaba el país. Refiriéndose a eso Schafik dijo en aquel entonces: «Nosotros no estamos llegando a este momento como ovejas descarriadas que vuelven al redil, sino como verdaderos impulsores del cambio hace tiempo anhelado por la inmensa mayoría de los salvadoreños».

Dejó las armas para participar activamente en la contienda política, con la decisión de mantener una lucha persistente para consumar la revolución democrática inconclusa, orientada a cambiar el sistema y asegurar el desarrollo social.

Schafik partía de que los líderes son importantes, organizan, inspiran, producen y transmiten ideas, pero los que hacen la historia son los pueblos. Fue increíble su amor por el pueblo salvadoreño y fue increíble su sentimiento de internacionalismo. Tomaba los destinos de otros pueblos como cosa propia. Y se indignaba y se sublevaba contra la injusticia que se cometía contra otros pueblos, pero a la vez se llenaba de orgullo y satisfacción, de una alegría inmensa, que ni cabía en este gran hombre, cuando triunfaban otros pueblos, cuando uno tras otro tomaban el camino del cambio en sus países. Cuba, Venezuela, Bolivia... Él sentía cómo esta ola crecía y se hacía más potente, porque cada vez más hombres y mujeres se levantaban a la lucha para poner fin a esta vida de humillación y miseria y abrirse paso a un nuevo mundo de justicia social.

Esta ola se está acercando a El Salvador. Él la veía, la presentía, la husmeaba y se llenaba de fe en su propio pueblo salvadoreño. Y tenía razón.

Después de la firma de los Acuerdos de Paz, en El Salvador estaba iniciándose el desplazamiento del capitalismo existente hasta entonces, hacia el capitalismo neoliberal dependiente. Hoy ya está instalado del todo y ha traído la mayor dosis de pobreza, injusticia, dependencia, desempleo profundo y crónico, atraso educativo-cultural, abandono de la salud, recesión de la economía, colapso de la agricultura, sobrevivencia a duras penas de la pequeña y mediana empresa.

El capitalismo neoliberal tiene una particularidad: deteriora, aniquila y choca con todos los sectores de la sociedad capitalista que no forman parte de su superélite, enlazada con las transnacionales.

Objetivamente estas características del capitalismo neoliberal crean condiciones para la lucha del pueblo y para unas alianzas amplias para romper el modelo neoliberal y poner en el centro no el cálculo frío de las ganancias sino a la persona humana.

Es difícil cambiar el sistema usando sus mismas reglas, pero es posible. Desde 1998, en Venezuela se está desarrollando el proceso revolucionario bolivariano que puso en marcha Hugo Chávez, accediendo al gobierno por medio de las elecciones, con las reglas del sistema, y ha procedido a cambiarlo.

En El Salvador podría repetirse el fenómeno y la izquierda revolucionaria podría asumir el gobierno por vía electoral. Eso llevó al pánico a la gran burguesía y a su partido ARENA en las elecciones presidenciales de 2004, cuando se postuló Schafik. Y con razón. El fraude fue multifacético y descarado. Era una gigantesca operación de la derecha con asesoramiento internacional. Pero con todo y esto llegamos a obtener 812 000 votos, cifra que superó nuestras votaciones anteriores, así como los votos con los que ganó ARENA la presidencia en otras ocasiones.

No perdimos las elecciones, nos usurparon la presidencia, que no es lo mismo y tuvimos una ganancia mayor –el pueblo–. El FMLN sale enraizado en el pueblo, en su esperanza y conciencia. El FMLN salió robustecido.

Analizando este momento, Schafik escribía que después de las elecciones se veía cómo cambió la sociedad, que los cambios cuantitativos se acumulaban aceleradamente y esperaba un salto cualitativo.

Desgraciadamente no logró verlo, porque se da a raíz de su fallecimiento. El Salvador antes del 24 de enero y después del 24 de enero de 2006 no es el mismo. Se produce un salto. El propio entierro de Schafik parece más una insurrección popular que una procesión fúnebre. Muchos ojos se hacen videntes, muchas mentes se abren.

La repentina muerte de Schafik sacudió las conciencias de muchas personas de buena voluntad en diversas partes del mundo, provocó un despertar. Lloramos su muerte pero a la vez nos inspiramos en su ejemplo.

Schafik nos deja un gran legado: un legado de lucha y de firmeza de principios. Su amor por el pueblo salvadoreño y por la humanidad fue grande, como grande fue la energía que empeñó hasta el último minuto de su vida, por hacer prevalecer las causas más justas de la gente perseguida y marginada.

Y nos ha dejado muchas cosas por hacer. Ya vino la primera prueba, las elecciones de marzo de 2006 para elegir alcaldes y diputados, que enseñaron que sí, que ya somos otros, que ya no tenemos miedo, que ya estamos dispuestos a defender nuestra victoria.

Cada día que pasa nos afirma en la idea de Schafik de que se ha producido un salto cualitativo. Ya el pueblo es otro. Estos meses han sido los meses de la toma de conciencia, de lucha, de valor, de la disposición a no ceder.

Los que queremos a Schafik, lo admiramos y respetamos tenemos un gran reto: mantener en alto ese compromiso con el pueblo salvadoreño para

que este alcance una verdadera democracia y la auténtica independencia nacional. En este sentido, Schafik vive por un nuevo El Salvador.

Hay personas que me preguntan: ¿Cómo debemos recordar a Schafik? La respuesta nos la dio él mismo, cuando nos dijo: «Quiero que me recuerden exactamente como lo que he sido. Como un luchador, que siempre empuñé la bandera de la democracia en el país, para abrir al pueblo salvadoreño la posibilidad de decidir por sí mismo. Ese ha sido el hilo conductor de toda mi lucha».

Permítanme agradecer a la dirección de la COPPPAL y a todos los que nos acompañan en este evento, el gesto de organizar este homenaje a mi esposo Schafik Hándal, así como el otorgamiento de la máxima Orden al Mérito Latinoamericano Luis Donaldo Colosio, que acepto humildemente como reconocimiento a su memoria y trayectoria. El agradecimiento no es solo personal, es también el agradecimiento de toda la familia Hándal, del pueblo salvadoreño y del FMLN, la organización política que él contribuyó a forjar.

Asimismo, les agradezco la oportunidad que me dieron de dirigirles algunas palabras.

TATIANA BICHKOVA DE HÁNDAL, viuda de Schafik Hándal, es filóloga y realizó su doctorado en la especialidad de Metodología de la Enseñanza de Lenguas Extranjeras. Trabajó en la Universidad Estatal Lingüística de Moscú. Es autora de varias publicaciones científicas y didácticas relacionadas con la enseñanza de la lengua española y, coautora del *Diccionario español-ruso. America Latina*, Editorial Nauka, Moscú, 1998.

# El Canal de Panamá: esperanzas frustradas

OLMEDO BELUCHE

El pueblo panameño, rebotante de alegría, acogió el nuevo siglo con la esperanza de un futuro mejor. El 31 de diciembre de 1999, en un acto majestuoso, decenas de miles de panameños y panameñas entraron a los predios del edificio de la administración del Canal de Panamá para plantar la bandera nacional y arriar la bandera norteamericana. Por fin, luego de un siglo de luchas, de decenas de muertos y centenas de heridos, la enseña patria ondeaba soberana y única en las riberas del Canal.

Un lustro después, las esperanzas de un futuro mejor, gracias a un Canal panameño, administrado por nacionales, cuyos ingresos debieran servir para saldar la enorme «deuda social», se han desvanecido. Empieza a empeorar la frustración y crecen las críticas a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y a la gestión de su administrador, el magnate de la construcción y accionista del principal banco de capital nacional, Alberto Alemán Zubieta.

La gente se pregunta: ¿Adónde van a parar las centenas de millones recaudados cada año por el funcionamiento de la vía acuática? ¿Por qué el Canal no está ayudando a resolver el creciente problema del desempleo y la pobreza? ¿Quiénes se están beneficiando con el Canal panameño?

## **Un siglo de luchas populares por la soberanía**

Estas preguntas son completamente legítimas, en la medida en que el traspaso de la administración del Canal a Panamá y el desmantelamiento de las bases militares norteamericanas fue la culminación de décadas de esfuerzos populares por acabar con uno de los más ignominiosos enclaves coloniales



que la historia del mundo haya conocido. Esfuerzos que se materializaron en una lucha generacional contra la ocupación extranjera, cuyo momento crucial fue la insurrección popular del 9, 10 y 11 de enero de 1964.

Durante aquella gesta, miles de panameños saltaron las cercas que separaban la ciudad de Panamá del enclave colonial, conocido como Zona del Canal, para plantar la bandera nacional como símbolo de soberanía. Las tropas norteamericanas masacraron a la población, y quedaron en las calles más de 500 heridos y 21 muertos.

La Zona del Canal de Panamá, en la que los Estados Unidos gobernaban «como si fueran soberanos», fue impuesta mediante una intervención militar imperialista, típica de la era del «gran garrote», presidida por el tristemente célebre Teodoro Roosevelt. En 1903, Roosevelt desgajó Panamá de Colombia para imponer un tratado, «a perpetuidad», que le cedía todo a cambio de casi nada. Durante décadas Norteamérica explotó la vía canalera a cambio de una anualidad para Panamá, tan irrisoria, que fue rechazada por múltiples gobiernos.

Pero la insurrección de 1964 cambió la historia, y forzó al gobierno de Lyndon Johnson a aceptar la renegociación de los Tratados del Canal y poner una fecha de término a su presencia militar en el país. Esas negociaciones se materializaron en los Tratados de 1977, entre el general Omar Torrijos y James Carter, que fijaron el nuevo siglo como el momento para el traspaso de la administración norteamericana a la panameña y para la salida de las tropas extranjeras.

### **La soberanía mediatizada**

Sin embargo, habría que ser muy ingenuo para creer que los Estados Unidos cederían sus posesiones en Panamá sin mayor resistencia. De hecho, los Tratados de 1977, contienen un Pacto de Neutralidad, que de neutralidad no tiene nada, y que permite a Washington incluso la intervención militar cuando, a su juicio unilateral, el tránsito por el Canal esté en peligro. Además, desde un principio se procuró colocar al frente del Canal a los representantes de la oligarquía que aseguren al imperio la continuidad de sus intereses.

Desde la firma de los Tratados de 1977, importantes hechos conmocionaron la vida política del país: en 1981 fue asesinado el general nacionalista Omar Torrijos; a partir de 1988 se produjo la ruptura del Pentágono con el dictador Manuel A. Noriega, que derivó en la sangrienta invasión militar de 1989; el establecimiento de los regímenes títeres revestidos de una careta democrática de Guillermo Endara, Ernesto Pérez Balladares y Mireya Moscoso.

Durante el gobierno socialdemócrata de Pérez Balladares (1994-1999), se consideró la permanencia de una base aérea yanqui, con la excusa del control al narcotráfico. Pero este proyecto fracasó ante la probabilidad de su rechazo en referéndum. Sin embargo, Mireya Moscoso (1999-2004) firmó una serie de pactos de seguridad con los Estados Unidos, sin pasar siquiera por la Asamblea Legislativa, que incluyen la custodia de la frontera con Colombia por parte del servicio de guardacostas norteamericano; pactos que no han sido recusados por el actual presidente Martín Torrijos (2004-2009), hijo del general Omar Torrijos.

En 1994, un acuerdo multipartidario, apadrinado por Washington, dio a luz una reforma constitucional que creó la llamada Autoridad del Canal de Panamá (ACP), encargada de administrar la vía. Se dotó a la ACP de una autonomía casi total respecto del Estado panameño, tanto que se le ha llamado la nueva «zonita del Canal». A tal extremo se ha llegado, que se ha impuesto el criterio neoliberal de no contar los ingresos de la vía acuática para efectos del cálculo del déficit creciente del Estado.

Se prohibió constitucionalmente el derecho de huelga para sus trabajadores; se dotó de altísimos salarios a sus funcionarios; y se copó la Junta Directiva con personajes salidos de bufetes, bancos y empresas constructoras que representan al capital nacional y norteamericano.

Dicho en pocas palabras, y en lenguaje asimilable a la reciente experiencia latinoamericana, la Autoridad del Canal de Panamá se convirtió en una especie de PDVSA, la empresa Petróleos de Venezuela S. A., cuyos directivos participaron del intento de golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en 2002, y luego encabezaron una huelga patronal para derrocarlo.

## Mejores ingresos no llegan al pueblo

En estos cinco años no todo ha sido negativo. La experiencia de la ACP rompió el mito, largamente asentado por la oligarquía y el imperio, de que los panameños éramos incapaces de administrar el Canal eficientemente. No solo el Canal ha seguido funcionando de manera eficaz, sino que ha visto incrementarse sus ingresos y triplicarse sus aportes al tesoro nacional.

Durante los seis años de administración nacional, incluyendo el presupuesto del año fiscal de 2006, el Canal ha aportado más dinero al país que durante los 85 años que duró la administración norteamericana. Desde 1914, cuando se inauguró, hasta 1999, cuando revirtió a Panamá, el Canal pagó al fisco US\$ 1 877 millones; mientras que, entre 2000 y 2006, produjo ingresos que totalizan US\$ 2 200 millones, sin incluir gastos de funcionamiento e inversión.

Sin embargo, al mismo tiempo que el Canal revertía a Panamá y aumentaban sus aportes al presupuesto del gobierno central, el país ha visto

deteriorarse aún más su situación económica y social. La crisis económica latinoamericana, iniciada en 1999, marcó una fuerte recesión en la que el país se sumió hasta fines de 2004.

La tasa de desempleo abierto se ha mantenido alrededor del 12%, llegando al 20% entre los jóvenes y las mujeres; y el subempleo abarca más del 40% de la fuerza laboral. En el censo de 2000, un tercio de las familias reportaron ingresos inferiores a US\$ 250.00 mensuales, por debajo de la canasta de alimentos, y hasta el 65% manifestaron tener ingresos inferiores a US\$ 600.00 mensuales, evidente signo de pobreza. La delincuencia, en especial la juvenil, se ha tornado en un azote creciente, y el aumento sistemático de los precios del petróleo ha disparado el proceso inflacionario.

En esas condiciones es lógico que la gente se pregunte: ¿Dónde quedó la promesa de que la soberanía sobre el Canal produciría una vida mejor para el pueblo panameño? Esto es explotado por los propagandistas de la extrema derecha para sugerir la falacia de que «con los gringos estábamos mejor», y proponer que se reinstalen en Panamá bases militares en el marco del Plan Colombia.

Para el ejercicio fiscal de 2006, se aprobó el mayor presupuesto con que ha contado el Canal en toda su historia: 1 939 millones de dólares. De esa suma, 1 275,2 millones corresponden a ingresos corrientes generados por el funcionamiento del canal. En el renglón de gastos, 457 millones corresponden a gastos de funcionamiento y 198,7 millones a inversiones. La ACP entregó directamente al erario público, en 2006, 455 millones de dólares en utilidades.

Esta aportación generó suspicacias, en vez de alegrías, pues esta cantidad representa más del doble de los ingresos promedio entregados al Estado en los primeros cinco años (alrededor de 200 millones anuales). ¿Pretendía la ACP crear un «buen clima» para asegurarse la aprobación en referéndum de la proyectada ampliación del Canal?

### **La directiva de la ACP administra el Canal como una «república aparte»**

El problema es que, desde la reversión, un gran debate se ha instalado sobre los criterios con que se maneja el presupuesto del Canal. En primer lugar, porque el grado de autonomía con que se ha dotado a la ACP impide al resto de las instituciones políticas y sociales influir en este tema.

En segundo lugar, porque la ACP se comprometió en un Plan Maestro de Modernización, que implica dragado y ensanche para que circulen a la vez barcos en dos sentidos, y ha consumido US\$ 1 500 millones desde 1997, sin que se hubiera convencido a la sociedad de la urgencia de este proyecto.

En tercer lugar, porque la ACP viene reteniendo de manera ilegal una suma fabulosa que se guarda como «reservas», sin que se sepa ni siquiera en qué bancos se deposita. El economista Roberto N. Méndez ha

denunciado recientemente que la retención de reservas, en 2005, alcanzó la cifra de US\$ 386 millones y que el acumulado en estas reservas secretas supera los US\$ 1 000 millones en cinco años.

En cuarto lugar, porque la Junta Directiva está publicitando la necesidad de una ampliación del Canal mediante un tercer juego de esclusas para barcos de alto calado, cuyos costos y forma de pago no están claros. En el reciente referéndum, ellos han sostenido que los costos no excederán de US\$ 5 250 millones, pero otros especialistas hacen estimaciones entre los US\$ 7 000 y los US\$ 25 000 millones de dólares.

En una audiencia ante el Senado de los Estados Unidos, el secretario norteamericano de defensa para asuntos hemisféricos, Roger Pardo-Maurer, calculó el costo de la ampliación entre US\$ 16 000 y US\$ 25 000 millones de dólares. Estas declaraciones generaron revuelo en el país, no solo por su monto, sino por provenir de una fuente extranjera. La sociedad panameña critica a la ACP de ofrecer más información a los Estados Unidos que a los propios nacionales.

Un estudio realizado por una Comisión tripartita, conformada por Panamá, los Estados Unidos y Japón, que data de 1993, calculaba los costos de una ampliación en US\$ 7 500 millones de dólares de la época; y una consultora privada (Global Insight) los estimaba en US\$ 10 000 millones.

### **El controversial proyecto de ampliación**

Hasta marzo de 2006, múltiples interrogantes agobiaban al pueblo panameño sobre este proyecto: ¿Cómo se financiará? ¿Con empréstitos públicos? La deuda pública panameña ya supera los US\$ 10 000 millones; podría llegarse a duplicar y ser una de las deudas *per cápita* más altas del mundo (Panamá tiene tres millones de habitantes). ¿Se va a hipotecar los ingresos futuros del Canal? Esto significaría menos aportes al Estado y menos capacidad de resolver problemas sociales. ¿Se financiará con un mayor tránsito de barcos y mayores peajes? Pero todas las proyecciones indican un retraimiento a largo plazo del comercio entre China y los Estados Unidos, principal ruta comercial a la que sirve esta vía.

El gobierno Martín Torrijos y la ACP presentaron en abril de 2006 su propuesta de ampliación del Canal: dos mega esclusas para barcos «post-panamax» (de 250 pies de eslora), una en el Pacífico y otra en el Atlántico; cuya construcción terminaría hacia 2014; alimentadas por enormes tinajas; a un costo de US\$ 5 250 millones; que se financiarán con un aumento progresivo de los peajes a un ritmo de 3,5% anuales por 20 años continuos; la proyección financiera se basa en el supuesto de que el comercio por el Canal crezca al 3% anual por 20 años continuos. Si todos estos supuestos se cumplen, el Canal generará una tasa de beneficio del 12% anual cuando la obra esté terminada.

A favor del proyecto se pronunció inmediatamente toda la élite empresarial, nacional y extranjera, la cúpula de los partidos políticos, salvo excepciones muy específicas, los grandes medios de comunicación y los sectores sindicales amarillos tradicionalmente aliados a los gobiernos de turno.

El proyecto fue cuestionado desde un inicio por las principales organizaciones populares y diversos sectores intelectuales. Las razones más importantes para este rechazo se deben, por un lado, a las innumerables contradicciones e incoherencias de la propuesta; por otro, debido al clima de desconfianza con la corrupción generalizada que agobia a un país conmocionado por enormes escándalos en los que impera la impunidad.

Las organizaciones populares de Panamá, así como los partidos de izquierda y los intelectuales progresistas cuestionaron en diversos debates públicos los supuestos sobre los que se basa la viabilidad financiera del proyecto de ampliación presentado por la ACP y el gobierno de Martín Torrijos. Veamos:

Primer supuesto, los costos: múltiples especialistas señalaron que están subvalorados. Fernando Manfredo, quien fuera el primer subadministrador panameño, luego de firmado el Tratado Torrijos-Carter de 1977, ha listado una serie de *items* que no han sido considerados y que elevarían los costos hasta US\$ 7 000 millones. La Comisión tripartita (formada por Panamá, los Estados Unidos y Japón) calculó el costo de la obra entre US\$ 6 000 y US\$ 8 000 millones, hace 15 años, según aceptó el diputado Altamirano, presidente de la Comisión de Asuntos del Canal de la Asamblea Legislativa. Ajustados los precios a la fecha actual la obra superaría esas cifras.

Segundo supuesto, el préstamo, que puede ser mayor si la obra se encarece, se sumará a la deuda pública del país, que ya sobrepasa los US\$ 10 500 millones y cuesta pagarla el 25% del presupuesto anual del Estado. El Fondo Monetario Internacional ha señalado que la deuda que se adquiera será responsabilidad de todos, pues el Canal es una propiedad estatal, contrario a lo dicho por el gobierno panameño, según el cual estos nuevos empréstitos no se sumarían a la deuda pública.

Tercer supuesto, el crecimiento continuo del comercio. Cualquier estudiante de economía sabe que el sistema capitalista mundial no crece de manera continua, sino que se mueve por ciclos de crecimiento, estancamiento y recesión. Pero ACP no ha previsto la posibilidad que haya un año malo para el comercio. Tampoco se ha considerado que las relaciones comerciales entre China y los Estados Unidos tienden a ralentizarse, como afirman algunos especialistas.

Cuarto supuesto, las navieras deben pagar el aumento previsto de los peajes que, al cabo de veinte años, sería del 110%. Pero las navieras ya han advertido que no pretenden pagar esos aumentos y que en cierto límite buscarán vías alternas.<sup>1</sup> No acababa de aprobarse en referéndum el proyecto,

<sup>1</sup> Betty Brannan J.: *La Prensa*, Panamá, 11 de junio de 2006.

cuando ya los gobiernos de Chile y Perú advertían de los impactos económicos negativos a sus economías que tendría un aumento drástico de los peajes.

Quinto supuesto, el Canal se está haciendo obsoleto. Esta es la mentira más grande, pues hoy pueden transitarlo el 92% de los barcos que navegan por el mundo y pasa por él sin problemas el 5% del comercio mundial. Esto seguirá así mientras tengamos peajes atractivos y el Canal funcione. Además, el Canal está ahora apenas al 80-85% de su capacidad, ya que los buques Panamax no pueden transitar de noche por el Corte Culebra (la parte más estrecha) lo cual se subsanará en cinco años con la ejecución del Plan Maestro.

Sexto supuesto, la tasa de beneficio proyectada puede transformarse en déficit si alguno de los supuestos no se cumple. El profesor de economía Roberto Méndez ha señalado que si la obra cuesta US\$ 7 000 millones y el comercio crece solo al 2% se producirá un déficit del 3% que, claro, pagaremos los panameños.

A estos razonamientos se suma la lógica desconfianza en un sistema corroído por la corrupción. La gente teme que los altos compromisos financieros sirvan para enriquecer aún más a la oligarquía financiera y política, y que los costos los termine pagando el pueblo panameño, ya sea dejando de percibir ingresos del Canal al erario público, ya sea porque la enorme deuda consume una parte mayor del presupuesto de gastos del gobierno central, lo cual nos haría más pobres en beneficio del «comercio mundial».

### **Los resultados del referéndum restan legitimidad a la ampliación**

El alto nivel de abstencionismo fue la fórmula que eligió el pueblo panameño para expresar sus dudas sobre la propuesta del tercer juego de esclusas del gobierno del Partido Revolucionario Democrático (PRD), encabezado por Martín Torrijos, y la junta directiva de la ACP. El abstencionismo, que llegó en muchas zonas del país al 60% –a nivel nacional solo votó el 43% de los electores–, indica que el pueblo panameño consideró que la propuesta de ampliación era apresurada y el espacio para discutirla demasiado corto.

Por supuesto, la abstención no obedece a una sola causa sino a múltiples, pero la mayoría de ellas negativas para el gobierno. Algunos dejaron de participar porque consideraron que no tenían elementos para aprobar o rechazar; otros, porque consideran que «da lo mismo porque el gobierno hace lo que le da la gana»; unos, en protesta o desconfianza frente a las promesas incumplidas, los malos manejos de la crisis de la Caja de Seguro Social y los intoxicados, etcétera; otros, simplemente, son siempre indiferentes y no votan nunca (este rango no suele sobrepasar el 25% del electorado).

Pero no hay lugar a dudas, tanta abstención en medio de millones gastados en publicidad por parte del gobierno y los empresarios partidarios del sí, solo puede significar que NO CONVENCIERON AL PUEBLO PANAMEÑO.

Si al abstencionismo sumamos la votación por el NO (aproximadamente 20% de los votos emitidos y el 10% del electorado), tenemos un amplio espectro de la población panameña que no ha respaldado la propuesta de ampliación. La suma de ambos resultados solo puede interpretarse en un sentido: a la propuesta de ACP-Gobierno le falta LEGITIMIDAD NACIONAL.

Se pronunciaron por el sí a la ampliación el 80% de los votantes, pero tan solo el 30% de la totalidad de los electores, aunque muchos lo hicieron engañados por falsas promesas de empleo que pronto se desenmascararán. Muchos de esos electores, que favorecieron la propuesta de ACP-Gobierno, sufrieron la manipulación de sus necesidades bajo la mentira de que la pobreza y el desempleo serán resueltas con la ampliación.

Para colmo, este referéndum ha sido un proceso cargado de irregularidades de todo tipo: medios de comunicación controlados por una sola propuesta, con poco acceso por parte de los defensores del NO, millones de dólares de los recursos públicos y del Estado gastados para favorecer la propuesta –US\$ 80 000 entregados a cada representante de corregimiento, bono de US\$ 35.00 para familias pobres, 200 000 formularios para cursos del INADEH (Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano), bajo el supuesto de que a todos ellos se les empleará en el Canal y otros–, coacción por el voto sí dentro de los recintos electorales, etcétera.

### ¿Qué nos depara el futuro?

Como era de esperarse, el gobierno de Martín Torrijos y la ACP han ignorado los aspectos negativos del referéndum y están procediendo rápidamente a implementar el proyecto de ampliación, entre otras cosas, ordenando el estudio de impacto ambiental y el diseño final de los planos que, increíblemente, no estaban previo a la consulta.

A la vez, el gobierno ha adquirido nuevos empréstitos, aparte de los del Canal, por US\$ 1 700 millones, para 2007, y ha hecho público un compromiso con el Banco Mundial para despedir a 20 000 empleados estatales y privatizar algunas instituciones. El objetivo contradictorio parece ser, por un lado, crear una burbuja de crecimiento económico basado en estos empréstitos, que durará al menos hasta 2009, para alcanzar la reelección del partido oficialista (PRD); y por otro, continuar con las políticas de «ajuste» de corte neoliberal.

Es previsible que la falsa bonanza económica se quede en los bolsillos del gran capital y no drene hacia abajo; que se mantendrá el alto índice de desempleo y subempleo; y los niveles de pobreza. Esta situación económica,

que empieza a combinarse con el descrédito creciente de los partidos políticos tradicionales, puede manifestarse a través de algún estallido social tarde o temprano, o bien, canalizarse en la búsqueda de una nueva propuesta política popular y antineoliberal, como está ocurriendo en toda América Latina; o ambas cosas.

Para el Partido Alternativa Popular, del que formamos parte, los resultados del referéndum ratifican la urgencia de construir una propuesta política nueva, de los sectores populares, frente a los partidos tradicionales de la oligarquía. Esos casi 200 000 votos por el NO, responden a un sector altamente consciente del electorado que repudia no solo la propuesta de ampliación, sino a la oligarquía de todos los partidos existentes que se coaligaron para defender el sí.

Ese es el espacio político que tenemos los sectores populares organizados para crear una nueva oferta política, popular y antineoliberal. Ese 10% del electorado que votó negativamente nos está dando un mandato que debemos asumir con responsabilidad y prontitud. Esa es la tarea pendiente.

OLMEDO BELUCHE, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá, activista político de izquierda y ensayista, es autor de los libros *La verdad sobre la invasión* (1990), *Pobreza y Neoliberalismo en Panamá* (1997), *Diccionario de sociología marxista* (1993) y *La verdad sobre la separación de 1903* (2003), entre otros.



# Ampliación del Canal de Panamá pasa prueba de referéndum a pesar de los riesgos

MARCO A. GANDÁSEGUI, hijo

Con solo el 30% del voto favorable, el gobierno panameño se proclamó triunfador en el referéndum celebrado el domingo 22 de octubre, convocado para decidir si se acepta una propuesta de ampliación del Canal de Panamá. El 60% de la población electoral se abstuvo de participar en el referéndum convocado por el gobierno.

Más de 1,2 millones de panameños castigaron la propuesta absteniéndose de concurrir a las urnas. El padrón electoral lo forma un total de 2,1 millones de ciudadanos. De ese total, 693 000 panameños apoyaron la propuesta de ampliación del Canal de Panamá que les presentó el gobierno del presidente Martín Torrijos. Otros 200 000 rechazaron la propuesta.

## Cuadro 1

### Resultados oficiales del referéndum. 22 de octubre de 2006

Total	2 132 000
Sí	705 144
No	201 247
Blanco	9 966
Nulos	7 672
Abstención	1 207 871

Fuente: Tribunal Electoral de Panamá.

En los últimos referendos celebrados en Panamá en 1992 y 1998, el 40 y el 30%, respectivamente, de la población electoral se abstuvo. En elecciones generales realizadas en 1999 y 2004 el 25% de la población electoral se abstuvo.

La alta abstención electoral en el referéndum del 22 de octubre de 2006 es un mensaje que el pueblo panameño le está enviando al gobierno. Se quiere impedir que el gobierno interprete su triunfo como un mandato del pueblo para proceder a ejecutar la propuesta de ampliación del Canal de Panamá. El gobierno deberá revisar todos los detalles técnicos y económicos de su propuesta que fueron duramente criticados durante la campaña que precedió el referéndum. Igualmente, tendrá que hacer realidad un plan de desarrollo nacional para enmarcar la propuesta de ampliación de la vía acuática.

Los grupos que formaron las fuerzas políticas detrás del NO tendrán que continuar presionando al gobierno en nombre del pueblo panameño para evitar que la propuesta de ampliación del Canal endeude al país y que la corrupción se adueñe del proyecto, con lo cual se pondría en peligro la economía nacional.

La propuesta de ampliación del Canal, presentada por el gobierno y aprobada en el referéndum, ha sido muy criticada por subestimar los costos de la construcción del tercer juego de esclusas. Igualmente, sobrestima los ingresos provenientes de los peajes que le cobra a los usuarios de la vía acuática.

El financiamiento de la obra también tiene serias fallas. El gobierno nacional calcula que la ampliación del Canal, que durará siete años (entre 2007 y 2013), costará US\$ 5 250 millones y se pagará con el incremento anual de los peajes. Sin embargo, al introducir correctivos a los planos conceptuales de las esclusas, aumentarán los costos que no podrán ser cubiertos por el incremento de los peajes.

Se ha denunciado la posibilidad de que, ante la falta de recursos para pagar la obra, el gobierno tenga que endeudarse en función de cubrir las inversiones necesarias. En la actualidad, la deuda supera los US\$ 10 000 millones (en un país de tres millones de habitantes). Los nuevos compromisos podrían incrementar la deuda a US\$ 15 000 millones y por otra parte, las amortizaciones anuales a US\$ 1 500 millones, para un presupuesto que apenas supera los US\$ 7 000 millones.

El gobierno nacional también exageró sobre el número de empleos que supuestamente generaría la construcción del tercer juego de esclusas. En su campaña de promoción de la obra, creó falsas expectativas diciendo que se crearían 250 000 empleos.

Durante el referéndum del domingo 22 de octubre, se hicieron denuncias contra los abusos cometidos por los grupos gubernamentales que promovían la aprobación de la propuesta de ampliación del Canal. En todos los

centros de votación, grupos entrenados tomaban los locales, tanto adentro como afuera, para garantizar el control de los movimientos de los ciudadanos. Las autoridades encargadas de hacer cumplir los reglamentos, así como la Fuerza Pública (Policía Nacional), no intervinieron, a pesar de las protestas de quienes se sentían amedrentados por los abusos.

### **Los riesgos de la propuesta**

El proyecto fue presentado por el gobierno el 24 de abril de 2006. La propuesta de ampliación, que contempla la construcción de un tercer juego de esclusas, está plagada de riesgos no justificables y que podrían ser minimizados. A su vez, fue concebida sin tomar en cuenta al país, su gente y sus necesidades más apremiantes.

A continuación se revisará muy brevemente los antecedentes del proyecto gubernamental, la propuesta misma y las seis limitaciones principales que presenta. Al final se hará una propuesta alternativa para un plan de desarrollo nacional tomando en cuenta las contribuciones del Canal de Panamá a la economía del país.

La falta de transparencia de la propuesta la convierte en un riesgo para el futuro de la nación y de los panameños. El país corre el peligro de endeudarse innecesariamente y caer víctima de una catástrofe ambiental, que contribuiría a generar una agitación social incontrolable. El gobierno está plenamente informado sobre los riesgos implícitos y explícitos del proyecto y no ha querido hacer los correctivos.

### **Antecedentes**

El Canal de Panamá fue construido bajo la dirección del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. entre 1904 y 1914. Los EE. UU. negociaron con Panamá un Tratado político que les permitió construir, operar y defender la vía acuática «como si fuera soberana» en una faja de tierra que se extendía de un extremo al otro del Istmo, entre los océanos Pacífico y Atlántico, con 16 kilómetros de ancho. La construcción costó US\$ 365 millones de la época y ocupó un promedio anual de 60 000 trabajadores.

En 1979, después de setenta y cinco años de conflictos entre Panamá y los EE. UU., la firma de los Tratados Torrijos-Carter dejó establecido inequívocamente que Panamá era la única soberana sobre la totalidad de su territorio (desapareció la llamada «Zona del Canal» en 1979). También quedó acordado que la operación del Canal sería traspasada a Panamá en 1999 y los EE. UU. evacuarían la totalidad de sus bases militares de Panamá ese mismo año.

Los tratados estipularon también que los dos países estudiarían la mejor alternativa para ampliar los servicios que presta el Canal de Panamá al comercio marítimo mundial. En 1993, después de invitar a Japón a formar

parte de una Comisión tripartita, los estudios concluyeron recomendando la construcción de un tercer juego de esclusas. En 1996 se creó mediante la ley la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), entidad pública, para asumir la responsabilidad de administrar la vía.

Desde el 31 de diciembre de 1999, Panamá administra la vía acuática que se extiende 80 kilómetros y presta servicios a cerca de 12 000 barcos al año. Entre 2000 y 2005, la ACP cobró un total de US\$ 5 500 millones en concepto de peajes y otros servicios. Al mismo tiempo, transfirió más de US\$ 2 000 millones al tesoro nacional. La ACP cuenta con una planilla que desembolsa anualmente más de US\$ 300 millones a 9 000 empleados.

## Cuadro 2

### Ingresos de la ACP y aportes al gobierno nacional (2000-2005)\*

	(US\$ Millones)					
Año	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Total de ingresos	832,9	809,8	864,6	984,5	1 108,1	1 262,5
Transferencias al tesoro nacional	252,3	220,4	310,9	324,5	407,6	545,1

\* Estas cifras difieren de las publicadas por la ACP que se presentan en años fiscales y a precios nominales. Las cifras fueron convertidas a años calendarios e indexadas a precios de 2005.

Fuente: Intracorp Estrategias Empresariales, *Estudio de impacto económico del Canal en el ámbito nacional*, Panamá, ACP, abril de 2006.

## La propuesta de ampliación

El 24 de abril de 2006 en una ceremonia que contó con la participación del presidente de la República, Martín Torrijos, su gabinete, la junta directiva y el administrador de la ACP, así como unos 2 000 invitados en cadena nacional de televisión, el gobierno anunció que avalaba una propuesta de ampliación del Canal de Panamá mediante la construcción de un tercer juego de esclusas. Se anunció que la obra costaría US\$ 5 250 millones, se construiría en siete años, utilizando tecnología de punta y empleando un promedio anual de 3 000 empleados.

En su discurso, el presidente Torrijos dijo que el financiamiento de la obra no endeudaría al país. La construcción del nuevo juego de esclusas se financiaría mediante el alza anual de los peajes a los usuarios en un 3,5%. El presidente agregó, también, que se utilizaría un sistema de esclusas con tinajas para ahorrar agua y desechó un proyecto rechazado por sectores campesinos de crear embalses en tres ríos al extremo oeste de la cuenca del Canal.

La propuesta de la ACP plantea que el crecimiento del comercio marítimo mundial justifica económicamente la inversión. Además, señala que la obra no causaría un impacto ambiental negativo debido a que se realiza sobre la misma línea del Canal existente. A su vez, la propuesta señala que el nuevo juego de esclusas, basado en tecnología aplicada en el sistema fluvial del noroeste europeo, se adaptaría sin problemas a la realidad panameña.

### **La falta de transparencia de la propuesta**

Desde que la propuesta se dio a conocer han surgido muchas críticas que se han centrado en seis aspectos claves. En primer lugar, los críticos consideran que el cálculo de los costos ha sido subestimado. También se señala que la propuesta no es transparente en relación con el financiamiento de la obra. A su vez, las proyecciones económicas dependen de una sola ruta lo cual le confiere a la propuesta un carácter de alto riesgo. Igualmente, se critica la tecnología asociada a las esclusas con tinas. Entre los aspectos que más críticas han recibido se destaca, por un lado, la manipulación de las cifras de empleo que generará la obra y, por el otro, la falta de claridad en lo relacionado con el impacto ambiental.

### **No hay transparencia en el cálculo de los costos**

Las críticas sobre los costos provienen de dos fuentes muy bien informadas. Por un lado, el primer administrador panameño de la Comisión del Canal de Panamá, Fernando Manfredo. En segundo lugar, el director de la División de Ingeniería de la Comisión hasta 2001, Tomás Drohan.

Manfredo señala que la propuesta de la ACP omitió considerar entre los costos, algunos que pueden alcanzar un total de US\$ 2 286 millones consistentes en equipo flotante, ajuste por inflación, un puente en el sector Atlántico, costo de financiamiento y ajuste a la reserva contingente. «Con un costo de US\$ 7 536 millones se vienen abajo todos los cálculos financieros en la propuesta de la ACP».<sup>1</sup>

Tomás Drohan, quien fuera director de Ingeniería de la Comisión del Canal, explica que los costos de las esclusas con sus tinas y el aumento del nivel del lago Gatún a casi 90 pies implican estimaciones más elevadas que las contempladas por la ACP. A su vez, hay que construir un nuevo vertedero y adquirir una flota de remolcadores que no fueron incluidos en la propuesta, ni sus correspondientes costos.

Drohan afirma que el costo de la construcción del tercer juego de esclusas propuesto puede encontrarse entre US\$ 10 000 y 12 500 millones.

<sup>1</sup> Fernando Manfredo: «El proyecto del tercer juego de esclusas», *Tareas* no. 124, septiembre-diciembre de 2006, p. 20.

Para llegar a una estimación más precisa, habría que esperar a que «la ACP termine los diseños detallados de las esclusas-tinas en 2008».<sup>2</sup>

### **No hay transparencia en el financiamiento**

La autoridad del Canal de Panamá ha informado que la propuesta de ampliación será auto-financiable. Sobre la base de este planteamiento, el presidente Torrijos anunció «que serán los usuarios del Canal, mediante aumentos de peajes y no los impuestos de los panameños los que paguen la obra». La misma propuesta, sin embargo, plantea que para realizar la obra se tendrá que pedir un préstamo por US\$ 2 200 millones. Para explicar esta contradicción la ACP dice que solo se adquirirá una «deuda transitoria» sobre la base del flujo (movimiento) de caja de la entidad. Es decir, los peajes que se les cobran a los usuarios servirían de colateral a la banca privada que haría los préstamos.

Según Manfredo, el endeudamiento del país y de la ACP no se pueden separar. «No solo es el tema de garantía solidaria, sino también es un tema de regulaciones financieras y económicas.» Manfredo cita al Fondo Monetario Internacional (FMI) que aclara que «en estos momentos no hay firme evidencia para juzgar si los mercados financieros estarían dispuestos a financiar a la ACP sin una garantía explícita del gobierno».<sup>3</sup>

El economista Roberto Méndez señala que los cálculos financieros de la propuesta son «incongruentes», que los costos de inversión están subestimados y las proyecciones de ingresos infladas. Además, Méndez calculó la tasa de rentabilidad de la propuesta de construir un tercer juego de esclusas y comparó sus resultados con las de la ACP. Mientras que la ACP calcula una tasa interna de rentabilidad igual a 12%, Méndez llega a otras conclusiones. Si se hace el cálculo a 2031, la tasa sería del 5%. Si se hace el mismo ejercicio para 2025 la tasa solo sería de 3%. Méndez señala que esta diferencia tan significativa se debe, entre otras cosas, a que la ACP utilizó un «horizonte de inversión» de 43 años, de 2007 a 2050.<sup>4</sup>

### **No hay transparencia en las proyecciones económicas**

Las proyecciones económicas de la propuesta de ampliación del Canal de Panamá están basadas en el incremento sostenido del comercio marítimo en la ruta que une los puertos de la R. P. China y la costa oriental de los EE. UU.

<sup>2</sup> Tomás Drohan: «El verdadero costo de la ampliación del Canal de Panamá», *Tareas* no. 124, septiembre-diciembre de 2006, p. 67.

<sup>3</sup> Fernando Manfredo: ob. cit., pp. 28-29.

<sup>4</sup> Roberto Méndez: «Por qué Panamá debe decir NO a la propuesta del tercer juego de esclusas», *Tareas* no. 124, septiembre-diciembre de 2006, pp. 79-82.

**Cuadro 3****Comercio de contenedores. Crecimiento promedio anual proyectado**

	2001-2005	2006-2010	2010-2025	2000-2025
EE. UU.-Asia	5,1 %	5,6 %	5,3 %	5,2 %
EE. UU.-China	7,4 %	7,6 %	6,9 %	7,0 %
EE. UU.-Hong Kong	5,4 %	5,6 %	4,8 %	4,9 %
EE. UU.-Japón	3,7 %	4,1 %	3,7 %	3,7 %

Fuente: DRI/WEFA, Inc., *Escenarios macroeconómicos y del comercio global al 2025*, Panamá, ACP, 2002 (traducción del 17 de mayo de 2006).

El cuadro 3 presenta el pronóstico de crecimiento espectacular que podría experimentar el comercio de China (y el resto de Asia oriental) con los EE. UU. El crecimiento sostenido del comercio entre China y los EE. UU. durante un cuarto de siglo (2000-2025) a una tasa del 7% anual amerita una revisión mucho más cuidadosa antes de lanzarse.

**Cuadro 4****Proyección del total de carga transportada en contenedores desde EE. UU. a Asia entre 2000 y 2025 (millones de ton.)**

Año	2000	2025
Asia	75	261,6
China	19	104,1
Hong Kong	4	12,3
Japón	19	46,0

Fuente: DRI/WEFA, Inc., *Escenarios macroeconómicos y del comercio global al 2025*, Panamá, ACP, 2002 (traducción del 17 de mayo de 2006).

El cuadro 4 presenta las proyecciones de crecimiento del comercio entre Asia (especialmente China) y los EE. UU. en términos absolutos. La ACP proyecta que en 25 años la carga en barcos portacontenedores, que hacen la ruta entre China y los EE. UU., se multiplicará más de cuatro veces. Hong Kong no se queda atrás y el pronóstico de la firma DRI/WEFA para el comercio nipón-norteamericano también es significativo.

El optimismo, sin embargo, no puede justificar una inversión que merece una decisión más razonada. Según Orville Schell, profesor de la Universidad de California en Berkeley, «lo que hace de esta serie simbólica de incursiones chinas en el corazón económico estadounidense un asunto especialmente volátil en este momento es la discusión en el Senado estadounidense de los aranceles proteccionistas en contra de las importaciones chinas, junto con la evaluación

que pronto dará a conocer el Departamento de Defensa estadounidense y que se dice describirá a China como una potencial potencia adversaria».<sup>5</sup>

En algunos sectores de los EE. UU., también existe optimismo en torno al futuro de China. Según Michael Rich, alto ejecutivo de Rand Corp., ya no es el caso que potencias en ascenso (como China) deben abrirse camino mediante la fuerza.<sup>6</sup> Un portavoz chino de las reformas económicas señala que su país «es una beneficiaria de la globalización económica y, en consecuencia, ha participado tan activamente en esta ronda de globalización –sin precedentes– que ha alcanzado una interdependencia tal con el resto del mundo que ninguna de las dos partes puede ya permitirse perder a la otra».<sup>7</sup> China ya forma parte de la comunidad comercial internacional. Sin embargo, esta nueva identidad no le permite a Panamá hacer proyecciones de crecimientos anuales promedio de sus exportaciones en portacontenedores a los EE. UU., superiores al 7% consecutivos entre 2005 y 2025.

### No hay transparencia en el diseño de las esclusas

Según Drohan, «las tinas de reciclaje de la ACP ocupan similar volumen que las mismas esclusas post-panamax que sirven [...] El costo de las nuevas esclusas es 60% del costo del proyecto entero. Las tinas con todas sus medidas para mitigar la posible salinización del lago Gatún bien pudieran aproximarse al costo de las nuevas esclusas doblando así el costo de 60% del proyecto».<sup>8</sup> El biólogo Ariel Rodríguez señala que la ACP llega a conclusiones en torno a las esclusas que no son producto de los estudios realizados por esa misma entidad. «La ACP –dice Rodríguez– no parece tener la intención de invertir en medidas de mitigación más efectivas, que van desde pisos perforados, pozos de captación de agua salada, alcantarillas de lavados que [...] suponen un aumento de la complejidad de los diseños [de las esclusas] y un aumento de los costos de la construcción.»<sup>9</sup>

### No hay transparencia en el empleo

El 19 de abril de 2006 los medios de información panameños y los despachos de los corresponsales recogieron las declaraciones de Manuel Benítez,

<sup>5</sup> Orville Schell: «Comprar EE. UU. al estilo chino», *La Vanguardia*, Madrid, 26 de septiembre de 2005.

<sup>6</sup> Citado por Xu Bingham: «China rise drives regions emergence», *China Daily News*, 23-24 de abril de 2005.

<sup>7</sup> Zheng Bijian: *Diez puntos de vista sobre el ascenso pacífico de China*, Madrid, El Real Instituto Elcano, 12 de diciembre de 2005.

<sup>8</sup> Tomás Drohan: ob. cit., p. 65.

<sup>9</sup> Ariel Rodríguez: «Impacto de la ampliación del Canal en los lagos Gatún y Miraflores», *Tareas* no. 124, septiembre-diciembre de 2006, p. 120.



subadministrador de la ACP, quien aseguró que «las obras por la ampliación generarán alrededor de 240 000 empleos», tanto directos como indirectos, lo cual implicaría terminar con el desempleo del país.<sup>10</sup> Estos números son el resultado de un estudio de la ACP que ha sido criticado por realizar corridas econométricas deficientes.<sup>11</sup>

Roberto Méndez les recuerda a los asesores de la ACP que según sus propias teorías «el desempleo tiende a bajar solamente si la tasa de crecimiento económico resulta superior a la tasa de crecimiento de la fuerza laboral».<sup>12</sup>

Jorge Illueca y sus colaboradores señalan que «las realidades –no las falsas esperanzas– apuntan en otra dirección [...] En las discusiones internas que se realizan en la ACP se habla de un máximo de 3 000 a 5 000 empleos temporales que se generarían en caso de aprobarse la construcción del tercer juego de esclusas».<sup>13</sup> Según Drohan, «la millonaria campaña de información montada por la ACP crea la impresión de un pueblo hambriento por nuevos puestos de empleo [y] que el nuevo juego de esclusas post-panamax será la solución. La realidad es otra: en su momento pico habrá 3 000 nuevos puestos de empleo trabajando en la obra por un período de unos dos o tres años. Esta cifra salió de una conferencia reciente en la Universidad Tecnológica de Panamá, ofrecida por un alto funcionario de la ACP en forma abierta y responsable». Drohan agrega que «la creación de un puesto de trabajo en la ampliación del Canal nos está costando 5 millones de dólares [...] Una estrategia de desarrollo multisectorial (agro, turismo, educación, energía, puertos, pesca, red vial y salud) apoyada por dinero del Canal, sería mucho más efectiva en la creación de puestos de trabajo permanentes que construir un tercer juego de esclusas».<sup>14</sup> La conclusión pareciera obvia: el objetivo de la ampliación no sería la generación de empleo. Esta sería solamente una consecuencia colateral, posiblemente transitoria y limitada.

### No hay transparencia en los estudios de impacto ambiental

En septiembre de 2006, la Asociación Ecologista de Panamá reveló el acuerdo interno de la ACP que establece en su artículo 7 que es función del administrador de la ACP aprobar los estudios de impacto ambiental y los programas ambientales. Estos poderes extraordinarios que recibe el admi-

<sup>10</sup> Notimex, despacho fechado en la ciudad de Panamá el 19 de abril de 2006.

<sup>11</sup> Intracorp Estrategias Empresariales: *Estudio de impacto económico del Canal en el ámbito nacional*, Panamá, ACP, abril de 2006.

<sup>12</sup> Roberto Méndez: «Ampliación del Canal no disminuirá significativamente el desempleo», *La Prensa*, 28 de julio de 2005.

<sup>13</sup> Jorge Illueca y otros: «Algunos mitos en torno a la ampliación del Canal», *Tareas* no. 124, septiembre-diciembre de 2006, pp. 92-93.

<sup>14</sup> Tomás Drohan: *Lo que no saben los del sí*, Panamá, Caritas de Panamá, 2006.

nistrador de la ACP lo coloca por encima de cualquier cuestionamiento de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). (Ver el acuerdo no. 116 del 27 de julio de 2006.)

Mes y medio más tarde, la ANAM, mediante el Decreto 209, del 5 de septiembre de 2006, modificó el Decreto 59 de 2000, estableciendo en su artículo 20, que la empresa que realiza una ampliación de sus actividades, puede solicitar a la ANAM que lo exima de presentar los estudios de impacto ambiental. Según los ambientalistas «todo parece indicar, que este artículo está hecho para eximir a la ACP de presentar los estudios de impacto ambiental».<sup>15</sup>

Ariel Rodríguez plantea que «los estudios de cantidad y calidad de agua y los aspectos relativos al impacto de posible salinización de las aguas dulces del Canal, realizados [por las cinco empresas contratadas por la ACP] no le dan viabilidad ambiental a la propuesta de construcción del tercer juego de esclusas». Rodríguez agrega que «la ACP hasta la fecha no ha realizado estudio alguno de impacto ambiental [...] es inconcebible dejar hasta segunda orden un estudio de impacto ambiental como si no fuese un requisito legal y un documento clave para una toma de decisión responsable».<sup>16</sup>

### **Falta de transparencia, falsas expectativas**

La falta de transparencia de la propuesta de ampliación del Canal crea dudas entre todos los interesados, en que cualquier inversión en un megaproyecto de este tipo arroje beneficios para el país. La propuesta ha creado falsas expectativas que solo podrían disiparse si el gobierno nacional recapacita y plantea la necesidad de una revisión del proyecto de construcción de un tercer juego de esclusas.

La revisión tendría que situar la propuesta en un contexto que privilegie el desarrollo del país. Como señala Manuel Zárate, «el problema central del desarrollo del Canal de Panamá no radica en las obras propuestas [...] radica más bien en que tales obras no tengan un proyecto de país».<sup>17</sup> La inversión de una cifra que supera los US\$ 5 000 millones para una economía que produce US\$ 12 000 millones tiene un potencial de desarrollo enorme si es bien concebida y planificada. Tal como se encuentra ahora, el proyecto solo beneficia a un pequeño sector de inversionistas cuyas metas no necesariamente coinciden con las que el desarrollo del país deben suponer para el mayor bienestar de su población.

<sup>15</sup> Asociación Ecologista de Panamá y Asociación de Derecho Ambiental: *ACP y ANAM cambian los estudios ambientales*, Panamá, Comunicado de prensa, 16 de septiembre de 2006.

<sup>16</sup> Ariel Rodríguez: ob. cit., p. 124.

<sup>17</sup> Manuel Zárate: «El Canal, el ambiente y el proyecto de ampliación», *Tareas*, no. 124, septiembre-diciembre de 2006, pp. 57-58.

Para resolver esta contradicción, el gobierno nacional tiene que situar la propuesta en un plan viable de desarrollo nacional con equidad. El proyecto debe servir de motor para impulsar el esfuerzo que los panameños tienen que realizar en forma conjunta con vistas a alcanzar objetivos y metas definidos y concretos que respondan a los principales problemas detectados y priorizados. Sobre este particular veamos la actual estrategia gubernamental y sus efectos sobre el país.

### **Revisar la actual estrategia gubernamental**

Las políticas de ajuste (conocidas como neoliberales) aplicadas a escala mundial han creado un efecto negativo en todos los países, incluyendo a los más desarrollados. Se ha producido un incremento del desempleo que golpea millones de hogares, la pobreza recorre el mundo como un fantasma y la desigualdad se presenta como la cara hambrienta de más de mil millones de personas que viven con ingresos equivalentes a menos de un dólar diario. El Banco Mundial reconoce que los más ricos se hacen cada vez más ricos y los más pobres crecen en número día tras día. Los ideólogos de las políticas neoliberales llaman a esta estrategia «Más mercado, mejor Estado».

En el caso de Panamá, la informalidad –que esconde el desempleo– se ha disparado a niveles muy altos. La pobreza, hoy por hoy, afecta, incluso, los hogares de quienes antes se consideraban de la «clase media» y produce efectos sociales terribles como la criminalidad juvenil, la deserción escolar y la violencia en el domicilio. Cifras de la Contraloría revelan que menos del 20% de los panameños controlan más del 60% de las riquezas del país.

Este panorama desolador es el resultado, principalmente, de las políticas económicas y sociales que han venido aplicando los gobiernos de turno en Panamá desde hace varios lustros. El actual gobierno prometió introducir los correctivos, pero está aplicando políticas aún más drásticas que sus predecesores. Los ajustes, que se combinan con la corrupción, que es su hermana gemela, han creado desesperación entre trabajadores y empresarios en el país.

Con un plan de desarrollo se puede organizar más racionalmente el uso de los recursos nacionales para enfrentar problemas claramente identificados y priorizados en función de justicia social, transformación y eficiencia productiva generadora de ingresos, bienestar y de una convivencia. No se trata de utopías ni de sueños inalcanzables. El país –y el gobierno que fue elegido por el pueblo– tiene que planificar el futuro que queremos construir todos los panameños, usando para ello los recursos nacionales de manera honesta, justa, inteligente y responsable, convirtiendo el tratamiento eficaz de los principales problemas de la población en razón de ser del gobierno.

Necesitamos un plan de desarrollo nacional que dirija y oriente actividades destinadas a encontrarle lugar digno en el proceso productivo a la mayoría de la población en edad de trabajar, lo que puede significar intervenir con energía en los sectores claves de la economía y de la sociedad.

Ese plan implica, entre otras cosas, poner el Canal de Panamá al servicio del desarrollo nacional, sin exclusiones. En la actualidad, la vía acuática está en manos de especuladores nacionales y extranjeros que solo perciben la existencia de esta, como fuente de ganancias a corto plazo sin pensar en las necesidades a largo plazo del país y de su gente. Como consecuencia de ello, los excluidos socialmente siguen experimentando un rápido deterioro de su calidad de vida, y su marginación de la actividad económica formal, merma el potencial y la capacidad de producción de los panameños.

MARCO A. GANDÁSEGUI, hijo es profesor de Sociología de la Universidad de Panamá y, actualmente, director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades de ese centro de estudios superiores. Fue fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA), editor de la revista *Tareas* y miembro directivo de CLACSO, ha escrito varios libros y colabora con artículos en revistas especializadas internacionales.

# Panamá tomó la decisión

NILS CASTRO

Convocados por el gobierno a un referéndum nacional, en octubre pasado los panameños aprobamos el proyecto de ampliar el canal interoceánico. El voto a favor alcanzó casi el 80% de quienes concurrimos a votar, con una abstención cercana al promedio histórico para ese género de comicios.<sup>1</sup> La construcción del megaproyecto empezará en 2007 y tomará entre siete y ocho años, con un costo estimado de 5 250 millones de dólares, 33% de los cuales se prevén para gastos contingentes.

La campaña de difusión y debate del proyecto se extendió por seis meses y tensó al sistema político nacional. Entre los principales partidos políticos de la oposición, dos apoyaron la propuesta gubernamental –aceptando que constituye un «proyecto de Estado» o de toda la Nación– y otros dos llamaron a votar en contra. Además, una agrupación populista radical encabezada por un grupo sindical también se movilizó por el NO, con el apoyo de algunas personalidades individuales y pequeñas agrupaciones universitarias autotituladas «de izquierda».

La nave insignia del rechazo al proyecto fue el Partido Panameñista (antes llamado «Arnulfista»), populista de derecha, la segunda mayor fuerza política del país, al cual cabe atribuir la mayor parte del 20% de los electores que votaron por el NO.

Significativamente, los partidos contrarios al proyecto se dividieron durante la campaña y el populismo radical, que antes había logrado cierta notoriedad en acciones callejeras relativas a otros temas, mostró menguada convocatoria ante las urnas. De hecho, no hubo sorpresas: anticipadamente, las principales empresas encuestadoras previeron los resultados con bastante exactitud.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> En el referéndum nacional de 1992 (sobre reformas constitucionales) la abstención alcanzó el 59,9%. En el de 1998 (para implantar la reelección presidencial) fue de 34,6%. En la historia panameña, el referéndum del pasado octubre fue la primera consulta de su género donde la propuesta gubernamental obtuvo la votación mayoritaria.

<sup>2</sup> En lo que toca a las personalidades que aportaron su argumentación, tampoco hubo sorpresas: en cada caso se trató de personas que previsiblemente iban a disentir de la propuesta gubernamental, cualquiera que ella fuese.

Lamiéndose las heridas, los opositores más pequeños ahora se afanan en interpretar y arrogarse la abstención como una forma de rechazo al proyecto. Más sabios, los grandes oponentes hoy prefieren que se olvide el asunto. De hecho, en lo que ambos coincidieron es en que ni unos ni otros pudieron convencer y mover a tantos electores como se habían figurado.<sup>3</sup>

Aunque el proyecto tiene características tecnológicas y financieras que muchos electores solo comprenden en términos generales, varios factores concurrieron a favor del sí. Por un lado, la confianza en el presidente Martín Torrijos, cuya gestión es reiteradamente calificada como «buena» o «muy buena» por más del 60% de los ciudadanos.

Por otro, la noción de que un día iba a hacerse indispensable cavar un tercer carril o sistema de esclusas –paralelo a los dos existentes– para que barcos de mayor tamaño puedan usar el canal interoceánico, no es nueva para los panameños. Así pues, lo que dinamizó el debate fue determinar si este es el momento de emprender la obra y si los términos del proyecto propuesto son factibles y deseables para el interés nacional.

De hecho, en tiempos del control norteamericano sobre el Canal, la excavación de una tercera vía con esclusas para buques de gran tamaño se llevó a cabo de 1939 a 1942, con el propósito de viabilizar que los mayores acorazados pudieran desplazarse entre los dos mares. La obra se interrumpió al entrar los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, al cabo de la cual la Armada ya tenía flotas en ambos océanos, motivo por el que los militares norteamericanos dejaron el trabajo sin concluir.

Por otra parte, para los vecinos de las ciudades terminales de Panamá y Colón ya es habitual observar las largas colas de buques esperando turno para transitar por el Canal. Cruzarlo demora unas ocho horas, pero esa espera puede tomar varios días de inactividad, lo que le cuesta sumas millonarias a las empresas navieras. Conocedores empíricos del tema, el común de los ciudadanos del país sabe que si el Canal de Panamá continúa saturándose, más pronto que tarde los navieros buscarán otras rutas. Y votaron en consecuencia.

Desde que Panamá asumió el pleno control de la vía interoceánica y la convirtió en una competitiva empresa civil, hizo enormes inversiones para mejorar su eficiencia. La administración panameña ha dedicado más de mil millones de dólares en rectificar y ensanchar el cauce de la vía, en iluminarlo para incrementar su aprovechamiento nocturno y en automatizar la operación

<sup>3</sup> La abstención en los referendos es un fenómeno largamente conocido. Son comicios donde los electores escogen entre alternativas conceptuales, no entre opciones de poder ni preferencias personales. En los referendos no hay candidatos que vengán a movilizar al votante, como en las elecciones generales. En este caso, además, el resultado se hizo tan previsible (con cuatro votantes del sí por cada uno del no) que solo los ciudadanos cívicamente más responsables concurrieron a votar.

de las esclusas. Como lo reconocen las autoridades norteamericanas, ahora el Canal es mucho más eficiente, seguro y rentable. Aún así, tiene casi cien años de edad y en sus esclusas o cámaras ya no caben muchos de los nuevos gigantes del mar, un inconveniente destinado a multiplicarse.

Sin interrumpir el funcionamiento de las esclusas antiguas, las nuevas cámaras tendrán casi 430 metros de largo, 55 de ancho y más de 18 de profundidad, lo que las hará capaces no solo de acoger a los grandes «post-panamax», sino de dar cabida a dos o tres de los buques actuales en cada esclusaje, y así poner fin a las demoras. En el año fiscal 2005-2006, por el Canal pasaron casi 14 200 barcos portando 279 millones de toneladas de carga. En cambio, con el tercer juego o carril de esclusas, el Canal podrá trasegar hasta 600 millones de toneladas por año, poco más del doble.<sup>4</sup>

Solo de ese modo, esta vía acuática podrá continuar siendo competitiva en las actuales condiciones de sostenido crecimiento del volumen de cargas en el comercio marítimo mundial –sobre todo en el Pacífico y los puertos asiáticos–, es decir, frente a las demandas de la globalización en el siglo XXI.

El nuevo cauce, paralelo a los dos existentes, se construirá sobre la misma ruta que la administración norteamericana cavó en la preguerra. En otras palabras, se trabajará sobre un camino en su mayor parte ya estudiado, ya empezado y ya devastado. Ello reducirá tanto los costos de excavación como las consecuencias ambientales de la obra. Para financiar la construcción, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) –empresa pública autónoma que opera la vía acuática–, se propone aumentar los peajes a razón de 3,5% anuales durante veinte años, de modo que la ampliación será costeadada por la industria y el comercio marítimo internacionales, sus mayores beneficiarios.<sup>5</sup>

La ACP es una empresa de reconocida eficiencia, rentabilidad y solvencia, que no tiene deudas y le aporta más de 488 millones de dólares anuales al erario panameño, una cifra que la ampliación duplicará. Ella estará a cargo de dirigir los trabajos, desde negociar financiamientos hasta licitar y supervisar la construcción de los distintos componentes de la obra, bajo el escrutinio de la Contraloría General de la República, de un comité ciudadano constituido al efecto y del Órgano legislativo, ante quienes deberá rendir cuentas varias veces por año. Eso facilitará financiar los trabajos sin incrementar la deuda externa del país.

<sup>4</sup> Desde luego, es una obra costosa, como igualmente será de gran rentabilidad. Por ello resulta más que ingenuo el pretexto de que ese capital mejor debía invertirse en combatir la pobreza mediante obras de interés social. En realidad, los dineros del caso no existen ni su obtención podrá financiarse más que a condición de proponer, aprobar y construir el proyecto de ampliación canalera, que es el objeto de esta inversión.

<sup>5</sup> Para comenzar las obras se requerirá un crédito puente de la banca internacional por poco más de 2 000 millones de dólares, financiado por medio de ese aumento de peajes, cuyos efectos a mediano plazo permitirán cancelar el préstamo inicial antes de concluir los trabajos. Ya hay varias ofertas.

En esto tampoco hay sorpresas. Panamá es un país que últimamente ha registrado un crecimiento del PIB que pasa del 7% anual, y donde ahora este proyecto agregará una inyección superior a los 5 000 millones de dólares, aparte de la próxima construcción del megapuerto del Pacífico, las inversiones conexas a ambas obras y otros proyectos de infraestructura.<sup>6</sup> En tales circunstancias, en vísperas del referéndum no pocos observadores foráneos se preguntaban por qué podía haber personas y grupos políticos que se opusieran a la ampliación del Canal.

La respuesta es de una simpleza pedestre: se resisten al probable impacto sociopolítico de estas iniciativas. El joven Martín Torrijos ganó las elecciones de 2004 con un caudal de votos que casi duplicó los obtenidos por su principal contrincante, en unos comicios donde el mayor derrotado fueron los estilos y métodos políticos tradicionales. Acto seguido, en dos años su gobierno inició la reforma política, realizó la reforma tributaria, reformó el sistema de seguridad social y ahora ha culminado la toma de decisión sobre otra vieja asignatura pendiente, como era la de ampliar el Canal.

Frente al referéndum, algunos conspicuos representantes de las costumbres políticas de antaño temieron que, con tales resultados, el nuevo torrijismo pueda volverse demasiado difícil de vencer en las elecciones generales de 2009. Eso explica que destacados dirigentes opositores no propusieran rechazar el proyecto, sino posponerlo para el subsiguiente período presidencial, alegando que convenía prolongar su examen, explicación y consulta.

De haberse acogido tal propuesta, una vez más la obra seguiría posponiéndose; la cola de naves, prolongándose; el Canal, saturándose; sus clientes, buscando otros caminos; y la copiosa oferta de nuevas inversiones y empleo, probablemente esfumándose. Pero los electores, sin darle más vueltas, resolvieron el caso.

Esto ha marcado un hecho históricamente inédito. Durante siglos, las decisiones sobre cómo aprovechar la posición geográfica y la estrechez ístmica del país –el recurso que hace posible la navegación interoceánica– se tomaron en remotos centros de poder, ajenos a la voluntad panameña: las cortes españolas, con su camino empedrado y buques veleros; los banqueros neoyorquinos con el ferrocarril negociado con el gobierno de Bogotá; las finanzas y los ingenieros de Francia con sus excavadoras a vapor; los estrategas de Washington y su ejército, con las tecnologías iniciales del siglo xx...

<sup>6</sup> Con la reversión de la vía acuática, por primera vez los panameños tuvimos acceso a sus riberas. Ello ha permitido construir, modernizar o expandir varios puertos y un nuevo ferrocarril paralelo al Canal, al que ahora (aparte de la ampliación del Canal) se añadirán una autopista y un segundo aeropuerto de carga, para completar un nuevo sistema interoceánico multimodal de transportes. En los últimos tres años, el tránsito de contenedores ha experimentado un crecimiento anual del 15 al 20%.



Así ocurrió hasta que los Tratados Torrijos-Carter revirtieron ese territorio y sus vetustas instalaciones al patrimonio nacional, lo cual dio lugar a una nueva cuestión: ¿Qué hacer? ¿Preservarlo en su gloriosa obsolescencia o atreverse a transformarlo para emprender otros cien años de competitividad? Pese a la algarabía de los conservadores, por primera vez en 500 años ahora hemos sido los panameños quienes tomamos la decisión.

NILS CASTRO es profesor, escritor, analista político y secretario de Asuntos Internacionales del Partido Revolucionario Democrático de Panamá. En la actualidad se desempeña como asesor del Canciller de Panamá y Embajador Alterno ante la ONU, con sede en Panamá.

## Nuevos primeros días\*

ROBERTO FERNÁNDEZ RETAMAR

Hace quince años, el chileno Sergio Marras realizó a dieciséis escritores latinoamericanos y caribeños sendas entrevistas, y las publicó en el libro *América Latina. Marca registrada* (Barcelona, 1992). Yo fui uno de esos escritores, y mi texto no volvió a ver la luz hasta el presente. La razón para hacerlo ahora es que en distintas ocasiones el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, ha citado algunas observaciones de mi entrevista, lo que me animó a desempedrarla del libro y darle vida independiente. He aprovechado la coyuntura para corregir algunos deslices, aunque sin modificar en absoluto el sentido general. De los escritores aparecidos en el libro, tengo entendido que sólo Octavio Paz sometió su intervención a esa limpieza, necesaria casi siempre en las entrevistas. Llamo la atención, por último, sobre el hecho de que en 1991 la situación de mi país era hartamente precaria: deshecho lo que fue llamado campo socialista de Europa, y recrudecido el bloqueo estadounidense que padecíamos (y padecemos), Cuba estaba abocada a la durísima etapa que sería conocida como «período especial en tiempo de paz» o simplemente «período especial». Eso explica no pocas preguntas y no pocas respuestas.

La Habana, 9 de abril de 2006

\* Texto tomado de la revista *Casa de las Américas*, La Habana, no. 244, julio-septiembre de 2006, pp. 128-145. (N. del E.)

*¿Está de acuerdo con que en América Latina han sido los escritores quienes desde el siglo XIX, o quizá antes, modelaron ideológicamente las repúblicas e impusieron un esquema ilustrado sobre una realidad que no siempre correspondía a la europea?*

Sí, pero sólo hasta cierto punto. Los escritores, supongo que en todas partes del mundo, le damos voz al silencio. Somos los portavoces, como figuras literarias, de las comunidades en que vivimos. Por otra parte, como usted no desconoce, indudablemente en nuestra América el escritor ha desempeñado un papel que va más lejos que en otras sociedades. Se atribuye a Bergson haber dicho que España no tenía filosofía, sino Refranero. Quizá la anécdota es falsa, pero apunta a algo en que yo quiero insistir: la filosofía, a la manera como se consideró en la antigua Grecia o entre los grandes alemanes, ha sido relativamente pobre en España, y sobre todo en la América Latina; aquí, en general, los escritores han invadido sus terrenos. No se puede hacer una historia del pensamiento de nuestra América limitándose solamente a los filósofos y similares, sino que hay que incluir, y de manera importante, a los que tradicionalmente se llama escritores. Del pensamiento latinoamericano no se puede excluir a Sarmiento, a Martí, a Darío, a Henríquez Ureña, a Mistral, a Reyes, a Martínez Estrada, a Vallejo, a Neruda, a Carpentier, a Guillén, a Lezama y a otros, incluyendo a colegas que usted ha entrevistado para su libro. En este sentido, para volver a la pregunta, el hecho de que hayan sido escritores los que han manejado conceptos como los que usted menciona no quiere decir que lo hayan hecho necesariamente de espaldas a sus respectivas comunidades. Creo que lo han hecho, más bien, dándoles voz.

*¿Pero no piensa que a veces estos escritores-políticos son voluntaristas, que hacen un cóctel de un cierto Iluminismo con un cierto Romanticismo, y lo imponen a través de una institucionalidad vertical, aparentemente libertaria, pero con mucho pragmatismo napoleónico?*

Voy a esquematizar, ya que la situación es mucho más compleja. Hay pensadores que efectivamente han intentado imponer criterios no acordes con nuestras realidades. Un ejemplo clásico por su grandeza, por su talento y por su desvarío, es Sarmiento. No cabe duda de que Sarmiento, que es un escritor admirable, satisface ese punto de vista suyo, que consiste en tratar de imponer lo que él llama la «civilización», es decir los esquemas de la sociedad europea capitalista, en nuestras tierras, con lo cual termina por hacer de estas últimas, en la medida en que logra imponer sus ideas, lo que él mismo llama una sucursal. ¡Qué palabra! Pero, por lo visto, en el siglo XIX, a diferencia del XX, se era menos tramposo y se hablaba con más claridad. Estos pensadores quisieron hacer de nuestros países sucursales de las respectivas metrópolis, sólo que no en plan de igualdad, sino alimentando a la casa central.

*¿Entonces usted aún cree que el desarrollo de unos países es posible a costa del subdesarrollo de otros?*

Sí. Propuse hace ya tiempo hablar de países subdesarrollantes, para darle un sentido binario correcto a la pareja subdesarrollado-subdesarrollante, y no subdesarrollado-desarrollado, como se quiere hacer aparecer. África no nació subdesarrollada. De hecho, en el siglo xv había muchos niveles civilizatorios en África, igual que en todos los continentes. La llegada del europeo, de los nacientes occidentales, y la furiosa depredación que ello implicó para el resto del planeta, desarticuló hasta el día de hoy, de una manera brutal, a África. Como en el caso de América, destruyó sus grandes culturas. Cuando Sarmiento y pensadores como él propusieron la imposición de la «civilización», lo que hicieron fue sencillamente convertirse en escuderos de la explotación ejercida por los países subdesarrollantes. Pero no fueron así todos los pensadores latinoamericanos. No fue en absoluto, por ejemplo, el caso de Bolívar. Se suele decir, no sin razones, que Andrés Bello, con su «Alocución a la Poesía», inauguró lo que podría llamarse la independencia cultural de nuestra América. Sin embargo, creo que esa independencia cultural la inició el propio Bolívar. Los textos literarios de Bolívar, que son cronológicamente previos a los correspondientes textos de Andrés Bello, inauguraron esa independencia cultural. Él vio con gran claridad, en su «Carta de Jamaica», la especificidad nuestra y la necesidad de atenerse a esa especificidad. Hubo también una figura deslumbrante en Chile: Francisco Bilbao. Me parece increíble que Bilbao no disfrute de la difusión de su obra, ya que es sencillamente imprescindible. Bilbao tomó el punto de vista de los aborígenes y les dio voz hasta que esas comunidades la adquirieran por sí mismas. Se me ha dicho en algunas ocasiones que yo he contrapuesto a Martí y Sarmiento y que eso no tiene sentido porque son de dos épocas distintas. Pero Sarmiento y Bilbao son de la misma época, y muchos de los textos de Bilbao son contra Sarmiento. «El civilizado», lo llamaba, para ironizar.

*Para la mayoría de los chilenos no es mucho más que una calle...*

La ignorancia que yo tenía a los cuarenta años de Bilbao y la ignorancia, en general, que se tiene en nuestro Continente de Bilbao, figura que honraría a cualquier comunidad humana en la Tierra, sólo es una parte de este problema que estamos planteando. Hay muchas otras figuras que desconocemos en Venezuela, en Colombia, en Centroamérica y que no se corresponden con ese tipo de intelectual sucursalero que era Sarmiento, sino que se corresponden con el tipo de intelectual que quiere interpretar las realidades de un país sin imponerle esquemas extraños.

*¿Martí seguramente será un ejemplo para usted?*

Claro, la figura arquetípica en este orden es Martí. «Ni de Washington, ni de Rousseau viene nuestra América, sino de sí misma», dice Martí. Pero si

bien Martí es una figura todo lo grande que se quiera, no es única. Hay una enorme cohorte de pensadores latinoamericanos, incluso en el siglo XIX, que ponen sus armas intelectuales, generalmente aprendidas en las metrópolis, al servicio de sus pueblos. No en el sentido demagógico, sino en un sentido orgánico.

*¿Pero a pesar de eso, no cree usted que por muy buena intención que hayan tenido estos pensadores, por muy abiertos que hayan estado hacia sus propias realidades, finalmente lo que primó fue un esquema racionalista ilustrado, aderezado con impulsos epopéyicos románticos, que si bien no lo impusieron a sangre y fuego, lo hicieron caprichosamente sin importarles mucho si era funcional o no?*

Así como la misión de un carpintero es hacer muebles, y los puede hacer (buenos o malos) sólo el carpintero y no el bombero, el astrónomo o el shamán, la misión de un pensador es producir pensamiento. Pero eso no quiere decir que los muebles que hace el carpintero sean para que se siente solamente el carpintero, o que los pensamientos producidos por los pensadores sean solamente para consumo de los pensadores. Pensar es estructurar la realidad.

*El ejemplo europeo y también el norteamericano son muy diferentes. Si bien hay intelectuales que van organizando el pensamiento, que lo van sistematizando, este surge de una experiencia de abajo, a través de muchos años, a través de sucesivas contradicciones, de enfrentamientos, de luchas de todo tipo. A mí me da la sensación de que en América Latina ese pensamiento de abajo no llega hasta arriba, sino que permanece en la élite, y desde allí se regulan las normas de comportamiento y las reglas del juego del Estado...*

Yo no daría por sentado que en el caso de los Estados Unidos el pensamiento venga de abajo, como usted dice. Los grandes ideólogos, para utilizar una palabra que se ha vuelto mala, de la independencia norteamericana –piénsese en el caso de Jefferson–, también pensaron desde arriba hacia abajo. Lo que ocurre es que, como el rayo, o como la vara de vidrio que entra en el agua, el pensamiento se refracta de acuerdo con la realidad. Uno de los grandes textos en la historia de la humanidad es la *Declaración de Independencia* norteamericana, según la cual todo hombre nace libre, etcétera. Pero eso no impidió que durante casi un siglo la república surgida de aquella importante guerra de independencia mantuviera la esclavitud, lo cual es su contradicción más flagrante. Ni siquiera se tomó en cuenta, por supuesto, la opinión de los esclavos, no hay ni que decirlo. Los prohombres de la independencia norteamericana, que mantuvieron a los negros como esclavos durante casi un siglo, también exterminaron a los indígenas, que viven ahora en campos de concentración que se llaman reservas. Los campos de concentración de Hitler o de Stalin me parecen escandalosos, pero ¿por qué se olvida que eso sigue existiendo en este Continente? Y en Europa pasó otro tanto. Por eso le decía: ¿cuál es la alternativa? Quisiera conocer en la historia de la humanidad una alternativa en la cual el pensamiento no se articule primero

en el plano del pensador. Eso ocurre hasta en los casos mejor intencionados, como podrían ser Bilbao, Martí o Mariátegui, que quisieron con la mejor voluntad interpretar el sentido de lo colectivo. Y no creo para nada que, respecto a esto, los pensadores latinoamericanos difieran de los pensadores de otras partes del mundo.

*Pero los latinoamericanos vivimos un mundo dicotómico, un poquitito esquizoide entre idea y realidad... ¿O no?*

Indudablemente hay una dicotomía entre los que imponen olímpicamente sus criterios, aun lastimando a sus pueblos, y los que hacen grandes esfuerzos por interpretarlos. No quiero ensañarme con Sarmiento, ya he dicho todo lo que tenía que decir sobre él, y quizá demasiado. Pero en algunos casos es terrible, porque esa implantación de los criterios de Sarmiento, en la Argentina fue monstruosa: incluyó destruir físicamente no sólo a los indígenas, sino incluso a los gauchos, incluso al pueblo mestizo que se estaba gestando en la Argentina. Es terrible haber leído las instrucciones de Sarmiento al general correspondiente, diciéndole: nada hay más hermoso que regresar con el brazo tinto en sangre de gauchos. Eso no lo dijo Hitler, no se dijo en Alemania. Eso lo dijo en este Continente Sarmiento.

*¿Funesto Sarmiento y su civilización o barbarie?*

Yo creo que los hombres como él resultaron finalmente funestos para nuestro Continente, para nuestro pueblo. Afortunadamente, no llegaron a exterminar a todo el pueblo argentino. Y en la Argentina pasó una cosa muy ilustrativa: Sarmiento y los suyos expresaron el deseo de blanquear su país (deseo que no fue desconocido en Cuba: fue una de las metas de José Antonio Saco). Soy de un barrio orillero que se llama La Víbora, un barrio más o menos humilde, donde había dos barberías, una para blancos y otra para negros. ¿Cuándo un cubano deja de ser blanco o deja de ser negro? Aquellos hicieron llegar una gran inmigración con la idea de que los argentinos atrasados, mestizos, etcétera, fueran suplantados por esa inmigración. Pero con la inmigración no sólo llegaron futuros millonarios, sino también, en números cuantiosos, trabajadores que al final no abrazaron la causa sarmientina y fueron la salvación de la Argentina. Por ellos la Argentina no llegó a ser Rhodesia. Yo he llegado a plantear que posiblemente Sarmiento se hubiera sentido feliz de ser no un latinoamericano, sino un *latinoamerikano*.

*Pero usted, ¿se siente más blanco o más negro?*

Eso es inverificable. Cuando era niño, mi padre, que era profesor, me llevaba a sus clases, y una colega de él le decía: «qué lindo es su hijo, parece un príncipe inglés». Y yo más o menos introyecté, como dicen los psicoanalistas, esa idea: hasta que me enfrenté con la realidad de que absolutamente a ningún inglés se le ocurrió nunca tomarme por inglés y, en cambio, cuando ocurrió

la nacionalización del Canal de Suez, los compañeros árabes, con los que entonces estudiaba en la Universidad de Londres, vinieron a abrazarme y besarme y a hablarme en árabe, porque yo, desde el punto de vista somático soy, visiblemente, un semita. Al ser de origen hispánico, de seguro tengo antepasados árabes, judíos, lo que se quiera.

*¿Existen las razas para usted?*

No. Porque ello es relativo. Hay un tipo de ser humano que en La Habana se llama «blanco de Oriente»: en nuestras provincias orientales es blanco y en La Habana ya es mulato. Yo soy blanco frente al que vive en Tanzania, pero frente a los que viven en Finlandia, es notorio que soy mulato. No existe una demarcación, sencillamente porque no existe en la naturaleza tampoco. Hay, desde luego, rasgos somáticos obvios, características incluso fisiológicas, pero que no tienen ninguna repercusión cultural ni histórica.

*¿Está usted de acuerdo en que todo este pensamiento de nuestros próceres, que usted parece admirar, finalmente no es más que una especie de sincretismo de Romanticismo e Iluminismo, como diría Sábato, que integra un montón de categorías occidentales como el progreso, como las etapas históricas, con la epopeya y que son conceptos que no tienen nada que ver, por ejemplo, con la mayoría de los habitantes de México, con los habitantes del altiplano boliviano o con la santería cubana? ¿Pareciera ser que ellos son gente cuya aproximación al mundo tiene que ver más con Rulfo que con Marx, Rousseau o Beethoven?*

En efecto, el pensamiento del Siglo de las Luces, como diría irónicamente Alejo Carpentier, fue muy fuerte en los próceres de la independencia. El Romanticismo también fue muy fuerte en figuras como Bilbao; pero cuando llegamos a Martí, ya no se trata ni de un pensador que sale del Iluminismo, ni de un romántico en el sentido histórico concreto del término, ni de un liberal. Martí sobrepasa con rapidez el liberalismo, incluso en los aspectos más radicales, y accede a otra etapa de pensamiento, en la que nos encontramos todavía. Algunos han sugerido, yo entre ellos, aunque esto es discutible, llamar «demócrata revolucionario» a este tipo de pensador, que ya no representa, como en siglos anteriores, el punto de vista de una eventual burguesía nacional que se frustró en casi todos nuestros países y se convirtió en polea de transmisión entre las metrópolis y sus pueblos. El sustento ideológico de Martí, junto a otros como Betances y Hostos en Puerto Rico, se afirma en el sentir de sectores mucho más populares, de una pequeña burguesía radicalizada, de campesinos medios y pobres, del incipiente proletariado, etcétera. Mi criterio es que Martí no sólo escribió la última estrofa del poema bolivariano, sino además la primera de otro que dista mucho de estar concluso y que apenas se ha bocetado. Martí no es sólo el último de los libertadores de nuestro Continente en el siglo XIX, sino el primero de los libertadores de nuestra América en el siglo XX.

*¿Por qué le da un sentido tan trascendente a Martí? Pareciera ser una especie de oráculo...*

No es un oráculo, pero no es cualquier pensador del XIX. En su última carta al mexicano Manuel Mercado, que quedó inconclusa, le dijo: «estoy [...] en peligro de dar mi vida por mi deber, puesto que lo entiendo y tengo ánimos con que realizarlo, de impedir a tiempo que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América». Ya no es el último libertador del siglo XIX quien está hablando y proponiendo no sólo la independencia frente a España. Martí propone también la independencia frente a la nueva metrópoli de nuestro Continente, que son los Estados Unidos. En ese sentido, Martí es un punto axial en nuestra América, en nuestra acción y en nuestro pensamiento. Sienta las bases de una tarea ulterior que es esta en que estamos, dramáticamente, en estos momentos.

*¿Por qué fracasa el sueño o proyecto bolivariano? La Revolución cubana es el último intento de este sueño, de este proyecto, y, bueno, ha habido una serie de problemas que todos conocemos. ¿Por qué este sueño se ha hecho imposible?*

No se trata tanto de un proyecto que ha fracasado como de un proyecto que se ha pospuesto. Las razones por las que no pudo realizarse en tiempos de Bolívar son objetivas y claras. Las trece colonias norteamericanas tenían entre sí un nivel de desarrollo heredado de Inglaterra que nuestro Continente no podía heredar de España porque no lo tenía España, y nadie puede dar lo que no tiene. En los Estados Unidos se prosiguió una inserción en la historia iniciada por los ingleses, que capitanearon el capitalismo moderno, y los Estados Unidos sencillamente lo llevaron adelante. Nosotros teníamos, de México a la Tierra del Fuego, un mundo gigantesco e incomunicado. Un mundo de países o de pedazos, no sé cómo llamarlos, muy aislados entre sí. Dispersos en un continente vastísimo, no había ni estructuras ni condiciones sociales, económicas o geográficas para que pudieran realizarse los proyectos de Bolívar. Era materialmente imposible que Bolívar hubiera logrado hacer los Estados Unidos de América del Sur, por la pobreza económica y los espacios inmensos que había entre uno y otro país, además de la falta de experiencia política que tenía la América Latina.

*¿La sigue viendo como una utopía realizable?*

Creo que la de Bolívar es una utopía realizable, y de hecho una y otra vez renace ese sueño o ese proyecto con un nombre u otro. Renació en el Che Guevara. ¿Qué es lo que fue a hacer el Che a Bolivia? Sencillamente, a crear un ejército bolivariano. Claro, ese ejército ya no sería un ejército orientado sólo por el pensamiento iluminista de Bolívar: sería orientado por el pensamiento, llamémosle socializante, de nuestros días. Pero sería hijo del proyecto bolivariano.



*Pero eso pasó hace casi veinticinco años y fracasó rotundamente...*

Nosotros no podemos retomar el proyecto bolivariano tal cual, porque sería un disparate, pero sí lo podemos hacer dentro de las circunstancias nuevas que se vayan produciendo...

*¿Pero qué pasa con este sentimiento latinoamericanista, por ejemplo, cuando ve que México hoy día, gran precursor del latinoamericanismo, busca una alianza estratégica con Estados Unidos? ¿U otros países como Chile y Venezuela?*

Siento varias cosas. El pueblo mexicano es un gran pueblo, complejísimo, tiene problemas tremendos, tiene una inmensa frontera con los Estados Unidos. Y a lo largo de su historia México ha tenido diversos acercamientos (a menudo desastrosos) con los Estados Unidos, y este del Tratado de Libre Comercio es uno de ellos. No cabe duda de que un gobernante tiene que ser realista. Quizá la tarea de soñar sea propia sobre todo de los poetas, y los políticos tienen que ser necesariamente más realistas. No se le puede pedir a ningún gobernante ni de nuestro Continente ni de ninguna parte que deje de ser realista y que deje de afrontar las cosas. Si nosotros en Cuba no estuviéramos bloqueados, como lo estamos desde hace más de treinta años, por los Estados Unidos (que nos han cerrado el comercio no sólo de ellos, sino de muchas naciones directa o indirectamente sometidas por ellos o que son, por lo menos, anuentes a sus dictámenes), lo que nos ha obligado a vincularnos con otros países, y a provocar lo que todos saben, no veo por qué Cuba no podría tener relaciones comerciales también con los Estados Unidos. Cómo voy a censurar yo a ningún gobernante de ningún país latinoamericano porque mantenga relaciones económicas con los Estados Unidos cuando nosotros también las mantendríamos de no estar bloqueados. Ahora bien, ¿estos gobernantes van a entregar de pies y manos sus respectivos países a los Estados Unidos? Francamente, no lo creo. O al menos no lo espero.

*¿No cree, aunque parezca muy extraño, que a lo mejor la única posibilidad del sueño bolivariano, ya pensando en el próximo siglo, pasa por incorporar a los Estados Unidos?*

En el Congreso que promovió Bolívar para intentar su proyecto y que finalmente se realizó en 1826, en Panamá, quiso explícitamente excluir a los Estados Unidos. Ello no fue así, por una tergiversación de Santander, y finalmente ese Congreso fue un desastre, como todos sabemos. Pero no hay que olvidar que las instrucciones que llevaban los delegados norteamericanos eran las de boicotear el Congreso. Lo más importante es que ya no estamos en tiempos de Bolívar, ya no estamos en 1826, ni siquiera en 1926; estamos terminando este siglo. ¿Se producirá una alianza con los Estados Unidos? Quiero decirle varias cosas sobre esto que pueden parecer contradictorias. Hasta ahora ha habido un panamericanismo imperialista. Pero no es el único panamericanismo posible. Creo en el panamericanismo, no en el paname-

ricanismo imperialista. Creo que, a pesar de las grandes diferencias que hay entre nosotros, de un polo a otro hay una cosa que se llama América y una cosa que se llama lo americano, y eso se revela entre otros hechos en la identificación que sentimos por tantos intelectuales norteamericanos que en Cuba son profundamente estimados y amados. Alguno de ellos vivió incluso en Cuba, como Hemingway, que es quizá más amado en Cuba que en los Estados Unidos; y otros, como Emerson o Whitman en el siglo XIX, son tan importantes que no se concibe el pensamiento y la literatura de nuestro continente sin ellos. Yo creo en América. Pero en las condiciones actuales, meter en el mismo saco a los Estados Unidos y a nuestros países es realmente darle carne fresca al león. Hacen falta cambios en nosotros y en ellos para que ese panamericanismo pueda hacerse de manera armónica y no sea más que otro nombre de la devoración a que estamos sometidos. ¿Se va a eliminar la deuda externa, se va a crear un nuevo orden económico, se van a pagar nuestras materias primas al precio que corresponde, vamos a recibir de los Estados Unidos productos manufacturados a los precios que corresponden? Si se cumplen todas estas condiciones, no veo por qué no se integraría América en este momento en que se están integrando en bloque tantas comunidades, tantos países de la Tierra.

*¿La ve mejor que una comunidad iberoamericana?*

Nosotros, por así decir, nos articulamos en más de una comunidad. Una comunidad iberoamericana tiene la ventaja y la desventaja de que España y Portugal ya no son grandes potencias. De hecho, dejaron de serlo en el siglo XVII. Y la ventaja es que al no ser grandes potencias, no pueden hegemonizar a nuestros países. Por tanto, esa comunidad iberoamericana es más bien una reunión *inter pares*. En efecto, si tomamos la literatura española de 1898 a nuestros días, no resiste la comparación con la literatura hispanoamericana de 1898 a nuestros días. Sin ir más lejos, Rubén Darío, el padre, el iniciador de la poesía moderna en nuestra lengua, no nació en España sino en Nicaragua, y se formó también en Chile y la Argentina. Creo por tanto que estas comunidades de las que hablamos, la americana y la iberoamericana, pueden ser algo más que sueños, algo más que utopías, en el sentido más evanescente de la palabra. Porque ya, de alguna manera, existen. Por ejemplo, la música del Caribe incluye el sur de los Estados Unidos, abarca las Antillas y llega al nordeste brasileño, saltando por encima de fronteras, regímenes políticos, etcétera. Somos una unidad cultural.

*Y, más allá de lo cultural, ¿no ve una alianza política, económica...?*

Unamuno decía: «no hay que vivir al día, sino a los siglos». Y coincido con usted. Pero hay que cumplir pequeñas y grandes tareas que a veces son dramáticas, como nos han tocado a nosotros los cubanos, y que tenemos que cumplir. Entre otras cosas, para que dentro de algunos siglos se pueda

realizar ese diseño. Los Estados Unidos son un país extremadamente complejo, que conozco bien, que quiero mucho. Detesto la política del gobierno norteamericano, pero para nada detesto al pueblo norteamericano. Le digo esto para que vea que no estoy hablando como un antiyanqui furibundo, por la sencilla razón de que no lo soy. Los Estados Unidos, cuya decadencia es obvio que ya empezó aunque sean la primera potencia militar del mundo, están permeados de eso que se ha llamado el Tercer Mundo. Incluso algunos de sus más eminentes intelectuales son parte de las minorías. Por ejemplo, Edward Said, profesor de la Universidad de Columbia, que forma parte del Consejo Nacional Palestino; y una cantidad enorme de latinoamericanos. Quizá dentro de poco el primer país hispanoamericano de este Continente esté en el seno de los Estados Unidos... Muy bien, así fue corroído el imperio romano: la migración actuó como termitas y eso no se va a detener, porque al agravarse cada vez más la situación económica de nuestros países, la emigración hacia los Estados Unidos va a ser mayor. Muchísima gente se ha ido de Cuba por discrepancias con la Revolución Cubana, pero mucha más gente se ha ido por razones económicas, como siempre ha ocurrido. Entonces, si los Estados Unidos cambian de tal manera, por qué pensar que no puede ser así. No va a ser mañana, no va a ser con el presidente Bush, no sé con quién va a ser, pero ocurrirá el cambio, porque en el fondo es inevitable. Si se producen cambios de tal naturaleza que esa unión no implica que nos van a devorar a nosotros, no veo por qué negarnos a ello.

*Hasta hace poco tiempo atrás, los modelos a seguir para los latinoamericanos eran Estados Unidos por una parte y Cuba por otra. De algún modo, estos dos paradigmas están profundamente cuestionados en América Latina. ¿Cree que tiene que venir un nuevo modelo?*

No me gusta la palabra modelo en general, y nunca se la aplico al caso de Cuba. No creo en modelos, no creo en el modelo cubano, ni en ningún otro modelo. No creo que ningún país latinoamericano deba plantearse hacer otra vez la Revolución Cubana: para eso nos bastamos y nos sobramos nosotros. Creo, sin embargo, que al margen de los modelos y de los esquemas, hay un notorio fracaso no sólo de los Estados Unidos, cuya decadencia ha comenzado, sino del capitalismo dependiente de la América Latina, y en esto me parece que por fin estamos de acuerdo tirios y troyanos.

*Esta decadencia general ¿a dónde nos conducirá, según usted?*

Llevará tarde o temprano a situaciones revolucionarias en la América Latina, y eso engendrará nuevas realidades que ya no puedo prever. Casi me atrevo a decir que felizmente no puedo prever. No quiero saber el futuro, quiero sencillamente que el futuro me sorprenda. De hecho, después de la Revolución Cubana, hubo importantes procesos en este Continente, ninguno de los cuales asumía o repetía el modelo cubano. Recuerdo la inmensa

alegría que fue para nosotros, me acuerdo como si fuera ayer, el triunfo de la Unidad Popular y de Allende en las elecciones. Una amiga soviética me dijo: «¿pero cómo están ustedes tan felices cuando este triunfo es el triunfo de otra línea que no es la de ustedes?» Digámoslo brutalmente: no es la línea de la guerrilla la que toma el poder, sino la de las elecciones. Yo le dije: «pero nosotros no estamos enamorados de los medios, estamos enamorados de los fines. Si Allende logra en realidad desencadenar un proceso socializante por sus medios, nos tiene que llenar a nosotros de felicidad». Si hubo un gobernante que en este Continente tuvo la audacia y el valor de querer llevar adelante otro proceso distinto, fue Allende. Recuerdo cuando en los Estados Unidos, en 1982, vi la película *Missing*, del gran cineasta Costa-Gavras; la vi llorando como un loco. Pero lo que me conmovía al verla era cómo en esa película, de alguna manera, se limpiaba la conciencia norteamericana y se preparaba para nuevas fechorías. ¿Dónde? ¿En Cuba, en Nicaragua, en El Salvador? Con honradez ejemplar, los Estados Unidos, sus periodistas y sus pulcros políticos reconocen sus crímenes, sólo que un poquito después.

*Pero esa película ya terminó. Ahora tendrán que ser otros los estrenos...*

Sí. Pensándolo bien, mucho tienen que cambiar los Estados Unidos, muchísimo, para que se pueda producir esa entente de que usted habla. Su modelo, su esquema, está hecho pasta, pero tiene un ejército inmensamente poderoso. Cuando he vivido en barrios populares y en la esquina vivía el guapo, a quien, por cierto, llamaban de una manera preciosa: Roenervios, había que salir a la calle con una piedra en el bolsillo. La América Latina tiene un Roenervios gigantesco al norte y tiene que andarse con cuidado, porque a cada rato nos invade. Como en Cuba en 1961, en la República Dominicana en 1965, en Granada en 1983, en Panamá en 1989. ¿Cómo vamos a unirnos con el gánster? ¿Cómo se imagina usted que yo podría reunirme con Roenervios, si no tuviera cuarenta piedras en los bolsillos? No es posible que mientras Roenervios siga haciendo de las suyas nos entreguemos mansamente a esa unión. Es la unión de un león y un cordero. Creo que los leones deben reunirse con los leones, y lo que debemos proponer, nuestra meta, debe ser llegar a ser leones, no rotarios. Cuando seamos leones, nos vamos a reunir con ese otro león, pero mientras tanto lo que no podemos hacer es entrar en la jaula del león para que nos vaya comiendo a pedacitos, que es lo que él quiere. De hecho, a él le molesta mucho todo lo que hagamos colectivamente. Estamos en presencia, para decirlo de la manera más académica posible, de un desvergonzado gánster local que se llama el gobierno de los Estados Unidos. Nada tengo contra el pueblo norteamericano, tanto lo quiero que espero que un día se desembarace de ese gobierno y entonces nos sentaremos juntos a la mesa de las negociaciones, ya sea en Iowa, en Córdoba, en La Habana o donde sea.

*¿Qué sintió usted cuando ocurrió el derrumbe del bloque soviético?*

No fue una buena noticia. Por otra parte, habría que distinguir. La situación de la Europa oriental era la situación de países a los cuales la revolución socialista les había llegado en las bayonetas del Ejército Rojo, y había allí una situación muy difícil, porque si bien es verdad que tenían resueltos los problemas materiales básicos, también es verdad que no sentían que tenían un régimen que ellos mismos hubieran construido. En el caso de lo que fue la Unión Soviética, sí había habido una auténtica revolución. Pero no cabe duda de que había grandes problemas también en el interior de la Unión Soviética que no son desconocidos para nadie. Esos problemas fueron revelados desde hace bastante tiempo por los opositores a Stalin. ¿Quién no ha leído a Trotski, por ejemplo? Muchos de los textos de Trotski que he releído, ahora parecen prosoviéticos, es curioso. Y para qué hablar de un pensador como Deutscher, cuyo libro *La revolución inconclusa*, me decía el otro día un dirigente de la Revolución Cubana, parecía hecho para ayudar a la Unión Soviética. Esos problemas, en el orden político (y más bien personal), fueron denunciados por Jruschov en 1956, así que eran de dominio público. Y todo eso ocurrió años antes del triunfo de la Revolución Cubana. Por eso cuando nos vinculan a nosotros con el estalinismo, no deja de ser un anacronismo. Y bueno, ha ocurrido lo que ha ocurrido, para mí no es una buena noticia. La Unión Soviética debió hacer grandes reformas, que eran inevitables, para superar las dificultades y avanzar hacia un horizonte socialista y no retroceder hacia el pasado, hacia el capitalismo. De todas maneras, si yo fuera un entomólogo histórico, que no lo soy, me asomaría con enorme interés sobre ese hormiguero para ver el primer caso en el mundo en que es posible, como decían los chinos cuando estaban peleados con los soviéticos, el paso pacífico del socialismo al capitalismo. No es tan pacífico, pero por ahora estamos viendo esta involución. Como para mí el capitalismo es malo, no me parece una buena noticia que se involucione hacia el capitalismo. Allí el verdadero desafío era, a partir de los postulados iniciales de Gorbachov, la *perestroika*, la *glasnost*, etcétera, haber sobrepasado los grandes problemas que había, burocráticos, ideológicos, económicos, y haber ido más lejos. Pero no se ha hecho así, se ha ido hacia atrás.

*¿No cree que el capitalismo tiene algunas virtudes?*

No desconozco que tiene virtudes, pero creo que los defectos son muchos más que las virtudes. Creo que implica una enorme cantidad de sufrimientos, una enorme cantidad de miseria. Recuérdese cómo se formó el capitalismo. Recuérdese *El capital*, de Marx. Se tiende a olvidar que Marx no era un economista, sino un revolucionario que estudió economía, que es distinto. Y en algunas páginas de *El capital*, Marx describe cómo campesinos ingleses fueron despojados de sus tierras, y finalmente arrojados a terrenos rocosos que ya no podían sembrar, a fin de que se convirtieran en proleta-

rios. Así surgió el proletariado, de manera pavorosa. Bernard Shaw decía que Marx tomó en serio los famosos libros azules ingleses de los inspectores de fábricas. Allí se demostraba cómo se hizo la acumulación originaria de capital. Por una parte se hizo sobre el resto del mundo, esclavizándolo: África, Asia, América, Oceanía; y por otra parte, con la violencia sobre su propio pueblo. Eso se llama la acumulación originaria de capital. Gracias a la explotación de la mayor parte del mundo y de sus propios trabajadores, se produjo la acumulación originaria de capital. ¿Cómo van a producir la acumulación originaria de capital los países de la Europa del Este? ¿Van a participar otra vez en el reparto del mundo? ¿A quién van a explotar? Porque, que yo sepa, sin esa explotación no habría Inglaterra, ni Francia, ni Alemania, ni los Estados Unidos. No puedo ver con simpatía, repito, esa involución. Si no van a producir esa acumulación originaria de capital sobre la base de la rapiña del mundo ya repartido y rapiñado, y sobre la base de la explotación de sus trabajadores, ¿cómo la van a conseguir? Es una curiosidad que tengo. A mí me es siempre conmovedor saber que en Inglaterra un hombre puede poner un cajón de bacalao en Hyde Park, levantarse y decir lo que quiera, salvo atacar a la monarquía, y eso es una manifestación preciosa de libertad. Lamento que eso también se hiciera en el mismo momento en que Gandhi ordenaba a sus seguidores que se acostasen en las vías férreas de los ferrocarriles ingleses en la India para hacerlos detenerse como protesta, y los ingleses no detuvieron los ferrocarriles y así, al final, cuando había terminado la peroración de ese admirable soñador de Londres en Hyde Park, había millares de indios muertos en las vías férreas inglesas. La libertad que se adquiere a ese precio es una vergüenza. La libertad de que hoy disfrutan los Estados Unidos es una vergüenza, porque se hace a expensas nuestras. Esa libertad supone nuestra esclavitud, nuestra pobreza, nuestra explotación, nuestra miseria. Recuerdo también unos versos de Valéry. Usted me dirá que qué tiene que ver la política con Valéry. Yo lo sé muy bien porque soy poeta. Decía Valéry en «El cementerio marino»: «quien luz restituye, /supone en sí triste mitad de sombra». Esa luz, entre comillas, de Occidente, supone la sombra para los que ahora somos las tres cuartas partes del mundo y que en el año 2000 seremos la cuatro quintas partes de la humanidad.

*Mas estábamos hablando de Europa del Este...*

Estoy convencido de que eran inevitables cambios. En la Europa del Este, como decía Lezama Lima, muy gracioso, el socialismo les había caído encima como una carpa de circo. En la Unión Soviética sí existió una auténtica renovación, pero tuvo un enorme problema después, una gran catástrofe: la muerte de Lenin. Cuando yo era un muchacho, pensaba que Lenin se había muerto muy viejito, pero ahora que tengo sesenta y un años, y sé que se murió a los cincuenta y cuatro, y que llevaba dos años prácticamente muerto en vida, me doy cuenta de que murió niño. Podría haber vivido

veinte años más. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera vivido veinte años más? No habría habido la disputa de los diádocos, de los generales de Alejandro que se repartieron el imperio a su muerte... El mundo hubiera sido otro. Eso de que los hombres son sustituibles es una mentira, los auténticos seres humanos nunca son sustituibles. Desde su papá y su mamá hasta las grandes figuras históricas, hasta los grandes poetas, hasta los amigos. Insustituibles fueron Lenin y Martí. Repito, los cambios eran inevitables, pero desgraciadamente no se hicieron hacia adelante, sino hacia atrás.

*¿No ve en esta crisis del marxismo, la crisis definitiva del Iluminismo romántico y por tanto del pensamiento revolucionario?*

Conozco esa tesis, como es natural. No ignoro tampoco, por ejemplo, las comparaciones que hizo Engels entre Rousseau y Marx. Incluso leí un libro interesante de Galvano della Volpe, *Rousseau y Marx*, y le puedo decir lo siguiente: creo que es una infelicidad hablar del marxismo, creo que a eso se refería en cierta forma Marx con su famosa *boutade*: «yo no soy marxista». No soy el primero que señala esto; pero lo voy a decir aquí otra vez: el marxismo es, entre otras cosas, una teoría revolucionaria, como todo el mundo sabe, pero es también una ciencia que tiene el nombre de su fundador. Esto ha producido grandes confusiones. ¿Qué haríamos si la geometría en lugar de llamarse geometría se llamara talesismo? ¿Qué haríamos si la astronomía en lugar de llamarse astronomía se llamara galileísmo? En este último caso, habría que explicar cómo, en un capítulo de la astronomía, un hombre se vio ante la Inquisición y se retractó y dijo que la Tierra no se movía; pero esto no forma parte de la historia de la astronomía, sino de la biografía de Galileo. Creo que tenemos que acostumbrarnos a hablar del materialismo dialéctico e histórico como hacemos con otras disciplinas filosóficas o científicas.

*Sin embargo, ¿Martí fue un materialista histórico?*

Martí fue un revolucionario. Descubrió, a su manera, no poco de lo mismo que Marx. Así como Leibniz y Newton, independientemente uno de otro, descubrieron el cálculo diferencial e integral, y sería catastrófico que a la teoría correspondiente la llamáramos newtonismo o leibnicismo. El materialismo histórico no fue sólo descubierto por Marx y Engels. De hecho, ya muerto Marx, en 1883, el libro *El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado*, de Engels, no es más que una glosa, brillante y por cierto muy divertida, de un gran libro que publicó el norteamericano Lewis Morgan, *The Ancient Society...*, en 1877. En aquel libro, Engels dice que el antropólogo norteamericano Morgan había descubierto por sus propios pasos el materialismo histórico, con independencia de Marx. Mi criterio (yo le he dado a usted siempre mi criterio, no soy ni oficial ni no oficial) es que Martí, que era un espiritualista y tenía un espíritu religioso, a pesar de que no se adhirió a ninguna religión y era profun-

damente anticlerical, sobre todo hostil a la Iglesia católica que era la que dominaba en la América Latina en ese momento, llegó también, por sus propios pasos, a vislumbrar el materialismo histórico al margen de Marx; al igual que lo hizo Morgan. Porque es una ciencia y, en un momento determinado, la ciencia llega a un punto tal que es perfectamente posible que distintos científicos arriben a una misma conclusión.

*Pero esa ciencia está en crisis...*

Morgan llegó a ese descubrimiento por la vía de la antropología, Marx llegó por la vía del análisis histórico, económico, y Martí llegó en su condición de político, de pensador, de periodista que tenía que comentar los hechos. Sus crónicas sobre las conferencias panamericanas de 1889-1890 y 1891 demuestran la crítica que él hace de esas conferencias. Las hace desde la perspectiva de un materialismo histórico al que había llegado Martí por sus propios pasos. Vistas así las cosas, no creo que esa ciencia haya entrado en crisis, no creo que la geometría haya entrado en crisis, ni que la astronomía haya entrado en crisis. Creo, más bien, que van progresando. Por ejemplo, soy un aficionado a la astronomía. Sé que desde que tenía doce años hasta ahora (tengo casi cincuenta años más), la astronomía ha conocido una enorme cantidad de cosas. Cuando yo era muchacho, no se hablaba del *big-bang*, ni de muchos otros hechos. Y hoy día se habla frecuentemente de eso. ¿Quiere decir que la astronomía ha entrado en crisis? ¿O quiere decir que la astronomía ha crecido como tiene que crecer toda ciencia? El materialismo histórico no ha entrado en crisis, está en crecimiento. Los hechos que han ocurrido, por catastróficos que sean, son datos para ser incorporados a esa ciencia.

*Entonces, ¿el marxismo se trata sólo de una ciencia?*

No se trata sólo de una ciencia, se trata también de una doctrina revolucionaria que ha sufrido un revés tremendo, no cabe duda. Pero no veo ningún pensamiento que ponga las cosas más allá del materialismo histórico. En su libro *Crítica de la razón dialéctica*, de 1960, Sartre dice que una disciplina como el materialismo histórico y dialéctico, no recuerdo textualmente las palabras, no puede ser superada en un gabinete. Tiene que ser superada con el desarrollo mismo de la realidad, y francamente no he leído un análisis que impugne esta disciplina. Me parece, por ejemplo, que lo que dice el famoso Fukuyama da risa. Probablemente cuando Fukuyama dice que terminó la historia, que terminó la guerra, que terminaron los totalitarismos, parece que se le hubiera olvidado que en la llamada Primera Guerra Mundial ninguno de los participantes era nazi o comunista. Tengo entendido que todos eran iguales, unos les decían horrores a otros, los dos mentían y los dos decían verdad. Esa fue una guerra horrible. ¿Cómo Fukuyama puede olvidar que en aquella guerra no participó ningún totalitarismo? Creo



que es un disparate inmenso de este hombre que se dice hegeliano. Al principio pensé que era un hegeliano de derecha, después me di cuenta de que era un hegeliano de pacotilla, de una ignorancia absolutamente garrafal.

*¿Qué le está pasando entonces a los intelectuales?*

Veo un tremendo empobrecimiento del pensamiento mundial de tirios y troyanos. Cuando pienso en mi París de 1955 y en el París de ahora, sí creo que se ha producido un empobrecimiento lamentable del pensamiento, que nos incluye a todos. En general, no sólo no se ha llegado al fin de la historia, como dice ese tonto, sino que ni siquiera, lo que es más triste, se ha llegado al fin de la prehistoria. Ya estamos en el siglo XXI técnicamente hablando, pero el hombre sigue siendo una bestia de la caverna.

*¿Y esa crisis del pensamiento no incluye al materialismo histórico?*

Creo que en el materialismo histórico hubo, en momentos, considerables enriquecimientos, debiéranse a Lenin, a Trotski, a Lukács, a Gramsci, a Fidel, al Che, a Mao, o a quien fuera: pensadores que realmente han hecho contribuciones importantes al materialismo dialéctico y al materialismo histórico. Pero hoy siento que vivimos en un momento intelectualmente pobre.

*La idea de que el desarrollo del pensamiento se ha empobrecido me parece fundamental. ¿Cómo ve el desarrollo del pensamiento propio en América Latina?*

En la derecha lo que veo es una osificación y un retraso pavorosos. Cuando oigo hablar de la nueva derecha, me hace mucha gracia. Parece un sintagma francés, porque los franceses, como todos sabemos (Ernesto Sábato se ha burlado de eso), a cada rato reúnen un grupo de figuras y le llaman nuevo algo. Esto de nueva derecha me recuerda eso mismo, es una *contradictio in terminis*, puesto que la derecha, por definición, es vieja, y esta supuesta nueva derecha es aún más vieja. No veo ningún aporte, absolutamente ninguno, en que se nos plantee como proyecto para la América Latina lo que estamos haciendo hace ciento cincuenta años: una nueva versión del liberalismo. En otras palabras: nos plantean, como porvenir, el pasado.

*¿Y la izquierda?*

En cuanto a la izquierda, hablando *grosso modo*, no cabe duda de que una parte de ella está, como es natural, conmocionada por las cosas que han ocurrido, conmocionada por la avalancha de publicidad que tiene la llamada nueva derecha y que parece que se traga todo. Pero hay otra parte de la izquierda latinoamericana que no se comporta en absoluto así. En primer lugar, en la América Latina ha habido a lo largo de estos años aportes nada carentes de interés en cuanto al pensamiento; en las ciencias sociales, por ejemplo. Pensemos lo que pensemos de la teoría de la dependencia, fue una contribución latinoamericana a las ciencias sociales no exenta de valor; pen-

semos lo que pensemos de la Teología de la Liberación (que, por supuesto, tiene muchas raíces en otros lugares: bastaría pensar en los curas obreros en Francia, la revista *Esprit* de Mounier, etcétera), en general, es un aporte latinoamericano importante. Me parece que con todos los altibajos del pensamiento propio del materialismo dialéctico e histórico, tiene también interesantes contribuciones en la América Latina.

*Aunque hoy día son puros cadáveres... Usted está hablando de los años 60...*

Pienso que la mediación por la cual Martí es actualizado a través de la Revolución Cubana es algo importante. La mediación, sobre todo de Fonseca, por la cual las obras e incluso el pensamiento de Sandino han sido actualizados es una cosa verdaderamente importante. Creo que hay en estos momentos barruntos de lo que debe ser, vamos a llamarla así, una nueva izquierda. Hay viejos gladiadores que mantienen su bandera. Pienso en Uruguay, donde hay gente como Benedetti, como Galeano; en México, gente como Pablo González Casanova, como Alonso Aguilar. Pero todo está en un proceso de replanteo y tenemos que estar muy abiertos a la realidad, más que nunca tenemos que ser alumnos de la realidad y, en lugar de imponerle dogmas y esquemas, muchos de los cuales han resultado desastrosos, estar atentos. Y esto no está ausente en los mejores y más coherentes y audaces pensadores de izquierda de la América Latina.

*¿Pero no encuentra que el pensamiento de izquierda en América Latina está en una profunda crisis?*

Sí, yo creo que sí. Pero crisis no quiere decir necesariamente aniquilamiento, aunque negarla sería querer tapar el sol con un dedo. No me cabe la menor duda: estamos todos obligados, como le decía, a un replanteo, a un repensamiento, a una relectura, como está haciendo la derecha. Por ejemplo, en el número de julio de *Vuelta*, la revista que dirige Octavio Paz, hay lo que ellos llaman una vindicación de Edmund Burke, un importante escritor inglés que en 1790, al año siguiente de estallar la Revolución Francesa, escribió el primer gran texto contra esa revolución. Se llama *Reflections on the Revolution in France*, y su autor es uno de los primeros escritores contrarrevolucionarios. Lo digo como mera descripción, no en un sentido moral. No es extraño que *Vuelta* haga la vindicación de Edmund Burke, porque al principio esta nueva derecha quería presentarse como heredera de los auténticos cambios que se debían hacer y que habían sido (decían) traicionados por llamados revolucionarios. Pero a medida que van pasando las cosas, se van quitando la careta y tranquilamente hacen la reivindicación de sus antepasados, es decir, de los contrarrevolucionarios de todas las épocas... Creo que lo que debe hacer la izquierda es también releer a nuestros clásicos, incluyendo muchos clásicos de nuestro Continente; y sacar también conclusiones, por supuesto, de otras partes del mundo. Quiero llamar la atención sobre el hecho de que pocas

veces hablo de Latinoamérica. En una carta, usted decía que era un mito francés. Yo prefiero hablar de nuestra América, que es la denominación que Martí le dio desde muy joven, desde los años 1875 a 1878, cuando estuvo en México y Guatemala, y sobre todo en su mejor ensayo, que se llama así, «Nuestra América». Pero nosotros no decimos nuestroamericanos, y hay que decir latinoamericanos y caribeños. Creo que entre las tareas que tiene la izquierda en la América Latina está sin duda alguna volver a leer la historia con los ojos actuales, con los ojos de 1991. Hay que volver a leer nuestra historia desde la perspectiva de esta fecha, sin por eso bajar nuestras banderas y aceptar todas las boberías que vienen de la derecha.

*Una buena parte de la izquierda latinoamericana que intenta hacer esa relectura va llegando a posiciones que podrían llamarse de derecha, por lo menos en el plano económico...*

Es posible, pero ya no es izquierda: es derecha.

*Es un fenómeno indudable. ¿Qué siente con eso?*

Para la izquierda es un momento malo, indudablemente. No es el final, como le decía, pero es un momento malo. Una de las cosas que usted menciona y que está ocurriendo, es que en la discusión llega un momento en que se pliega la bandera y se acepta la bandera de la derecha. Por ejemplo, cuando se habla de desideologización y se acepta ese criterio de franca raíz derechista, por supuesto ya se ha pasado de hecho al terreno de la derecha, cosa nada nueva. En el momento en que campea por su respeto la más cruda ideologización de derecha, a eso se lo llama desideologización. Naturalmente, allí hay una trampa. Como con la democracia. La democracia ha pasado a ser un término que no se cae de la boca de aquellos que practican la democracia como yo hablo el persa. Estamos en presencia de una gran tergiversación verbal. Por eso le decía que añoro ciertas formas del siglo XIX en que se tendía a llamar las cosas por su nombre. En el siglo XIX, en lugar de decir: los Estados Unidos quieren atacar a Cuba porque en Cuba se violan los derechos humanos y porque no hay pluripartidismo, se decía tranquilamente: «esto es nuestro porque lo queremos». «Nos apoderamos de la América Central porque lo queremos, punto.» Ahora todo se ha vuelto, en manos y bocas de ciertas personas, un verdadero guirigay, donde generalmente las cosas quieren decir lo contrario de lo que se dice. Por ejemplo, conservadores son los que siguen creyendo en la posibilidad de la revolución, y reformistas son los que están a favor del capitalismo. Hay que volver a hacer aquello que Flaubert propuso: el diccionario de las ideas recibidas. Y hacer un lindo diccionario de disparates que están hechos con toda intención, con toda mala fe.

*¿Hasta qué punto esto no ha sido provocado también porque el pensamiento de izquierda no ha sido eficiente?*

Es cierto, se produjo una osificación contra la cual se levantó muy crudamente, por ejemplo, el Che. Y no cabe duda de que eso ocurrió, y además tenemos casos de veras dramáticos, ya que países que se decían socialistas habían congelado el desarrollo del pensamiento. Yo, por ejemplo, como artista, como poeta, sentía como una cosa monstruosa el llamado realismo socialista. Por suerte, entre los errores que cometimos y entre las cosas que copiamos no se encontró la de implantar ningún realismo socialista en Cuba. Lo mismo ocurrió con las ciencias. Soy lo bastante viejo para recordar haber recibido un boletín de la legación de la Unión Soviética donde se condenaba la recién nacida cibernética, porque era una disciplina típica del capitalismo deshumanizador, etcétera. También he leído en revistas soviéticas inculpaciones contra músicos decadentes como Haendel, Bach, *et al.* Desastroso, y eso, sin lugar a duda, ha echado una sombra. Creo que en la América Latina se han hecho esfuerzos considerables en las ciencias sociales, pero no al nivel que alcanzó la literatura, especialmente la narrativa. La poesía ya había alcanzado ese nivel mucho antes, desde Darío, la vanguardia, hasta nuestros días. No creo que las ciencias sociales hayan estado, francamente, a ese nivel, con perdón de mis hermanos científicos sociales; ya veremos cómo arreglamos después esto para no buscar más líos de los que ya tengo.

*Ese punto es interesantísimo, lo quiero tocar inmediatamente después. Para terminar con lo de la osificación del pensamiento de izquierda: Cuba ha sido vanguardia y oráculo de ese pensamiento en América Latina. ¿Hasta qué punto cree usted que la osificación ha llegado o ha partido de aquí?*

También sin duda la ha habido. Incluso un crítico cubano muy bueno, Ambrosio Fornet, habló de lo que él llamó el quinquenio gris, entre 1971 y 1975. Quizá no fue tan quinquenio, algunos piensan que fue más. De lo que no hubo duda es de que hubo una osificación. La fecha a partir de la cual se nos complica mucho la vida es la de la muerte del Che. Desde 1967 y 1968, con la muerte del Che, que significó, por el momento, el no cumplimiento del proyecto revolucionario continental. ¿Qué implicó la muerte del Che? Posponer ese proyecto. Y Cuba vivió un momento muy duro, estuvo sola de toda soledad. Mal avenida con la izquierda tradicional del Continente, mal avenida con los países llamados socialistas, y desde luego con los Estados Unidos, ¿qué hacer en esa situación? Cuba no tuvo más remedio que integrarse al Consejo de Ayuda Mutua Económica, y ese es el momento en que la frescura y la originalidad iniciales de la Revolución Cubana se estrechan por tales vínculos. Como una manera de sobrevivir, nos integramos más de lo que era prudente a ese supuesto socialismo real, con las consecuencias dramáticas que estamos viviendo ahora. El problema es ni

elogiar ese quinquenio gris en su aspecto intelectual, porque sería una mentira, ni dejar de situarlo en un contexto específico para comprenderlo. Yo no voy a elogiar los errores de la Revolución, pero no puedo olvidar que al ser errores de la Revolución son también mis errores. Sí creo que hubo en Cuba un proceso de osificación ideológica en esos años. La creación del Ministerio de Cultura en 1976 fue en cierta forma el inicio del final visible de ese período, pero el problema es que el oscurantismo, el dogmatismo, no son sólo etapas, son también líneas, y solemos designar a la etapa con la línea hegemónica, que nunca es la única. Una etapa dogmática no es la etapa en que sólo hay dogmatismo: es la etapa en que predomina el dogmatismo, y una línea audaz y revolucionaria no es la etapa en que sólo hay audacia y pensamiento revolucionario, sino en que son hegemónicos la audacia y el pensamiento revolucionario.

*¿Después de esos fracasos ve a América Latina de capa caída, entonces?*

Ha pasado de moda la América Latina, y como moda está bien que pase, la moda debe pasar. La moda va y viene, lo saben bien las damas: la minifalda, la maxifalda, suben y bajan de manera hartamente conspicua; pero la moda no debe interesar mucho a nadie, así como tampoco el éxito. Los espíritus superiores no trabajan a favor del éxito, sino contra él, decía Martí. El ejemplo de Vallejo es un caso patético, tremendo. Incluso el tercero de sus grandes libros de versos se publicó póstumamente en condiciones bastante precarias: *Poemas humanos*. Pero eso de que nuestra América esté de capa caída es parte de la situación general de los países europeos. Por razones diversas, estamos vinculados a lo que se llama ahora el Sur. La situación nuestra en este momento es francamente dramática; nuestra, quiero decir, del Sur en general. Al desaparecer la polaridad Este-Oeste que tenía miles de desventajas que ya sabemos, pero que por lo menos tenía la ventaja de que los Estados Unidos no disponían enteramente de sus manos libres; al desaparecer esa polaridad, se agrava otra polaridad que ya existía, que es la de Norte-Sur. Y me siento bastante preocupado respecto al porvenir del Sur. En el año 2000, los habitantes del llamado Sur serán las cuatro quintas partes de la humanidad. Entonces tenemos que sentirnos preocupados no sólo por el Sur, sino también por el Norte. ¿Es posible que el Norte sobreviva a la catástrofe del Sur? Por supuesto, los primeros enfermos que mueren son los pobres. ¿Pero de dónde salen los choferes, los jardineros, las cocineras, sino de los pobres? Y finalmente la enfermedad llega también a los ricos y se mueren todos. Unos se mueren antes que otros, así de sencillo. Entonces me preocupo, tengo derecho a preocuparme por la humanidad. Nosotros tenemos una visión brutalmente antropocéntrica de la realidad, visión no avalada por nada, ni autorizada por nadie. Antes que nosotros, hubo muchas especies que se extinguieron, y el ser humano no es más que una especie entre muchas. Pensar que somos el fin de la evolución no tiene pies ni cabeza, y

tal como van las cosas, si no mejoran, no hay porvenir para la especie *homo sapiens*. La civilización occidental es la más devastadora de todas las civilizaciones que el ser humano ha producido en su historia. Primero acabó con las otras civilizaciones, o las diezmó o las empobreció, y ahora está empobreciendo el planeta. Esta es mi preocupación. Me parece que debo llevar adelante y defender mi Revolución con uñas y dientes porque es la partecita de la historia que me tocó. Pero lo hago pensando en la humanidad; así, cuando digo patria, como postuló Martí, digo humanidad. Es aquella parte de la humanidad donde me tocó vivir y cumplir con mi deber.

*Tanto por factores externos como por factores internos, la existencia de la Revolución cubana está en un grave peligro. Desde el punto de vista suyo, como escritor cubano, ¿cómo salvaría esa Revolución?*

El primero de enero de 1959 no es sólo el inicio de la Revolución Cubana, sino el de la independencia cubana. Nosotros fuimos cerca de cuatrocientos años colonia española, sesenta años protectorado o neocolonia yanqui. Tenemos sólo treinta y dos años de independencia. La Revolución acabó por fundirse con la nación misma, y en este momento están en grandes riesgos de extinción ya no sólo la Revolución, sino la nación, y eso es grave. Vivimos una situación límite, pero en esa situación límite, curiosamente, las artes –por lo menos, según mi experiencia, la poesía– pasan a un primer plano. Vivimos una situación límite y en medio de esa situación límite, al menos la poesía surge indetenible.

*¿Le gustan las situaciones límite?*

No me siento satisfecho de vivir una situación límite, preferiría que no fuera así, como es natural. Pero, como le digo, para la poesía no es de ninguna manera una coyuntura en que se deba detener. De hecho, aquí en Cuba, en condiciones muy duras, durante este siglo, hemos vivido todo lo habido y por haber, incluidas dos terribles tiranías, la de Machado y la de Batista. El arte tiene un reino autónomo, tiene un reino propio, tiene sus propias incidencias y sus propias leyes, y es indetenible, está en el corazón del hombre. Si Aristóteles pudo decir, hace dos mil trescientos años, que el hombre es un animal político, hay que decir que es también un animal poético, y que está en el corazón mismo del hombre la creación de la poesía, del arte en general: con la poesía quiero nombrar al arte toda. Pero no aconsejo que nadie viva situaciones límite para hacer poesía, no soy de aquellos a quienes les gusta que la gente sufra porque sufriendo se produce más, no. Yo creo que hay mil fuentes de sufrimiento, sin necesidad de situaciones límite. No quisiéramos vivir este momento, no lo quisiéramos vivir, pero se nos ha impuesto y tenemos el deber moral de asumirlo como tal.

*Como cubano, ¿le ve alguna salida a esta situación límite?*

Con razón el país está acometiendo distintas tareas y acometerá otras. Reajustes, reacomodos, como se quiera llamar. Puesto que no pensamos suicidarnos, pensamos salir a flote de esta situación mala. Esta situación mala supone dificultades económicas muy grandes, y en consecuencia implica también audacia económica grande para hacer frente a la realidad. Tengo esperanza, tengo fe, tengo la certidumbre de que se encontrará una salida, que no se aplastará económicamente a Cuba, aunque ese es el proyecto del gobierno norteamericano, ahogarnos para provocar un malestar interno inevitable en situaciones de escasez, de dificultades y, de esa manera, hundir la Revolución Cubana, que es el sueño que tienen desde hace treinta y dos años, y por tanto uncir Cuba al carro de los Estados Unidos, que es su sueño desde hace dos siglos. Nosotros no somos más que los modestos continuadores de quienes impugnaron ese sueño anexionista que ya expresó Jefferson en 1805. Creo que haremos sacrificios y pasaremos por etapas aún más difíciles, pero que a la postre encontraremos una salida. Somos diez millones de personas, no somos muchos.

*¿Podrán dar de comer hasta entonces?*

Espero que se resuelva, con grandes dificultades, el problema alimentario, como el problema del petróleo. Cuba no tiene fuentes energéticas. No tiene petróleo, no tiene carbón, ni tiene grandes caídas de agua. Estamos buscando petróleo, a lo mejor aparece. Ha aparecido, pero poquito. Sin embargo, recuerde que estamos en la zona petrolera que va de Texas a Trinidad y Tobago y Venezuela. Tiene que haber petróleo, pero no lo hemos encontrado. Así y todo le insisto en que encontraremos algún tipo de salida, estoy seguro, tenemos que quererlo y hacerlo. Me es difícil desvincular de esta realidad bastante dramática mi vida como intelectual, como escritor, pero lo que sí puedo decir, aunque parezca paradójico, es que siento que Cuba está viviendo no sus últimos días, como dicen los yanquis y repiten algunos despistados, sino unos nuevos primeros días. Eso es muy riesgoso, pero es lo que creo que pasa. Desde el punto de vista intelectual, ese período de estrechez de que hablamos, ese famoso quinquenio gris, no debe repetirse en absoluto. Creo que Cuba ha reconquistado la libertad y la audacia que caracterizaron a la Revolución Cubana en sus primeros años. Como todo en la vida, tiene un alto precio. Vamos a salir de este bache, de este atolladero, más fortalecidos. Si no saldremos semidioses, por lo menos saldremos más fuertes. Semidioses ya sabemos que no somos. Nietzsche ha dicho la palabra definitiva sobre eso: «si Dios existe, ¿por qué yo no soy Dios?» No esperamos ser Dios, queremos sencillamente ser lo bastante fuertes para cumplir las tareas que tenemos que acometer, y confío en que así va a ser. Y como artista, como poeta, no separo una cosa de otra; yo no tengo una concepción política de la vida, tengo una concepción poética de la vida. Lo que

pasa es que la política, cuando es asumida como un hecho moral, es también un hecho poético.

*Ustedes los cubanos siempre han sido muy defensores de la identidad latinoamericana... ¿Sigue creyendo eso? ¿En qué consiste?*

Los muchachos suelen ser muy pedantes y mis compañeros y yo no fuimos una excepción. Cuando estudiábamos filosofía, habíamos llegado a la conclusión de que el planteo de Parménides y el de Heráclito eran conciliables: Parménides dice que todo ser es idéntico a sí mismo, y Heráclito dice que todo fluye, y esto nos hizo concluir que todo ser está siendo igual a sí mismo. En sólo este sentido me interesa el tema de la identidad, porque si no, puede convertirse en una frase retórica. Creo que sí existe una identidad, llamémosla latinoamericana y caribeña, a la que se refieren muchos textos, por ejemplo «Nuestra América», de Martí. Es una declaración de la identidad latinoamericana, pero en un sentido progresivo, en una especie de gerundio. No es una cosa que existe de una vez y para siempre, sino una cosa que se va haciendo a través de lo que se suele llamar nuestro sincretismo, palabra que no me gusta y además es bastante confusa. Se dice que nuestra cultura es sincrética porque reúne líneas provenientes de fuentes muy diversas. Entonces me pregunto: salvo casos rarísimos, ¿qué culturas no son sincréticas? Si hay una cultura sincrética es la cultura occidental, que se forma sobre la base de las cosas más heterogéneas: una creencia religiosa semita, la filosofía de los griegos –que por otra parte tanto le debían a los egipcios–, las leyes romanas, las costumbres llamadas bárbaras de los germanos, la influencia de los árabes, de los bizantinos. A toda esta amalgama la llamamos cultura occidental. Nosotros tenemos una maravillosa creencia popular en Cuba que se llama santería, el equivalente del vodú haitiano, y también se la llama culto sincrético. Pero, ¿qué culto más sincrético que el catolicismo, que fundió las cosas más increíbles de la Tierra, al incluir también creencias orientales, filosofía griega, etcétera, para llegar a ser con Constantino la religión del Imperio? No me siento por tanto contento al hablar de sincretismo, puesto que todas las culturas son sincréticas. Sí creo, a lo mejor me equivoco, que nuestra identidad tiene, sin embargo, un rasgo de universalidad que quizá no tienen otras culturas. A pesar de la evidente universalidad de la cultura occidental, hay ciertos parroquialismos en ella que hace a los occidentales entender al resto del mundo como un borrador o un aprendizaje de su propia cultura. Nosotros no tenemos eso, tenemos los ojos amplios, aunque le debemos mucho a la cultura occidental, ya que provenimos de ella.



*Pero la cultura occidental lo es cada vez menos...*

Claro. Tenemos herencias propias de todas partes del mundo. He escrito sobre esto en otras ocasiones, pero vuelvo sobre el principio. Me molestaría que se tomara identidad como un hecho estático, y ni qué decir como un hecho del pasado. Creo que es un hecho en marcha, que lo vamos realizando constantemente. Aquí en Cuba, por ejemplo, a finales del siglo XIX, un poeta magnífico, Julián del Casal, estaba muy influido por los franceses coetáneos suyos, y no faltó quien dijera que su obra no estaba en la tradición cubana. Pero cuando yo empecé a leer poesía (tenía trece años), la tradición cubana para mí estaba señoreada por Casal, quien había muerto medio siglo antes. Él ya era la tradición cubana. Sólo en este sentido estricto hablaría de una identidad latinoamericana, que no le podría definir, pero que sí sé que existe. Yo no leo a Huidobro, Neruda, De Rokha, Manuel Rojas, qué sé yo, o a Borges o a Reyes como extranjeros. Siento que hay ya una unidad en el campo de la literatura y de ciertas artes, que anuncia esa unidad que políticamente no somos aún. Pero lo que tenemos en común nos permite considerarnos como latinoamericanos y caribeños. Le voy a comparar un caso extremo como Nicolás Guillén, que es evidente que tiene que ver con las raíces afroibéricas del Caribe, con otro extremo: Borges. A cada rato oigo decir, unas veces para bien y otras para mal, que Borges es un escritor europeo. Me parece un disparate, eso no tiene pies ni cabeza. No conozco ningún escritor europeo como Borges, para empezar. Él mismo, en su magnífico trabajo sobre Kafka, decía que Kafka creó sus precursores. Borges es un escritor argentino por los cuatro costados y, además, específicamente bonaerense. Aunque no sepamos decir muy bien por qué, es porque existe una identidad latinoamericana de la que Borges se reiría. Pero la risa de Borges también forma parte de las producciones latinoamericanas.

*¿Usted no ve ninguna posibilidad de que dentro de esta transnacionalización que está viviendo el mundo, donde ya los países pesan menos como países, esto que se llama América Latina sea reabsorbido, recolonizado?*

No es imposible, no creo que sea imposible. De hecho, la historia está llena de proyectos que fueron a parar al basurero. Es decir, no veo por qué nuestro proyecto tiene todas las de ganar. Una de las cosas hermosas que tiene nuestro proyecto es que parece que tiene casi todas las de perder. Borges contaba que se fue a inscribir al Partido Conservador. Cuando llegó a la dirección en cuestión, ni siquiera los vecinos sabían dónde estaba la oficina. Finalmente Borges entró, se inscribió y cuando lo vieron salir alguien le preguntó: «¿Por qué se ha inscrito usted en el Partido Conservador, si sus perspectivas son nulas?» Y Borges respondió: «Un caballero sólo se adhiere a una causa perdida». La nuestra no es una causa perdida, pero está lo bastante amenazada como para que adherirse a ella sea propio de

un caballero. De manera que subirme en el carro de los yanquis porque «inexorablemente van a ganar», ya es una meta repugnante que sería razón suficiente para que no me subiera a ese carro. Pero los que se montan en él, los que abandonan su bandera y aceptan banderas propias de los yanquis, francamente no son caballeros y no me gusta hablar con ellos. No nos vencerán.

La Habana, 6 de noviembre de 1991

ROBERTO FERNÁNDEZ RETAMAR, poeta y ensayista cubano, es Profesor Emérito de la Universidad de La Habana y presidente de la Casa de las Américas, cuya revista homónima dirige desde 1965. Le han sido otorgadas altas distinciones como el Premio Nacional de Literatura, en Cuba; la Orden de las Artes y las Letras, en Francia; el Premio Internacional de Poesía Pérez Bonalde, en Venezuela; y el Premio Feronia, en Italia. Es autor de *Calibán* (1971), uno de los textos claves del pensamiento latinoamericano, entre otros libros de ensayos, y de más de una docena de poemarios.

# contra el fascismo y a favor de la humanidad



## **FASCISMOS PARALELOS**

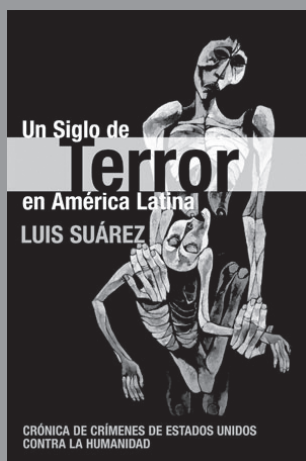
### **El golpe de Estado en Chile**

*Selección y prólogo de Jorge Timossi*

Compilación periodística de relatos, discursos y evidencia jurídica sobre los sangrientos hechos acaecidos el 11 de septiembre de 1973 en Chile, en que el gobierno de Salvador Allende, de tendencia socialista, fue derribado por militares chilenos fascistas apoyados por los Estados Unidos. Reúne palabras de Fidel Castro, Salvador Allende, su hija Beatriz Allende, y periodistas como Gregorio Selser, Isabel Jaramillo, Lisandro Otero y Jorge Timossi.

Toma actualidad tras los hechos del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, 28 años después, en que la escalada del fascismo comenzó a sentirse a nivel mundial.

272 páginas ISBN 978-1-921235-11-5



## **UN SIGLO DE TERROR EN AMÉRICA LATINA**

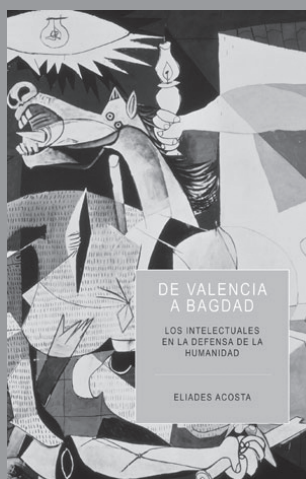
### **Crónica de crímenes de Estados Unidos contra la humanidad**

*Por Luis Suárez*

Una visión panorámica de la historia de las intervenciones y crímenes de guerra de los Estados Unidos en América Latina durante los últimos cien años.

Las dinámicas sociales en América Latina y su desarrollo e inevitable enfrentamiento al modelo de dominación imperialista son profusamente documentadas en este volumen junto a las raíces de los procesos y caminos que caracterizan la historia del continente.

596 páginas, ISBN 978-1-920888-49-7



## **DE VALENCIA A BAGDAD**

### **Los intelectuales y la defensa de la humanidad**

*Por Eliades Acosta*

En el 2005 Jean Paul Sartre recibía, como regalo de centenario, el regreso del compromiso de los intelectuales. Un año antes, congregados en Caracas, cientos de ellos enfrentaban el proyecto imperialista de los neo-conservadores norteamericanos y decían adiós a la desmovilización, el desaliento y la soledad.

Hugo Chávez exhortaba a tomar la ofensiva para salvar a la Humanidad de la pobreza, las guerras y el capitalismo. Trayendo el sol de la Valencia republicana en los huesos renacía una tradición combativa, y se reiniciaba la larga marcha.

288 páginas, ISBN 978-1-920888-80-0

# enlaces

## De Porto Alegre a Nairobi: una mirada al Foro Social Mundial

JOSÉ MIGUEL HERNÁNDEZ

Desde los orígenes del Foro Social Mundial (FSM) hay una disputa acerca de quién lo concibió y lo gestó, o quiénes lo concibieron y lo gestaron. En un polo de este debate se ubican algunas personalidades europeas, y en el otro, líderes y activistas de movimientos populares de América Latina, en particular de Brasil. Al margen de esta polémica, lo cierto es que, a fines de enero y principios de febrero de 2001, la ciudad de Porto Alegre fue la sede del I Encuentro del FSM, cuyo principal centro de actividades fue la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul. La gran mayoría de quienes asistimos a aquel evento no teníamos ni idea de que participábamos en el inicio de un proceso de largo alcance; lo que sí percibíamos era la urgente necesidad de contar con un espacio para intercambiar experiencias y potenciar los resultados acumulados en las luchas sociales libradas en el mundo.

Dos elementos fundamentales de la convocatoria al I Encuentro del FSM, cargados de simbolismo, anunciaban su identidad y orientación: uno era la decisión de efectuarlo a fines de enero y principios de febrero de 2001, como acción paralela y contestataria, en las fechas en que anualmente se realiza el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza; el otro era la selección como sede de una ciudad del Sur, Porto Alegre, cuna del Presupuesto Participativo, entonces gobernada –al igual que el estado de Rio Grande do Sul en el que se encuentra ubicada– por el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil.

Esta identidad y orientación quedaron refrendadas en la Carta de Principios, que define al FSM como:

un espacio abierto y plural de encuentro para ahondar la reflexión para un debate democrático de ideas, elaboración de propuestas, libre intercambio de experiencias y articulación de acciones eficaces por parte de identidades y movimientos de la sociedad civil que se opongan al neoliberalismo y al dominio del mundo por el capital o por cualquier forma de imperialismo y que se empeñen en la construcción de una sociedad planetaria orientada hacia una relación fecunda entre los seres humanos y de estos con la Tierra.<sup>1</sup>

El I Encuentro acuñó la identidad del FSM como un espacio de convergencia y divulgación de las múltiples expresiones de las luchas sociales cotidianas, pero que no adopta acuerdos, no aprueba resoluciones, ni emprende acciones; con otras palabras, un proceso que no representa a –ni actúa en nombre de– un sujeto colectivo concreto, característica que lo convierte en un «espacio virtual» que, sin embargo, se materializa en ciertos momentos para permitir la confluencia de los movimientos sociales. Su realización en América Latina garantizaba el propósito de los organizadores, dados la expansión y el auge de las luchas sociales ocurridos en la región, con una gran diversidad de acciones, articulaciones, redes y campañas. El resultado fue exitoso, con alrededor de 20 000 participantes, en representación de 500 organizaciones de 117 países, quienes realizaron 450 actividades, entre ellas, conferencias, seminarios, talleres y diversas manifestaciones culturales, dejó un testimonio indeleble de su importancia. Muchos descubrieron allí un potencial no imaginado para construir nuevas articulaciones mundiales y continentales. En este escenario, se produjo la convocatoria al II Encuentro del FSM, que también se realizaría en Porto Alegre y en fecha coincidente con el Foro de Davos, a fines de enero y principios de febrero de 2002.

En los preparativos del II Encuentro se fue delineando el concepto de *proceso* del Foro Social Mundial, entendido no solo como un gran evento –o un gran conjunto de eventos– que se repetirían tentativamente con una periodicidad anual, sino como espacio permanente de coordinación y divulgación de una agenda y un calendario que incluyese las acciones de las redes y campañas de los movimientos populares de todo el mundo. De manera que en esta segunda edición fue creado el Consejo Internacional del FSM, como instancia suprema de conducción de ese proceso de convergencia y como apoyo al Comité Organizador brasileño en la preparación del III Encuentro. El resultado de este Encuentro fue una multiplicación cuantitativa y cualitativa de los resultados de su primera edición, con 68 000 participantes, que representa-

<sup>1</sup> Carta de Principios del Foro Social Mundial (<http://www.forumsocialmundial.org.br>).

ban a 5 000 organizaciones de 131 países, quienes participaron en 871 actividades. Si bien este evento, en cierto sentido, resultó una réplica ampliada del anterior, significó un paso adelante porque demostró el creciente interés en el FSM de los movimientos populares de otras regiones, tuvo mayor desarrollo temático y metodológico, y sentó las bases para el desarrollo del FSM como proceso.

El III Encuentro del FSM se efectuó en 2003 con 100 000 asistentes de 123 países y 1 372 actividades. Dos iniciativas que cobraron cuerpo durante los preparativos de esta tercera edición y que se materializaron durante su desarrollo fueron el nacimiento de la Asamblea Mundial de los Movimientos Sociales (AMMS) y la decisión de celebrar el IV Encuentro en Mumbai, India. En la creación de la AMMS desempeñaron un papel fundamental el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), ambos de Brasil. Se trata de una iniciativa destinada a crear un espacio dentro de la plataforma general del Foro, en el cual sí se aprueben declaraciones, resoluciones y acuerdos, cuya prohibición en las actividades del FSM es considerada por muchos como una limitación que reduce ese proceso a un mero ejercicio de catarsis multitudinaria, sin una acción práctica y efectiva hacia ese otro mundo posible por el que aboga el Foro. También en esa dirección apuntaron las masivas manifestaciones contra la guerra efectuadas en muchos países de todo el mundo, como parte del proceso del FSM. Por su parte, la decisión de celebrar el siguiente Encuentro en Mumbai fue un reconocimiento y estímulo a la participación de los movimientos populares de otros continentes en el Foro, que lo enriquecen con sus propios temas, perspectivas, experiencias, culturas y costumbres.

Las modestas condiciones en que se realizó el IV Encuentro del FSM en Mumbai demostraron que no es necesario contar con opulencias logísticas. Por el contrario, su austeridad permitió resaltar la riqueza popular y cultural característica de este evento, su diversidad y el peso que ocuparon las problemáticas regionales. El Encuentro de Mumbai resultó un paso importante en la concepción y desarrollo del proceso del FSM, no solo por haber atraído a 115 000 representantes de 2 600 organizaciones procedentes de 132 países, participantes en 1 203 actividades, sino principalmente por sus innovaciones metodológicas y programáticas, en particular, por el elevado número de actividades autogestionadas –que permitió una mayor diversificación y correspondencia con los intereses de los participantes– y la acción articulada de numerosas organizaciones, redes y campañas en los paneles, seminarios y talleres, elementos incorporados por el Consejo Internacional a la metodología organizativa de los próximos Encuentros. En Mumbai se fortalecieron las tendencias promotoras de acciones contra la guerra y de acercamiento a las *izquierdas políticas*, a lo cual contribuyeron de manera significativa los partidos políticos de izquierda del país sede.

La realización del IV Encuentro del FSM en Mumbai ayudó a superar la incipiente crisis en sus espacios de coordinación provocados por el choque entre los nuevos actores –con concepciones más politizadas y radicales– y las posiciones «light» predominantes en las ONG's y en otros miembros europeos del Consejo Internacional. También en Mumbai afianzó el criterio de rotación geográfica de los Encuentros posteriores –que aún se encontraba en disputa– y se potenció el concepto de que el FSM realizase Encuentros regionales, además del mundial.

El V Encuentro del FSM regresó a Porto Alegre en 2005, con una participación sin precedentes, de 200 000 personas pertenecientes a 6 872 organizaciones de 135 países, que efectuaron 2 157 eventos. En esta oportunidad se aplicaron nuevos criterios organizativos y metodológicos, incluida la contratación de carpas –como en Mumbai– para evitar los costos de alquiler de la Universidad Católica y otros locales, y un mecanismo de inscripción y aglutinación de actividades, concebido para descentralizar y democratizar la toma de decisiones sobre el programa, con énfasis en los seminarios y talleres autogestionados, en lugar de las conferencias masivas que acapararon la atención en las ediciones anteriores del Foro realizadas en Porto Alegre. Estas innovaciones tuvieron éxito parcial, pues fueron favorables desde el punto de vista político, pero deficientes en el aspecto organizativo por lo engorroso del procedimiento de inscripción y agrupamiento temático. De manera especial, es preciso reconocer el simbolismo del concepto de «territorio Foro Social Mundial», que abarcó todas las áreas donde se celebró el Encuentro y significó un enorme esfuerzo logístico con deficientes resultados prácticos.

En el trasfondo de buena parte de las innovaciones organizativas y metodológicas ensayadas en el V Encuentro se escondía el vano intento de resolver por esa vía los problemas de naturaleza política que se venían acumulando en el proceso del FSM. En la medida en que ocurrían acontecimientos como la expansión y fortalecimiento del movimiento mundial contra la guerra –estimulado por la intervención militar de los Estados Unidos en Afganistán e Irak y sus amenazas contra otros países– y el movimiento continental de lucha contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), en el V Encuentro se intensificó la polémica acerca de los propósitos, los resultados, la periodicidad y, sobre todo, la utilidad de un Foro que, por definición, no toma posición ni emprende acciones, ni sobre estos ni sobre ningún otro de los temas cruciales de la agenda de los movimientos populares. En esta crisis, que algunos definían como el «agotamiento» del FSM y otros como una señal de la necesidad de revitalizarlo, se decide que el VI Encuentro fuese *policéntrico*, con Caracas, Venezuela, como sede en América, Bamako, Nigeria, como sede en África, y Karachi, Pakistán, como sede en Asia. Como toda innovación, el *policentrismo* fue recibido con apoyos y críticas, pero esta modalidad demostró su validez, porque facilitó una ma-

yor participación y convergencia de los movimientos populares de diversas regiones del Sur en el proceso del FSM.

En lo adelante, los Encuentros del FSM se efectuarán, de manera alterna, un año con la modalidad *unicéntrica*, con sede rotativa por todos los continentes, y el año siguiente con la modalidad *policéntrica*. El año en que se efectúe el Encuentro unicéntrico, se estimulará la celebración de Encuentros regionales en cada uno de los continentes. En 2007, corresponde realizar el Encuentro mundial en Nairobi, Kenya, y aún está pendiente decidir la fecha y el lugar en que se desarrollará el Foro Social Américas.

JOSÉ MIGUEL HERNÁNDEZ es funcionario del Departamento de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y representa a la Red Encuentros Hemisféricos contra el ALCA ante el Consejo Internacional del Foro Social Mundial. Integra la coordinación del Capítulo Cubano de la Alianza Social Continental.



# La conspiración de los diferentes

(Reseña de *Elogio de la diversidad...* de Héctor Díaz-Polanco)

ARMANDO BARTRA

En su más reciente libro, *Elogio de la diversidad. Globalización, multiculturalismo y etnofagia*,<sup>1</sup> Héctor Díaz-Polanco no solo hace un encendido elogio de la pluralidad, también se afilia a su causa como lo que es: una bandera de las izquierdas.

Así, la apuesta política por las diferencias virtuosas está tanto en el «Prefacio» como en el último capítulo, significativamente titulado «La izquierda frente a la diversidad», pero Díaz-Polanco no se conforma con tomar partido. En el resto del texto se enfrasca en un enjundioso debate con el viejo y el nuevo pensamiento liberal, aquel que pretende ubicar la naturaleza humana en la soledad originaria del individuo; más adelante la emprende con la globalización capitalista, no tanto por su obra de emparejamiento –que finalmente no lo fue del todo– como por su recreación instrumental de las identidades y su etnofagia; y aunque no se extiende sobre ello, también toma distancia respecto del relativismo radical y del etnicismo fundamentalista, que son una suerte de eurocentrismo en el espejo de los oprimidos.

## Los distintos atacan de nuevo

El libro constata hechos que en el arranque del tercer milenio quizá son evidentes pero no lo eran mucho hace veintitantos años, cuando Héctor empezó a ocuparse de ellos. Por ejemplo, que globalización no es uniformidad humana

<sup>1</sup> Héctor Díaz-Polanco: *Elogio de la diversidad. Globalización, multiculturalismo y etnofagia*, Siglo XXI Editores, México, 2006 (Premio Internacional de Ensayo 2005, convocado por la Universidad Autónoma de Sinaloa, El Colegio de Sinaloa y Siglo XXI Editores), 224 pp. Las páginas donde se encuentran las citas referidas a este libro aparecerán entre corchetes. Díaz-Polanco, antropólogo social (UNAM) y sociólogo (El Colegio de México), con 30 años

sino reinención de las identidades. Restitución que tiene dos expresiones opuestas y a la vez complementarias: como parte de la resistencia de quienes sufren explotación económica pero también opresión étnica o vilipendio cultural, y como recurso del sistema que reedita las identidades con fines de lucro y de reproducción de su hegemonía. Sin embargo –hay que enfatizarlo–, la pluralidad que place al capital es la pluralidad epidérmica o domesticada, pues como veremos más adelante, para el gran dinero es veneno la irreductible, terca y subversiva diversidad de los hombres y la naturaleza, una pluralidad radical que, en última instancia, es incompatible con el mercantilismo absoluto.

Más allá de registrar realidades sociales, *Elogio de la diversidad...* toma partido en una confrontación que es académica pero también política y social. No se trata solo de constatar la «ausencia del otro» en ciertas formulaciones universalistas, sino además de subrayar el papel libertario de los grupos de identidad y –llevando la postura un poco más lejos– de recuperar el carácter subversivo de la reivindicación de la diversidad, tanto la étnico-cultural, como la natural, la tecnológica, la económica, la societaria, la política y hasta la utópica, pues ya no nos seducen igual que antes los mundos felices unánimes y en serie que inspiraron las revoluciones del siglo pasado.

Toma de posición, esta, que implica distanciarse del liberalismo antipluralista pero también del relativismo absoluto; desmarcarse tanto del universalismo homogenizante como del etnicismo fundamentalista.

Y aquí importa destacar una propuesta que me parece fundamental: la diversidad étnica y cultural a la que se hace referencia en este libro no es la que se da entre sociedades distintas, sino en el seno de una misma sociedad; porque lo que hoy registramos no es el encuentro de civilizaciones sino el permanente desdoblamiento étnico-cultural en el seno de una misma, dispareja y desgarrada civilización globalifágica; un sistema-mundo abigarrado pero unitario donde las diferencias –estigmatizantes o libertarias– reaparecen una y otra vez no por inercia histórica sino por mecanismos estructurales de diferenciación. No estamos, pues, hablando de sumatoria de diversos, ni del *melting pot* originario, sino de que –como escribe Héctor– «la sociedad humana es una formidable máquina que fabrica incesantemente la diversidad».

## La ontología del solitario

Esta recurrente diferenciación de los grupos humanos en identidades colectivas con valores, normas e ilusiones diversos, resulta prácticamente

---

de experiencia docente y de investigación, es profesor-investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), de México. Ha publicado cerca de doscientos trabajos científicos, incluidos diez libros como autor único y cincuenta en coautoría. Es considerado uno de los principales especialistas en temas étnicos y autonómicos de América Latina. (*N. del E.*)

disruptiva y teóricamente perversa para la filosofía, la teoría jurídica y el pensamiento político de raigambre liberal; sistemas de ideas que proponen al individuo como originario y a la sociedad como derivada. Porque si la voluntad y la libertad, presuntamente innatas y propias de la naturaleza humana, son además atributos metafísicos de un solitario radical, la sociedad aparecerá como resultado de un acuerdo entre individuos incondicionados y sin contexto, como producto de una suerte de sociogénesis contractual.

Díaz-Polanco señala, puntualmente, que tal hipótesis choca no solo con las evidencias historiográficas y etnográficas, sino también con los hechos duros y las tendencias profundas de las sociedades contemporáneas: órdenes abigarrados que lejos de materializar el sueño liberal de modernidad resultaron verdaderos festines de diversidad identitaria. Aún si el argumento carece de sustento histórico, podría tener consistencia lógica en la medida en que se nos muestre como principio racional que da cuenta de la condición de posibilidad de toda sociedad humana.

Y es esta la línea de argumentación que –siguiendo a Kant– elige el primer John Rawls, el de *Teoría de la justicia* (1971). No repetiré aquí las contundentes críticas que Díaz-Polanco y otros enderezan contra el radical universalismo individualista y antipluralista de dicha propuesta. Quisiera, sin embargo, esbozar una línea de aproximación que me parece pertinente. Kant, Rawls y otros, son libres de deshistorizar su búsqueda apriorística de las condiciones de existencia de toda socialidad posible, pero no pueden impedir que una parte de la crítica a sus propuestas ubique históricamente el pensamiento cuestionado.

Sería pertinente, entonces, explorar las premisas históricas y particulares que hacen posible el surgimiento de un pensamiento ahistórico y universalista como ese. Porque –me parece– la absolutización metafísica del individuo y sus atributos resulta del predominio de un orden históricamente fechado: un sistema que, en nombre de un mercantilismo absoluto donde los intercambios dinerarios debían constituir por sí mismos el fundamento de toda relación social válida, descalifica identidades culturales, solidaridades y economías morales; socialidades diversas que para el capital son anacrónicas y perversas, y por ello son enviadas al pasado y sus reductos, al oriente exótico o la periferia bárbara.

Mas el capitalismo no es solo una obscena economía-mundo, un absolutismo mercantil globalizante que da sustento teórico-práctico al individualismo radical. El universalismo fetichizado y antipluralista que Díaz-Polanco y otros cuestionamos, es la expresión alienada de una construcción histórica contradictoria y conflictiva; un orden social ecocida y etnocida, pero paradójicamente, portador de valores rescatables. Por su voracidad, el del gran dinero es un sistema-mundo incluyente –en el sentido globalifágico de inclusión– que desde pequeño interiorizó la diversidad

sociocultural haciendo de ella algo inmanente. Inmanencia del «otro» que por ello mismo permite subordinarlo y también obliga a reconocerlo.

El individuo presuntamente portador de la naturaleza humana es una construcción social de la modernidad; una invención tan alienante como libertaria pues si su irrupción de *facto* y de *jure* desvaloriza colectividades y rompe lazos solidarios, también arroja nueva luz sobre la pluralidad, al obligarnos a reconocer en los «otros» a un «nosotros»; no como en los tiempos de particularismo tribal cuando, por definición, los «otros» no eran «hombres verdaderos», sino como auténticos pares, cuando menos en tanto que compartimos la condición humana. Y no estoy hablando de una naturaleza innata y trascendente, una abstracción fetichizada que encubre, de manera metafísica, las desigualdades y diferencias estigmatizantes existentes en realidad, sino de una condición humana hecha a mano, construida socialmente en la confrontación y/o la solidaridad de los diversos.

Frente a los encuentros en exterioridad propios de sistemas menos omnifágicos, la expansión mercantilista desarrolló un modo incluyente del encuentro; interiorización forzada que si bien erosionó diferencias potencialmente enriquecedoras y volvió estigma o marca comercial a las que conservó, también hizo posible el encuentro como comunión. Y no me refiero a una suerte de revelación por la cual nos diéramos cuenta de que por razones metafísicas, el «otro» es también un hombre como yo, sino del encuentro como interacción prolongada que construye una nueva identidad, una nueva y compartida condición humana. Condición hoy asimétrica y lacerada donde un hombre tiene y el otro carece, donde un hombre manda y otro obedece –o se rebela–, pero donde por primera vez se dramatiza radicalmente la unidad en la diversidad. Y de esta interiorización desaparece de las diferencias a la construcción de identidades compartidas y fraternas que trasciendan la pluralidad sin negarla, no hay más que una línea de sombra, apenas un paso. Un paso histórico, claro, pero un paso al fin.

Si es válido encontrar en la entronización originaria del mercantilismo –o en alguna de sus fases de expansión– las raíces históricas de las viejas y las nuevas teorizaciones del individualismo, es legítimo también remitir el pensamiento pluralista de Luis Villoro o de Boaventura de Sousa Santos –ambos mencionados por Díaz-Polanco– al renacimiento de la diversidad bajo la forma de insumisas y beligerantes identidades colectivas. Importa destacar que este renacimiento social no es un regreso al tribalismo, sino una nueva vuelta de tuerca histórica que, en sus proyectos más visionarios, busca trascender la globalización asimétrica y emparedadora hacia una mundialización de los diversos como pares. Es necesario subrayar, también, que en el mundo de las ideas esto significa que se busca trascender a Kant (o a Hobbes o a Smith) no ignorándolos, sino apoyándose en el pensamiento que ellos formularon.

No es casual, entonces, que además de reconocer los valores de cada cultura, Luis Villoro proponga un orden de valores «transculturales», como «condición de posibilidad» de todo sistema posible de valores;<sup>2</sup> o que la «hermenéutica diatópica» de Boaventura de Sousa Santos parta de la conciencia recíproca de la «incompletitud» de las culturas, pero se apoye en una teoría de la «unión» de los diversos que «tiene un carácter eurocéntrico por su aspiración de totalidad».<sup>3</sup> Y es que, de la misma manera que no es posible trascender la globalidad como economía-mundo, más que reconociendo su existencia y apoyándose en ella para desmontarla-reconfigurarla, tampoco es viable ir más allá de la universalidad individualista restaurando la diversidad virtuosa, sin tomar como punto de partida la propia universalidad. Para decirlo en dos palabras: la diferencia entre el neotribalismo fundamentalista y la universalidad de los diversos es la misma que existe entre «globalifobia» y «otromundismo».

La universalidad de ciertos principios, valores o normas sociales no deriva de su racionalidad trascendente sustentada a su vez en una presunta naturaleza innata del individuo humano. Pero el que tal universalidad no tenga un origen metafísico no quiere decir que no exista como construcción en curso, como proceso deliberativo, como obra de una diversidad que se trasciende y se conserva. Y porque para conservarse debe trascenderse, la diversidad constitutiva de la universalidad incluyente es una diversidad otra, una diversidad reinventada que no se monta tanto en la diferencia sustantiva y originaria como en la diferenciación permanente frente al otro y con el otro.

### Globalización etnofágica y seudodiversidad

En la segunda parte del libro, Díaz-Polanco se ocupa de la diversidad en la globalización, no solo registrando el hecho de que el gran dinero incumplió su vieja promesa de uniformar usos y costumbres en dos grandes y únicas clases mundiales: las que cultivan los de sombrero de copa y las que practican los de overol, sino también destacando la capacidad adaptativa y oportunista de un capital apercebido de que «la diversidad puede ser nutritiva para la globalización», como escribe Héctor [137]. Y señala, de inmediato, que si hay una diversidad nutricia y favorable a la acumulación, también hay otra diversidad indigesta; por ejemplo la que encarna en las identidades colectivas de raíz étnica que resisten tanto a la exclusión como a la inclusión subordinada y envilecedora.

<sup>2</sup> Luis Villoro: *Estado plural, pluralidad de culturas*, Paidós/UNAM, Biblioteca Iberoamericana de Ensayo, México, 1998.

<sup>3</sup> Boaventura de Sousa Santos: *La caída del ángelus novus: ensayos para una nueva teoría social y una nueva práctica política*, Universidad Nacional de Colombia, 2003, p. 64.

En diálogo con Zygmunt Bauman (*La sociedad individualizada*), Díaz-Polanco distingue las identidades duras definidas por su historicidad y dinamismo, su heterogeneidad interna, su multiplicidad jerárquica y su simultaneidad, de la efímera y líquida «identificación»: una serie inagotable y fluyente de diferenciaciones que se adaptan a la perfección a la diversidad epidérmica de las mercancías en la sociedad de consumo. Frente a esto, el orden hegemónico tiene una actitud ambivalente: «El sistema ataca con todas sus fuerzas las bases comunitarias de las identidades, al tiempo que promueve todo género de identificaciones, que son una especie de identidades individualizadas sin sustento colectivo» [157].

Estando tan de acuerdo con Díaz-Polanco, quisiera, sin embargo, enfatizar aquí, no tanto la instrumentalización de la pluralidad por el capital como su incompatibilidad última con las diferencias sustantivas.

La diversidad virtuosa es el *impasse* del gran dinero, su pluma de vomitar, el hueso que no pudo mascar pero roe obsesivamente. Y porque ahí está su límite infranqueable, el absolutismo mercantil ha desarrollado la seudodiversidad: una apertura ficticia y epidérmica a la pluralidad humana y natural. Precisamente porque la diferencia sustantiva lo envenena, el capital pasó del puro y simple emparejamiento cuyo paradigma era el consumismo culturalmente estandarizado, a la diversificación de la oferta y la segmentación de los mercados, del indiscernible hombre masa al culto a las diferencias identitarias, de rock y hamburguesas a *world music* y *ethnic food*.

Escribe Díaz-Polanco: «Uno tras otro se fueron derrumbando los argumentos esgrimidos para anunciar un futuro de uniformidad que se consolidaría conforme la globalización desarrollara la potencia unificadora y disolvente que le atribuían [...] [Al contrario] los afanes identitarios se multiplicaron en una escala nunca vista [...] Al parecer [...] la globalización funciona más bien como una inmensa maquinaria de “inclusión” universal que busca crear un espacio liso, sin rugosidades, en el que las identidades puedan deslizarse, articularse y circular en condiciones que sean favorables al capital globalizado [...] La globalización [...] procura aprovechar la diversidad [...] aunque [también] aislar y eventualmente eliminar las identidades que no le resultan domesticables o digeribles» [136]. Los argumentos son semejantes a los de Hardt y Negri en *Imperio*: «En su fase de inclusión el imperio es ciego a las diferencias [...] Logra la inclusión universal [...] [pero] para dejar de lado las diferencias tenemos que considerarlas no esenciales [...] [así] el imperio se convierte en una especie de espacio uniforme, a través del cual las subjetividades se deslizan sin ofrecer resistencia ni presentar conflictos sustanciales».<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Hardt y Negri: *Imperio*, Paidós, Buenos Aires, 2000, pp. 187-188.

Pero la apertura del sistema –hay que enfatizarlo– es solo a las diferencias «no esenciales» y «domesticables», a la pluralidad cosmética como condición de la unanimidad sustancial. Y la universalidad que resulta de la estrategia falsamente incluyente no es síntesis mediada de la diversidad subyacente, sino dilución de la diversidad en una generalidad abstracta, vacía, indeterminada.

El gran dinero incorpora las diferencias identitarias en una suerte de «globalización etnófaga», escribe Díaz-Polanco. Podríamos agregar que en otras esferas, de modo semejante, hace rentables tanto los productos «orgánicos» respetuosos de la diversidad de los ecosistemas, como los «sustentables» que además preservan la pluralidad étnica y social, de la misma manera que especula con la conservación de los recursos naturales creando un mercado de «servicios ambientales» y que al patentar los códigos genéticos hace lucrativa la biodiversidad. No obstante, el capital confraterniza con la pluralidad solo en tanto que es rentable. Ya lo dijo Pat Mooney refiriéndose a la decodificación y privatización del genoma: «El dinero está en las diferencias», de modo que las diferencias cuentan no por serlo sino porque producen dinero.

No hay novedad en esto: desde que se operó la inversión originaria por la que el uso se subordinó al cambio y la calidad a la cantidad, quedó claro que en el mundo de las mercancías capitalistas las diferencias no son más que el soporte, el vehículo, el medio que emplea el valor para valorizarse. En el sistema del mercado absoluto el valor de uso es contingente, mientras que el valor de cambio es necesario y, de la misma manera, la diversidad biosocial es accidental, mientras que la uniformidad de los hombres y la naturaleza es sustantiva. Sean identidades étnicas, especies biológicas, cocinas nacionales o cafés de origen, los distintos se admiten si son clasificables, normalizables, intercambiables, lucrativos. Así las identidades duras se diluyen en la amorfa ciudadanía, la pluralidad de los ecosistemas se reduce a códigos genéticos, la diversidad agroecológica deviene marca de origen, la originalidad creativa se legitima en el *mainstream* y cotiza ora en el mercado del arte ora en los medios. En el mercado, el Estado y el imaginario que placen al capital, todas las diferencias son iguales, todas las diversidades son pardas.

Si la diversidad producida como mercancía reporta ganancias, la apropiación y mercantilización de la diversidad natural-social genera rentas. La privatización de tierras, aguas, recursos minerales, territorios estratégicos, frecuencias radiales y televisivas, paisajes, especies, etcétera, son fuente de enriquecimiento, estructural, permanente y socorrida, pero perversa pues no se funda en la extracción de plusvalía, sino en el dominio económico excluyente sobre recursos no reproducibles y por tanto potencialmente escasos. Y es en particular viciosa, porque mientras que otras ganancias especulativas

y de monopolio son efímeras, ya que se diluyen con la competencia, las que se fundan en la privatización de bienes «naturales» no se normalizan por la oferta y la demanda.

Detrás de las astucias con que el gran dinero se apropia y mediatiza la diversidad se oculta una incompatibilidad sustantiva. La pluralidad funcional al sistema es la de dientes para afuera, es la seudodiferencia como vehículo de la intercambiabilidad comercial.

Tienen razón quienes –como Díaz-Polanco– enfatizan la capacidad del capital para manejar las contradicciones que le genera la permanente reproducción de lo diverso en el seno de la uniformidad (la «etnofagia» como domesticación de la diversidad identitaria, el «ecologismo neoliberal» como especulación mercantil con los servicios ambientales), pero la capacidad de adaptación del sistema no debe ocultar que en la terca diversidad sionatural está el enterrador del mercantilismo absoluto.

En el último capítulo del libro, Díaz-Polanco retoma el tema de la diversidad en tesitura política. Si bien reconoce, como Eric Hobsbawm, que sumando particularismos no se llega al proyecto unitario de las izquierdas, reivindica sin embargo las luchas identitarias dentro de un nuevo universalismo.

Enfatiza, también, la validez de las banderas autonómicas y la pertinencia de las prácticas que a nivel local o regional combinan la autodeterminación política con la autogestión social y económica. Pero, a diferencia de los localismos y particularismos de facto que le dan la espalda al sistema y de los antiestatismos teóricos que dejan de lado la política y las cuestiones del poder, Díaz-Polanco reivindica un modo distinto de hacer política y también «las nuevas formas de poder popular que desafían al poder estatal vigente» [208].

Y encuentro aquí un punto más de acuerdo con Díaz-Polanco. Coincidencia que se me muestra al final de su texto, pero que no es la última: frente a la fórmula de John Holloway según la cual se puede «cambiar el mundo sin tomar el poder», Héctor sostiene que «hay que tomar el mundo para cambiar el poder». Yo agregaría que en este trance algún día habrá que tomar el poder, pero evitando que el poder nos tome a nosotros.

ARMANDO BARTRA es investigador del Centro de Estudios Circo Maya, de México y un conocido analista de los movimientos sociales mexicanos. Autor de numerosas obras sobre teoría agraria y campesinado, su libro más reciente es *El capital en su laberinto. De la renta de la tierra a la renta de la vida*, Editorial Itaca/UACM, México, 2006.



# Sobre *Autonomías indígenas en América Latina. Nuevas formas de convivencia política*

ALICIA CASTELLANOS GUERRERO

El libro que comentamos trata sobre el contexto político en el que se desarrollan las autonomías de las comunidades y los pueblos indígenas en México, Panamá, Nicaragua, Ecuador, Brasil y Bolivia.<sup>1</sup> El análisis comprende las estrategias del poder de los estados nacionales y las empresas transnacionales hacia estos pueblos; describe sus condiciones de vida, sus luchas y movimientos de resistencia y las formas en que están ejerciendo sus derechos como colectividades, todo lo cual permite al lector reflexionar sobre las autonomías *de facto* y de derecho, y destacan los obstáculos para su desarrollo, su potencial y fortaleza, en sus similitudes y diferencias nacionales en cuanto a sus estrategias de lucha.

Escrito para un público amplio, el ciudadano interesado en la realidad que viven los pueblos indígenas de América Latina encontrará en esta obra, información e interpretación sobre los primeros resultados de una investigación que se lleva cabo por un grupo multidisciplinario de estudiosos de

<sup>1</sup> Leo Gabriel y Gilberto López y Rivas (coordinadores): *Autonomías indígenas en América Latina. Nuevas formas de convivencia política*, México, Ludwig Boltzmann Institut, UAM-I, Latautonomy, Plaza y Valdés, 2005. Las páginas donde se encuentran las citas referidas a este libro aparecerán entre corchetes. Leo Gabriel, antropólogo austriaco, especialista en América Latina con larga trayectoria como científico social, periodista y productor de películas, es director del Instituto Ludwig Boltzmann para Investigación Contemporánea sobre América Latina (Viena) y director académico del proyecto Latautonomy: «Autonomías multiculturales en América Latina: condición indispensable para el desarrollo sustentable». Gilberto López y Rivas, antropólogo mexicano con una obra extensa en el tema de las autonomías y la problemática de las minorías étnico-nacionales, participó como asesor del gobierno de Nicaragua para el establecimiento de la autonomía en la costa atlántica de ese país. También fue asesor del EZLN durante el proceso de diálogo que resultó en la firma de los Acuerdos de San Andrés en 1976. Actualmente es investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México. (N. del E.)

Europa y América Latina bajo un proyecto denominado las «Autonomías multiculturales: una condición para el desarrollo sustentable» coordinado por el antropólogo Leo Gabriel.

La *particularidad* de la investigación reside en la *hipótesis central* de trabajo según la cual *las autonomías multiculturales son condición para un desarrollo sustentable*. Esta perspectiva cuestiona la imagen que construye el discurso dominante acerca de las autonomías de los pueblos indígenas a las que se les asocia con procesos de balcanización, segregación y aislamiento, pobreza y atraso, con las reservaciones o *ghettos* y los fundamentalismos. Cabe señalar que en ningún caso, el estudio encuentra una autonomía que pretenda «salir del Estado», es más bien un nivel de gobierno que busca la inclusión de los pueblos con plena ciudadanía mediante el reconocimiento de su diferencia cultural. Más aún, se constata su tendencia, precisamente por sus especificidades culturales e identitarias, a fortalecer la integración de la nación; hoy los indígenas, «los siempre fuera de la nación, los no nacionales» son quienes despliegan sus culturas en defensa de los recursos y de la soberanía y propugnan por la unidad de una nación diversa y democrática.

Una segunda *particularidad* es que las experiencias de democracia, de nuevas formas de convivencia política que pueden significar las autonomías latinoamericanas son referentes positivos para el análisis y la solución de casos conflictivos de Europa signados por los fundamentalismos y la violencia.

La tercera *particularidad* es que se trata de una investigación social en la que los participantes indígenas (actores de los propios procesos bajo estudio) y no indígenas, nacionales y europeos buscan contribuir con el análisis y la reflexión teórica al fortalecimiento de las autonomías en el plano del discurso científico y de la práctica política. Esta experiencia de investigación colectiva y multinacional, no exenta de contradicciones y debates, se convirtió, al mismo tiempo, en una práctica de convivencia y diálogo interculturales.

En el «Prefacio», Leo Gabriel escribe sobre los ejes de la investigación, los objetivos y la estrategia teórica y metodológica aplicada a lo largo de los más de tres años que duró el estudio, fija las líneas seguidas para el análisis de los datos y de los criterios de sostenibilidad. En este nivel conceptual, la *particularidad* radica en que la sostenibilidad es entendida como la capacidad de un sistema para «regenerarse y crecer» a fin de garantizar el futuro de generaciones venideras en todos los campos de la vida económica, política, social y cultural. También advierte acerca de la apropiación por el poder dominante de nociones como autonomía, desarrollo sostenible y multiculturalidad, a fin de despojarlos de su sentido contestatario. El concepto de *estructura de convivencia*, vigente en las comunidades y pueblos indígenas en donde se investigó, independientemente de sus contradicciones, es considerado como una contribución para otras experiencias de conflictos étnicos en el mundo.

En la «Introducción», Gilberto López y Rivas hace un recorrido por las especificidades de los procesos de formación del Estado nación que originan la exclusión de los pueblos indígenas. Define el concepto de autonomía, analiza la diversa composición interna de los grupos étnicos, instrumento fundamental para advertir la posible evolución de las relaciones entre este tipo de entidades con el Estado y el resto de la nación en los procesos de construcción de las autonomías de hecho y de derecho. El contrapunteo entre el carácter del Estado nación capitalista y un modelo de nación, cuyas características den cabida a los derechos de la diversidad de pueblos y culturas, se complementa con las reflexiones de Leo Gabriel sobre el Estado pluricultural democrático que está en prospectiva.

Esta exposición sobre aspectos del proceso de desarrollo de la investigación que suele omitirse en la publicación de sus resultados es un recurso útil para el lector interesado. Queda claro el compromiso de todos los participantes e investigadores indígenas y no indígenas, europeos y latinoamericanos, con el futuro de los pueblos, al buscar entender la profundidad y especificidad de las culturas indígenas y las aportaciones de sus formas de organización y cosmovisiones. La de Leo es una voz de la izquierda europea contestataria. Apela a que el poder dominante ha de «romper con el paradigma político actual». Es un discurso más intercultural en el análisis y en la trascendencia política.

### **Condiciones políticas y obstáculos a las autonomías**

El libro ofrece un panorama que permite encontrar similitudes y diferencias, debilidades y fortalezas de las estrategias de la resistencia étnica latinoamericana, identificar la complejidad de estos procesos autonómicos y los grandes retos de todas las fuerzas democráticas en la región para converger en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, que es la defensa también de la soberanía nacional y de un futuro.

Los trabajos constatan el carácter excluyente de las comunidades y los pueblos indígenas para los Estados nacionales latinoamericanos y sus políticas asimilacionistas. En todos los casos, aun habiendo reconocido la diversidad como una característica de la nación, e incluso reconocido derechos a la autonomía, el Estado, en Panamá, por ejemplo, «ha carecido de una política definida e integral» y los trata como minoría y no como pueblos. «Los asuntos indígenas han sido tratados por el Estado en forma segmentada, dispersa y con acciones puntuales de coyuntura» [153]. En Nicaragua, el único caso de una autonomía de derecho, el Estado sigue siendo centralista y monoétnico en la práctica, presiona sobre los recursos de las regiones autónomas para su «apertura al mercado nacional y transnacional», y limita las inversiones en las regiones, con lo cual promueve la migración de mestizos para modificar la demografía y la hegemonía cultural y material de las comunidades y los pueblos indígenas de la costa Caribe.

La implantación del modelo neoliberal afecta a todos los ciudadanos y particularmente a la población indígena. En Nicaragua, Manuel Ortega advierte sus efectos: desempleo creciente, congelamiento salarial, cierre de empresas pequeñas y medianas por la apertura comercial, falta de crédito de largo plazo, incremento de la pobreza, informatización y agotamiento del mercado laboral, la desprotección social, la inversión dirigida al sector terciario, entre otros. Nicaragua está entre los países supuestamente beneficiados por la Iniciativa para los Países Altamente Endeudados, esto es, entre los más pobres de la región latinoamericana.

El texto aporta datos contundentes que muestran cómo el modelo de desarrollo neoliberal es antitético a la existencia y el desarrollo de los procesos autonómicos de los pueblos indígenas, en tanto atenta contra las condiciones mínimas de reproducción material y cultural.

### **Proyectos y macroyectos**

Se constata que los proyectos de desarrollo de los Estados nacionales en los territorios históricos de los pueblos indígenas –condición material y simbólica para la existencia y el desarrollo de las autonomías– están siendo seriamente amenazados por las transnacionales y las políticas del Estado que oscilan entre la negociación/confrontación, o combinación de negociación en el discurso y confrontación y represión de hecho en las regiones indígenas.

Como bien lo señala Leis para el caso de Panamá, hay una relación conflictiva entre los macroyectos de empresas nacionales y transnacionales en territorios y tierras indígenas con importantes recursos forestales, mineros, acuíferos, entre otros, y los pueblos indígenas que los habitan, quienes se ven despojados y excluidos. En Nicaragua una enmienda constitucional de 1995 otorga a los Consejos Regionales (instancia de gobierno autónomo) el poder de veto «sobre las concesiones de exploración y explotación de los recursos naturales situados en los territorios de las regiones autónomas. Esta competencia ha sido utilizada en la revisión y aprobación de proyectos de infraestructura orientados a demandas externas (arrendamiento y modernización de facilidades portuarias en Bilwi [Puerto Cabezas] –enero 2001–; aprobación de estudios de factibilidad para el Proyecto del Canal Secor al sur de Bluefields –2000– [...] entre otros)» [248].

La narcoeconomía y la militarización de regiones étnicas en México y Panamá vulneran la preservación de los recursos y fragmentan el tejido social comunitario. En Brasil, el ejército «resguarda» fronteras y realiza prácticas en Alto Río Negro, al parecer a partir de negociaciones con la Federación de las Organizaciones Indígenas del Río Negro (FOIRN). Sin embargo, en Bolivia, en el Chapare, la región estudiada en esta investigación, los pueblos defienden su derecho de sembrar la planta sagrada que es la coca.

Los conflictos interétnicos e intraétnicos constituyen un obstáculo para el desarrollo de las autonomías y suelen estar relacionados con la lucha por el poder político y el control de los recursos, límites territoriales, intercambio desigual. También estos conflictos se pueden sustentar en una percepción de la diferencia extrema del Otro y de incompatibilidad, en la distancia social y actitudes de superioridad de los mestizos y de las etnias históricamente dominantes. En el libro solo se aborda esta problemática en la costa atlántica de Nicaragua, donde las relaciones asimétricas, el etnocentrismo y las actitudes racistas de raíz colonial de mestizos hacia las etnias y de las etnias dominantes con respecto a las etnias históricamente dominadas debilitan la unidad de las comunidades y los pueblos indígenas y el desarrollo de identidades regionales, lo cual puede impedir el avance de las autonomías. El Estado exacerba estos conflictos al no promover inversiones y créditos, y al estimular la competencia por los escasos recursos y viejas asimetrías entre las etnias, para luego difundir que las autonomías son modelos de gobierno que «reproducen el subdesarrollo» o «autonomías de pobreza» y espacios de reproducción de los «fundamentalismos». Al mismo tiempo, la autonomía está creando un conocimiento de las otras identidades étnicas y una identidad costeña que la fortalece.

El caso de Nicaragua tratado en este libro muestra que la restitución de los derechos históricos de los pueblos indígenas puede sentar las bases para una inclusión democrática, pero su ejercicio pleno depende de las políticas del Estado, y de la unidad de estos pueblos y de otros sectores sociales. No obstante estos conflictos y obstáculos, el movimiento indígena se convierte en un actor político estratégico para las luchas por la democracia en la región latinoamericana.

### **Resistencia y movimiento indígena**

En este estudio se constata la resistencia histórica de los pueblos indígenas y su capacidad de movilización y negociación en defensa de sus territorios, tierras y culturas. En Nicaragua, los pueblos de la costa atlántica lucharon por la autonomía en el marco de una revolución social como la sandinista y obtuvieron el reconocimiento de un régimen de autonomía. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) declara la guerra al gobierno mexicano y logra que negocie y firme unos Acuerdos como los de San Andrés. En el Ecuador el movimiento indígena depone el gobierno constitucional (Toma de Quito). En el Brasil la Federación de las Organizaciones Indígenas del Río Negro (FOIRN) consigue una negociación favorable con el Estado para la demarcación de su territorio.

Los pueblos y sus organizaciones indígenas están integrando, como en Ecuador, demandas «de sectores mestizos» relacionadas con el alza de los

precios del gas, de la gasolina, y con las privatizaciones de recursos estratégicos. *La otra campaña*, en el caso de México, es la expresión de esta integración de reivindicaciones étnicas y nacionales y se puede pensar que se inscribe en una perspectiva de contribuir al desarrollo de alianzas y grados de unidad de los movimientos sociales para potenciar la capacidad de interpelación con el Estado, y promover incluso su refundación, además del contenido ético que porta frente a las campañas electorales de costos millonarios y caudal tradicional de promesas incumplidas.

En Panamá, desde los años setenta, los pueblos indígenas se coordinan en la Asociación Indígena Panameña, la Asociación Nacional Indígenas de Panamá y la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas [123]. En el Ecuador, se integra la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) en la que participa la Confederación de Pueblos y Nacionalidades Quichuas del Ecuador (ECUARUNARI). La Federación de las Organizaciones Indígenas del Río Negro (FOIRN) en el Brasil incrementa en pocos años el número de las organizaciones afiliadas. En México, múltiples organizaciones regionales convergen en el Congreso Nacional Indígena, se articulan organizaciones regionales y de carácter multiétnico, incluso los migrantes pertenecientes a más cinco grupos étnicos en la ciudad de México.

La autonomía está construyendo una identidad política que trasciende los límites comunitarios y las regiones étnicas para ejercer redes de relaciones con otros pueblos indios y con la sociedad nacional e internacional, tendencias que se profundizan por la dinámica propia del movimiento indígena latinoamericano, por ejemplo, el EZLN y la CONAIE. Esto es, las organizaciones indígenas establecen alianzas con otras organizaciones y con otros actores sociales nacionales e internacionales. En Panamá los pueblos indígenas establecen alianzas con la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Panamá, que agrupa a 168 000 miembros y 246 organizaciones de base y convergen en Coordinación Nacional para la Descentralización y el Desarrollo Local.

Son los pueblos y las comunidades indígenas los principales protagonistas de sus luchas y de sus autonomías. El texto que reseñamos describe el proceso organizativo de estos pueblos, que revelan mayor capacidad que otros sectores sociales para enfrentar el avance del neoliberalismo y construir alternativas.

Es fundamental entender que esta capacidad de resistencia y organización que se documenta en el libro que nos atañe descansa: en una cultura y organización de raíz comunitaria y democrática; en una concepción más humanista de la vida y de la conflictividad social (*recuérdese que persisten y se renuevan formas de solucionar los conflictos bajo principios tradicionales de conciliación y reparación de los daños*), más proclive a la preservación del medio ambiente (*la tierra todavía recibe ofrendas, mientras la destructividad intrínseca de los modelos basados en la lógica de la ganancia depredan y ponen en*

*riesgo la continuidad de la vida en el planeta*); y en unos valores comunitarios todavía vivos que buscan renovar y trascender en el campo de la política y de la convivencia. Estas prácticas culturales, entre otras, constituyen la base de unas identidades étnicas que «articulan un conjunto de representaciones colectivas e intereses de grupo [...] [que son] propiedades que otros agrupamientos sociales no han podido conciliar tan eficazmente», identidades que son condición para un proyecto común de futuro de cualquier colectividad.

No es una casualidad que el gobierno de los Estados Unidos advierta que para el 2020 los pueblos indígenas se habrán convertido en los enemigos número uno para los intereses de las grandes transnacionales. La defensa de los derechos colectivos y de estas autonomías es una tarea de la nación.

Es indudable que los autores de este libro, en particular sus coordinadores, Leo Gabriel y Gilberto López y Rivas, y el editor Fernando Valdés, realizaron un esfuerzo meritorio por seguir profundizando el conocimiento de las culturas y derechos de las comunidades y los pueblos indígenas de América Latina.

ALICIA CASTELLANOS GUERRERO es doctora en Antropología, profesora-investigadora del departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, especializada en temas de racismo, autonomía y relaciones interétnicas.

## Reseñas de libros de Ocean Sur

### **Una guerra para construir la paz**

Schafik Hándal

Contiene un documento escrito por Schafik Hándal acerca de la historia política de El Salvador a lo largo del siglo xx, que explica las causas de los doce años de guerra en el país y la finalización de la misma por medio de la negociación de acuerdos políticos. También incluye discursos y entrevistas de Schafik durante el proceso de negociación y a raíz de la firma de los Acuerdos de Paz, el 16 de enero de 1992, en Chapultepec, México. Así mismo reúne sus valoraciones sobre los incumplimientos de los Acuerdos de Paz, su retroceso y tergiversación en los últimos años.

154 páginas, ISBN 1-921235-13-6

### **Tania la Guerrillera y la epopeya suramericana del Che**

Ulises Estrada Lescaille

Tania, la combatiente que luchó y murió por sus ideales junto al Che Guevara en Bolivia, es hoy paradigma de rebeldía y lucha por la justicia social. Su compañero en Cuba, Ulises Estrada, testigo excepcional de los hechos narrados, nos ofrece una apasionada biografía de la mujer que dedicó su vida en la década de 1960 a la liberación de América Latina.

334 páginas, ISBN 1-920888-21-7

### **La unidad latinoamericana**

Hugo Chávez

Reúne los discursos más demostrativos que Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, pronunció entre 1999 y 2006 en países de América Latina y en los Estados Unidos. Como promotor e incansable luchador por la transformación de la historia de América Latina, el mandatario habla ante universitarios, activistas, diplomáticos, trabajadores y su pueblo para dar a conocer su visión bolivariana y antimperialista.

Incluye su participación en el Foro Social Mundial de 2005 en Porto Alegre, y su Mensaje a los Pueblos del Mundo en la ONU, en 2006.

352 páginas, ISBN 1-921235-05-5



# ocean sur

una nueva editorial latinoamericana

## OFICINAS DE OCEAN SUR

Cuba: Tel: (53-7) 961456 ▪ E-mail: lahabana@oceansur.com

El Salvador: Tel: (503) 2225 0270 ▪ E-mail: elsalvador@oceansur.com

Venezuela: Tel: (58) 412 295 5835 ▪ E-mail: venezuela@oceansur.com

EE.UU.: PO Box 1186, Old Chelsea Station, New York, NY 10113-1186, USA  
Tel/Fax: (1-212) 260 3690 ▪ E-mail: info@oceansur.com

## DISTRIBUIDORES DE OCEAN SUR Y CONTEXTO LATINOAMERICANO

### ARGENTINA

Cartago Ediciones S.A.  
E-mail: ventas@e-cartago.com.ar

### CHILE

Editorial "La Vida es Hoy"  
E-mail: jrsolecerda@yahoo.es

### COLOMBIA

Ediciones Izquierda Viva  
Tel/Fax: 2855586  
E-mail: ediciones@izquierdaviva.com

### CUBA

Ocean Sur  
E-mail: lahabana@oceansur.com

### EL SALVADOR

Editorial Morazán  
E-mail: editorialmorazan@hotmail.com

### VENEZUELA

Ocean Sur  
E-mail: venezuela@oceansur.com

### AUSTRALIA

Ocean Press  
Tel: (61-3) 9326 4280  
E-mail: info@oceanbooks.com.au

### EE.UU. Y CANADÁ

CBSD  
Tel: 1-800-283-3572  
www.cbsd.com

### GRAN BRETAÑA Y EUROPA

Turnaround Publisher Services  
E-mail: orders@turnaround-uk.com

[www.oceansur.com](http://www.oceansur.com) ■ [info@oceansur.com](mailto:info@oceansur.com)



*Contexto Latinoamericano* propicia el debate sobre objetivos, programas, estrategias y tácticas de la izquierda; reivindica la necesidad de edificar sociedades sustentables, libres de dominación y subordinación nacional y de clase, basadas en la igualdad de género, etnia, cultura, religión, franja de edad y orientación sexual; denuncia la injerencia e intervención imperialista en el Sur, en particular, en América Latina; promueve la solidaridad con la Revolución Cubana y la Revolución Bolivariana; respalda el rescate de la soberanía y el patrimonio nacional, y la adopción de políticas de beneficio popular por parte de las fuerzas de izquierda y progresistas que acceden al gobierno en América Latina; apoya al movimiento por la independencia de Puerto Rico y los demás territorios coloniales del continente; e incentiva la interrelación entre las luchas de los excluidos del Norte y del Sur, con especial atención a las diásporas latinoamericanas y caribeñas.

US\$14.95

ISBN 978-1-921235-44-3



5 1495



9 781921 235443



[www.oceansur.com](http://www.oceansur.com)

[www.oceanbooks.com.au](http://www.oceanbooks.com.au)